

16.896



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5315775641

TE
1462

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
FACULTAD DE DERECHO

LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN DEL TRIBUNAL CON LAS PARTES EN EL PROCESO CIVIL

(TESIS DOCTORAL)

AUTOR: Ldo. D. Ignacio José CUBILLO LÓPEZ
DIRECTOR: Prof. Dr. D. Andrés DE LA OLIVA SANTOS

617301877

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
I. PARTE GENERAL: RÉGIMEN DE LAS NOTIFICACIONES EN EL PROCESO CIVIL.....	13
CAPÍTULO 1: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS NOTIFICACIONES EN NUESTRO DERECHO	14
1.1. <i>Regulación de los actos procesales de comunicación con particulares en el orden jurisdiccional civil</i>	15
1.1.1. Normas sobre las notificaciones de resoluciones judiciales.....	17
1.1.2. Especialidades normativas de las citaciones, emplazamientos y requerimientos	40
1.1.3. Cuestiones finales de carácter general en la sección de la LEC relativa a los actos de comunicación.....	49
1.2. <i>Normativa aplicable a los actos de comunicación realizados por un órgano distinto del que conoce de la causa</i>	54
A) <i>Actos de comunicación realizados por auxilio judicial</i>	54
B) <i>Notificación de documentos judiciales en el extranjero</i>	58
CAPÍTULO 2: NATURALEZA DE LA NOTIFICACIÓN. CLASES DE NOTIFICACIONES Y FORMAS DE REALIZACIÓN	64
2.1. <i>Naturaleza jurídica de las notificaciones</i>	65
2.1.1. Ubicación de las notificaciones en la clasificación de actos procesales	65
2.1.2. Consideración de la notificación como un género de actos de comunicación	69
2.1.3. Características de la notificación en general	75
2.2. <i>Citaciones, emplazamientos y requerimientos como especies del género notificación</i>	84
2.2.1. Diferencias entre las citaciones y los emplazamientos.....	84
2.2.2. Especialidad de los requerimientos	89
2.3. <i>Procedencia de las diversas formas de realizar las notificaciones</i>	93
2.3.1. Notificación por medios postales	94
2.3.2. Notificación en forma personal	96
2.3.3. Notificación por edictos	100
2.3.4. Notificación a través de Procurador.....	106
CAPÍTULO 3: LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA COMUNICACIÓN PROCESAL.....	110
3.1. <i>El sujeto activo de las notificaciones</i>	111
3.1.1. El Secretario como sujeto activo de las notificaciones	111
3.1.2. Participación de otros funcionarios judiciales en la realización de las notificaciones	115
3.1.3. Intervención de otros servicios en la comunicación procesal.....	121

3.1.4. Evolución en el modo de acreditar la recepción de las notificaciones.....	125
3.1.5. Reflexión en torno a la fe pública judicial.....	129
3.1.6. Posibilidad de mayor participación del Agente judicial en la comunicación procesal	133
3.2. <i>El sujeto pasivo de la comunicación procesal</i>	137
3.2.1. La parte o su representante procesal como destinatarios principales de las notificaciones	137
3.2.2. Posibilidad de notificación a terceros	140
3.2.3. Los receptores subsidiarios del art. 268 LEC	147
 CAPÍTULO 4: EFICACIA E INEFICACIA DE LA NOTIFICACIÓN PROCESAL.....	158
4.1. <i>Validez, nulidad y subsanación de la notificación procesal</i>	159
4.1.1. La validez según el principio de recepción y la nulidad de las notificaciones	159
4.1.2. La subsanación de las notificaciones defectuosas	163
4.1.3. Introducción del principio de conocimiento en las notificaciones ineficaces	172
4.2. <i>Declaración de nulidad de los actos de comunicación</i>	182
4.2.1. Denuncia de la nulidad de una notificación durante la pendency del proceso	182
4.2.2. Medios de impugnación de las notificaciones nulas tras la firmeza de la sentencia	187
A) <i>Necesidad de un cauce jurisdiccional para impugnar 'post sententiam' la nulidad procesal de forma ordinaria</i>	187
B) <i>El incidente de nulidad de actuaciones del art. 240.3 LOPJ</i>	193
C) <i>Medios extraordinarios de rescisión de sentencias firmes</i>	201
D) <i>El recurso de amparo como remedio último y subsidiario</i> ...	208
 II. PARTE ESPECIAL: FORMAS DE NOTIFICACIÓN EN EL PROCESO CIVIL.....	216
 CAPÍTULO 5: NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTE PROCESAL	217
5.1. <i>Las notificaciones a través de Procurador</i>	218
5.2. <i>La comunicación de actos procesales en el Salón de Procuradores</i>	227
5.3. <i>¿Es válida la notificación realizada al Abogado, cuando no hay Procurador?</i>	238
 CAPÍTULO 6: LA NOTIFICACIÓN EN FORMA PERSONAL	243
6.1. <i>El Servicio Común de Notificaciones</i>	244
6.2. <i>La notificación en el domicilio del interesado</i>	257
A) <i>Notificación en forma</i>	258
B) <i>Negativa a recibir el acto de comunicación</i>	259
C) <i>Notificación por cédula</i>	261

D) Repetición del acto de comunicación	263
6.3. Cuestiones en torno a la notificación 'por cédula', tratadas en la jurisprudencia	267
CAPÍTULO 7: LAS NOTIFICACIONES REALIZADAS POR EDICTOS	276
7.1. Doctrina jurisprudencial sobre la notificación por edictos.....	277
7.2. El supuesto de hecho legal de la notificación por edictos y su interpretación restrictiva	286
7.2.1. 'Domicilio desconocido'	287
7.2.2. 'Ignorado paradero'	297
CAPÍTULO 8: LA COMUNICACIÓN DE ACTOS PROCESALES POR CORREO, TELEGRAMA O POR MEDIOS TÉCNICOS.....	303
8.1. La notificación por correo certificado con acuse de recibo	304
8.1.1. Modo de llevar a cabo las notificaciones postales	304
8.1.2. Problemas en torno a la notificación postal que resulta ineficaz	314
8.2. Utilización en el proceso del telegrama, y de medios técnicos de comunicación	324
A) Citación por telegrama	324
B) Uso del fax en la comunicación procesal.....	327
C) ¿Es posible notificar válidamente por teléfono?	332
CAPÍTULO 9: LA NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS.....	336
9.1. Marco normativo de la notificación electrónica	338
9.2. Experiencias concretas de comunicaciones judiciales a través de medios telemáticos.....	349
9.3. Conclusiones en torno al empleo de la informática en los actos procesales de comunicación	356
CONCLUSIONES	361
BIBLIOGRAFÍA	379

INTRODUCCIÓN

Sobre la *importancia* de la materia que nos proponemos estudiar, DE LA OLIVA SANTOS dice lo siguiente: “El de los actos de comunicación del órgano jurisdiccional aparece, de entrada, como tema árido y desprovisto de enjundia jurídica especial, como asunto que, ciertamente, exige ocuparse de él, pero a sabiendas de su aspereza y sequedad. Características que, en principio, solemos atribuir a los temas más estrictamente ‘procedimentales’. Sin embargo, se trata de un aspecto crucial de la legislación y de la realidad procesales. De un lado, buena parte del tiempo que los procesos consumen corresponde a los actos de comunicación y, de otro, los derechos de las partes —incluso los más relevantes— dependen en gran medida de la corrección formal y de la eficacia material de dichos actos (hasta el punto de que pueden afectar al derecho fundamental a la tutela efectiva)”¹.

¹ DE LA OLIVA SANTOS: *Derecho Procesal Civil*. Tomo II, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1995, pág. 161.

En relación con este último punto, es de destacar que la dependencia existente entre los derechos de las partes y los actos de comunicación ha sido puesta de manifiesto en numerosas ocasiones por nuestro Tribunal Constitucional. Éste ha declarado que, en la medida en que los actos de comunicación ponen en conocimiento de las partes el contenido de las resoluciones judiciales y de los actos procesales, son medio idóneo para garantizar la defensa de aquéllos a quienes se dirigen y, por tanto, su falta o realización defectuosa pueden provocar la indefensión de su destinatario².

Por otra parte, parece claro que los actos de comunicación son un factor influyente en la rapidez y eficacia del proceso. Así, según el autor anterior, “no constituía ninguna exageración afirmar que, siendo el proceso una realidad principalmente legal, la moder-

² Sirva a título de ejemplo la STC 205/1988, de 7 de noviembre: “La relevante e inescindible relación que existe entre los actos de comunicación procesal y el derecho a la tutela judicial efectiva, sin resultado de indefensión, garantizado por el art. 24.1 de la Constitución, ha sido declarada en numerosas resoluciones de este Tribunal -entre otras muchas, las SSTC 9/1981, de 31 de marzo; 1/1983, de 13 de enero; 22/1987, de 20 de febrero, y 72/1988, de 20 de abril- que constituyen un sólido cuerpo de doctrina, cuyo resumen puede hacerse diciendo que los actos de comunicación de las decisiones judiciales -notificaciones, citaciones y emplazamientos- son establecidos por las leyes procesales para garantizar, a los litigantes o a aquellos que deban o puedan serlo, la defensa de sus derechos e intereses legítimos, de modo que, mediante la puesta en su conocimiento del acto o resolución que los provoca, tengan la posibilidad de disponer lo conveniente para defender en el proceso los derechos e intereses cuestionados, y su falta coloca al interesado en una situación de indefensión que es lesiva del derecho fundamental citado, salvo que a pesar de la falta de comunicación, tenga su causa en la pasividad o negligencia del interesado que adquirió conocimiento del acto o resolución por otros medios distintos”. Otras sentencias en las que se expone la misma doctrina, casi con idénticos términos, son las SSTC 115/1988, 16/1989, 142/1989, 37/1990 y 202/1990.

nización y racionalización de la Administración de Justicia dependía y depende grandemente de una modificación, imaginativa y prudente a la vez, de la regulación sobre los actos de comunicación. Esta regulación ha de garantizar la seguridad jurídica, fomentar la serenidad y la debida deliberación antecedente de las resoluciones judiciales y contemplar las nuevas posibilidades de la técnica en relación con los limitados recursos disponibles, tanto monetarios, como de personal”³.

Y ése es, en cierto modo, el *objeto* de nuestra investigación: el estudio de la legalidad y de la práctica española de los actos de comunicación del tribunal con las partes, con el fin de detectar los principales problemas que se plantean en su realización y de aportar posibles propuestas de mejora que puedan ser tenidas en cuenta en una reforma de la ley, ya cercana. Así, nuestro trabajo discurre muy ‘pegado al terreno’ de la situación legal y forense de nuestro país en materia de notificaciones procesales.

El *método* que hemos empleado para acometer ese objetivo es el que sigue. Primero, comenzamos por estudiar la legislación orgánica y procesal civil sobre actos de comunicación, para saber el marco normativo existente sobre la materia. En segundo lugar, pasamos al análisis de cuál es la práctica que nuestros tribunales hacen de esa normativa. Para lo cual, por un lado, hemos desarrollado una ‘investigación de campo’ en los Juzgados de Primera Instancia

³ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., págs. 161-162.

de Madrid⁴, y por otro, hemos realizado un estudio exhaustivo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos. Posteriormente, procedimos a una reflexión personal acerca del modo de resolver las dificultades que entraña la regulación y práctica de los actos de comunicación con particulares en la actualidad. Esta reflexión se ha completado, por último, con un repaso de las aportaciones que, sobre la cuestión, ha realizado la doctrina científica española.

En cuanto al *plan de exposición*, este trabajo se divide en dos partes, una general, sobre el régimen de las notificaciones en el proceso civil, y otra especial, relativa a las diversas formas de realizar esas notificaciones. La primera parte comienza con el estudio de la legislación que regula los actos de comunicación, principalmente del régimen que se ofrece en la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque puesto en relación con las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tratan sobre la materia.

⁴ Este 'trabajo de campo' en los juzgados de Madrid ha consistido, principalmente, en un plan de entrevistas con Secretarios judiciales, sujetos activos de la comunicación procesal, y en un estudio del funcionamiento del Servicio Común de Notificaciones de la misma ciudad, realizado por medio de conversaciones con los responsables de ese servicio y acompañando a los Oficiales judiciales allí destinados a practicar diligencias de comunicación en los domicilios de los sujetos notificados. Como complemento de lo anterior, también hemos visitado las instalaciones del sistema informático judicial del País Vasco, comunidad que más ha avanzado hasta la fecha en la introducción de las nuevas posibilidades técnicas en el ámbito jurisdiccional.

A continuación, se analizan: la naturaleza y las características que definen a los actos de comunicación del tribunal con las partes, en qué clases se dividen (notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos) y cuáles son las formas diversas en que pueden efectuarse (por medio de Procurador, de forma personal, mediante edictos, y a través de remisión postal o por medios técnicos).

Posteriormente, se tratan cuestiones relativas a los sujetos que participan en la comunicación procesal. En cuanto al sujeto activo: cuál es el papel que le corresponde al Secretario judicial como titular de la función notificadora; qué intervención en ésta pueden tener otros funcionarios y servicios; en este caso, cómo varía la forma de acreditar la recepción del acto (de la documentación a la incorporación); qué diligencias de comunicación han de ser practicadas necesariamente por funcionarios que den fe pública; etc. Sobre el sujeto pasivo: qué terceros pueden recibir notificaciones, además de las partes procesales, y cuáles son los problemas más frecuentes en la notificaciones que se practican a un receptor distinto del destinatario.

El último capítulo de la parte general se refiere a la eficacia e ineficacia de las notificaciones; es decir, de un lado, se explica cuándo son válidas las notificaciones y cuándo son nulas, y en este último caso, cómo pueden subsanarse las notificaciones defectuosas; y de otra parte, se exponen las diferentes vías de denuncia de la nulidad de un acto de comunicación, en relación con el momento procesal en que la parte destinataria advierte el posible vicio (durante la pendency del proceso o tras la firmeza de la sentencia).

La parte segunda de esta investigación se centra en el estudio detallado del modo concreto de llevar a cabo las distintas formas de notificación. Se comienza por la notificación por medio de Procurador, ya que éste recibirá todos los actos de comunicación que se hagan a la parte que actúe en el proceso a través de su representación. Así, se explican cuáles son los efectos de la notificación practicada al representante procesal; cómo se efectúan esas notificaciones a través del servicio que la LOPJ prevé que pueden instaurar los Colegios de Procuradores donde existan varios Juzgados; y si se pueden realizar válidamente actos de comunicación al Abogado de la parte, cuando no se exija Procurador.

La segunda forma de notificación que se aborda es la personal, la cual ordinariamente se lleva a cabo por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, en las poblaciones donde esté establecido. Este capítulo comienza refiriéndose a la previsión legal de ese servicio, a los casos en que interviene y a la legalidad de su actuación. Después, se describen los distintos supuestos que suelen ocurrir en la práctica de la notificación personal *ad domum*: tanto si está el interesado en su domicilio y acepta la notificación, como si no está, o si, estando, se niega a darse por notificado. Se termina aludiendo a algunas cuestiones, tratadas en la jurisprudencia, sobre la notificación que se efectúa 'por cédula' a un receptor subsidiario, previsto legalmente.

En tercer lugar, trataremos de la notificación que se realiza mediante la publicación edictal. Primero, se expone la doctrina jurisprudencial sobre el carácter subsidiario de la notificación por edictos

y, posteriormente, lo que puede considerarse como su consecuencia, es decir, la interpretación restrictiva del doble supuesto de hecho legal que permite esa forma notificatoria: qué debe entenderse —de acuerdo con esa jurisprudencia— por ‘domicilio desconocido’ y por ‘ignorado paradero’.

A continuación nos referiremos a la notificación por remisión postal, tanto a las exigencias legales y deberes de diligencia que han de observarse en su práctica, como al modo de actuar cuando la comunicación postal ha sido infructuosa. Además, se considera la posible validez —y en su caso, en qué condiciones— de la remisión de actos por otros medios de comunicación, como el telegrama, el fax o el teléfono.

Por último, se estudia la viabilidad del empleo de medios electrónicos, *informáticos o telemáticos en la comunicación procesal*: si se pueden utilizar, desde un punto de vista normativo; si se emplean efectivamente en algunos tribunales de nuestro territorio; y si deben realizarse las notificaciones a través de esos medios, desde la perspectiva del derecho de defensa del destinatario.

**I. PARTE GENERAL:
RÉGIMEN DE LAS NOTIFICACIONES
EN EL PROCESO CIVIL.**

CAPÍTULO 1:
SITUACIÓN ACTUAL
DE LAS NOTIFICACIONES
EN NUESTRO DERECHO.

1.1. REGULACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES DE COMUNICACIÓN CON PARTICULARES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL.

En nuestro Derecho, la normativa que regula los actos de comunicación que dirige el tribunal a las partes y demás sujetos que han de intervenir en el proceso civil se contiene en la Sección 3ª (De las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos), del Título VI (De las actuaciones y términos judiciales), del primer libro (Disposiciones comunes a la Jurisdicción contenciosa y a la voluntaria), de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC). Esta sección de la LEC se compone de veinte artículos (del art. 260 al 280), los cuales forman el núcleo principal de regulación de la comunicación procesal con particulares, siendo de aplicación directa en la Ju-

jurisdicción Civil y supletoria en otros órdenes jurisdiccionales⁵. Estas normas sólo han sido objeto de leves modificaciones desde su redacción originaria de 1881.

Junto a la sección de la LEC señalada, deben añadirse algunos preceptos de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ)⁶, lo cual supone una novedad, porque —como señala PRADO ARDITTO— “ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de 17 de septiembre de 1870, ni la Ley de Bases Orgánica de la Justicia de 28 de noviembre de 1974, ni tampoco los Reglamentos orgánicos del Secretariado se ocuparon, por regla general, de esta materia cuya regulación se dejaba a las leyes procesales”⁷.

Además, como tercer elemento normativo en materia de notificaciones, podemos señalar que existe un Convenio relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea

⁵ Esta sección de la LEC se complementa con la sección 5ª del mismo Título (“De los exhortos, oficios y mandamientos”), encargada de regular la comunicación con otros sujetos, distintos de los particulares que han de intervenir en el proceso, como son: otros tribunales y los órganos públicos.

⁶ En la LOPJ existe un capítulo que se titula “De las Notificaciones”, formado por los arts. 270-272; es el Capítulo VII del Título III (De las actuaciones judiciales), del Libro III (Del régimen de los Juzgados y Tribunales). Pero, además, hay otros preceptos que se ocupan también de algún aspecto de la materia que estudiamos, entre los que podemos destacar: el 230, 236, 248, 279, 281, 282, 485, 486 y 487.

⁷ PRADO ARDITTO: “La notificación de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial”, en *Justicia* 86, Barcelona, 1986, pág. 82. Este autor lo justifica diciendo que “no es función de las normas de carácter orgánico la regulación de los actos de comunicación, entendidos éstos en su sentido estricto equivalente a actos de notificación”.

de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, aprobado por Acto del Consejo de 26 de mayo de 1997.

En este epígrafe se pretende realizar un trazado rápido del cuerpo normativo aplicable a los actos procesales civiles de comunicación: examinando, por un lado, las normas expuestas en la ley de enjuiciamiento, indicando de paso las reformas que éstas han sufrido, y por otro, las recogidas en la legislación orgánica; para terminar con un breve estudio del Convenio europeo que acabamos de citar, en lo referente al objeto de nuestro trabajo. Todo ello sin perjuicio de que cada tema que se apunte sea desarrollado más extensamente en epígrafes posteriores.

1.1.1. Normas sobre las notificaciones de resoluciones judiciales.

La sección de la LEC que se encarga de la comunicación procesal con los sujetos que han de intervenir en el proceso lleva por rótulo, como acabamos de decir, “De las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos”. Los diez primeros artículos de esta sección (arts. 260-269) se ocupan específicamente de la notificación de resoluciones judiciales. El artículo 270 LEC dispone que las disposiciones relativas a las notificaciones “*serán aplicables a las citaciones, emplazamientos y requerimientos, con las modificaciones que se expresan en los artículos siguientes*” (sobre todo en los arts. 271-276). Veamos, pues, ahora las normas referentes a las notificaciones, siguiendo el orden del articulado de la LEC, aunque hacien-

do referencia a los preceptos de la LOPJ que paralelamente incidan en la materia que vayamos comentando.

Como de manera acertada indica GUASP DELGADO, las normas relativas a las notificaciones, “además de hallarse en un censurable desorden, contienen con frecuencia cada una el tratamiento de más de un problema distinto”⁸, y esto es lo que ocurre con el primero de los preceptos de esta materia, el art. 260 LEC. Podemos decir que este artículo dispone cuál es el ámbito de aplicación de las notificaciones, pero se refiere a tres aspectos al mismo tiempo, como son el objetivo, subjetivo y temporal.

El ámbito objetivo de las notificaciones queda delimitado en el 260 I al señalarse que se comunicarán “*todas las providencias, autos y sentencias*”, esto es, todas las resoluciones judiciales. Junto a éstas, han de añadirse las resoluciones secretariales, ya que el artículo 270 LOPJ (que viene a reproducir en esa ley el citado 260 de la LEC)⁹, incluye las diligencias de ordenación como resoluciones que también se han de notificar. Es de destacar, como hace SÁNCHEZ SÁNCHEZ, que “no recoge el precepto la exigencia de comunicar los actos de una parte a las restantes; no obstante, éstos se hacen

⁸ GUASP DELGADO: *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*. Tomo I, M. Aguilar, Madrid, 1943, pág. 728.

⁹El artículo 270 de la LOPJ es el primero de los tres que forman el capítulo rotulado “De las Notificaciones”. Este precepto dice así: “*Las diligencias de ordenación, providencias, autos y sentencias se notificarán a todos los que sean parte en el pleito o la causa, y también a quienes se refieran o puedan para perjuicios, cuando así se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de conformidad con la ley*”.

saber a través de la entrega de las copias de los escritos y documentos correspondientes, como exigen los arts. 525 y 517 LEC¹⁰. Además, debe tenerse en cuenta que los actos de parte son admitidos en el proceso mediante una resolución judicial que también deberá notificarse (junto al propio acto de parte)¹¹.

El segundo aspecto a que hace referencia el artículo 260 LEC es el ámbito subjetivo de la comunicación de resoluciones judiciales, al establecer en su primer párrafo que “*se notificarán a quienes sean parte en el juicio*”, y en el segundo párrafo que “*también se notificarán, cuando así se mande, a las personas a quienes se refieran o puedan deparar perjuicio*”. Coincidimos con GUASP DELGADO cuando dice que “en cuanto al sujeto pasivo de la notificación, es preciso hacer una diferenciación fundamental entre el destinatario y el receptor de la comunicación; el primero es aquel cuyo conocimiento interesa provocar, el segundo aquel a quien se entrega la comunicación y que puede o no coincidir con la persona anterior”¹². Así, el art. 260 establece quiénes son los destinatarios de la notifica-

¹⁰ SÁNCHEZ SÁNCHEZ: *Ley de Enjuiciamiento Civil. Doctrina y Jurisprudencia*, (coordinada por ALBÁCAR LÓPEZ), Editorial Trivium, Madrid, 1993, pág. 1111.

¹¹ En este sentido, GUASP DELGADO (op. cit., pág. 729): “en nuestro sistema procesal el intercambio de escritos se hace a través del Juez que admite el de una parte y ordena su transmisión a la otra en una resolución, mediante las reglas generales sobre notificación de dichas resoluciones, como establece expresamente el art. 517 que hace directamente aplicables las normas sobre notificación que ahora se estudian a esta clase de actos de parte”.

¹² GUASP DELGADO: op. cit., pág. 728.

ción, mientras que, por ejemplo, el art. 268 —como veremos— se refiere a posibles receptores subsidiarios del destinatario.

Según el 260 LEC, el destinatario principal de las notificaciones será la parte que ha comparecido en el proceso; pero teniendo en cuenta que “si la comparecencia en juicio de verifica por medio de Procurador éste será el destinatario de la comunicación y no la parte misma”¹³. En este punto, hay que traer a colación el art. 6 LEC porque, aunque no esté sistemáticamente situado entre los artículos referentes a los actos de comunicación, sin embargo, tiene gran importancia en la comunicación procesal, al habilitar al Procurador para recibir todo tipo de notificaciones, y establecer, por tanto, una de las formas mediante las cuales puede llevarse a cabo la notificación de resoluciones.

El tenor literal del artículo 6 LEC, según la última versión de 1992, es el que sigue: *“Mientras continúe el Procurador en su cargo, oirá y firmará los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias, que deban hacerse a su parte durante el curso del pleito y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviene en ellas directamente el poderdante, sin que le sea lícito pedir que se entiendan con éste.*

¹³ GUASP DELGADO: op. cit., pág. 728.

*Sólo se exceptúan los emplazamientos, citaciones y requerimientos que la Ley disponga expresamente que se practiquen a los mismos interesados en persona*¹⁴.

Además de las partes del proceso o de sus representantes en él, serán destinatarios de las notificaciones, aquellas personas a las que éstas últimas se refieran o puedan deparar perjuicio. (Qué sujetos exactamente se contienen en esa expresión es una tema cuyo estudio lo dejamos para el epígrafe del sujeto pasivo de las notificaciones).

En cuanto al ámbito temporal de las notificaciones (que también se recoge en el artículo 260 LEC), se establece que la notificación de las resoluciones judiciales se realizará *“en el mismo día de su fecha o publicación y, no siendo posible, en el siguiente”*. Esto es lo dispuesto desde la redacción originaria de 1881, que se venía a completar con el antiguo artículo 261: *“Si por la mucha extensión de una sentencia no fuera posible sacar las copias para notificarla en el plazo antes expresado, se podrá dilatar su notificación por el tiempo indispensable, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días”*. La Ley 34/84, de 6 de agosto, de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acortó a tres días el plazo excepcional de notifica-

¹⁴Este artículo fue modificado por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. En su versión originaria de 1881, también se exceptuaban de la comunicación mediante Procurador, además de lo que figura ahora al final del precepto, *“las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria del citado”*.

ción de sentencias, y ubicó el contenido del antiguo 261 como párrafo tercero del artículo 260 actual¹⁵.

El plazo indicado de un día para realizar las notificaciones ha sido calificado de utópico, entre otros, por SÁNCHEZ SÁNCHEZ, quien dice al respecto: "Es difícil que en la mayoría de los Juzgados y Tribunales pueda cumplirse este plazo, ante la escasez de medios personales y técnicos existentes junto al gran volumen de procesos en trámite. La realidad actual nos demuestra que, para hacer cualquier notificación, salvo en el caso de que haya de realizarse a un Procurador o a una persona que acuda voluntariamente al órgano judicial, es imposible que se efectúe en los plazos mencionados; de esta manera, los periodos marcados son vulnerables casi siempre, produciéndose irregularidades que sólo podrán evitarse cuando se fijen unos plazos que estén de acuerdo con las posibilidades de actuación de los órganos judiciales. En caso de actos de comunicación no realizados personalmente, el órgano judicial habrá de hacer el envío que corresponda en el periodo de tiempo ordenado en este artículo, que quedará cumplido, cualquiera que sea la fecha de recepción"¹⁶.

¹⁵El artículo 260 III ha quedado así: "*Si por circunstancias excepcionales, no fuera posible notificar una sentencia en el plazo antes expresado, se podrá dilatar su notificación por el tiempo indispensable, sin que en ningún caso pueda exceder de tres días*".

¹⁶ SÁNCHEZ SÁNCHEZ (op. cit., pág. 1112).

Efectivamente, si se considera que el plazo del art. 260 se refiere a la efectividad de la comunicación, éste se incumplirá en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, puede entenderse en el sentido de que en ese precepto se manda al órgano judicial que en ese tiempo dé curso a la notificación, aunque quizás, en este caso, debería utilizarse una expresión más clara sobre este punto, como la del art. 58 de la LRJ-PAC, que habla de 'ser cursada', en relación con la notificación administrativa.

La reforma más importante de la Ley 34/84, en cuanto a actos de comunicación se refiere, fue la de introducir el correo certificado con acuse de recibo como forma de realizar las notificaciones¹⁷. El nuevo artículo 261 LEC¹⁸ añadió esta nueva vía al modo que podríamos calificar de tradicional de practicar las notificaciones: la entrega personal de la resolución comunicada, bien en la sede del

¹⁷ "Con anterioridad a la Ley de reforma urgente la posibilidad de utilizar el correo en los actos de comunicación se encontraba esporádicamente recogida en determinadas Leyes especiales (CCo de 1928 y Ley de suspensión de pagos) y en algún pasaje de la propia LEC (el art. 294.2º referente a la remisión directa de los exhortos). La Ley 33/1978, de 17 de julio, con un carácter ya más general, introdujo la facultad discrecional del juzgador de poder recurrir a este medio de comunicación para las citaciones de los sujetos procesales que 'no fueran parte en el juicio' (párr. 3º del derogado art. 273). La Ley de reforma parcial, en consonancia con la mayoría de las legislaciones europeas, ha introducido, por vez primera en el ámbito de nuestra justicia civil, el correo certificado como medio idóneo de comunicación (...)", GIMENO SENDRA (Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ley 34/1984 de 6 de agosto, coordinados por CORTÉS DOMÍNGUEZ, Editorial Tecnos, Madrid, 1985, pág. 153).

¹⁸La reforma de 1984 situó como hemos dicho el artículo 261 de la versión de 1881 —con la variación indicada— como párrafo tercero del artículo 260, y en su lugar estableció un artículo de nueva redacción compuesto de cinco párrafos.

Juzgado, bien en el domicilio del interesado (como disponen los artículos 264-268 LEC). Este nuevo medio de comunicación de resoluciones judiciales es el oportuno para aquellas *“notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede del Juzgado o Tribunal”* (261 I LEC)¹⁹.

Además, en el tercer párrafo del mismo 261, se prevé que *“cuando lo aconsejen circunstancias particulares o exigencias de mayor celeridad, se podrá disponer que la comunicación se practique por el servicio de telégrafos o por cualquier medio idóneo de comunicación, adoptándose las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado del cual quedará constancia en autos”*. La LOPJ, un año después de la Ley 34/84, se hace eco de esta reforma e incluye esos medios de comunicación en su art. 271²⁰.

¹⁹La forma concreta de realización de este modo de notificar —que tendremos ocasión de estudiar con más detenimiento— viene recogida en los párrafos primero y segundo del artículo 261, que aquí reproducimos: *“Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede del Juzgado o Tribunal, se harán por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y uniéndose a aquéllos el acuse de recibo.*

De no recibirse el acuse de recibo en el Juzgado o Tribunal dentro de los quince días siguientes a su remisión, o haber resultado negativa la comunicación, se practicará de nuevo en la forma ordinaria, salvo que la persona notificada, citada, requerida o emplazada se hubiera dado por enterada personalmente. Sin embargo, si el Juez o Tribunal lo estima conveniente, podrá acordar que se practiquen por el Secretario o, en sustitución del mismo, por el personal del Juzgado que éste designe”.

²⁰El tenor del 271 LOPJ es el que sigue: *“Las notificaciones podrán practicarse por medio de correo, del telégrafo o de cualquier medio técnico que permita la constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma según determinen las leyes procesales”*.

Así, se introduce en la legislación, de un lado, una forma de notificar que podríamos denominar 'postal', y junto a esto, se abre el camino para el empleo de modernos medios de comunicación.

En relación con el último extremo, tiene especial interés el nuevo artículo 230 LOPJ, introducido por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Este precepto (que estudiaremos en epígrafes posteriores) autoriza la utilización de medios electrónicos en los Juzgados, ya que reconoce la validez de los documentos judiciales emitidos electrónicamente, permite la tramitación informática de los procedimientos, y faculta a los ciudadanos para que se relacionen con los tribunales por vía electrónica en cuanto a la comunicación de escritos y documentos²¹. Sobre este punto, el párrafo cuarto dispone: *"Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán relacionarse con la administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado primero cuando sean compatibles con los que dispongan los*

²¹La exposición de motivos de la L.O. 16/94 declara al respecto: *"Constituye una necesaria novedad de la reforma que se acomete, el tratamiento de la utilización de los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos en la administración de justicia. La nueva redacción del artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al tiempo que otorga validez a los documentos emitidos, establece mecanismos que, por un lado, garantizan tanto la identificación del órgano, cuanto la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos y, por otro, aseguran la homogeneidad de los sistemas mediante la intervención reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial para el aseguramiento de la compatibilidad de los programas, aplicaciones y sistemas informáticos y el cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal"*.

Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento de que se trate”.

En el mismo artículo 261 (en el párrafo cuarto) se establecen una serie de excepciones a la comunicación postal: *“No obstante lo dispuesto en el párrafo primero (referente a la forma postal), los actos de comunicación se realizarán en el modo establecido en los artículos siguientes, cuando su destinatario sea o deba ser parte en el juicio o en cualquiera de sus instancias y dependa de la comunicación su personación en las actuaciones, cuando adopten la forma de requerimiento y en aquellos otros casos en que lo disponga la ley, o así lo acuerde el juzgador, por aconsejarlo las circunstancias particulares que concurran”.*

Así, además de que el tribunal o la ley lo dispongan de manera expresa en casos concretos, hay una serie de actos de comunicación que, por su importancia, se requiere que, en general, se practiquen de una forma que asegure más la efectividad de la comunicación. Estos son las citaciones y los emplazamientos de los que se derive la personación de la parte, y todos los requerimientos. Los primeros porque permiten a su destinatario la realización del primer acto procesal —la personación en juicio— y está en juego de una manera muy especial el derecho de defensa; y los segundos “por cuanto que al tiempo de realizarse este acto específico de comunicación, el requerido puede hacer manifestaciones en el mismo momento y solamente tendrán valor si se efectúan ante quien tenga la fe pública para que sean documentadas, lo que no sucede si se efectúan ante un cartero”.

Esa forma de comunicación más segura en orden a la recepción por el destinatario, y que se recoge según el 261 IV “*en los artículos siguientes*” (se está refiriendo a los arts. 262-268) no es sino la forma personal de realizar las notificaciones, a cuyo estudio pasamos a continuación.

Otro precepto en el que se regulan distintas cuestiones a un tiempo es el art. 262 LEC, que trata sobre el sujeto activo y el modo de llevar a cabo la notificación en forma personal. Respecto al sujeto activo, se dispone lo siguiente: “*Las notificaciones se practicarán por el Escribano²², Secretario u Oficial de Sala autorizado para ello*”. Así, la competencia para la práctica de los actos de comunicación corresponde al Secretario judicial. Esto lo corrobora la LOPJ en el capítulo referente a las funciones atribuidas a los Secretarios (arts. 279-282)²³, cuyo artículo 279.3 dice: “*Asimismo corresponderá a los Secretarios la práctica de las notificaciones y demás actos de comunicación y de cooperación judicial en la forma que determinen las leyes*”.

Señala PRADO ARDITTO que “han desaparecido con la nueva LOPJ (se refiere a la actual, de 1985), los antiguos Oficiales de

²² Como es sabido, la referencia a los Escribanos hay que entenderla omitida, tras la primera LOPJ de 1870 y el Real Decreto de Secretarios judiciales de 1 de junio de 1911.

²³ Capítulo I (De las funciones atribuidas a los Secretarios), del Título IV (De la fe pública judicial y de la documentación), del Libro III (Del régimen de los Juzgados y Tribunales), de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sala (art. 454.1), que tenían encomendadas directamente por la LOPJ de 1870 (art.543) y por las leyes procesales (arts. 262 LEC y 166 LECr) la práctica de algunos de dichos actos, en los cuales ejercían funciones propias y no delegadas del Secretario. Dichos funcionarios han sido integrados en el Cuerpo de Secretarios judiciales (disposición transitoria 22.4). Con ello, creemos, han quedado los Secretarios como titulares únicos de los actos de comunicación, si bien la propia LOPJ les permite delegar la función transmisora a ellos encomendada, que se ejerce a través de dichos actos, en los Oficiales de la Administración de Justicia, no de una manera esporádica, como ocurría antes de la nueva ley, sino con una cierta permanencia, al decir en su art. 282.1 que *“los Secretarios podrán habilitar a uno o más oficiales para que autoricen... las diligencias de constancia y de comunicación”*, añadiendo en su apartado 2 que *“estas habilitaciones subsistirán mientras no sean revocadas”* y que *“la responsabilidad de la autenticidad de los hechos o actos acreditados recaerá sobre el Oficial autorizante”*²⁴.

El hecho de que sea competencia del Secretario la practica de las notificaciones y de que sea posible la habilitación al Oficial para las diligencias de comunicación, no excluye la intervención de otros funcionarios judiciales en la realización material de los actos de comunicación. La misma LOPJ en Libro VI, del personal al servicio de la Administración de Justicia, prevé en el Título III, encargado de recoger las competencias de Oficiales, Auxiliares y Agentes, la partici-

²⁴ PRADO ARDITTO: op. cit., pág. 83.

pación de todos éstos en los actos de comunicación, en los artículos 485, 486 y 487, respectivamente; el cometido concreto de cada uno se estudiará más adelante²⁵.

El segundo tema que se aborda en el artículo 262 I LEC es referente a cómo se llevan a cabo las notificaciones según la forma personal: esto se hace, por quien corresponda, *“leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se hagan y dándole en el acto copia literal de ella firmada por el actuario, aunque no la pida, expresando el negocio a que se refiera”*. Por tanto la forma personal implica: 1º) la lectura de la resolución que se notifica (aunque la ley diga ‘providencia’, entiéndase cualquier resolución); aunque esta lectura se suele omitir si la persona a quien se notifica sabe leer, lo cual será lo más normal hoy en día; 2º) la entrega de una copia de la resolución notificada; y 3º) la extensión de una diligencia que acredite la lectura (cuando se haga) y la entrega; ya que el segundo párrafo del 262 requiere que *“de lo uno y de lo otro deberá hacerse expresión en la diligencia”*.

Esa diligencia acreditativa de la entrega de la copia de la resolución será firmada por la persona que la realiza y por la que la recibe, ya que el artículo 263 I establece que *“las notificaciones se*

²⁵ El artículo 485 establece que los Oficiales *“(…) efectúan los actos de comunicación que les atribuye la ley y sustituyen a los Secretarios cuando éstos no se sustituyan entre sí”*. El artículo 486 referente a los Auxiliares les encarga la realización de *“los actos de comunicación que les atribuya la ley”*; al igual que el artículo 487 respecto de los Agentes judiciales, los cuales *“realizan los actos de comunicación no encomendados a otros funcionarios”*.

firmarán por el actuario y por la persona a quien se hiciesen". Aunque el tenor de la ley se refiera a la 'notificación', pensamos que las firmas donde deben constar es en la diligencia. En este sentido, es muy claro GUASP DELGADO cuando afirma que "la diligencia de notificación es, por ello, un acto distinto en esencia del de la notificación propiamente dicha: mientras el segundo se compone, en su forma personal, de otros dos actos: lectura y entrega, para ninguno de los cuales se exige el requisito de la escritura, la primera reclama, como todos los actos de su clase, la forma escrita"²⁶.

Si la persona a quien se hiciese la notificación "*no supiere o no pudiese firmar lo hará, a su ruego, un testigo, cuyas circunstancias particulares se harán constar*" (art. 263 II). Este precepto ha sido modificado, ya que antes no sólo era necesario un testigo cuando la persona notificaba no sabía o no podía firmar, sino también en el caso de que se negara a hacerlo. Ahora, la plenitud de la fe pública del Secretario o del Oficial actuante hace innecesaria la firma de testigos. Así, el art. 281 LOPJ dispone: "*1. El Secretario es el único funcionario competente para dar fe con plenitud de efectos de las actuaciones judiciales, correspondiéndole también la facultad de documentación en el ejercicio de sus funciones, ostentando el carácter de autoridad. 2. La plenitud de la fe pública en los actos en que la*

²⁶ GUASP DELGADO: op. cit., pág. 733.

*ejerza el Secretario no precisa la intervención adicional de testigos*²⁷.

Es el art. 264 LEC el que trata sobre el lugar dónde se realizan las notificaciones en la forma personal. Su primer párrafo dice lo que sigue: *“Se harán las notificaciones en la Escribanía o en el local que en cada Tribunal estuviere destinado a este fin, si allí comparecieren los interesados”*. La redacción de este precepto está pensando en la práctica antigua, ya en desuso en muchos sitios, según la cual el Procurador recorre diariamente los diferentes juzgados en que sus

²⁷ La promulgación de la LOPJ va a provocar que la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, suprima los párrafos tercero y cuarto del artículo 263: la firma de testigos cuando a esto se niegue el destinatario, y la multa de los testigos que se nieguen a suplir la firma del notificado. El artículo 263 LEC de 1881 se componía de cuatro párrafos. El primero de ellos no ha sufrido variaciones (*“Las notificaciones se firmarán por el actuario y por la persona a quién se hicieren”*). El segundo párrafo recoge el supuesto de que el sujeto pasivo de la comunicación no puede firmar, disponiendo: *“Si ésta no supiere o no pudiese firmar, lo hará a su ruego un testigo”*. El párrafo tercero habla, sin embargo, de que el destinatario de la notificación no quiere firmar: *“Si no quisiere firmar o presentar testigo que lo haga por ella en su caso, firmarán dos testigos requeridos al efecto por el actuario”*. Por último, el párrafo final establece que *“Estos testigos no podrán negarse a serlo, bajo la multa de 5 a 25 pesetas”*.

Por su parte, la Ley de 20 de diciembre de 1952 señalaba que, en los casos del segundo y tercer párrafo, se deben hacer constar las circunstancias personales de los testigos que firmen la notificación. Además, se incrementó —de 25 a 100 pesetas— la multa de los testigos que se nieguen a firmar (elevando también la multa paralela del 268).

representados tienen causas pendientes, y se da por notificado en la secretaría de cada tribunal²⁸.

Sin embargo, esa costumbre ha quedado trastocada en los lugares donde se ha puesto en marcha el servicio (que en el foro se llama 'Salón de Procuradores') a que hace referencia el art. 272.2 LOPJ, el cual dispone que *"podrá establecerse un local de notificaciones común a los varios Juzgados y Tribunales de una misma población, aunque sean de distinto orden jurisdiccional. En este supuesto, el Colegio de Procuradores organizará un servicio para recibir las notificaciones que no hayan podido hacerse en aquel local común por incomparecencia del Procurador que deba ser notificado. La recepción de la notificación por este servicio producirá plenos efectos"*. Si hemos dicho que cuando la parte que deba ser notifica-

²⁸ SÁNCHEZ SÁNCHEZ (op. cit., pág. 1119) cuenta con detalle el sentido histórico de esta norma: "En el art. 100 del Reglamento del Tribunal Supremo de Justicia de 17 de octubre de 1835 y en el art. 204 de las Ordenanzas de las Audiencias de 19 de diciembre del mismo año, se estableció que los Procuradores tenían la obligación de asistir diariamente a su respectivo Tribunal en las horas de despacho y se previno que allí se les hicieran las notificaciones y citaciones. La obligatoriedad de esta asistencia se extendió a todos los Procuradores que actuaban en los Juzgados de Primera Instancia por el art. 65 del Reglamento de 1 de mayo de 1844. Posteriormente, no se ha vuelto a mencionar ese deber en los textos legales, constando únicamente, con carácter general, en el vigente Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales que éstos tienen la obligación de seguir el juicio mientras no hayan cesado en su encargo y asistir a todas las diligencias y actos para los que las leyes lo prevengan (art. 14.2 y 8 del RD 2046/1982, de 30 de julio). Debido a ello, los Procuradores acuden habitualmente, todos los días, a los Juzgados y Tribunales, siendo en la Secretaría de los mismos donde se les hacen las notificaciones correspondientes o en el local establecido para tales diligencias, en las poblaciones en las existe".

da tiene representante procesal recibirá por medio de éste las notificaciones que se le hagan, en los casos en que en su ciudad esté instaurado el servicio mencionado, el lugar de las notificaciones será precisamente el 'Salón de Procuradores'. Además, si el Procurador a quien se dirige una notificación no comparece en ese servicio, no regirá el art. 265 LEC, sino que la notificación producirá sus efectos, como se establece en el inciso final del art. 272.2 LOPJ citado.

El art. 265 LEC se aplicará en las localidades dónde no exista un servicio de recepción de notificaciones del Colegio de Procuradores. Dice este precepto: *"Cuando los Procuradores no comparezcan oportunamente en la Escribanía o local destinado al efecto, se les hará también la notificación en su domicilio. Pero en este caso, será de su cuenta personal el aumento de gastos que ocasione la diligencia, sin que puedan cargarlos a sus poderdantes"*²⁹.

²⁹ Sobre el sentido que hay que atribuir al 265 LEC, en relación con la responsabilidad del Procurador en tales casos, GUASP DELGADO (op. cit., pág. 738): "(...) si esta norma se limitara a declarar que en definitiva quien soporta tales gastos es el Procurador, sería inútil, o por lo menos tendría una utilidad menor que la que hay que atribuirle, porque la obligación de indemnizar a la parte los perjuicios ocasionados por su negligencia existe con carácter general. De aquí que la interpretación del art. 265 haya de extraer de él otras consecuencias: fundamentalmente, la de que al obtener el Procurador el reembolso de los gastos del pleito de la parte que él ha satisfecho, a tenor de la obligación que le impone el n. 5 del art. 5 de la LEC, no puede hacer figurar como una partida o como fracción del importe de una partida de su cuenta, el mayor gasto que represente la notificación a domicilio con respecto a la notificación en Secretaría; entendida así la norma, y no se formula tampoco interpretación en contrario, no cabe duda de su utilidad y del fundamento de justicia que la anima y sólo cabe censurar que se haya concebido como un caso aislado y

Para los supuestos en los que el destinatario de la notificación personal no tenga Procurador que lo represente, las comunicaciones se realizarán en el domicilio del interesado, como se dispone en el segundo párrafo del art. 264 LEC: *“No compareciendo oportunamente (en los lugares citados supra)³⁰, se harán en el domicilio de la persona que deba ser notificada, a cuyo fin lo designará en el primer escrito que presente”*. Recordamos que la notificación en forma personal es procedente cuando del acto de comunicación depende la personación en juicio del interesado; en estos casos, al no haberse personado en las actuaciones, el destinatario del acto lógicamente no habrá designado Procurador; por tanto, el primer acto de comunicación que tiene lugar en un proceso ordinariamente se realizará en el domicilio del demandado.

Las notificaciones que hayan de realizarse en el domicilio del destinatario se practicarán, en los lugares donde esté establecido, por el denominado Servicio Común de Notificaciones y Embargos,

no como medida general ya que esta medida, fuera de los supuestos cubiertos por el art. 424, no existe en nuestro derecho positivo”.

³⁰ Recuérdese que son la Secretaría o el local que el tribunal destine a ese fin; pero lógicamente, en muchos actos de comunicación que deben realizarse de forma personal, como son aquellos de los que depende la personación, no es posible ni razonable que el interesado comparezca en la Secretaría, ya que si la citación o emplazamiento pretenden lograr precisamente la personación en juicio del destinatario, puede que éste no sepa de la existencia de un pleito contra él hasta que efectivamente se le realice dicho acto de comunicación; luego, es casi imposible su comparecencia en la Secretaría para ser allí notificado.

que es otro de los servicios previstos en el art. 272 LOPJ³¹, esta vez en el primer párrafo: *“En las poblaciones en que existieren varios Juzgados y el conjunto de la actividad judicial lo justifique, podrán establecerse servicios comunes dependientes de los Decanatos y de los Presidentes de las Audiencias Provinciales para la práctica de notificaciones y de actos procesales de comunicación, para la ejecución de sentencias, la práctica de embargos y lanzamientos, transcripción de sentencias y aquellos otros que sean precisos para la mejor gestión de los órganos judiciales y la atención al ciudadano”*.

La notificación realizada en el domicilio del interesado se regula en los preceptos 266-268 LEC, y será objeto de un estudio más detenido en capítulo aparte; ahora nos limitaremos a señalar las líneas generales de esta regulación. Cuando el Oficial habilitado para la práctica de la notificación acude al domicilio del destinatario, y le halla, le notificará en la forma descrita en los artículos 262-263 LEC: se entregará la copia de la resolución comunicada y se extenderá una diligencia que acredite dicha entrega. Sin embargo, si no se encuentra en su domicilio al destinatario de la comunicación, *“se le hará notificación por cédula en el mismo acto y sin necesidad de mandato judicial”* (art. 266). *“Dicha cédula será entregada al pariente más cercano, familiar o criado, mayor de catorce años, que se hallare en la habitación del que hubiere ser notificado, y si no se encontrare a nadie en ella, al vecino más próximo que fuere habido”* (art.

³¹ Los efectos de la implantación de los dos servicios previstos en este artículo se estudiarán en un capítulo posterior.

268 I). Por su parte, el artículo 267 LEC indica el contenido de la cédula para las notificaciones³², y el artículo 268 II marca, a su vez, lo que contendrá la diligencia que acredite la entrega de la cédula³³. *“Dicha diligencia será firmada por el actuario y por la persona que reciba la cédula, y si ésta no supiere o no quisiere firmar, se hará lo que se previene en el artículo 263”* (art. 268 III)³⁴.

³² El 267 dispone: *“La cédula para las notificaciones contendrá:*

1º La expresión de la naturaleza y objeto del pleito o negocio, y los nombres y apellidos de los litigantes.

2º Copia literal de la providencia o resolución que haya de notificarse.

3º El nombre de la persona a quien deba hacerse la notificación, con indicación del motivo por el que se hace en esta forma.

4º Expresión de la hora en que haya sido buscada y no hallada en su domicilio dicha persona, la fecha y la firma del actuario notificante”.

³³ El artículo 268 II establece: *“Se acreditará en los autos la entrega por diligencia, en la que se hará constar el nombre, estado y ocupación de la persona que reciba la cédula, su relación con la que deba ser notificada, y la obligación que aquella tiene, y le hará saber el actuario, de entregar a ésta la cédula así que regrese a su domicilio, o de darle aviso si sabe su paradero, bajo multa de 25 a 100 pesetas (cantidad modificada según la reforma de 1952)”.*

³⁴ Después de observar lo que sucede en el foro, creemos conveniente poner de relieve la siguiente precisión: cuando la notificación personal se realiza por cédula, pese a que pudiera parecer que existen dos realidades materiales distintas: la cédula por una lado (con los requisitos del 267) y la diligencia, por otro (con las exigencias del 268), lo frecuente es que sólo exista una diligencia, la cual es la que verdaderamente varía si la notificación se efectúa al propio interesado o si se efectúa a algunos de las personas del 268. En el primer caso, la diligencia contendrá — como vimos — los datos exigidos en el art. 263. Sin embargo, en el segundo caso, en la diligencia constará: además del nombre del destinatario de la notificación (art. 267. 3º), la hora en la que fue buscado y no hallado (art. 267.4º), el nombre del receptor, su relación con el destinatario y la obligación que tiene de dar hacerle llegar la copia de la resolución (art. 268), copia que a su vez se habrá entregado en la notificación (art. 267.2º), la cual contendrá los datos relativos al pleito (art. 267.1º). Por tanto, quedan cubiertas de esta manera todas las exigencias legales, tanto las del

El ordenamiento prevé una forma de notificación supletoria de la personal para los casos en que ésta última no sea posible: la realizada mediante la publicación de un edicto, recogida en el art. 269 LEC: *“Cuando no conste el domicilio de la persona que deba ser notificada, o por haber mudado de habitación se ignore su paradero, se consignará por diligencia, y el Juez mandará que se haga la notificación fijando la cédula en el sitio público de costumbre, e insertándola en el “Diario de Avisos” donde lo hubiere, y si no en el “Boletín Oficial” de la provincia.*

También podrá acordar que se publique la cédula en la “Gaceta de Madrid”, cuando lo estime necesario”.

Como puede observarse, la forma edictal de realizar las notificaciones queda reservada para los dos casos que se indican en el supuesto de hecho: cuando no sea posible localizar un domicilio dónde notificar al destinatario, o cuando, pese a tener alguno, y acudir a él, el destinatario se halla en paradero desconocido. Como veremos, debe emplearse esta forma de notificar de manera muy excepcional, por su carácter ficticio tiene muy escasa eficacia material: rara vez logra que la comunicación llegue a sus destinatarios³⁵. En

art. 267, como las del 268. Por tanto, la denominación ‘notificación por cédula’, más que hacer referencia a una realidad material distinta, lo que significa es que se realiza la notificación a un receptor y no al destinatario, según la distinción que hicimos, aunque esto conlleve especialidades en la diligencia acreditativa del acto.

³⁵ Además, actualmente, cada edicto puede costar entre veinticinco y cincuenta mil pesetas. Habría que cuestionarse si para ser exclusivamente un formalismo no resulta excesivamente gravoso y si no es mejor arbitrar otro medio para la fijación de la garantía del principio de audiencia del demandado. Quizás podría exis-

este sentido, el 269 exige que se ‘mande’, es decir, que se acuerde mediante resolución judicial, la decisión de acudir a los edictos (y en nuestra opinión debe ser por medio de resolución motivada, por las exigencias jurisprudenciales que existen sobre la materia, y que estudiaremos).

La publicación edictal es doble: se hará “*en el sitio público de costumbre*”, esto es, el tablón de anuncios del Juzgado, y en un boletín oficial; y, actualmente, ya no se inserta en un diario de avisos. Como dice SÁNCHEZ SÁNCHEZ, “se mencionan, únicamente, publicaciones oficiales, lo que concuerda con el art. 236.1 de la LOPJ al decir éste que ‘*la publicidad de los edictos se entenderá cumplida mediante la inserción, según proceda, en los “Boletines Oficiales” que señalen las leyes procesales*’”. Sin embargo, nada obsta que, a instancia de parte, la cédula de notificación pueda ser publicada por otros medios, si bien ‘*a costa de la parte que lo solicite*’ (art. 236.2 de la LOPJ)”³⁶.

El boletín oficial en el que se insertará el edicto será normalmente el de la provincia; aunque, en ocasiones, que quedan a la apreciación discrecional del Juzgado, puede realizarse en el Boletín Oficial del Estado, o en el diario oficial de la respectiva Comunidad

tir una relación por orden alfabético de las personas demandadas por edictos, similar a la existente en periódicos (no oficiales) para las subastas.

³⁶ SÁNCHEZ SÁNCHEZ: op. cit., pág. 1127.

Autónoma³⁷. La decisión de uno u otro estará en función de la naturaleza e importancia de la materia que se deba notificar y del pleito. Lo que no está tan claro, cuando la publicación sea en el boletín oficial de la provincia, es en el de qué provincia ha de hacerse, ya que algunos casos pueden existir dudas; como dice de nuevo SÁNCHEZ SÁNCHEZ el art. 269 "no aclara en cuál: ¿en el de la provincia del último domicilio? ¿En el de la provincia en que se tuvo conocimiento del último paradero? ¿En el de la provincia del órgano judicial? La lógica obliga a entender que debe ser en el 'Boletín Oficial' de las dos primeras interrogantes formuladas por ser donde hay más probabilidad de que pueda encontrarse"³⁸.

Por último, destacamos con GUASP DELGADO, que la notificación por edictos "se hace constar, no obstante, también mediante la correspondiente diligencia de publicación; la inserción de la cédula en los periódicos exige además otro acto de formación: la incorporación a los autos del ejemplar del periódico en que aquella aparezca"³⁹.

³⁷ El diario oficial de la Comunidad Autónoma no aparece mencionado en el art. 269, como es lógico, al ser un texto de 1881, siendo las CCAA una novedad de la Constitución de 1978. Quizás se podía haber introducido en una de las dos reformas que han tenido lugar (1984 y 1992), así como la sencilla modificación de la referencia a la *Gaceta de Madrid* por el BOE.

³⁸ SÁNCHEZ SÁNCHEZ: op. cit., pág. 1126.

³⁹ GUASP DELGADO: op. cit., pág. 748.

La comunicación procesal mediante edictos presenta serios inconvenientes a la hora de salvaguardar el derecho de defensa del destinatario de la comunicación. Es grande la litigiosidad que provoca y son muy abundantes las sentencias, tanto del Tribunal Supremo, como del Tribunal Constitucional, que hacen referencia a esta forma notificatoria. Más adelante estudiaremos con detenimiento los problemas que presenta y los supuestos en que es permisible acudir a los edictos como modo de notificar resoluciones judiciales.

1.1.2. Especialidades normativas de las citaciones, emplazamientos y requerimientos.

Dijimos que el art. 270 LEC hace aplicables las normas relativas a las notificaciones que acabamos de ver (arts. 260-269 LEC) *“a las citaciones, emplazamientos y requerimientos, con las modificaciones que se expresan en los artículos siguientes*. Toca ahora repasar esos *artículos siguientes* (artículos 271-276) que nos muestran las singularidades de esos tras actos de comunicación.

En cuanto a las citaciones y los emplazamientos de los que sean o deban ser partes en el juicio, el primer párrafo del artículo 271 LEC contiene una especialidad: *“se harán por cédula, que será entregada al que deba ser citado, en lugar de la copia de la providencia”*. El contenido de la cédula de citación viene recogido en el artículo 272 I⁴⁰, y el de la cédula de emplazamiento en el 274⁴¹. La

⁴⁰ Artículo 272.1 LEC: *“La cédula de citación contendrá:*

diferencia entre ambas es que la primera convoca a su destinatario en una fecha concreta, mientras que la segunda otorga un plazo para esa comparecencia⁴².

La Ley 10/92, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, ha introducido un segundo párrafo en el artículo 271: *“Las citaciones y los emplazamientos de los que, siendo parte en el juicio estuvieren representados por Procurador o, cuando la Ley lo autorice, por Abogado, se harán por medio de representante”*. Este segundo párrafo contiene, a nuestro entender, dos reformas. La primera supone que, “en el caso de que, permitiéndolo así la ley, las partes estén representadas por Abogado (que actuaría como tal

1º El Juez o Tribunal que hubiese dictado la providencia, la fecha de ésta y el negocio en que haya recaído.

2º El nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación.

3º El objeto de la citación y la parte que la hubiese solicitado.

4º El sitio, día y hora en que deba comparecer el citado.

5º La prevención de que si no compareciere le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, terminando con la fecha y la firma del actuario”.

⁴¹ Artículo 274 LEC: *“La cédula de emplazamiento contendrá los requisitos 1º, 2º, 3º y 5º del artículo 272, expresándose además en ella el término dentro del cual deba comparecer el emplazado, y el Juzgado o Tribunal ante quien haya de verificarlo”*.

⁴² Por cierto, hubiera sido preferible que la ley hablara precisamente de *plazo*, y no de *término*, como hace; ya que esta segunda palabra es confusa y se refiere más bien al día concreto en que acaba el plazo. También destacamos, en cuanto al tenor del 274, que hay otra diferencia respecto del 272, y es que se exige que la cédula de emplazamiento exprese el tribunal ante el que se ha de presentar el destinatario; esto tiene su razón de ser en que el órgano judicial que emplaza puede hacerlo ante un tribunal distinto (como sucede en la apelación), cosa que no ocurre en las citaciones.

abogado y como procurador), las citaciones y emplazamientos a las partes se realizarán a través de dicho letrado⁴³. La segunda establece que, cuando la parte procesal esté representada por Procurador, éste podrá recibir las citaciones y los emplazamientos, aunque de ellos se derive la personación de la parte, pese al tenor del 261 IV⁴⁴.

Esa segunda reforma parece estar unida a la modificación del art. 6 LEC que también se realizó en 1992. Como dijimos, la Ley 10/92 suprimió, dentro de las comunicaciones por Procurador, la excepción a esta vía que versaba en el 6 II: *“Las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria del citado”*, las cuales —según la redacción de 1881— había que notificar a los mismos interesados, no siendo posible su comunicación a los representantes procesales. Así, a partir de 1992, se entiende que toda citación a quien deba ser parte en un proceso puede realizarse por medio de representante, cuando lo tenga⁴⁵.

⁴³ ESCUDERO MORATALLA y FRIGOLA VALLINA: “El Derecho Orgánico procesal analizado bajo el prisma de La ley Orgánica del Poder Judicial y otras disposiciones complementarias”, en *Tapia* (de Editorial Trivium), nº 97, 1997, pág. 8689.

⁴⁴ En este caso, las citaciones o los emplazamientos se realizarán a los Procuradores en el salón común de notificaciones previsto en el artículo 272.2 LOPJ, en los lugares dónde esté implantado.

⁴⁵ En este sentido, CIMA GARCÍA (“Examen de las reformas más importantes en el orden procesal civil introducidas por la Ley 10/1992, de 30 de abril”, en *Revista jurídica de Asturias*, nº 16, Oviedo, 1993, pág. 37): “Singular importancia ofrece el añadido párrafo 2º del artículo 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que

Pensamos que con esta reforma de 1992 también se podía haber suprimido el párrafo segundo del artículo 272 (referente al contenido de la cédula de citación), que sigue hablando de *comparecencia obligatoria del citado*; al menos cuando éste es una parte del proceso. Dice así: *“Cuando deba ser obligatoria la comparecencia se le hará esta prevención (la del número 5º del 272.1 LEC: la prevención al citado de que si no comparece le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho), y si por no haber comparecido fuere necesaria segunda citación, se le prevendrá en ella que si no comparece ni alega causa justa que se lo impida, será procesado por el delito de desobediencia grave a la Autoridad”*.

Lo que sucede, en realidad, es que no hay ninguna *comparecencia obligatoria* de la parte que es citada o emplazada; al menos, si se entiende la obligatoriedad como una exigencia a comparecer impuesta por una obligación procesal. Y esto, porque estamos ante el concepto de carga procesal: como el mismo artículo 272 LEC dice, *“si no compareciere le parará el perjuicio a que hubiere lugar en*

ha de ponerse en relación con la nueva redacción del párrafo 2º del artículo 6 de la misma, ampliándose la función receptora de estos actos de comunicación a los Procuradores o Abogados en su caso, cuando ostenten la representación técnica de la parte litigante incluidas las citaciones y emplazamientos que impliquen la carga de comparecer del destinatario de los mismos, v. gr. citación para confesión en juicio, pues no puede perderse de vista que el apartado 2º de dicho párrafo se suprime.

Debe quedar claro, que a la vista del párrafo 2º del artículo 6, sólo las citaciones, emplazamientos y requerimientos que la Ley disponga expresamente que se practiquen a los mismos interesados en persona, no podrán hacerse a través de representante procesal, en todos los demás supuestos necesariamente sí, de acuerdo además con el párrafo 1º del mismo artículo”.

derecho”, sin que sea posible imponerle una sanción mayor que la pérdida de los derechos y oportunidades procesales que estén en juego en la comparecencia a la que se le convoca con la citación o el emplazamiento.

Lo anterior es especialmente claro en el ejemplo de la citación o el emplazamiento del que depende la personación de la parte: por un lado, no parece haber un llamamiento más importante a lo largo del proceso que la propia vocación al juicio; por otro lado, la consecuencia de la falta de comparecencia del llamado, en este caso, es la pérdida de las oportunidades para defenderse —se le declara en rebeldía y se da por contestada la demanda, tal como establecen los artículos 527 y 685 LEC, respectivamente para los juicios de mayor y de menor cuantía—, pero nunca se le procesará por desobediencia⁴⁶.

Las únicas comparecencias que pueden ser *obligatorias*, en el sentido expresado, serán las de aquellos sujetos que sean citados para intervenir en el proceso, sin ser parte en él, como por ejemplo, los testigos, respecto de los cuales incluso cabe que se les conduzca al juicio por la fuerza pública, de no hacerlo voluntariamente, según el art. 643 LEC.

⁴⁶ En la práctica, lo que se suele hacer para cumplir con la letra de la ley es que, en cada citación, se incluyen dos posibles fechas de comparecencia, y el citado puede presentarse a cualquiera de las dos.

Precisamente es el art. 273 LEC el que se hace cargo de las citaciones a las personas que no son parte en el proceso. Este precepto fue modificado por la Ley 34/84, de 6 de agosto. Esta reforma, que incluyó —como dijimos— el correo certificado para las notificaciones a las partes que deban realizarse fuera de la sede del Juzgado (art. 261.1), estableció también esta forma de notificar para aquellos que no son parte en el pleito (art. 273.1): *“La citación de los testigos y peritos y demás personas que no sean parte en el juicio, cuando deba practicarse de oficio, se hará por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos, del contenido del sobre remitido y uniéndose a ellos el acuse de recibo”*.

En este supuesto las citaciones se entenderán practicadas en la fecha en que el destinatario o alguna de las personas indicadas en el art. 268 de esta Ley hagan constar su recepción en el acuse de recibo.

Cuando el Juez lo estime conveniente podrá acordar que se practiquen por medio de un agente judicial.

A este fin, el Secretario extenderá la cédula por duplicado y el agente judicial entregará un ejemplar al citado, el cual firmará su recibo en otro ejemplar, que se unirá a los autos”⁴⁷.

⁴⁷ GIMENO SENDRA (op. cit., pág. 162) cuenta la evolución legislativa de este precepto: “La Ley de reforma urgente se ha limitado en el presente precepto a convertir lo que era excepción en régimen general. La originaria redacción del artículo 273 dispuso un régimen ordinario de notificaciones a través de agente judicial, pero dicho régimen general fue modificado por la reforma operada en la referida norma por la Ley de 17 de julio de 1978 que vino a introducir en las citaciones de testigos y peritos el correo certificado, incorporando dos nuevos párrafos, el tercero

Llama la atención, en el primer párrafo, la mención a la necesidad de que las citaciones en estos casos tengan que practicarse 'de oficio'. Según GUASP DELGADO, "la expresión es completamente inadecuada: lo que ha querido decirse es que, si de la citación se encarga la parte por su cuenta, no serán aplicables las disposiciones del art. 273, indicación innecesaria puesto que nadie podría pensar lo contrario aunque no se dijera; la impropiedad de la fórmula de oficio se comprueba observando que precisamente las citaciones de que trata este artículo, así, la de los testigos (art. 643), se ordenan a instancia de parte: lo que pretende la ley, por tanto, es referirse a las citaciones en cuanto constituyen un acto procesal realizado por el órgano jurisdiccional"⁴⁸.

Después de hablar de las peculiaridades de las citaciones y de los emplazamientos, es el momento de referirnos a los requerimientos. El artículo 275 LEC expresa lo siguiente: "*Los requerimientos se harán notificando al requerido, en la forma prevenida, la providencia*

y el cuarto, al mencionado precepto y suprimiendo su antiguo párrafo tercero que se refería a las citaciones por medio de 'oficio'.

Pero tras la reforma de 1978, la utilización del correo certificado para las referidas citaciones constituía una facultad discrecional del juzgador, toda vez que el precepto disponía que *'cuando el juez lo estime conveniente podrán hacerse estas citaciones por correo certificado con acuse de recibo...'*.

En el régimen actual ha desaparecido esta facultad y lo que era mera posibilidad se ha transformado en regla general".

⁴⁸ GUASP DELGADO: op. cit., pág. 754. Por su parte, GIMENO SENDRA (op. cit., pág. 163), sin embargo, ve lógica esa previsión, y la entiende referida a otro supuesto: "si la parte interesada se reserva su diligenciamiento, lo que puede suceder, por ejemplo, en la ejecución de un exhorto por conducto personal (art. 289), decae la necesidad del correo certificado".

en que se mande, expresando el actuario en la diligencia haberle hecho el requerimiento en aquélla ordenado”.

Por tanto, según ese precepto, el requerimiento se realiza notificando la resolución (no sólo ‘providencia’) en que se ordena, lo cual conlleva que sean de aplicación las normas sobre notificaciones. La ‘forma prevenida’ a que se hace referencia es la personal (se previene en el art. 261 IV, como vimos)⁴⁹. Se intentará practicar la notificación personal del requerimiento al propio destinatario, aunque si esto no es posible, puede hacerse por cédula, y subsidiariamente, por edictos⁵⁰. Y respecto, al contenido de la diligencia del requerimiento, “no basta, pues, con que conste el acto de la notificación sino que se ha de indicar además la practica del requerimiento como tal a pesar de que... la realización de la notificación y del re-

⁴⁹ Aunque en caso de que el requerido tenga Procurador, la comunicación se realizará a través de este representante (art. 6 LEC).

⁵⁰ En este sentido, la Ley Hipotecaria, en la regla 4ª del art. 131, remite expresamente a la notificación por cédula para los casos en que el requerimiento no puede realizarse al interesado. Como dice MONTERO AROCA, “primero debe estarse a la notificación al deudor en su persona (art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y si por cualquier causa no fuere habido, debe realizarse la notificación por cédula (arts. 266 y 268). Con todo, la notificación edictal está ya firmemente asentada en la practica judicial y es unánimemente aceptada por la doctrina”, (“Los requerimientos notarial y judicial en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria”, en *La Ley*, nº 4440, de 17 de diciembre de 1997, Madrid, pág. 4). Este orden de actuación no sólo tiene lugar en el procedimiento del 131 LH, sino que en la práctica ocurre en todos los requerimientos. Sin embargo, en palabras del mismo autor, “no es dudoso que los requerimientos no pueden hacerse por correo certificado con acuse de recibo”, por la exclusión expresa de ese medio que realiza el 261 IV.

querimiento se confunden aunque hayan de hacerse constar como dos operaciones distintas”⁵¹.

Una de las notas más características de los requerimientos es que, mientras que *“en las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que se hubiere mandado en la providencia”* (art. 276 I LEC), *“en los requerimientos se admitirá la respuesta que diere el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia”* (art. 276 II).

Luego, la regla general es que el requerimiento sí admite respuesta del interesado, y que las notificaciones, citaciones y emplazamientos, no⁵². Si la providencia que ordena estos tres últimos, admite la respuesta del destinatario, pensamos con SÁNCHEZ “que habrá de actuarse en la misma forma que en los requerimientos; es decir, necesariamente, por medio de Secretario u Oficial sustituto o habilitado”⁵³, es decir, habrá de realizarse la comunicación en forma personal.

⁵¹ GUASP DELGADO: op. cit., pág. 758.

⁵² Cuestión distinta, pensamos, es el hecho de que el funcionario actuante recoja las distintas manifestaciones del destinatario o del receptor de las notificaciones, citaciones y emplazamientos, e incluso de sus vecinos, de cara a lograr que la comunicación llegue a su fin: como p.e., cuando se avisa al destinatario, que no quiere aceptar la notificación, que se dejará constancia en las actuaciones de su negativa; o cuando se consigna en la diligencia el nuevo domicilio del interesado que ha sido facilitado por el portero, etc.

⁵³ SÁNCHEZ SÁNCHEZ: op. cit., pág. 1132.

1.1.3. Cuestiones finales de carácter general en la sección de la LEC relativa a los actos de comunicación.

En este apartado nos disponemos a comentar algunas cuestiones finales que afectan tanto a las notificaciones, como a las citaciones, emplazamientos o requerimientos, y que vienen recogidas en los arts. 277-280 LEC.

El art. 277 dice así: “*Cuando la citación o el emplazamiento hayan de realizarse por medio de exhorto, se acompañará al despacho la cédula correspondiente*” (art. 277 LEC). Este precepto está redactado según la reforma de 1984; en este caso se limitó a suprimir la carta-orden que también figuraba aquí, al igual que en el 285⁵⁴; sin embargo, no se arregló lo incompleto del precepto, “pues se refiere únicamente a las citaciones y a los emplazamientos, pero no a las notificaciones y a los requerimientos y, no cabe duda, de que estos dos actos de comunicación también pueden interesarse mediante exhorto en virtud de lo dispuesto en el art. 274.1 de la

⁵⁴ Dice GIMENO SENDRA (op. cit., pág. 163): “Como es sabido, la Ley de reforma ha abolido en estos últimos preceptos, las distintas modalidades de auxilio judicial hasta la fecha existentes en función del órgano jurisdiccional destinatario (suplicatorio, exhorto, carta-orden) y las ha refundido en una sola: la del *exhorto*. Aquellas modalidades, si bien se manifestaban acordes con la concepción ‘napoleónica’ o jerárquica de la Jurisdicción, propia más bien del siglo XIX, no se adecuaban bien al concepto del ‘*Cuerpo único de Jueces y Magistrados*’ al que se refiere el art. 122.1º de nuestra Constitución, al propio tiempo que, en la práctica, estas modalidades de auxilio judicial se convertían en un factor de retardo y de actuaciones burocráticas injustificadas”.

LOPJ”⁵⁵. La diferencia entre unos y otros está en que, en el caso de estos segundos (notificaciones y requerimientos), se unirá la copia de la resolución, en lugar de la cédula, pero no en el hecho de que no se admita el auxilio judicial, como parece deducirse de la redacción del 277.

Este precepto, al igual que el siguiente, están situados de modo inadecuado desde un punto de vista sistemático⁵⁶. El 277 se refiere a los exhortos y existe una sección que trate de esta materia (la sección 5º, del Título VI, del Libro I); mientras que el art. 278 es una norma de carácter fiscal: *“las cédulas para las notificaciones, citaciones y emplazamientos se extenderán en papel común”*. Además, ha dejado de tener sentido porque servía para indicar que esas actuaciones no necesitaban papel timbrado; pero hoy, según la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, todas las actuaciones judiciales han de extenderse en papel de oficio.

El primer párrafo del artículo 279 (primer párrafo) establece la nulidad de los actos de comunicación *“que no se practicaren de acuerdo con lo dispuesto en esta sección”*. Parece, según este artículo, que la validez de los actos procesales de comunicación depende de su regularidad formal: si no se cumple alguno de los preceptos a que hemos hecho referencia en este epígrafe, serán nulas todas las actuaciones que hayan tenido lugar desde el vicio procesal, y el

⁵⁵ SÁNCHEZ SÁNCHEZ: op. cit., pág. 1132.

⁵⁶ En este sentido, GUASP DELGADO: op. cit., pág. 760-761.

acto de comunicación —y todo lo subsiguiente— habrá de repetirse. Sin embargo, como estudiaremos más adelante, el conocimiento o no por el destinatario del acto juega un papel importante, de cara a su validez; hay supuestos en los que se cumplen los requisitos legales, y que la notificación no le llega a su destinatario, sin que éste tenga ninguna responsabilidad, lo que puede acarrearle indefensión. De otra manera, aunque se incumplan algunos de las exigencias de esta sección, *“cuando la persona notificada, citada o emplazada se hubiere dado por enterada en el juicio, surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho con arreglo a las disposiciones de la ley”*⁵⁷, es decir, se entiende que el acto de comunicación queda ‘sanado’, y esto puede ocurrir, tanto por la convalidación voluntaria del destinatario, como por su falta de impugnación.

Por último, el artículo 280 LEC establece la responsabilidad de los funcionarios que intervienen en la comunicación procesal: *“El auxiliar o subalterno que incurriere en morosidad en el desempeño de las funciones que por esta sección le corresponden, o faltare a alguna de las formalidades en la misma establecidas, será corregido disciplinariamente por el Juez o Tribunal de quien dependa, con una multa de 50 a 200 pesetas..*

⁵⁷ “No por esto quedará relevado el actuario de la corrección disciplinaria en el artículo que sigue”, acaba el 279 (tercer párrafo).

*Será además responsable de cuantos perjuicios y gastos se hayan ocasionado por su culpa*⁵⁸.

Si seguimos el orden de estudio de este precepto que propone GUASP DELGADO, veamos “a qué sujetos se refiere, qué infracciones comprende, y qué clase de responsabilidad señala”⁵⁹. En cuanto a lo primero, creemos que el precepto está pensando en el funcionario que materialmente realiza el acto de comunicación (al emplear los términos ‘auxiliares’ y ‘subalternos’). Las infracciones a las que se refiere son el incumplimiento de cualquiera de las normas de la LEC de la sección relativa a los actos de comunicación que acabamos de estudiar; y, de modo particular, habla de la morosidad. “Es de observar lo innecesario de recoger aquí la morosidad, por cuanto ya está regulada como posible motivo de sanción en los arts. 301 y 302 de la misma LEC”⁶⁰. Para terminar, la responsabilidad que se señala puede ser doble: en todo caso, habrá multa⁶¹, y además, se

⁵⁸ “La corrección disciplinaria aquí establecida ha venido recogiendo en nuestra legislación continuamente; así, en la Ley de notificaciones de 1837 se ordenó que el escribano que notificara una providencia sin observar las formalidades prevenidas en ella incurriría en la multa de 500 reales y sería, además, responsable de los perjuicios que se siguieran a las partes si se declaraba nula; en el art. 24 de la LEC de 1855 se mantuvo este precepto, pero reduciendo la multa a 200 reales; en la LEC de 1881 se amplió el motivo de corrección al incluirse la morosidad, estableciéndose la posibilidad de imponerse una sanción de 25 a 50 pesetas” (SÁNCHEZ SÁNCHEZ: op. cit., pág. 1135).

⁵⁹ GUASP DELGADO: op. cit., pág. 766.

⁶⁰ SÁNCHEZ SÁNCHEZ: op. cit., pág. 1135.

⁶¹ La cuantía de la multa fue establecida en la reforma de 1952 y desde entonces sigue sin modificarse, por lo que resulta inaplicable.

indemnizarán los daños y perjuicios que se ocasionen. En lo demás serán aplicables las normas de los arts. 437 y siguientes.

1.2. NORMATIVA APLICABLE A LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN REALIZADOS POR UN ÓRGANO DISTINTO DEL QUE CONOCE DE LA CAUSA.

A) Actos de comunicación realizados por auxilio judicial.

Cuando el acto de comunicación se dirige a una persona que no reside dentro del territorio del órgano que tramita el proceso, es necesario —el llamado por la LEC— ‘auxilio judicial’: *“El auxilio judicial se prestará siempre que las actuaciones hayan de efectuarse fuera de la circunscripción del Juzgado o Tribunal o, dentro de ella, por uno distinto del que las hubiere dispuesto, así como también cuando el acto haya de realizarse fuera de la localidad en que el Juzgado tenga su sede, si hay causa que lo justifique”* (art. 285)⁶². Que los actos de comunicación con las partes y terceros puedan ser objeto de auxilio, como señala ORTELLS RAMOS, se deduce de la referencia expresa que a ellos se hace en el art. 277 LEC, según vimos⁶³.

⁶² La LOPJ se refiere a este tema con el nombre ‘cooperación jurisdiccional’, y así se titula el capítulo VII del Título III, del Libro III. Este capítulo está compuesto por los arts. 273-278, y el 274 dice así: *“Se recabará la cooperación judicial cuando debiere practicarse una diligencia fuera de la circunscripción del Juzgado o Tribunal que la hubiere ordenado o ésta fuere de la específica competencia de otro Juzgado”*.

⁶³ Al comentar el art. 277 LEC, ya hicimos una referencia al auxilio judicial, y a la reforma que de algunos de sus preceptos reguladores hizo la Ley 34/84. Si se quiere un comentario general sobre éstos, vid. ORTELLS RAMOS: *Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ley 34/1984 de 6 de agosto*, coordinados

El auxilio judicial, como dice DE LA OLIVA SANTOS⁶⁴, “proviene de un principio de orden, consistente en limitar la actividad de cada órgano jurisdiccional al ámbito espacial de su territorio e, incluso, al lugar en que tenga su sede”. La realización de la actuación que deba realizarse “se encargará al órgano del territorio o del lugar de que se trate. Habrá primero, por tanto, la resolución judicial oportuna acordando la actuación que se estime procedente, pero, además, deberá producirse un acto de comunicación al órgano jurisdiccional, distinto del que sigue el proceso, que haya de realizar aquélla”. Por tanto, al acto de comunicación que inicialmente se quiere realizar, y que tiene como destinatario a la parte procesal (la notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), se unirá un segundo acto de comunicación, que se denomina ‘exhorto’, y que se dirige al órgano que se encargará de realizar el primero.

Los exhortos de regulan en los arts. 287-296 LEC⁶⁵; y, aunque el objeto central de nuestro trabajo es el estudio de los actos de co-

por CORTÉS DOMÍNGUEZ, Editorial Tecnos, Madrid, 1985, págs. 164-200. El autor citado es el encargado del comentario de los artículos relativos al auxilio judicial. La cita a la que se refiere esta nota del texto principal es de la pág. 166.

⁶⁴ DE LA OLIVA SANTOS (con FERNÁNDEZ LÓPEZ): *Derecho Procesal Civil*. Tomo II, 4ª edición, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1995, pág. 163.

⁶⁵ Artículos que están dentro de la Sección 5ª, denominada “De los exhortos, oficios y mandamientos”, en el Título VI, del Libro I de la LEC. Si los exhortos se dirigen a los órganos jurisdiccionales de los que se requiere auxilio judicial, “se utilizará la forma de mandamiento para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier diligencia judicial, cuya ejecución corresponda a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de Buques, de ventas a plazos de

municación que se dirigen a las partes de un proceso, vemos conveniente hacer aquí una breve exposición sobre la regulación de los exhortos.

El contenido del exhorto se recoge en el art. 287⁶⁶; éste puede realizarse de dos maneras. La primera de ellas consiste en la remisión directa del órgano exhortante al órgano exhortado; éste último acusará recibo al recibirlo (art. 289) y, tras cumplimentarlo, lo devolverá también directamente al exhortante (art. 293). “Esta remisión directa se realizará, normalmente, mediante el servicio de correos”⁶⁷. *“En el caso de que la actuación requerida se considere de urgente práctica, podrá formularse la petición por telex, telégrafo, teléfono o por cualquier otro medio bajo la fe del Secretario, sin perjuicio de confirmarla en despacho ordinario que habrá de remitirse el mismo día o al siguiente”* (art. 288).

bienes muebles, Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa, Corredores de Comercio o Agentes de Juzgado o Tribunal” (art. 297 LEC). Y *“cuando los Jueces y Tribunales tengan que dirigirse a autoridades y funcionarios de otro orden usarán la forma de oficios o exposiciones, según el caso lo requiera”* (art. 298 LEC).

⁶⁶ Art. 287 LEC: *“El auxilio judicial entre órganos jurisdiccionales se efectuará únicamente por medio de exhorto dirigido al órgano que deba prestarlo y que contendrá:*

- 1º La designación del órgano jurisdiccional exhortante.*
- 2º La del órgano exhortado.*
- 3º Las actuaciones cuya práctica se interesa.*
- 4º El término o plazo en que habrán de practicarse las mismas”.*

⁶⁷ ORTELLS RAMOS: op. cit., pág. 175.

La segunda forma de practicar el exhorto es la denominada 'por conducto personal': en este caso, la parte interesada en el exhorto se hace cargo de hacerlo llegar al órgano exhortado (y, posteriormente, de devolverlo al exhortante), bien realizándolo ella directamente (art. 289), bien encargándoselo a una persona que designe bajo su responsabilidad y sin necesidad de poder (art. 291), a la que se le señalará "*plazo para su comparecencia ante el órgano exhortado, expresando si su incomparecencia determina o no la caducidad del exhorto*" (art.290). Además, el órgano exhortado puede relacionarse con la persona designada en los términos del art. 295.

Se realice de una o de otra manera, la parte que solicite el exhorto se hará cargo de los gastos que origine (art. 292). Y también en cualquier caso, la actuación que se solicite por exhorto deberá cumplirse en el plazo que en él se haya previsto (art. 296)⁶⁸.

⁶⁸ DE LA OLIVA SANTOS (op. cit., pág. 165) critica la falta de concreción, y por tanto de eficacia, de esta norma al preguntarse: "El art. 296 declara que '*el exhorto deberá* (*¿y cuál es la sanción por la infracción de tal deber? Antes aún: ¿se refiere esta norma sólo al deber del órgano exhortado o también de la persona portadora del exhorto, en su caso?*) *cumplimentarse en el tiempo previsto en el mismo. De no incurrir así, se recordará* (*¿por quién?*) *la urgencia del cumplimiento, de oficio o a instancia de la parte interesada*".

"*Si a pesar del recuerdo* (*¿por medio de nuevo exhorto? ¿qué forma adoptará ese 'recuerdo'? continuase la misma situación, el Juez o Tribunal que haya solicitado el auxilio lo pondrá en conocimiento* (*¿de oficio? harto improbable nos parece*) *del superior inmediato del que deba cumplimentarlo para que adopte las medidas pertinentes a fin de obtener el cumplimiento*".

B) Notificación de documentos judiciales en el extranjero.

En el mismo capítulo de la LEC relativo a los exhortos, en el art. 300, se señala que *"las diligencias judiciales que deban practicarse en el extranjero se cursarán en la forma que establezcan los tratados internacionales"*. Sobre esta tema, existe un Convenio de la Haya, de 15 de noviembre de 1965, sobre notificación en el extranjero de actas judiciales y extrajudiciales en asuntos civiles y mercantiles, del cual España es parte desde 1987⁶⁹. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que en el ámbito comunitario se ha aprobado recientemente, por Acto del Consejo, de 26 de mayo de 1997, un *Convenio* que coincide en su materia con el primero citado, al ser también *relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil*⁷⁰.

⁶⁹ Cfr. BOE de 25 de agosto de 1987. Este Convenio fue elaborado en el marco de la X Conferencia de Derecho Internacional Privado de la Haya (*vid.* actos y documentos de la decimoséptima sesión, 7 a 28 de octubre de 1964), y son parte de él multitud de países, entre ellos, los Estados miembros de la Unión Europea.

⁷⁰ Este convenio (publicado en el DOCE C 261, de 27 de agosto de 1997) ha sido aprobado en aplicación del título VI del Tratado de la Unión Europea y, en particular, la letra c) del apartado 2 de su artículo k.3, que dice: *"El Consejo podrá... sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 220 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, celebrar convenios recomendando su adopción a los respectivos Estados miembros según sus respectivas normas constitucionales. Salvo disposición en contrario establecida en estos convenios, las posibles medidas de aplicación de los mismos se aprobarán por mayoría de dos tercios de las Altas Partes Contratantes. Tales convenios podrán disponer que el Tribunal de Justicia será competente para interpretar las disposiciones de los mismos y dictar sentencia en los litigios relativos a su aplicación, de conformidad con las modalidades que puedan haber establecido"*.

Este último convenio será el aplicable para los actos de comunicación que hayan de realizarse en un país comunitario desde un proceso español, y a la inversa. Aunque, hay que señalar con GARCÍA GALLARDO y HERNÁNDEZ OBELART, que “el nuevo Convenio europeo en materia de cooperación judicial civil presenta numerosas similitudes con su antecesor el Convenio de la Haya de 1965, en el que se inspira (...)”⁷¹. Por esta razón, y por la cercanía del ámbito de aplicación, nos vamos a centrar en el estudio del más reciente⁷²,

Cuando se deba notificar (o citar, o emplazar, o requerir) a una persona que se encuentra en un Estado miembro de la UE, distinto

En relación con este último punto, se ha aprobado también, mediante Acto del Consejo de la misma fecha que el Convenio referido, un *Protocolo relativo a la interpretación, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil*.

⁷¹ Los autores citados realizan un análisis comparativo de ambos convenios, en GARCÍA GALLARDO y HERNÁNDEZ OBELART: “Notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en la Unión Europea”, en *La Ley*, nº 3, 1997, Madrid, págs. 1763-1765. Continúan diciendo: “(...) Y que aprovecha la experiencia adquirida en la aplicación de este último, para tratar de corregir algunas de sus deficiencias, introduciendo referencias novedosas (plazos, supuestos en los que las agencias del Estado de recepción deben comunicarse con la agencia de remisión, confidencialidad, lengua, competencia interpretativa del Tribunal de Justicia, etc.). Mejorando, en definitiva, el procedimiento de notificación y traslado establecido por el Convenio de la Haya” (pág. 1763).

⁷² Estudio que será somero, y limitado a exponer de forma resumida la regulación que se ofrece en el Convenio europeo, y esto por la relación que tiene esta materia con el objeto de nuestro trabajo. Sin embargo, en nuestra opinión, excedería del ámbito de éste realizar comentarios personales, que, en esta ocasión, vamos a omitir.

de aquél dónde pende el pleito, el Estado requeriente, a través de sus 'organismos transmisores' establecidos al efecto (art. 2.1), enviará el documento que deba ser notificado, al 'organismo receptor' del Estado requerido (art. 2.2), para que éste último realice el acto de comunicación⁷³. *"La transmisión de documentos, demandas, certificados, resguardos, fes públicas (sic) y de cualquier otro documento entre los organismos transmisores y los organismos receptores podrá realizarse por cualquier medio adecuado, siempre que el contenido del documento recibido sea fiel y conforme al del documento expedido y que todas las indicaciones que contengan sean legibles sin dificultad"* (art. 4.2)⁷⁴. El organismo receptor tiene un plazo de siete días para acusar recibo al transmisor por el medio más rápido (art. 6.1).

Respecto a la realización de la notificación, ésta se hará *"bien de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro requerido o bien según la forma particular solicitada por el organismo transmisor, siempre que ésta no sea incompatible con el Derecho interno de ese Estado miembro"* (art. 7.1). Además esa notificación

⁷³ A su vez, el art. 3 dispone que cada Estado miembro designará una 'entidad central', "a fin de que los organismos transmisores y los organismos receptores puedan resolver las dificultades que pudieran presentarse al aplicar el Convenio y que no pudieran resolverse mediante contactos directos entre ellos" (según el Informe explicativo del Convenio, aprobado por el Consejo el 26 de junio de 1997, y publicado también en DOCE C 261, de 27 de agosto de 1997).

⁷⁴ Además, el art. 4.3 dispone que el documento que deba transmitirse se acompañará de una solicitud según el formulario normalizado del Anexo del Convenio, y se cumplimentará en el idioma del Estado requerido.

se practicará en el plazo más breve posible, siempre que no supere un mes contado desde la recepción, y si esto sucede, se le debe comunicar al organismo transmisor (art. 7.2)⁷⁵. La fecha de notificación se contará según las normas internas del Estado requerido (art. 9.1)⁷⁶. Una vez que se realice la notificación, se expedirá un certificado normalizado que se remitirá al organismo transmisor (art. 10.1); este certificado puede acompañarse de una copia del documento notificado (suponemos que firmado por el destinatario), si la solicitud de notificación se realizó por duplicado (art. 4.5).

Respecto a otros medios de notificación, el Convenio dispone lo siguiente: se contempla la posibilidad de usar la vía diplomática o consular para casos excepcionales (art. 12)⁷⁷; así como la facultad de cada Estado “*de realizar directamente, por medio de sus agentes diplomáticos o consulares, sin coacción alguna, las notificaciones o traslados de documentos judiciales a las personas que residan en otro Estado miembro*” (art. 13); además, se deja libertad a los Estados para que notifiquen “*directamente por correo a las personas que*

⁷⁵ La negativa a aceptar el documento se regula en el art. 9 del Convenio.

⁷⁶ “*No obstante, cuando deba notificarse o trasladarse un documento dentro de un plazo determinado en el marco de un procedimiento que haya de incoarse o que esté pendiente en el Estado miembro de origen, la fecha que deberá tenerse en cuenta respecto del requirente (sic) será la establecida por el Derecho interno de ese Estado miembro*” (art. 9.2).

⁷⁷ En el Informe explicativo del Convenio se establece que “convendrá por tanto hacer uso de esta posibilidad únicamente en casos de dificultad extrema, como en los mencionados en la letra c) del art. 3, es decir, por ejemplo en circunstancias sociales o climáticas que imposibiliten todo envío de documentos de un Estado miembro a otro por otro medio”.

residan en otro Estado" (art. 14)⁷⁸; por último, cualquier persona interesada en una notificación puede solicitarla "*directamente por medio de los agentes judiciales, funcionarios u otras personas competentes del Estado miembro requerido*" (art. 15)⁷⁹.

Para terminar diremos que el art. 19 del reciente Convenio europeo recoge el sistema establecido por el Convenio de la Haya de 1965 (arts. 15 y 16) para la notificación de los escritos de demanda o documentos equivalentes⁸⁰.

⁷⁸ "Sin embargo, los Estados miembros pueden establecer condiciones para la notificación o traslado por correo de documentos para aportar garantías a los destinatarios que residan en su territorio. Por ejemplo, podrían exigir el envío por correo certificado (...). Recuérdese que el Convenio postal internacional, del que todos los Estados miembros son signatarios, prevé en particular la posibilidad de envíos postales certificados" (*Informe explicativo del Convenio*).

⁷⁹ En este sentido, el Informe explicativo del Convenio precisa que "no debe interpretarse que este artículo constituye una base jurídica encaminada a admitir la transmisión directa del documento de una parte interesada a un funcionario público. En efecto, ese tipo de transmisión directa sería únicamente regular si se conformase a la normativa del Estado miembro en que se desarrolla el procedimiento".

⁸⁰ El art. 19 tiene dos puntos, que el Informe explicativo del Convenio resume de la siguiente manera: "El punto 1 se refiere a los escritos de demanda o documentos equivalentes e impone al juez la suspensión del procedimiento hasta que tenga la certidumbre de que ha realizado la notificación o traslado del documento y que después el demandado ha dispuesto de un plazo suficiente para preparar su defensa. Se da, sin embargo, una posibilidad de no aplicar esta norma a los Estados miembros que deseen que sus jueces puedan dictar sentencia, una vez transcurrido un determinado plazo, si se cumplen determinadas condiciones".

"El punto 2 se refiere a los casos en que se haya dictado sentencia en ausencia del demandado y da a éste la posibilidad, en determinadas condiciones, de ser eximido de los efectos de la expiración del plazo de recurso. Para evitar una

inseguridad jurídica perjudicial a los intereses del demandante inicial, el Convenio establece que los Estados miembros podrán limitar mediante una declaración el plazo en que puede considerarse la solicitud de exención. Por último, las disposiciones del punto 2 no serán de aplicación a las sentencias relativas al estado ni a la capacidad de las personas”.

2.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS NOTIFICACIONES.

2.1.1. Ubicación de las notificaciones en la clasificación de actos procesales.

Una vez que hemos repasado la regulación existente sobre las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, es el momento de, por un lado, considerar cuál es la naturaleza jurídica de dichos actos procesales, es decir, qué les distingue de otros actos del proceso en general, y de otros actos de comunicación en particular; y, por otro lado, examinar cuáles son las diferencias específicas que existen entre las cuatro clases citadas.

Comencemos analizando dónde se pueden encuadrar las notificaciones dentro de las distintas clases de actos procesales. “Es casi universal el criterio de distinguir los actos procesales, ante todo, por su origen. Así, habría dos principales clases de actos: los del

tribunal y los de las partes”⁸¹. En cuanto a los primeros, DE LA OLIVA SANTOS dice que “los actos del órgano jurisdiccional —unipersonal o colegiado— son muy variados, tanto por la complejidad del propio órgano, como por la diversidad de finalidades *inmediatas* de los mismos. Cabe, en efecto, de una parte, distinguir entre actos del personal juzgador propiamente dicho (es decir, el juez o los magistrados), actos del Secretario judicial y actos de otros funcionarios que integran el órgano jurisdiccional: el Agente judicial, por ejemplo. De otra parte, hay *actos de comunicación* (con las partes o con otros órganos públicos, jurisdiccionales o no) y *actos de decisión*, amén de los llamados *actos reales*, que preparan la comunicación o la decisión o son consecuencia de ella (Gómez Orbaneja)”⁸². Por tanto,

⁸¹ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 119. En la opinión del autor citado, esta clasificación resulta incompleta: “la bipartición clásica debería convertirse, pues, al menos, en tripartición, comprensiva también de los actos de aquellos a quienes se ha llamado sujetos de la prueba. Estos actos merecen consideración separada de la actuación de las partes y de la del tribunal respecto de ellos, porque el Derecho los contempla a veces con independencia, regulándolos en su pura individualidad: v. gr.: en los artículos 650 y ss. (declaración testifical) o en el art. 627 LEC (dictamen de peritos)”.

⁸² DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 146. Este autor, respecto del otro gran grupo de actos procesales, los actos de las partes, propone lo siguiente: “Teniendo en cuenta, no el origen primordial de los actos, sino su *contenido*, resulta importante la distinción, en absoluto exclusiva del Derecho procesal, entre *declaraciones de conocimiento*, *declaraciones de voluntad* y *manifestaciones de voluntad*” (pág. 120). Al no referirse a los actos objeto de nuestro estudio, no nos detendremos a explicar esta distinción; únicamente queríamos citarla.

los actos de comunicación son una clase de actos del tribunal⁸³, vistos según su contenido o finalidad⁸⁴.

Por su parte —seguimos con DE LA OLIVA SANTOS—, “los actos de comunicación son actos del órgano jurisdiccional tradicionalmente diferenciados y clasificados según los distintos destinatarios de la comunicación: otros órganos jurisdiccionales, órganos públicos no jurisdiccionales, y partes litigantes y otros sujetos que hayan de actuar en el proceso (testigos, peritos y “terceros” en sentido amplio)”⁸⁵.

Así, según su destinatario, sabemos que los exhortos son los actos de comunicación que se dirigen a otros tribunales (art. 286 LEC y ss.), que los mandamientos, oficios y exposiciones van dirigidos a órganos públicos que no sean jurisdiccionales (arts. 297 y

⁸³ Las otras dos clases se refieren: los *actos de decisión*, como parece claro, a las resoluciones judiciales —providencias, autos y sentencias— y a las diligencias de ordenación; y los *actos reales*, a la dación de cuenta —en Juzgados— y al despacho ordinario —en órganos colegiados—, a las diligencias, anotaciones en Registros, etc.

⁸⁴ En relación con la función que vienen a desarrollar en el proceso, es también ya clásica la distinción de clases de actos procesales que realiza GUASP DELGADO (*Derecho Procesal Civil*, 4ª edición, actualizada por ARAGONESES ALONSO, Editorial Cívitas, Madrid, 1998, pág. 244-250). Este autor divide los actos procesales en: actos de iniciación procesal, actos de desarrollo y actos de terminación. Los segundos se pueden dividir en actos de instrucción procesal y actos de ordenación; y éstos últimos, a su vez, en actos de impulso, actos de dirección y actos de constancia. Los actos de comunicación se encontrarían dentro de la categoría ‘actos de ordenación’.

⁸⁵ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 162-163.

298), y que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos se caracterizan, precisamente, por tener como destinatarios a las partes procesales y a otros sujetos llamados a juicio.

Por tanto, podemos decir que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos se encuentran entre los actos procesales que proceden del órgano jurisdiccional, dentro de la categoría de los actos de comunicación, e individualizados, entre éstos últimos, por dirigirse a los particulares que han de intervenir en el proceso⁸⁶.

⁸⁶ Hemos dicho que, según una distinción clásica, los actos procesales se dividen en actos del órgano jurisdiccional y actos de la parte. Es curioso que, como pone de manifiesto ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, GOLDSCHMIDT en alguna de sus obras habló de que las notificaciones formaban “una tercera categoría de actuaciones procesales, junto a las de las partes y el juzgador”; basó esta afirmación en “la complejidad subjetiva de las notificaciones”, que le lleva “a diferenciar en ellas tres sujetos: impulsor, destinatario y funcionario encargado de practicarla”. El propio ALCALÁ-ZAMORA formuló reparos a este planteamiento, los cuales nos parecen acertados: “1º, que mediante él, la clasificación básica subjetiva se transforma en *mixta* (*subjetiva* en cuanto a la actividad de las partes y del juez; *objetiva* en orden a las notificaciones); 2º, que las notificaciones pertenecen en rigor a un género más amplio, el de las *comunicaciones* en el proceso, el cual reviste diversas combinaciones y se desenvuelve de muy diferentes maneras; y 3º, que puestos a *objetivar* la clasificación, otros actos (singularmente las peticiones, por el lado de las partes, y las resoluciones, por el del juez) poseen mejores título y mayor jerarquía que las notificaciones, actos auxiliares, al fin y al cabo” (“Los actos procesales en la doctrina de Goldschmidt”, en *Estudios de Teoría General e Historia del Proceso* (1945-1972), Tomo II, UNAM, México, 1974, pág. 77-78).

2.1.2. Consideración de la notificación como un género de actos de comunicación.

Al estudiar la regulación de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, hemos visto que estos actos de comunicación no sólo tienen en común el sujeto destinatario (esto es, que se dirijan de modo principal a las partes procesales), sino que también consisten en una misma actividad: en la comunicación de una resolución judicial; además, esta comunicación puede llevarse a cabo de modo parecido en los cuatro casos, aunque con especialidades, ya que tienen un núcleo de regulación común. Por eso, afirmamos con DE LA OLIVA SANTOS que “las notificaciones no son, en rigor, una especie de acto de comunicación, sino un género, en el que están comprendidos, como especies, las citaciones, los emplazamientos y los requerimientos”⁸⁷.

El problema está, como señala GÓMEZ ORBANEJA, en que “la LEC no emplea la palabra notificación en el sentido amplio que queda definido, sino como una especie, entre otras, del género. Pero las citaciones, emplazamientos y requerimientos son también notifi-

⁸⁷ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 167. Continúa la cita: “A este entendimiento es obligado llegar si se admite que... las citaciones, los emplazamientos y los requerimientos son siempre consecuencia de una resolución judicial. También así resulta perfectamente comprensible que la regulación legal de las notificaciones sea la normativa general aplicable a citaciones, emplazamientos y requerimientos, salvo las singularidades de estas tres especies (art. 270 LEC)”.

caciones. O sea que, en la terminología legal, 'notificación' es la notificación que no sea citación, emplazamiento o requerimiento"⁸⁸.

Sin embargo, aunque la regulación de la LEC esté pensando en la notificación en su sentido estricto, del art. 270 se deduce su carácter de género que engloba a citaciones, emplazamientos y requerimientos, al hacerles aplicables, aunque sea subsidiariamente, las normas de las notificaciones. Además, otro argumento legal para tal consideración, se ofrece en la LOPJ, ya que los arts. 270-272, como destaca PRADO ARDITTO, "hablan únicamente de las notificaciones, omitiendo los otros tres actos de comunicación: citaciones, emplazamientos y requerimientos. Creemos, sin embargo, que emplea aquí la Ley la palabra notificaciones, en sentido genérico, equivalente a actos de comunicación, que comprende no sólo las notificaciones en sentido estricto, sino también las citaciones, emplazamientos y requerimientos"⁸⁹.

Así, en la medida en que los cuatro actos de comunicación referidos tienen su origen en una resolución judicial que deben comunicar⁹⁰, se puede decir que quedan englobados en el género 'no-

⁸⁸ GÓMEZ ORBANEJA (con HERCE QUEMADA): *Derecho Procesal*, vol. I, *Derecho Procesal Civil*, Madrid, 1951, pág. 215.

⁸⁹ El propio capítulo de la LOPJ que agrupa esos artículos lleva el rótulo "De las notificaciones" sin más. Recordamos que es el capítulo VII, del Título III, del Libro III.

⁹⁰ En este sentido, sobre las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, SÁNCHEZ SÁNCHEZ llega a decir que "no son actos procesales in-

notificación⁹¹. Este género admite como especies las citaciones, emplazamientos y requerimientos, cuando la resolución que se ha de notificar contiene una 'intimación' para su destinatario. Es decir, como señala GUASP DELGADO, estos actos de comunicación "no se agotan en un simple dar a conocer sino que invitan o imponen una conducta: en la citación y emplazamiento se impone la carga de comparecer y así se hace constar en la cédula (nº 4 del art. 272 y art. 274); en el requerimiento se impone otro tipo de conducta y además se admite la posible contestación del requerido"⁹².

dependientes, sino derivados de una resolución judicial y destinados a provocar otro acto posterior" (op. cit., pág. 1109).

⁹¹ Otros autores, además de los ya citados, que se refieren a la notificación como un género de actos de comunicación, son: MONTERO AROCA (op. cit., pág. 4): "Tradicionalmente los actos de comunicación de los órganos jurisdiccionales hacia el exterior, es decir, respecto de las partes de un proceso o de las personas que deben realizar cualquier actividad en ese proceso, se denominan en general notificaciones, pero a continuación las leyes procesales les distinguen cuatro actos posibles atendiendo a lo que sea objeto de la comunicación: citación, emplazamiento, requerimiento y notificación en sentido estricto"; y RAMOS MÉNDEZ (*Sistema procesal español*, Bosch, Barcelona, 1997, pág. 380): "En general los actos de comunicación del tribunal a particulares reciben el nombre genérico de *notificaciones*. Por lo tanto, en sentido amplio, notificación es el acto por el que se pone en conocimiento de los interesados cualquier resolución del Tribunal. Sin embargo, nuestras leyes de enjuiciamiento utilizan el término en su sentido más restringido, pues distinguen *notificaciones*, *citaciones*, *emplazamientos*, *citaciones* y *requerimientos*, siendo estos tres últimos como una especie de aquéllas".

⁹² GUASP DELGADO: *Comentarios...*, pág. 749. Este autor opina: "Acto de comunicación, en sentido estricto, es solamente el que tiende a poner en conocimiento de alguien un dato determinado: en este sentido, nos encontramos tan sólo en este punto con la 'notificación': la *notificación* es, en efecto, el único y verdadero acto exclusivo de comunicación a particulares (...). Cuando se quiere invitar a un particular a realizar una determinada conducta más que de un acto de comunicación

Luego, lo que ocurre es que en las citaciones, emplazamientos y requerimientos, no sólo se notifica sin más la resolución que los acuerda, sino que, por así decirlo, se entra a examinar el contenido de esa resolución, y por lo específico de éste —que exige una actuación expresa del destinatario— se provocan también algunas especialidades en la forma de practicarse esa comunicación. Así, como vimos, las citaciones y los requerimientos se realizan, en lugar de entregando una copia de la resolución, extractando el contenido principal de esa resolución en una cédula (art. 271 LEC); o los requerimientos admiten la respuesta que diere el requerido (art. 276); y algunas citaciones y emplazamientos —las que conlleven la personación del destinatario— y todos los requerimientos se practican en forma personal (art. 261 IV).

Sin embargo, las consecuencias de desoír la conducta a la que se intima mediante esos tres actos de comunicación, es parecida a la que tiene lugar cuando no se aprovechan las oportunidades

debe hablarse de acto de *intimación*; ahora bien, como para realizar dicha imposición o intimación es preciso dar a conocer antes al destinatario la conducta que se le pide, el acto de intimación va unido a un acto de comunicación en sentido estricto y el derecho positivo engloba el conjunto dentro de la categoría de estos últimos actos, creando una *figura de actos de comunicación impuros o mixtos que pueden todavía subdistinguirse según el tipo de conducta que imponen o invitan a realizar*” (págs. 726-727).

A nuestro entender ese carácter ‘mixto’ de las citaciones, emplazamientos y requerimientos no hace que se salgan del género notificación, por las razones que vamos exponiendo en el texto principal. Sin embargo, debemos destacar que la consideración de GUASP sobre la naturaleza mixta del emplazamiento ha sido acogida, casi repitiendo sus mismos términos, en algunas sentencias del TS, como las de 13.VII.95 (RJ 1995\6005) y 3.IV.87 (RJ 1987\2486).

o derechos procesales que se comunican a través de las notificaciones en sentido estricto (por ejemplo, la notificación del auto que abre el periodo de proposición de prueba, del art. 551 LEC). En los cuatro casos, estamos ante el concepto de carga procesal, es decir, el destinatario acarreará con las consecuencias desfavorables de su omisión. Si el citado no comparece a una vista, perderá las oportunidades que de ahí se deriven; si el emplazado no se persona en las actuaciones, será declarado en rebeldía; si el requerido de pago no hace caso, se procederá al embargo de sus bienes, si el notificado del 551 no actúa, se quedará sin posibilidades de prueba.

Además, en cuanto a las especialidades en el modo de practicarse las tres clases de actos que imponen una conducta, no hay ningún inconveniente en que aquéllos se lleven a cabo mediante la entrega de la copia de la resolución judicial que acuerda la intimación; ya que esa resolución lógicamente contiene y detalla cuál es la actuación que se exige al destinatario. Es decir, se podrían realizar al modo de las notificaciones (art. 262 LEC). Esto se prevé expresamente en el art. 275 para los requerimientos. Respecto a los otros dos actos, cuando de ellos se deriva la personación del demandado, en la práctica, suele transmitirse la copia de la resolución que admite a trámite la demanda y que acuerda el emplazamiento (o la citación). Pensamos que extender una cédula sólo tiene interés práctico cuando se realiza la citación por telegrama, ya que interesa reducir al máximo las palabras que se emplean; pero en los demás casos, nos parece un trabajo reiterativo y superfluo, ya que si se envía o se en-

trega una copia de la resolución, ésta tendrá todos los datos que el destinatario necesita y que la ley exige en los arts. 272 y 274.

Por la última razón, algunos autores han propuesto, incluso, una unificación terminológica (que todos los actos de comunicación dirigidos a las partes se denominen 'notificaciones'), cosa que no nos parece muy acertada, ya que con cada uno de los cuatro términos se hace referencia a un acto de comunicación específico, con una finalidad distinta. Siendo esos términos de amplia tradición y, por tanto, orientadores de la conducta que debe seguir su destinatario, deben conservarse para diferenciar el matiz propio de la especie que designan; especies que, lógicamente, se agrupan en un género común, el género 'notificaciones'⁹³.

En resumen, según su finalidad, las notificaciones se clasifican, como dice DE LA OLIVA SANTOS, en las siguientes: "Las notificaciones pueden tener como finalidad la simple comunicación de una resolución judicial o secretarial. En tal caso, se llamarán, sin más o a secas, notificaciones. Pero, con frecuencia, su finalidad (y la

⁹³ COMELLAS SALMERÓN ("Ideas básicas para el estudio de los actos de comunicación en el proceso", en *Revista de Derecho Procesal*, Madrid, 1968, págs. 943-944) habla de algunos autores que se pronuncian a favor de la unificación terminológica, como PRIETO-CASTRO, pero concluye: "Esta plausible aspiración de la doctrina, encaminada a lograr una simplificación en la nomenclatura de los actos de comunicación, encuadrándolos en una denominación común, en modo alguno puede implicar el que haya de prescindirse de la designación de algunos actos, de arraigado uso forense y que deben su nombre a la finalidad que en cada uno de ellos se persigue. Una denominación genérica les haría perder su caracterización específica".

de la propia resolución notificada, bien de forma directa, bien como efecto de la parte principal del contenido de la resolución), puede ser 1º) señalar lugar, día y hora para comparecer el destinatario (por sí mismo o por representante) ante el tribunal, a algún objeto que se le señale (*citación*); 2º) fijar al destinatario un periodo de tiempo para poder realizar una actuación jurídica (*emplazamiento*) y 3º) conminar, intimar o compeler formalmente al notificado a que realice o se abstenga de realizar una determinada conducta (*requerimiento*)”⁹⁴.

2.1.3. Características de la notificación en general.

Queda sentado que la notificación, en propiedad, es un género de la comunicación procesal, por el que se pone en conocimiento de los sujetos llamados a intervenir en el juicio las resoluciones que dicte el órgano jurisdiccional⁹⁵. Aunque, es posible referirse a las notificaciones, aludiendo a su sentido específico, cuando, por oposición a las otras tres especies, la resolución judicial que se notifica no conlleva una intimación a su destinatario (ni cita, ni emplaza, ni re-

⁹⁴ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 171.

⁹⁵ En expresión de DE LA OLIVA SANTOS (op. cit., pág. 167), “*Notificaciones* son los actos por los que se comunica una resolución judicial (providencia, auto o sentencia) o una diligencia de ordenación a los que en el juicio sean parte (pero, de ordinario, no a las personas de las partes, sino a sus representantes) o a las personas a las que la resolución se refiera o afecte (art. 269 LEC y art. 270 LOPJ)”.

quiere)⁹⁶. Veamos ahora cuáles son las características que definen las notificaciones como actos de comunicación procesal.

En cuanto a los sujetos que intervienen en ellas, ya se ha dicho (y se desarrollará con más extensión)⁹⁷, que son *actos del órgano jurisdiccional que se dirigen a las partes procesales y a los llamados sujetos de la prueba*. La competencia para la práctica de las mismas se otorga al Secretario judicial (art. 279.3 LOPJ), aunque intervienen en su realización material otros funcionarios judiciales (como los Agentes) o no judiciales (como los del servicio de correos) e, incluso, personal no integrado en la Administración de Justicia, aunque muy relacionado con ella (como el del servicio del Colegio de Procuradores). Por otra parte, los destinatarios de las notificaciones serán principalmente las partes del proceso o sus representantes en él; de modo secundario (por el menor número de notificaciones), se dirigirán a los testigos, peritos y demás personas que deban intervenir en el proceso (sobre todo, en la fase probatoria); excepcionalmente, puede notificarse la pendencia del proceso a quienes se refiera la resolución que se notifique o pueda deparar perjuicio. Además de estos destinatarios, la ley permite que otros sujetos reci-

⁹⁶ SÁNCHEZ SÁNCHEZ (op. cit., pág. 1109-1110): "El término 'notificación' se utiliza, en ocasiones, con un carácter genérico, para expresar cualquier acto de comunicación, pero, en un sentido más restringido, se usa para designar el acto de hacer saber a una persona, física o jurídica, algo que ha ordenado un Juzgado o Tribunal (por medio de una diligencia de ordenación, una providencia, un auto o una sentencia) o la propia resolución".

⁹⁷ Todo lo que apuntamos en este párrafo, se estudiará detenidamente en el epígrafe dedicado a los sujetos de las notificaciones.

ban las notificaciones en ausencia de aquéllos: serán los receptores subsidiarios del art. 268 LEC.

Otra característica es, como dice GUASP DELGADO, que “en nuestro sistema procesal, *la notificación se produce de modo oficial y sin necesidad de que la parte, una vez dictada la resolución o realizado el acto que ha de comunicarse, solicite del Secretario tal notificación*”; lo cual, “constituye una excepción a los poderes dispositivos de las partes, tan amplios dentro de nuestro proceso civil: constituye, pues, un acierto importante el que no pese sobre las partes, en nuestro régimen procesal actual y en términos generales, la carga de la notificación”⁹⁸. En otros países, efectivamente, rige como sistema de conocimiento de los actos procesales el de la ‘carga de la notificación’, definida por GELSI BIDART como: “conocimiento por iniciativa de la parte en oportunidad prefijada (carga de comparecer a notificarse) y sanción de reputarse notificado en la oficina, para la generalidad de las providencias”⁹⁹.

⁹⁸ GUASP DELGADO: op. cit., pág. 731. En el mismo sentido, GÓMEZ-ORBANEJA (op. cit., pág. 216): “La notificación es siempre, en el sistema de la LEC, acto del órgano jurisdiccional, y no necesita petición de parte. Incluso cuando lo notificado es una petición de parte (por ejemplo, la demanda), el que la hace no pide (o no necesita pedir) que se notifique).

⁹⁹ GELSI BIDART: “El conocimiento de los actos procesales por las partes y el principio de que las partes están a derecho”, en *Revista de Derecho Procesal*, Madrid, 1968, pág. 463. Este autor resume las diferentes orientaciones en relación con el conocimiento de los actos procesales por las partes, en las siguientes:

“a) ‘Las partes están a derecho’ una vez constituido el proceso en forma tripartita mediante la constitución en parte del demandado (citación para contestar o emplazamiento). Las partes tienen acceso informal y constante al expe-

La notificación es un acto complejo, consistente, por esencia, en una acción. El término 'notificación' hace referencia a una actividad, a una acción: la acción de comunicar una resolución judicial; la cual está formada por una cadena de actos de los cuales el más característico es la entrega (y lectura) de una copia de la resolución que se notifica (o de una cédula) a su destinatario (o receptor subsidiario). Así, en la realización de una notificación concreta se suceden distintos actos escritos y actividades: una vez dictada la resolución a notificar, el Secretario judicial ordena su notificación mediante un acto escrito; después, se suceden una serie de actividades materiales tendentes a entregar o a hacer llegar la copia de esa resolución a quien corresponda; siempre, como resultado de esa entrega, se deriva un escrito firmado por el receptor que acredita su recepción; finalmente, ese acto escrito se devolverá al órgano que mandó la notificación para que se una a los autos. Con la palabra 'notificación' normalmente se quiere designar, a la vez, toda esa cadena de actos, sin individualizar ninguno concreto, por lo que la notificación

diente; les corresponde la responsabilidad de adoptar la iniciativa de tal conocimiento; no se requiere notificación formal ni oportunidad especial para lograrla.

b) Las partes han de recibir 'comunicación oficial' de cada acto procesal de su contraria o del Tribunal.

c) Las partes han de tener 'oportunidad prefijada para obtener conocimiento oficial' de cada acto del proceso, siendo de responsabilidad (carga procesal) el que efectivamente lo alcancen" (pág. 458).

es, en esencia, una acción y una acción compleja, que siempre debe incluir la entrega de una resolución a su destinatario¹⁰⁰.

Y si la acción más característica de ese acto complejo llamado notificación es la entrega de la copia (o cédula) a quien se dirija, el acto escrito más relevante es, precisamente, el que acredita (o documenta, si es una diligencia) esa entrega y recepción. Como esto siempre ocurre (que se exija un escrito firmado quien entrega la copia y por quien la recibe), cualquiera que sea la forma en que se notifique, en ocasiones, con el término 'notificación' se está haciendo referencia al documento escrito, a la diligencia, como en el caso del

¹⁰⁰ Esa entrega puede realizarse de distintas formas, como estudiaremos en el epígrafe siguiente, pero en todas ellas se sucede esa cadena de actos a la que nos hemos referido. La copia de la resolución (o la cédula) puede hacerse llegar a través del llamado 'Salón de Procuradores' o del servicio de correos, o puede realizarse en el domicilio del destinatario o, como último remedio, puede insertarse en un periódico oficial para que conste a efectos formales. Siempre habrá un conjunto de actividades materiales y de actos escritos. Entre las primeras, destaca la recepción de la copia; y entre los segundos, el escrito que acredita esa recepción. Obsérvese que digo 'escrito' y no 'diligencia', porque lo que siempre habrá (debe haberlo) será *un escrito que contenga la firma de quien haya recibido el acto*; y sólo estaremos ante una diligencia, cuando quien lo haya entregado materialmente sea el Secretario o el Oficial habilitado, que darán fe pública de la recepción y de sus circunstancias. En otro caso, el escrito puede ser variado: un 'recibí' del procurador (que recoge la copia en el salón de notificaciones antedicho), un acuse de recibo (firmado por el receptor y devuelto por Correos), una copia de la resolución con la firma del destinatario (que puede haber sido entregada por el Agente judicial), o, por último, un ejemplar del boletín oficial que publica la copia (que será el único sin firma —lógicamente— del destinatario: por eso es una ficción jurídica).

art. 263¹⁰¹. Sin embargo, *la notificación es, en sí misma, algo distinto del acto escrito que acredita o documenta su materialización.*

Los requisitos de la notificación en cuanto acto procesal, *requisitos de tiempo, lugar y forma*, ya se han expuesto al estudiar la regulación legal. Recordamos que las notificaciones se realizarán — en nuestra opinión, se les dará curso— en el mismo día o al siguiente del que se dicte la resolución judicial (siendo extensible a tres días en el caso de las sentencias). Podrán efectuarse, o bien en la Secretaría del tribunal (si allí comparecen los interesados o sus representantes procesales), o en el salón de notificaciones del Colegio de Procuradores (en los lugares dónde esté instaurado), o bien en el domicilio del destinatario (al que acudirá un funcionario judicial, o del servicio de Correos, según los casos). Y respecto a los requisitos de forma, como los principales de carácter general ya se han dicho y los específicos de cada forma notificatoria se verán cuando éstas se estudien, podemos referirnos, por último, a un requisito, todavía no comentado, que la LOPJ hace incluir en las notificaciones: la instrucción de los recursos del art. 248.4.

El precepto señalado exige que, al notificar una resolución judicial, *“se indicará si la misma es o no firme y, en su caso, los recur-*

¹⁰¹ Recordamos que en este precepto se dice que *“las notificaciones se firmarán por el actuario y por la persona a quien se hiciesen”*. Como dijimos, no es la ‘notificación’ lo que se firma, ya que al ser una actividad no es susceptible de ser firmada, sino la diligencia acreditativa de la entrega o una copia de la resolución que también sirva como ‘recibí’.

sos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello". Este artículo supuso una novedad en la legislación procesal, ya que no existía —ni existe— un precepto de este orden en la LEC. Parece tener su precedente más directo en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, en cuyo artículo 79 se establece la obligación de que la resolución administrativa indicará si pone a fin a la vía administrativa y los recursos que, en su caso, procedan¹⁰². Sin embargo, nuestra LOPJ no habla de que se indiquen los recursos en la resolución judicial, sino "*al notificarse la resolución a las partes*". No sabemos si esta era la intención del Legislador, visto el precedente, y por el hecho de que este precepto se ubica en

¹⁰² Aunque, según LÓPEZ CUMBRE y NOGUEIRA GUASTAVINO, la llamada 'instrucción de los recursos' goza de cierta tradición en las leyes laborales: "Desde que la Ley de Tribunales Industriales de 1912 (Ley de 23 de julio de 1912) recogiera la obligación del juzgador de advertir a las partes de los recursos que contra la sentencia dictada podían interponerse y del plazo para los mismos, se introdujo en la normativa procesal laboral española lo que ya la doctrina alemana había calificado como 'instrucción sobre los recursos'. *Vid.*, en este sentido, GARCÍA DE HARO, *La instrucción sobre recursos en la Ley de Procedimiento Laboral*, RPS, 1962, núm. 54.

Tiempo lejano aquel 1912 y vieja norma no por ello caduca. Todas las posteriores regulaciones de procedimiento laboral han ido recogiendo bajo fórmulas muy similares este mismo imperativo (en general, Decreto de 13 de mayo de 1983, Ley de 17 de octubre de 1940, Decreto de 11 de julio de 1941, Ley de 22 de diciembre de 1949 y las leyes sucesivas de 1958, 1963, 1966, 1973, 1980)". Actualmente, esa obligación viene recogida en el art. 100 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, que sigue estableciendo esa obligación de instruir sobre los recursos referida únicamente a la notificación de la sentencia. Si se quiere un comentario más amplio sobre este tema en el ámbito laboral, *vid.* el artículo de las autoras citadas ("La omisión de advertencia de recurso en las sentencias dictadas en suplicación de los Tribunales Superiores de Justicia", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 59, Editorial Cívitas, Madrid, 1993, págs. 375-396. La cita del párrafo precedente es de la pág. 375.

el capítulo “De las resoluciones judiciales”, y no en el de las notificaciones; pero lo que es seguro es que, hoy por hoy, dónde se realiza esa instrucción sobre los recursos es en la notificación, y no en la resolución, como repetidamente ha declarado el TC¹⁰³.

Además, ha sido criticada su oportunidad en el proceso civil, ya que en este ámbito lo más frecuente sea que intervengan Abogado y Procurador, por lo que PRADO ARDITTO¹⁰⁴ considera que “no sólo parece innecesaria esta instrucción sobre los recursos, sino que puede resultar incluso ofensiva para dichos profesionales”. Este autor cree que “hubiera sido más correcto limitar este deber de información al supuesto en el que el destinatario de la notificación no estuviera representado por Procurador ni asistido de Abogado.

Respecto a la eficacia de la indicación referida, el TC ha expresado que la inadvertencia de los recursos no es vinculante para

¹⁰³ Sobre este punto el TC ha manifestado que “la indicación de recursos, plazos y ante quién hay que formularlos corresponde, como señala el art. 248.4 LOPJ, a la notificación, en este caso a la cédula y así se afirma en la diligencia haberlo hecho” (STC 155/1989 de 5 de octubre); y en otro lugar: “la indicación de recursos, preceptiva según el art. 248.4 de la LOPJ, no constituye una parte del contenido decisorio de la resolución notificada, sino una información al interesado quien lógicamente no está obligado a seguirla si entiende que existe otro recurso procedente; ocurre, además, que dicha indicación no constituye en la Ley ni siquiera una información del Juez o Tribunal, sino una indicación que debe hacerse *‘al notificarse la resolución’* lo cual reduce obviamente su valor legal en cuanto la desvincula de la resolución notificada y en consecuencia obliga a considerarla así aunque se haya expresado como un apéndice de la resolución dirigido al agente notificador” (STC155/1991 de 10 de julio).

¹⁰⁴PRADO ARDITTO: op. cit., pág. 91.

las partes procesales ni tiene relevancia constitucional, a los efectos del art. 24.1 CE, salvo que el Juez o Tribunal niegue la posibilidad del recurso legalmente establecido sin justificación razonable, pero no cuando pese a la omisión no se vio impedida la parte de la utilización de los recursos pertinentes¹⁰⁵. En la práctica lo que sucede, en ocasiones frecuentes, es que se utiliza una fórmula genérica para todas las notificaciones: “instruyendo a la parte del contenido del artículo 248 LOPJ...”, o similar; que no es sino un formalismo para salvar el cumplimiento del precepto legal, de cara a evitar responsabilidades; pero no se informa en cada caso del contenido de esa fórmula.

Y en relación con las consecuencias del incumplimiento del 248.4, habrá que tener en cuenta distintas circunstancias, para ver su alcance, como son: si hay omisión o mención equivocada de los recursos oportunos, si la parte está asistida de letrado o no, la claridad o ambigüedad de la ley en el supuesto concreto, etcétera¹⁰⁶.

¹⁰⁵ SSTC 146/1988 de 14 de julio, 36/1989 de 14 de febrero, y 187/1989 de 13 de noviembre. A su vez, esta doctrina ha sido acogida por el TS, por ejemplo en las sentencias: 7.VI.93 (RJ 1993\4485), 21.VI.94 (RJ 1994\1105) y 18.XI.96 (RJ 1996\8213). Sin embargo, existe algún ejemplo aislado en el que la falta de indicación del órgano ante quien debe interponerse el recurso causó indefensión a la parte; pero fue por la coyuntura legislativa, ya que existían dudas razonables para el que recurrió sobre la Audiencia que era competente, por la cercanía del hecho con el cambio introducido en la Ley de Demarcación y Planta Judicial (STS 26.XI.92, RJ 1992\9592).

¹⁰⁶ La STC 267/1994 de 3 de octubre es expresiva al respecto: “Por ello, siendo la ‘instrucción sobre recursos’ una institución conforme con los principios que inspiran el art. 24.1 CE, no siempre el incumplimiento o deficiente realización de la

2.2. CITACIONES, EMPLAZAMIENTOS Y REQUERIMIENTOS COMO *SPECIES* DEL GÉNERO NOTIFICACIÓN.

2.2.1. Diferencias entre las citaciones y los emplazamientos.

Vistas las características que definen las notificaciones en general, toca referirse a las clases (o especies) de aquéllas denominadas citaciones o emplazamientos. No se trata, en este apartado, de hablar del régimen legal de unas y otros, puesto que ya se hizo con carácter general en el epígrafe referente a la regulación, y se abundará al tratar de las distintas formas de practicar las notificaciones; el objeto de estas líneas es mostrar las diferencias que, como especies diversas, tienen entre sí las citaciones y los emplazamientos.

indicación prevista en el art. 248.4 LOPJ tendrá relevancia constitucional, y es preciso distinguir entre omisión de indicación y la mención equivocada, e incluso entre aquellos supuestos en que la parte está asistida de Letrado y aquellos otros en los que no cuenta con dicha asistencia (STC 36/1989). Así, mientras la equivocada instrucción de recursos es susceptible de provocar un error excusable en el litigante sobre el régimen de recursos aplicables que le conduzca a adoptar una postura procesalmente incorrecta y que debe ser ponderada de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el caso, singularmente, en atención a si se estaba o no asistido de Letrado o a la mayor o menor claridad o ambigüedad de los textos legales, para evitar que los errores de los órganos judiciales puedan producir efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano, la omisión del régimen de recursos procedentes contra la resolución notificada, al ser fácilmente detectable, debe producir normalmente la puesta en marcha de los mecanismos jurídicos ordinarios para que sea suplida por la propia diligencia procesal de la parte, especialmente si cuanta con la asistencia de Letrado (SSTC 70/1984, 172/1985, 145/1986, 107/1987 y 376/1993)".

Las clases de notificaciones se clasifican, dijimos, según el contenido de la resolución judicial que se comunica en toda notificación. Si la resolución judicial contiene una convocatoria a una de las partes para que comparezca en el Juzgado, en día y hora determinados, estaremos ante una citación. Si lo que persigue la resolución que se notifica es que se persone en las actuaciones, dentro del plazo que se otorgue, la persona a la que va dirigida, nos encontraremos ante un emplazamiento. Así, tanto la citación como el emplazamiento pretenden la comparecencia de su destinatario, pero una, en fecha determinada, y otro, en un plazo de varios días. Esta distinción tiene su reflejo formal en las cédulas de citación (art. 272 LEC) y de emplazamiento (art. 274 LEC), que se diferencian sólo en ese punto.

Sin embargo, pensamos que no es el elemento temporal de la convocatoria lo único que distingue las citaciones de los emplazamientos. Creemos que lo principal del emplazamiento es que siempre tiende a provocar la personación del demandado en las actuaciones: su objeto es otorgar un plazo para que el destinatario se persone (como en el art. 525 LEC), o para que se persone y a la vez conteste a la demanda (art. 681 LEC)¹⁰⁷. Es cierto que el emplazamiento inicial (el que da noticia de la demanda) no es el único en el

¹⁰⁷Los artículos 525 LEC y ss. se encargan del emplazamiento en el procedimiento de mayor cuantía y los artículos 681 LEC y ss. en el de menor cuantía. La diferencia de tratamiento procesal apuntada tiene su explicación, según la STS 13.V.88 (RJ 1988\4091), en el derecho histórico, que diferencia entre "*vocatio in ius*" (llamada al proceso y, una vez comparecido, entrega de la demanda), y "*editio actionis*" (con la citación se da traslado de la demanda).

proceso, también hay emplazamiento si se apela (art. 387 LEC) o en los casos en que se interponga una declinatoria (art. 92 LEC), por ejemplo. Pero, en todos estos casos, del emplazamiento siempre depende la personación del destinatario ante un órgano jurisdiccional. Precisamente, eso es lo que quiere decir 'personarse', constituirse como parte en un procedimiento ante un tribunal¹⁰⁸.

Por tanto, en sentido estricto, 'personarse' es algo esencialmente distinto de 'comparecer', ya que lo segundo indica más bien la acción de presentarse ante el ante el Juez y el Secretario judicial (o sólo ante el Secretario), para la realización de un acto procesal, que puede ser muy variado, y de cuyo contenido se levanta una acta de comparecencia¹⁰⁹.

El problema está en que, con frecuencia, la LEC emplea los términos 'personarse' y 'comparecer' de modo indistinto, sin la precisión de significado apuntada. Algo más cuidadosa es la ley, en re-

¹⁰⁸ La personación de la parte en un procedimiento puede realizarse en cualquier momento del pleito; si no se persona en el plazo que se le indica en el emplazamiento inicial, cuando lo haga, no se retrotraerán las actuaciones: se le darán las oportunidades procesales, en relación con la fase en que se encuentre el juicio. No se puede contestar a la demanda, ni realizar ninguna actuación procesal, si no ha tenido lugar antes la personación (constitución como parte). La personación se realiza con un escrito con los requisitos que indique la regulación de cada procedimiento.

¹⁰⁹ Ejemplos de estas 'comparecencias' pueden ser: la comparecencia previa en el procedimiento de menor cuantía (art. 691 LEC); la de fijación de cantidad, en ejecución de sentencia (art. 940 LEC); la relativa a las subastas (art. 1499.3º LEC); las de formación del inventario, en las testamentarias; o aquellas en las que se practica la prueba de confesión o la testifical, etc.

lación con las palabras 'personación' y 'comparecencia'. Sin embargo, entre ambas, como hemos dicho, hay una diferencia de concepto, y no sólo de concepto, también en relación con el acto de comunicación por el que han de realizarse. Se podría decir que el emplazamiento siempre pretende la 'personación' del destinatario de la notificación, y la citación ordinariamente lo que busca es su 'comparecencia'; aunque, hay citaciones que también buscan la personación del demandado, por ser la primera comunicación judicial que tiene una persona de la existencia de un proceso contra él, como la citación al juicio verbal. Pero, normalmente, hay que unir el concepto de personación al de emplazamiento, y el de comparecencia al de citación.

Además, la consideración anterior tiene consecuencias prácticas, ya que, por un lado, si de la citación o del emplazamiento depende la personación del demandado, el acto de comunicación se realizará en forma personal (art. 261 IV). Por otro lado, aunque la resolución que se notifique conceda un plazo para realizar una actuación determinada (como, por ejemplo, el auto del art. 551 LEC que otorga un plazo para proponer prueba), en estos casos, al no estar en juego la personación del destinatario, el acto de comunicación se realizará en la forma que corresponda a las notificaciones en sentido estricto, y no, en el modo previsto para los emplazamientos¹¹⁰.

¹¹⁰ Como dice ORTELLS RAMOS, "es verdad que se comunican a las partes resoluciones que conceden plazos para realizar actividades procesales distintas a la

Otra diferencia que podría aducirse, entre los emplazamientos y las citaciones, es la relativa a la forma material de practicarse. Vimos que el artículo 271.1 LEC establece que *“las citaciones y los emplazamientos de los que sean, o deban ser, parte en el juicio, se harán por cédula, que será entregada al que deba ser citado, en lugar de la copia de la providencia, haciéndolo constar así en la diligencia”*. Como hemos dicho, en la práctica, esto sucede en las citaciones, pero, en los emplazamientos, es frecuente que sí se envíe la copia de la providencia que admite la demanda del actor y emplaza al demandado para que se persone (y, en su caso, también conteste a la demanda). En las citaciones se enviará la cédula del artículo 272 LEC; y en los emplazamientos se enviará la copia de la resolución, la cual contiene siempre toda la información que el artículo 274 LEC exige para la cédula de los emplazamientos). Otra cosa distinta es que cuando se vaya a emplazar al demandado no se le encuentre en su domicilio y se le haya de notificar el emplazamiento por cédula; pero, en este caso, será la cédula de las notificaciones del artículo 267 LEC, la cual, como también dijimos, hace las veces, más bien, de diligencia acreditativa de la comunicación¹¹¹.

personación (por ejemplo, arts. 530, 683 II LEC, las que abren plazos para proponer o practicar prueba), pero éstas no son emplazamientos en el sentido de la LEC, sino notificaciones en sentido estricto” (*Derecho Jurisdiccional*. Tomo I. Parte General, Editorial Tirant lo blanch, Valencia, 1997, pág. 403).

¹¹¹Con esta precisión insistimos de nuevo en los dos sentidos del término “cédula” empleados en la ley; por un lado, está la cédula como extracto de la información que contiene la resolución que manda una citación o un emplazamiento, la cual se entrega al notificado, en lugar de la propia resolución (cédula de citación: art.

2.2.2. Especialidad de los requerimientos.

Según GUASP DELGADO, “el requerimiento es, como ya se dijo, un acto compuesto por una comunicación o notificación y una intimación, en lo que coincide con el emplazamiento y la citación. Pero lo que le diferencia de ambos y constituye, en consecuencia, su nota característica es que dicha intimación supone la imposición al requerido de una conducta cualquiera distinta de la comparecencia ante el órgano jurisdiccional; esta delimitación simplemente negativa acaso parezca insuficiente pero dentro del sistema de la ley es imposible precisarla más porque cualquier tipo de conducta que puede ordenar el Juez puede ser asimismo objeto de un requerimiento: lo mismo actos positivos, p. e. requerimiento de pago (art. 1442) que los negativos u omisiones: requerimiento para que el perturbador de la posesión se abstenga de cometer tales actos (art. 1658)”¹¹². Otros ejemplos de requerimientos son: de exhibición de documentos, de nombramiento de peritos, etc. Además, éstos pueden tener lugar, tanto en los procesos declarativos (especialmente en la fase probatoria), como en los de ejecución (que son los más frecuentes).

272, o de emplazamiento: art. 274); por otro lado, tenemos la cédula como diligencia acreditativa de la notificación practicada a una persona distinta del destinatario, la cual se firma por el Oficial que la realice y por el receptor de la misma (cédula de notificación: art. 267). Sobre la inconveniencia de llamar cédula a las dos realidades apuntadas, *vid.* GUASP DELGADO: op. cit., pág. 751.

¹¹² GUASP DELGADO: op. cit., pág. 757. En el mismo sentido, MONTERO AROCA: op. cit., pág. 4.

El requerimiento tiene un matiz coercitivo, ya que exige de modo imperativo la realización de una conducta. Si no se hiciera caso a lo requerido, la consecuencia más normal será perder las oportunidades procesales que se deriven de la conducta exigida o, en negativo, cargar con el perjuicio a que haya lugar en derecho, que variará según cada caso. Por tanto, como el que sale perdiendo es el destinatario que no hace caso, en la práctica, suelen tener un resultado positivo. Son infrecuentes los casos, en el proceso civil, en el que se fuerza la realización del requerimiento¹¹³.

El régimen legal de los requerimientos ya quedó apuntado en la sede oportuna¹¹⁴. Sin embargo, en la medida en que puede afectar a la naturaleza de estos actos de comunicación, vemos oportuno hacer aquí una precisión de GUASP DELGADO en relación con la posibilidad de respuesta a los requerimientos. Sabemos que el art. 276 LEC establece: *“En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que se hubiere mandado en la providencia.*

¹¹³Menos frecuente es el caso —que también se da en la práctica— de levantar testimonio de la negativa al requerimiento, e interponer una denuncia penal por desobediencia a la autoridad.

¹¹⁴ En el epígrafe relativo a la regulación legal, al comentar el art. 275 LEC, se dijo en resumen: que los requerimientos se realizarán notificando la resolución en que se manden; que la diligencia acreditará el hecho del requerimiento junto al de la notificación; que la forma oportuna es la personal, al ser precisa la fe pública para consignar las respuestas que se admiten, y que cabe también, por ser una modalidad de la forma personal, el requerimiento por cédula.

En los requerimientos se admitirá la respuesta que diere el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia”.

Pues bien, el autor citado considera que la aceptación de respuesta en los actos de comunicación puede desvirtuar su naturaleza: “El admitir que en el mismo acto el destinatario haga algo más que darse por enterado de la comunicación, es decir, el admitir que conteste o exponga algún dato o que reclame contra la resolución, y el dar validez jurídica a esa actividad, desnaturalizaría la esencia del acto practicado, reuniendo a la comunicación o intimación otro acto de parte, p. e. una alegación que no tiene por qué verificarse en tal momento”. Por tanto, no sólo piensa “que la excepción incluida ‘a no ser que se hubiere mandado en la providencia’ no parece tener un fundamento sólido”, y que si así se pide “la notificación, citación o emplazamiento queda convertida o ampliada a un verdadero requerimiento”, sino que, además, “con respecto a dichos requerimientos... debe interpretarse restrictivamente el permiso legal, no entendiendo por requerido sino al destinatario del acto, no a su posible receptor, lo cual quiere decir que sólo cabrá tal respuesta en los requerimientos personales; y no admitiendo que, por efecto de la contestación, pueda quedar alterada la eficacia imperativa de la resolución que se comunica”¹¹⁵.

Por último, destacamos que en la conocida ‘Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil’ que hicieron unos Pro-

¹¹⁵ GUASP DELGADO: op. cit., pág. 759-760.

fesores de Derecho Procesal en 1972, se propuso, en el artículo referente a la respuesta del requerido (art. 245), que “*en los casos en que proceda que el requerimiento se entienda con el interesado en persona, se dispondrá así en la providencia*”¹¹⁶. Esta propuesta de reforma está, quizás, en relación con el punto anterior, relativo a circunscribir el concepto de ‘requerido que puede dar respuesta’ al propio destinatario y no a cualquier receptor; sobre todo, si se considera que el requerimiento puede hacerse por cédula, es decir, puede recibirlo alguien distinto del propio destinatario.

¹¹⁶ PROFESORES DE DERECHO PROCESAL: “Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Tomo I, Editorial Tecnos, Madrid, 1972, pág. 281.

2.3. PROCEDENCIA DE LAS DIVERSAS FORMAS DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES.

Después de ver las clases de notificaciones, así como las características que definen el género notificación y las peculiaridades que presentan sus especies, podemos abordar ahora el estudio de las distintas formas en que pueden llevarse a cabo las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos. Es decir, según la legislación analizada, existen diferentes vías a través de las cuales se puede notificar una resolución judicial a su destinatario. Pero lo que la ley no ofrece es una clasificación ordenada de aquéllas, ni, mucho menos, un orden claro de preferencia de elección de unas frente a otras. Sin embargo, vemos oportuno, en este momento de nuestro trabajo, establecer *cuáles son las formas de realizar las notificaciones, según la regulación comentada, y cuándo procede cada una de ellas*. El modo concreto en que cada forma notificatoria se practica, así como los problemas que se derivan de su aplicación, se estudiará en epígrafes posteriores.

En nuestra opinión, se puede decir que hay cuatro formas de llevar a cabo las notificaciones. La utilización de una u otras depende de la clase (o especie) de notificación de que se trate y de algunas circunstancias relativas al sujeto destinatario, como el hecho de tenga Procurador que le represente, o de que tenga domicilio conocido, etc. La clasificación de las distintas formas notificadorias que

proponemos sigue como orden de exposición aquel en que aparecen expuestas en la LEC.

2.3.1. Notificación por medios postales.

El primer medio de comunicación de resoluciones judiciales que aparece en la LEC es el correo certificado con acuse de recibo, que, como vimos, se recoge en el art. 261 LEC, cuyo párrafo primero dispone: *"Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede del Juzgado o Tribunal, se harán por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y uniéndose a aquéllos el acuse de recibo"*. Esta forma notificatoria, no sólo aparece en primer lugar, sino que pretende ser la forma ordinaria de las notificaciones que hayan de realizarse fuera de la sede del Juzgado¹¹⁷.

¹¹⁷ Esa característica de 'forma ordinaria' de la comunicación postal podría deducirse de su ubicación en el primer párrafo del artículo 261; además, en el segundo párrafo, cuando se hace referencia al intento fallido de comunicación por esta vía, se dice expresamente: *"se practicará de nuevo en la forma ordinaria"*. Sin embargo, ese pretendido carácter de 'forma ordinaria' queda, en buena parte, vacío de contenido: de un lado, por las excepciones a la comunicación postal que se establecen en el párrafo cuarto del mismo 261; de otro lado, por el ya citado artículo 6, que manda la notificación de todas las resoluciones judiciales por medio de Procurador, cuando éste esté designado.

En el mismo sentido, GIMENO SENDRA: "Así, pues, y no obstante el tenor literal del art. 261 I, que parece otorgar al 'correo certificado' el carácter de medio común de comunicación, lo cierto es que el párrafo cuarto del mismo precepto contiene no pocas excepciones al mencionado principio, que pueden erigir al clásico régimen ordinario de las notificaciones en regla general" (op. cit., pág. 156).

Esta expresión '*fuera de la sede del Juzgado o Tribunal*' es confusa¹¹⁸, pero si se pone en relación con el art. 264 LEC, queda claro, pensamos, que hace referencia a las notificaciones que no puedan practicarse en la Secretaría del tribunal que haya dictado la resolución que se comunica, por incomparecencia en ella del interesado o de su representante procesal. En los lugares donde se haya puesto en marcha los servicios de recepción de notificaciones del Colegio de Procuradores que permite el art. 272.2 LOPJ, habrá que entender que el art. 261 I LEC quiere decir que se harán por correo certificado, precisamente, todas las notificaciones que no sean realizadas en aquel '*Salón de Procuradores*'.

Tanto si existe el servicio del art. 272.2 LOPJ, como si no, en ambos casos, creemos que la ley, en el art. 261 LEC, no está pensando en supuestos en que exista Procurador designado y que éste no haya comparecido; ya que, si se diera esta situación, o bien se aplicaría el art. 272.2 *i.f.* LOPJ (se tendrá por hecha la notificación), si existe el salón de notificaciones mencionado, o bien, cuando no lo haya, se estaría a lo dispuesto en el art. 265 LEC (se acudirá al domicilio del Procurador). En nuestra opinión, la LEC está queriendo decir, y se podría decir de este modo tan claro: que las notificaciones se harán por correo certificado, precisamente, cuando la parte

¹¹⁸ Como dice SÁNCHEZ SÁNCHEZ: "Esta expresión es utilizada unas veces para designar el Municipio y, en otras ocasiones, para hacer referencia al inmueble o edificio en el que se encuentra el órgano judicial. Este último sentido es el que ha de tomarse en el presente artículo" (op. cit., pág. 113). En la misma línea, GIMENO SENDRA (op. cit., pág. 158).

procesal no tenga Procurador que la represente; pues en este caso, necesariamente, habrá de notificarse *fuera de la sede del Juzgado o Tribunal*.

Junto al correo certificado, también cabe que *“la comunicación se practique por el servicio de telégrafos o por cualquier medio idóneo de comunicación (...)”* (art. 261 III). Estos medios serán de aplicación en el mismo supuesto de hecho que el correo certificado, con el único añadido de que el tribunal aprecie que su empleo *“lo aconsejan circunstancias particulares o exigencias de mayor celeridad”*¹¹⁹.

2.3.2. Notificación en forma personal.

El mismo art. 261 LEC, en el párrafo cuarto, exceptúa de la comunicación postal la realización de todos los requerimientos y la de algunas citaciones y emplazamientos. Dice así: *“No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los actos de comunicación se realizarán en el modo establecido en los artículos siguientes, cuando su destinatario sea o deba ser parte en el juicio o en cualquiera de sus instancias y dependa de la comunicación su personación en las actuaciones, cuando adopten la forma de requerimiento y en aquéllos*

¹¹⁹ Más adelante veremos los problemas que puede presentar la comunicación procesal por telegrama, en orden a asegurar y acreditar la recepción del destinatario, y las posibilidades de utilización de medios técnicos en las notificaciones judiciales.

otros casos en que lo disponga la ley, o así lo acuerde el juzgador, por aconsejarlo las circunstancias particulares que concurran”.

La LEC ha querido proteger especialmente algunas clases de notificaciones, imponiendo que se hagan de forma personal, ya que ésta es la que ofrece una mayor seguridad en la recepción del acto comunicado. Esos dos tipos de actos de comunicación son, por un lado, los emplazamientos y las citaciones de los que depende la personación de aquél que debe ser parte en el juicio y, por otro, los requerimientos.

El primer supuesto del artículo 261 IV LEC que exige la notificación personal es *“cuando su destinatario sea o deba ser parte en el juicio o en cualquiera de sus instancias y dependa de la comunicación su personación en las actuaciones”*. Esto ocurre en todos los emplazamientos, como vimos al analizar esta figura¹²⁰; ya que el emplazamiento es el acto de comunicación de la demanda, a la persona contra quien se propone, que pretende, precisamente, la personación de ésta en las actuaciones procesales. Luego, la LEC ha querido que la primera comunicación judicial que recibe una persona de la existencia de un proceso le llegue en forma personal. Así, se aseguran el derecho que ésta tiene a la contestación a la demanda y

¹²⁰ De hecho, nos parece que lo correcto hubiera sido no incluir los emplazamientos en el primer párrafo del art. 261, referente a las notificaciones postales, como así ocurre con los requerimientos, que no salen mencionados.

los demás derechos procesales que de ahí se derivan¹²¹. En ocasiones, el acto de comunicación del que depende la personación en las actuaciones del notificado es una citación, en lugar de un emplazamiento; como la citación a juicio verbal. Estas citaciones se realizarán también de forma personal¹²².

Luego no parece muy acorde con la garantía del derecho de defensa, enviar por correo la primera notificación procesal cuando no se tiene seguridad de que sea correcto el domicilio al que se envíe, que será el que el actor haya indicado en la demanda. Además, téngase presente, que en los emplazamientos y las citaciones comentadas, si hablamos de supuestos de notificaciones de los que depende la personación de la parte, no es posible la comunicación

¹²¹ Dice CHOZAS ALONSO ("Sobre los actos de comunicación con las partes y el derecho a la tutela judicial efectiva", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 52, Editorial Cívitas, Madrid, 1992, pág. 282): "De entre los diversos actos de comunicación del órgano jurisdiccional con las partes o aquellos que puedan serlo, cobra esencial importancia el primero de ellos, 'en cuanto traslado por el juez de la pretensión deducida por el actor al demandado, o sea el emplazamiento (o citación), el cual, justo porque sin él no tendría la parte la garantía de su defensa, ha de ser realizado por el órgano judicial con todo cuidado y respeto de las normas procesales que regulan dicha actuación, como deber específico integrado en el de la tutela judicial". La cita es de la STC 157/1987 de 15 de octubre.

¹²² Son muchas las sentencias del TC en las que se insiste en la obligación de los órganos de procurar el emplazamiento o la citación personal de los demandados, siempre que sea factible, asegurando se este modo que puedan comparecer en el proceso y defender sus posiciones frente a la parte demandante. Entre las primeras de esta línea, se encuentran las SSTC 9/1981 de 31 de marzo y 37/1984 de 14 de marzo; y entre las más recientes, las SSTC 81/1996 de 20 de mayo y 121/1996 de 8 de julio.

por Procurador: el que no se ha personado ni ha nombrado Procurador, ni ha realizado ninguna actuación procesal.

Tampoco parece oportuno que los requerimientos se realicen vía postal; es otra de las notificaciones que la ley exige que se realicen de forma personal: *“cuando adopten la forma de requerimiento”*. La justificación, además de para garantizar en mayor medida la realización de la conducta que el requerimiento exija, también tiene que ver, como ya hemos señalado, con la posibilidad de respuesta del requerido, y la necesidad de que ésta se documente bajo la fe pública judicial (art. 276 LEC).

Por último, el inciso final del artículo 261 IV LEC dispone que se notificará también de modo personal *“en aquéllos otros casos en que lo disponga la ley, o así lo acuerde el juzgador, por aconsejarlo las circunstancias particulares que concurra”*. Luego, tanto la ley como el tribunal pueden establecer, en supuestos concretos, que la notificación que sea, se realice en forma personal. En relación con lo segundo, GIMENO SENDRA dice: “Mediante esta cláusula general se deja prácticamente al libre arbitrio judicial el determinar qué actos de comunicación habrán de notificarse en la forma ordinaria y cuáles han de serlo mediante el correo certificado. En principio, el Juez o Tribunal habrá de inclinarse por la última de las fórmulas enunciadas, dado el tenor literal del párrafo primero del art. 261, que viene a convertir al ‘correo certificado’ en el medio genérico de comunicación; pero, cuando el órgano jurisdiccional pueda tener la fundada sospecha de que puedan frustrarse la comunicación de determinadas resoluciones judiciales, bien por las deficiencias que, en cuanto

a la rapidez, todavía pueden observarse en este servicio o, sobre todo, por la falta de fehaciencia en cuanto a la percepción del acto por parte del sujeto perceptor, habrá de recurrir al régimen ordinario de las notificaciones”, es decir, a la forma personal¹²³.

2.3.3. Notificación por edictos.

En los casos en que corresponda la notificación en forma personal, se acuda al domicilio de la persona que deba ser notificada, y allí se obtenga noticia de que esa persona no vive ya en ese lugar y nadie dé noticia sobre su paradero, se podrá entonces emplear los edictos como forma de notificación. También cuando no sea posible localizar un domicilio dónde notificar personalmente al destinatario del acto de comunicación. Estos son los dos supuestos que recoge el art. 269 LEC: *“Cuando no conste el domicilio de la persona que deba ser notificada, o por haber mudado de habitación se ignore su paradero, se consignará por diligencia, y el Juez mandará que se*

¹²³ GIMENO SENDRA: op. cit., pág. 157. Este autor ejemplifica la afirmación citada: “De este modo, y a título de ejemplo, si en trámite de ‘diligencias para mejor proveer’ en un juicio verbal, en el que la puesta en relación del nuevo artículo 341 con el 730 establece la necesidad de que deban practicarse en un plazo no superior a doce días, si el Juez pudiera tener la fundada sospecha de que el ‘acuse de recibo’ de la oportuna notificación realizada por correo certificado, pudiera ser recibido en el Juzgado, no sólo más allá del plazo de los quince días, establecido en el párrafo segundo del artículo 261, sino con posterioridad al referido plazo de doce días para la ejecución de la prueba, habrá de acudir a la forma ordinaria. Lo mismo debe suceder cuando de la falta de comunicación fehaciente del acto procesal pueda derivarse un perjuicio irreparable a su destinatario, lo que ha de ocurrir en el ámbito de aplicación de las medidas cautelares; estos últimos supuestos aconsejan también la utilización de la forma ordinaria de las notificaciones”.

haga la notificación fijando la cédula en el sitio público de costumbre, e insertándola en el 'Diario de avisos' donde lo hubiera, y si no en el 'Boletín Oficial' de la provincia".

Esos dos supuestos deben interpretarse restrictivamente, ya que, como hemos dicho, la notificación en forma edictal es subsidiaria de la personal, luego normalmente estamos ante casos en los que, de la comunicación, depende la personación de la parte en las actuaciones. Si la parte se ha personado en las actuaciones, o bien ha nombrado un Procurador que la represente en juicio, que recibirá él toda la comunicación procesal, o bien ha designado un domicilio dónde se le pueda notificar por medios postales; luego, en ese caso, no será preciso acudir a los edictos.

Además, la notificación por edictos es un formalismo que refleja que el actor ha intentado notificar al demandado y que no se ha procedido contra éste sin poner los medios para que tenga noticia del pleito; hace posible que, en el caso de que no se localice al demandado, pueda el actor continuar con el juicio adelante.

Luego, si se considera que estamos ante notificaciones de las que depende la personación, y que la publicación de los edictos no es sino una ficción jurídica, la conclusión será que sólo se puede emplear esta forma de notificar como remedio último y excepcional, como repetidamente ha declarado el TC. En la STS 31.V.94 (RJ 1994\6560) se expone un buen resumen de la doctrina del TC sobre la notificación edictal (que desarrollaremos en su momento): se insiste en su carácter subsidiario, ya que pese a ser una forma legal

válida únicamente será utilizable, no sólo cuando se cumpla estrictamente el supuesto de hecho para el cual está prevista, sino además, cuando se hayan agotado previamente las demás formas ordinarias de comunicación, al no garantizar suficientemente la defensa de los demandados¹²⁴.

¹²⁴ Se dice en la STS 31.V.94 sobre el TC: "(...) tiene efectivamente declarado, Sentencia de 25 marzo 1987 (RTC 1987\36), que 'la regulación de los actos de comunicación en el proceso, y en especial de los emplazamientos, queda deferido al legislador', entiende pues que son, en principio, válidas, las diversas formas que para la práctica de esa diligencia previene la legislación ordinaria, entre las que cuenta la edictal, pero también declara en esa misma sentencia que 'éste sólo es sistema utilizable cuando no conste el domicilio de la persona que deba ser notificada o emplazada o se ignore su paradero por haber cambiado de domicilio', que procede otorgar el amparo cuando se ha citado por edictos, después de intentada infructuosamente la citación por correo, sin practicar "actuación alguna para constatar si tal domicilio era el de la recurrente y sin interesar del actor que señalara otro domicilio', Sentencias 157 y 171 de 1987, de 15 de octubre y 3 de noviembre (RTC 1987\157 y RTC 1987\171) y ello, como expresa en la Sentencia número 100, de 11 abril 1994, porque 'el emplazamiento por edictos en el Boletín Oficial no garantiza en medida suficiente la defensa de quienes están legitimados para comparecer como demandados en procesos que inciden directamente en sus derechos o intereses' tesis mantenida en la de 8 noviembre 1993 (RTC 1993\325), por lo que, como dicen, entre otras, las Sentencias 156/1985, de 15 de noviembre y 108/1994, de 11 de abril, en expresión de esta última 'el recurso a los edictos al constituir un remedio último para los actos de comunicación procesal, de carácter supletorio y excepcional, requiere el agotamiento previo de los medios de comunicación ordinarios, que ofrecen mayores garantías y seguridad de recepción por el destinatario, y la convicción, obtenida con criterios de razonabilidad, del órgano judicial que ordene su utilización, de que al ser desconocido el domicilio o ignorado el paradero del interesado, resultan inviables o inútiles los otros medios de comunicación procesal'. No difiere pues la doctrina del Tribunal Constitucional, establecida en los específicos supuestos propios de su competencia, de la sentada por el Tribunal Supremo en el ámbito propio del recurso de revisión, siendo de notar que aquél, en sus Sentencias de 8 noviembre 1993, número 325 y 108/1994, de 11 de abril, también matiza su doctrina en el sentido de que no existe indefensión en los casos en que, no habiendo sido emplazados los demandados en forma directa, tuvieron conocimiento de la existen-

En relación con esa interpretación restrictiva¹²⁵, no cabe emplear los edictos, porque *se ignora el paradero* del destinatario, si lo que ocurre es que no se encuentra al demandado en su domicilio cuando se acude a su emplazamiento, pero, sin embargo, sí reside en ese lugar; en este caso, habrá que poner los medios para que le llegue la notificación: o bien se puede intentar la notificación en otro momento, o bien puede preguntarse a los vecinos si alguno de ellos conoce al destinatario y accede a quedarse con la cédula de notificación para hacérsela llegar, o puede dejarse esta cédula al portero o conserje para que la entreguen al demandado.

De la misma manera, que el hecho de que *no conste el domicilio de la persona que deba ser notificada*, no puede entenderse en el sentido de que el actor sin más no haya hecho constar un domicilio donde emplazar al demandado en la demanda, sino más bien hay que entenderlo referido a los casos en que no sea posible, y así se justifique debidamente, designar un domicilio porque no conste en los diferentes medios en los que razonablemente pueda hallarse: en

cia del proceso en tiempo hábil para comparecer y ejercer sus derechos de defensa”.

¹²⁵ De la que ahora nos limitamos a exponer de forma genérica sus trazos (es decir, cuándo consideramos procedente notificar por edictos en general), ya que estudiaremos con detenimiento el supuesto de hecho de la comunicación edictal y los problemas que de ella se derivan en el epígrafe específico de esta forma notificatoria.

la documentación del contrato que da lugar al pleito, en algún registro público, etc.¹²⁶

En definitiva, como dice el TS, “constituye sólida doctrina jurisprudencial que cuenta además con el apoyo de la construida por el Tribunal Constitucional, que siendo esencial en los procesos contradictorios la intervención de todas las partes litigantes, deben apurarse al límite las normas establecidas en la Ley Rituaria Civil para realizar la citación de las mismas, a fin de que puedan concurrir a los actos procesales en que sea necesaria o conveniente su asistencia” (STS 4.X.94, RJ 1994\7450). Y es que “el derecho a la tutela judicial que consagra el art. 24 CE, lleva implícito todo un sistema de garantías para quienes sean o puedan ser partes en cada proceso, garantías de las que forma parte integrante el principio de contradicción —audiencia bilateral—, cuya adecuada aplicación requiere que el órgano judicial correspondiente se asegure en la medida de lo posible de la citación o emplazamiento personal de quienes hayan de comparecer en la litis” (STS 12.I.93, RJ 1993\475).

Así, el orden correcto de actuación consiste en poner todos los medios razonables —que estén al alcance del actor y del órgano

¹²⁶ Más adelante nos referiremos a la carga que, en nuestra opinión, tiene el actor de indicar un ‘domicilio efectivo’ donde se pueda emplazar al demandado o, al menos, de acreditar cumplidamente la imposibilidad de hacerlo; sin que esto signifique, como también veremos, que tenga el demandante que investigar el domicilio del demandado cuando sea éste quien tenía que haber puesto los medios para estar localizado. Lo que no puede hacer el actor es no aportar ningún domicilio, o uno falso.

jurisdiccional¹²⁷— para lograr con éxito el emplazamiento o citación personal del demandado, en su persona o en la algunos de los receptores subsidiarios del art. 268¹²⁸. Cuando esto no sea posible por algunas de las causas apuntadas, y sólo en ese caso, se pasará a practicar la notificación por edictos¹²⁹.

¹²⁷ En el epígrafe dedicado a la notificación edictal analizaremos hasta dónde debe llegar el actor, y hasta dónde el órgano, en la diligencia que les es exigible para evitar, en lo posible, los edictos.

¹²⁸ Por tanto, es necesario, bajo pena de nulidad, realizar si es posible la notificación 'por cédula' a uno de los receptores subsidiarios, antes de emplear los edictos. Un ejemplo de esto lo encontramos en la STS 3.X.90 (RJ 1990\7466): "(...) el artículo 24.1, que rigurosamente veda cualquier forma de indefensión y tal es la producida a la recurrente por la actuación procesalmente incorrecta del órgano judicial ante la que, por ser demandada tenía la legítima expectativa de ser emplazada en la forma y con los datos señalados en la Ley Procesal, esto es, mediante cédula que, conteniendo los requisitos legales (artículos 267, 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil), debió serle entregada a una de las personas presentes en el inmueble que menciona el artículo 268 de la repetida Ley de Enjuiciamiento, en este caso portero o vecino más próximo, una vez que en el piso domicilio de la sociedad, sobradamente conocido por ser el legal y como tal registrado en la Oficina correspondiente, además del contractualmente fijado y, cabalmente, el objeto del proceso resolutorio pretendido por el propietario-arrendador, no fue hallada persona alguna (...)".

¹²⁹ En la STS 24.VII.95 (RJ 1995\5601) se observa un ejemplo de inversión del orden legalmente establecido: 'Sin embargo en las actuaciones del juicio de cognición de referencia, no se observó dicho orden procesal. Se invirtió y precipitó, ya que el emplazamiento por edictos tuvo lugar en primer lugar, insertándose el correspondiente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de fecha 27 de marzo de 1990 y la diligencia practicada por el Agente Judicial en el domicilio que podía corresponder a los demandados fue posterior, concretamente el 18 de abril de 1990'.

2.3.4. Notificación a través de Procurador.

Como última forma de realizar las notificaciones y no por ser la menos frecuente, antes al contrario, está la comunicación de resoluciones judiciales por medio de representante procesal. Y es que cuando la parte de un juicio se encuentra representada en él por Procurador, éste recibirá todas las notificaciones que a aquélla se le hagan, como dispone el art. 6 LEC: *“Mientras continúe el Procurador en su cargo, oírán y firmarán los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias, que deban hacerse a su parte durante el curso del pleito y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviene en ellas directamente el poderdante, sin que le sea lícito pedir que se entiendan con éste.*

*Sólo se exceptúan los emplazamientos, citaciones y requerimientos que la Ley disponga expresamente que se practiquen a los mismos interesados en persona”*¹³⁰.

La notificación por edictos es subsidiaria de la personal, y la notificación personal, en los supuestos que la ley indica, es preferente a la notificación postal¹³¹, pero no lo es a la comunicación por

¹³⁰ En la STS 17.V.94 se recuerda esta idea: “una vez que la parte comparece con Procurador y Letrado por ella libremente designados, es con tal Procurador, como representante procesal de la parte material, con el que debe entenderse el órgano judicial para comunicar a tal parte las incidencias procesales que ocurran y las resoluciones que dicte”.

¹³¹ Como se deduce del propio tenor literal del párrafo cuarto del artículo 261: “No obstante lo dispuesto en párrafo primero (...)”.

medio de Procurador: el artículo 6 LEC habla también de emplazamientos¹³² (y citaciones) y de requerimientos¹³³. Además, en el foro se realiza así: cuando una parte está representada por Procurador, éste recibe en el salón *ad hoc* los requerimientos que hagan a su parte, y los emplazamientos y citaciones a que haya lugar, aunque conlleven su personación (por ejemplo, ante el tribunal de apelación, o de casación). Quizás sería conveniente que el propio tenor del 261 IV excluyera, de los supuestos de notificación en forma personal, aquéllos casos en que exista representación procesal¹³⁴.

La única excepción a la comunicación a través de Procurador, será en las notificaciones respecto de las cuales la ley disponga expresamente que se realicen al propio interesado. Ejemplos de éstas, en la LEC, son: la notificación de la sentencia al demandado rebelde (art. 769) o la citación para la comparecencia previa en el procedimiento de menor cuantía (art. 691 II). Aún así, en estos supuestos, SÁNCHEZ SÁNCHEZ piensa que “la resolución también se ha de

¹³² No sólo el art. 6 dispone que “*mientras continúe el Procurador en su cargo, oirá y firmará los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases (...)*”, sino que también el artículo 387, al referirse al emplazamiento ante el tribunal de apelación, establece que se hará “*citando y emplazando previamente a las partes o a sus Procuradores para que comparezcan ante dicho Tribunal*”.

¹³³ Los requerimientos también pueden hacerse a través de Procurador, como expresamente se dice en la STS 16.IX.88 (RJ 1988\6834), en un caso en el que se requiere de pago o consignación al Procurador de un arrendatario.

¹³⁴ Además, la práctica del foro comentada está avalada, aparte de por el art. 6 LEC, por la experiencia de que la comunicación por Procurador es una de las formas más rápidas y seguras para practicar las notificaciones en el proceso.

notificar al procurador a fin de que la transmita al Abogado actuante. Es decir que, por regla general, cuando se dicte una resolución, se notificará solamente al Procurador (si interviene en el proceso), pero cuando la ley exige que se haga al propio interesado, habrá doble notificación, al Procurador y a su cliente”¹³⁵.

En resumen, la clasificación que proponemos de las formas notificadorias recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil queda como sigue. Procederá la notificación por Procurador para todas las comunicaciones a la parte personada en las actuaciones que tenga representación procesal (artículo 6 I LEC). La notificación postal — por correo certificado con acuse de recibo o por telegrama— será oportuna para notificar a aquellas personas que no estén representadas por Procurador (art. 261 I)¹³⁶; salvo en los supuestos en que es pertinente la notificación personal: en los requerimientos, en los actos de comunicación de los que depende la personación de la parte, y en aquellos en que lo disponga la ley o el órgano juzgador (art. 261 IV). A su vez, procederá la notificación edictal cuando haya de notificarse personalmente y se acuda al domicilio del que debe ser notificado y éste se encuentre en ignorado paradero, o cuando no sea posible localizar un domicilio suyo (art. 269).

¹³⁵ SÁNCHEZ SÁNCHEZ: op. cit., pág. 1120.

¹³⁶ También las notificaciones a las personas que no sean parte en el proceso —como testigos, peritos, etc.— se realizarán por este medio, como dispone el artículo 273 LEC.

La misma clasificación anterior, pero tomando como punto de vista las clases de notificaciones (y en los casos en que no exista Procurador) sería la siguiente. Los emplazamientos y los requerimientos se notificarán de forma personal. Cuando el acto de comunicación sea una citación, habrá que distinguir si de ésta depende la personación del destinatario, en cuyo caso se hará también de forma personal, de los casos en que esto no suceda, que se citará de modo postal. Las notificaciones en sentido estricto se comunicarán, igualmente, por correo certificado con acuse de recibo.

CAPÍTULO 3:
LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN
EN LA COMUNICACIÓN PROCESAL.

3.1. EL SUJETO ACTIVO DE LAS NOTIFICACIONES.

3.1.1. El Secretario como sujeto activo de las notificaciones.

Según dijimos, la función de realizar los actos de comunicación procesal se atribuye a los Secretarios judiciales en el artículo 279.3 LOPJ: *“corresponderá a los Secretarios la práctica de las notificaciones y demás actos de comunicación y de cooperación judicial en la forma que determinen las leyes”*. Este precepto se encuadra en el capítulo de la LOPJ referente a las distintas funciones atribuidas a los Secretarios (arts. 279-282). Por tanto, el Secretario judicial tiene la titularidad exclusiva de la práctica de las notificaciones. Como indica PRADO ARDITTO, “el art. 279.3, respecto de los Secretarios, emplea la palabra *práctica* que, según el Diccionario de la Real Academia Española significa ‘ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a sus reglas’, con lo cual se está haciendo referencia al uso

de funciones propias”¹³⁷. En cuanto titular de esa función, el Secretario es el sujeto activo de las notificaciones¹³⁸.

En el mismo capítulo relativo a las funciones de los Secretarios, el art. 281 LOPJ atribuye a éstos la facultad de dar fe de las actuaciones y la de documentación: *“El Secretario es el único funcionario competente para dar fe con plenitud de efectos de las actuaciones judiciales, correspondiéndole también la facultad de documentación en el ejercicio de sus funciones, ostentando el carácter de autoridad”*. Por tanto, las notificaciones que se documenten por el Secretario, en diligencias de comunicación según el art. 280 LOPJ, gozarán de fe pública judicial. Sabiendo, además, que *“la plenitud de la fe pública en los actos en que la ejerza el Secretario no precisa la intervención adicional de testigos”*. Así, como consecuencia de esto, la reforma de la LEC según la Ley 10/92, suprimió los párrafos tercero y cuarto del art. 263, que exigían, respectivamente, la firma de testigos cuando el destinatario de una notificación se negara a firmar la diligencia que documenta el acto, y la multa a esos testigos que se nieguen a suplir la firma del notificado¹³⁹. Antes de dicha reforma,

¹³⁷ PRADO ARDITTO: op. cit., pág. 84.

¹³⁸ En el mismo sentido, el art. 7, letra b, de Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, que desarrolla los artículos de la LOPJ relativos al Secretario.

¹³⁹ Como dice MONTERO AROCA (op. cit., pág. 5), “realmente lo que ha quedado del art. 263 es una simple posibilidad o, si se quiere, un derecho del notificado. Este, en el caso de que no pudiera firmar (en el que se incluye que no pueda por no saber), tiene el derecho de que la diligencia sea firmada por un testigo, a su

hubo ya pronunciamientos del TC que, tras la LOPJ, recordaban la innecesariedad de testigos en las notificaciones avaladas por la fe pública judicial¹⁴⁰.

La fe pública judicial conlleva, no sólo la innecesariedad de testigos referida, sino una presunción de veracidad de los hechos que caigan bajo ella. Así se explica en una reciente del TC: "(...) ha de tomarse como punto de partida... el de la exactitud de las afirmaciones vertidas tanto en la sentencia de instancia, como en la diligencia extendida por el Secretario judicial, al encontrarse esta última amparada por la fe pública judicial, ya que como se ha manifestado en otras ocasiones por este Tribunal (*vid.* STC 276/1993 y ATC 11/1993, por todos), tales resoluciones judiciales, en sentido amplio se encuentran avaladas por el fedatario público correspondiente, al que debe concedérsele la presunción de veracidad que la fe pública de su intervención otorga. (...) Por tanto, si la demostración de la in-

ruego, pero si no hace uso de ese derecho, y lo mismo si no quiere firmar, bastará con la firma del Secretario o de quien realice la notificación".

¹⁴⁰ Por ejemplo, en la STC 155/1989 de 5 de octubre se dice claramente: "En cuanto a la firma de los dos testigos que reciben la cédula y no quieren firmar, con indicación de las circunstancias de los mismos, a lo que se refiere el último párrafo del art. 268, en relación con el 263, es claro que hoy no es exigible ante la intervención del Secretario y la plenitud de la fe pública que ella comporta, conforme al art. 281.2 LOPJ". En la misma línea, la STC 37/1990 de 1 de marzo, hace aplicable el art. 281 LOPJ a los casos del art. 263 LEC, "en el sentido de que la fe pública judicial es bastante, sin necesidad de testigos, salvo los supuestos de delegación en el personal auxiliar para considerar válida la notificación"; es decir, antes de la reforma de 1992, si la notificación no la realizaba un funcionario que pudiera dar fe (por ejemplo, si la practicaba el Auxiliar o el Agente), sí que se necesitaban testigos si el destinatario no quería firmar.

defensión sufrida pasa por los hechos inequívocamente declarados en la sentencia recurrida y en la diligencia del Secretario judicial, el recurrente, antes de acudir a la vía de amparo constitucional, debería haber entablado las acciones pertinentes para que los órganos judiciales competentes se pronuncien acerca de la veracidad o inexactitud de las afirmaciones combatidas en esta sede” (STC 25/1997 de 11 de febrero)¹⁴¹.

Hay que señalar que el Secretario judicial del tribunal que tramita un procedimiento puede habilitar a otro Secretario para que sea éste el que realice un determinado acto de comunicación, como ocurre en los casos en que se habilita al Secretario del servicio común de notificaciones (previsto en el art. 272.1 LOPJ), a fin de que éste practique la diligencia de comunicación en el domicilio del des-

¹⁴¹ VIEITES PÉREZ cuenta el origen histórico de la institución de la fe pública: “En Roma las figuras de los ‘*tabulari*, *notari*, *actuari*, *chartulari*’ y en los pueblos germánicos las de los ‘*refrendarius* y *cancelarius*’ respondían a esta idea. Eran simples colaboradores de los Jueces o príncipes que perpetuaban sus decisiones con la técnica de la escritura, pero a la que no se la daba un valor especial. La fe pública como tal, como presunción de veracidad de lo narrado, surgió en el Derecho Canónico, fue una *Decretal de Inocencio III, recogida en las Decretales de Gregorio IX, en su libro II, título XIX “De probatinibus”, capítulo XI*, la cual dice: ‘Porque, contra una falsa afirmación de un Juez inicuo, el litigante inocente a veces no puede probar que es verdadera la negación; para que la falsedad no perjudique la verdad, o la maldad prevalezca sobre la equidad, establecimos, tanto en el juicio ordinario como en el extraordinario, que el juez presente siempre a una persona pública o dos personas idóneas que fielmente suscriban todos los autos del juicio señalando lugares, tiempos y personas’, (en “La fe pública y la nulidad de actuaciones a través de algunas resoluciones judiciales y su repercusión en la figura y función del Secretario judicial”, *Actualidad y Derecho*, nº 7, Actualidad Editorial, Madrid, 1995, pág. 1-3).

tinatario. Cada actuación que se requiera de este servicio, como veremos, precisa la correspondiente habilitación.

3.1.2. Participación de otros funcionarios judiciales en la realización de las notificaciones.

Esa titularidad de la función notificadora, exclusiva del Secretario, es compatible con la participación de otros funcionarios judiciales en la realización concreta de las distintas notificaciones. Es decir, no sólo se puede habilitar a un funcionario de la misma categoría, sino que la LOPJ permite que los funcionarios judiciales que dependen del Secretario (los Oficiales, los Auxiliares y los Agentes) también participen en la realización de las notificaciones. El art. 485 establece, entre las funciones de los Oficiales, que éstos *“efectúan los actos de comunicación que les atribuye la ley y sustituyen a los Secretarios cuando éstos no se sustituyan entre sí”*. A su vez, el art. 486 dispone que los Auxiliares *“realizarán... los actos de comunicación que les atribuya la Ley”*; y respecto de los Agentes judiciales, el art. 487 dice que *“realizan los actos de comunicación no encomendados a otros funcionarios”*¹⁴².

PRADO ARDITTO destaca los distintos términos que la LOPJ emplea al referirse a la participación en las notificaciones de estos

¹⁴² Existe un Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, que desarrolla los preceptos de LOPJ referentes a estos funcionarios.

funcionarios judiciales, en relación con el Secretario (para el que utiliza el verbo *practicar*), que reflejan el papel, también diverso, que tienen uno y otros. “Por el contrario, al referirse a los Oficiales emplea la palabra *efectuar* (*“efectúan los actos de comunicación que les atribuye la Ley”*) que, según el referido diccionario, quiere decir “poner por obra, ejecutar una cosa; cumplirse, hacerse efectiva una cosa”, con lo que se está haciendo referencia, no necesariamente al ejercicio de una función propia, sino a la realización práctica o material de los actos de comunicación.

“Igual ocurre con respecto a los Auxiliares y Agentes, respecto de los cuales se emplea el verbo *realizar* (*“realizarán... los actos de comunicación que les atribuya la Ley”*) que, según el repetido diccionario, significa “verificar, hacer real y efectiva una cosa”, es decir, se hace referencia asimismo a la realización material de los actos de comunicación.

“Podemos pues afirmar que, en la actualidad, después de la entrada en vigor de la LOPJ, los titulares únicos de la función transmisora son los Secretarios judiciales, sin perjuicio de que la realización práctica de notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, las pueden llevar a cabo bien ellos mismos o bien los Oficiales, Auxiliares o Agentes, y esto, ya en virtud de delegación del propio Secretario (arts. 282.2 LOPJ, 26 LPL, 261.2 y 467 LEC y 12.b del R.D. 2104/1977, de 29 de julio), ya por disposición expresa de la ley (arts. 273.3, 722 y 1442 LEC, 166 LECr)”.

“Se trata en definitiva de distinguir, siguiendo a SEONE CACHARÓN¹⁴³, entre el sujeto activo que emite la comunicación judicial, que es siempre el Secretario, y el encargado de ejecutarla, que puede ser el mismo Secretario y otra persona, funcionario (Oficiales, Auxiliares, Agentes, Funcionarios de la Policía, etc.) e incluso no funcionarios (art. 467 LEC)”¹⁴⁴.

De entre los tres funcionarios judiciales referidos, destaca el Oficial, ya que puede realizar, no sólo actos de ejecución material de una notificación, sino que el Secretario puede delegar en él la facultad de practicar diligencias de comunicación, con permanencia y responsabilizándose de lo que acredite. Así, el art. 282 LOPJ dispone: “1. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los Secretarios podrán habilitar a uno o más oficiales para que autoricen las actas que hayan de realizarse a presencia judicial, así como las diligencias de constancia y de comunicación”.

2. Estas habilitaciones subsistirán mientras no sean revocadas; la responsabilidad de la autenticidad de los hechos o actos acreditados recaerá sobre el oficial autorizante”.

¹⁴³SEONE CACHARÓN: Comunicación presentada en las Jornadas sobre Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, organizadas por el Consejo general del Poder Judicial, celebradas en Madrid, los días 14, 15 y 16 de febrero de 1985. Puede consultarse en libro que, bajo el mismo título editó el referido Consejo, p. 321 y ss.

¹⁴⁴ PRADO ARDITTO: op. cit., págs. 84-85.

Según el art. 282, se extiende la facultad de dar fe pública al Oficial habilitado por el Secretario para la práctica de las notificaciones. No sólo por el '*no obstante*' con el que comienza ese precepto, que parece referido a la característica del Secretario de "*único funcionario competente para dar fe con plenitud de efectos de las actuaciones judiciales*" (del artículo anterior, el 281), sino sobre todo, por el inciso final: *la responsabilidad de la autenticidad de los hechos o actos acreditados recaerá sobre el oficial autorizante*". Así lo ha entendido la jurisprudencia, que de modo claro establece: "Hay que tener en cuenta la fe pública que el Secretario judicial tiene y la innecesariedad de testigos (art. 281 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), que se extiende al Oficial habilitado para las diligencias de comunicación, entre otras. Así se deduce del art. 282 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que se hace recaer sobre el Oficial '*la responsabilidad de la autenticidad de los hechos o actos acreditados*', lo que indica que el Oficial "autorizante" —como le designa el citado art. 282— tiene facultad de autenticar, y por ello no responde entonces al Secretario habilitante sino al Oficial habilitado" (STS 24.VII.91, RJ 1991\5575)¹⁴⁵.

¹⁴⁵ Pese a la claridad del precepto y de la sentencia del TS transcrita, hay algunos autores, como MARTÍN OSTOS (*El Secretariado judicial a examen*. Editorial Tecnos, Madrid, 1994, pág. 94) que afirman que "la fe pública judicial es exclusiva del Secretario, personal e intransferible". Sin embargo, para otros autores el tema está claro. Para ORTELLS RAMOS (op. cit., pág. 401), "el Secretario ostenta la fe pública en cuanto a las actuaciones judiciales... y puede delegarla en los Oficiales, aunque limitadamente a la autorización de actas que documenten actos o hechos realizados a presencia judicial, y de diligencias de constancia y comunicación (art. 282 LOPJ)". Del mismo modo, para ESCUDERO MORATALLA (op. cit., pág. 8684),

El papel de los Oficiales en las notificaciones ha ido creciendo paulatinamente y, actualmente, el Oficial habilitado es el funcionario que en la práctica realiza las notificaciones en el domicilio del interesado. Rara vez se encarga el Secretario de la entrega material de la copia de la resolución (o cédula) a quien corresponda. Mucho más limitada es la actuación de los Auxiliares y de los Agentes en la comunicación procesal, que muchas veces se circunscribe a las labores más materiales, como redactar las diligencias de notificación o trasladarlas a los servicios oportunos para su comunicación (como el del Colegio de Procuradores, o Correos, o el Servicio Común de Notificaciones y Embargos).

El Agente, según el art. 273 LEC, también se encarga de *“la citación a los testigos y peritos y demás personas que no sean parte en el juicio”*, cuando aquélla no se realice por correo certificado por así estimarlo conveniente el Juez. En estos casos, *“el Secretario extenderá la cédula por duplicado y el agente judicial entregará un ejemplar al citado, el cual firmará su recibo en otro ejemplar, que se unirá a los autos”*. Se procede de esta manera porque el Agente carece de la fe pública: entrega la cédula ya firmada por quien sí puede dar fe del acto. En este sentido, SÁNCHEZ SÁNCHEZ dice que *“pudo el legislador encargar todas las notificaciones, citaciones y emplazamientos a los Agentes judiciales, como hace para algunas de ellas en el art. 273; sin embargo no lo hizo así, al tener presente*

“(...) la fe pública del Secretario y con la que, entendemos, actúa el Oficial habilitado, en lógica correlación con la asunción por éste de todas las responsabilidades que se puedan derivar del acto”.

la distinta importancia de los diversos actos de comunicación en el proceso. Los de más trascendencia deben tener mayor garantía y se exige que sean realizados por quien tiene la fe pública (propia o delegada), pudiendo ser efectuados los restantes por quien carece de ella”¹⁴⁶.

Sin embargo, en relación con lo anterior, hay que decir que la ley ha preferido la notificación por medio de Agente en más casos, además de en el art. 273 LEC. Como en el art. 722 LEC, que establece que la citación a juicio verbal sea realizada por el Agente judicial: *“La citación del demandado para la comparecencia se hará por el Secretario o Alguacil del Juzgado”*¹⁴⁷, entregándole la copia de la

¹⁴⁶ SÁNCHEZ SÁNCHEZ: op. cit., pág. 1116.

¹⁴⁷ Así es como se denominaban antiguamente los Agentes judiciales. VEGA MORENO cuenta la evolución del nombre, así como de la regulación de este cuerpo (en *Agentes Judiciales*, Editorial Tecnos, Madrid, 1998, pág. 21-22): “La ley Orgánica de 1870 regulaba los ‘subalternos’ nombre con el que se designaba el personal encargado de los servicios materiales en los órganos judiciales entre los que se incluía a los porteros, alguaciles, mozos de estrado y mozos de oficio, atribuyéndoles funciones que, en general, han pasado a los Agentes judiciales. Así, en diccionarios judiciales de principios de siglo XIX, se definía el Alguacil como el Ministro inferior de justicia que usa de vara, y sirve para prender y otros actos judiciales.

Fue en 1934 cuando estos nombres relatados se sustituyeron por el de Agentes Judiciales de la Administración de Justicia a petición de los interesados que no consideraron adecuado el antiguo nombre de alguaciles.

Por Ley de 8 de junio de 1947, se creó en su artículo 44 el llamado ‘Cuerpo de Agentes Judiciales’. Una disposición de gran trascendencia en la regulación de este Cuerpo, fue la promulgación, sobre la base de la Ley de Reforma Orgánica de 18 de marzo de 1966, del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia y Justicia Municipal, de 6 de junio de 1969.

El nombre de Agentes Judiciales impuesto por el artículo 44 de la referida Ley de 1947 se conserva en la LOPJ de 1985. El Reglamento Orgánico aprobado

papeleta de la demanda, a continuación de la cual habrá extendido el Secretario la cédula de citación, expresando en ella la fecha de la providencia y el día, hora y local en que deba comparecer, con la prevención de que se seguirá el juicio en su rebeldía si no compareciere”.

Por otra parte, para el proceso penal, la LECr establece que las notificaciones en el domicilio del interesado sean realizadas por el Agente judicial (art. 166). En este último caso, el sistema es muy parecido al del art. 273 LEC: el Secretario extiende una cédula original y una copia de ésta; la cédula incluye, a su vez, copia de la resolución que se notifica y otros datos que exige el art. 167; la notificación se realiza entregando la copia de la cédula (art. 170) y haciendo constar dicha entrega por diligencia sucinta al pie de la cédula original, que será firmada por el Agente que la realiza y por la persona que la recibe (art. 171).

3.1.3. Intervención de otros servicios en la comunicación procesal.

No sólo intervienen en la realización de las notificaciones funcionarios judiciales distintos del Secretario, sin que éste pierda la titularidad de su función, como acabamos de ver, sino que, además, también participan en ellas funcionarios no judiciales (como los del

por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero (que derogaba el anterior aprobado por Real Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre) los denomina Agentes de la Administración de Justicia”.

Servicio de Correos) e incluso personal no funcionarial (como los encargados del servicio de recepción de notificaciones que pueden instaurar los Colegios de Procuradores en los Juzgados de las grandes poblaciones, a tenor del art. 272.2 LOPJ).

Efectivamente, en las notificaciones que se realizan por correo certificado con acuse de recibo, será el funcionario de Correos el que realice la entrega de la copia de la resolución que se notifique (o su cédula) al destinatario. En estos casos, el Secretario no puede dar fe pública de la entrega (ni el Oficial habilitado tampoco) porque ni la realiza él ni la presencia. Para acreditar la práctica de la notificación, el Secretario dará fe del contenido del sobre que remite (lo que implica, de suyo, acreditar que se ha remitido ese sobre) y unirá a los autos un acuse de recibo firmado por quien dice ser el destinatario: *“dando fe el Secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y uniéndose a aquéllos el acuse de recibo”* (art. 261 I)¹⁴⁸.

¹⁴⁸ En relación con esto, pensamos que es conveniente hacer alguna aclaración sobre dos afirmaciones que se escuchan a veces sobre el particular. La primera consiste en creer que el funcionario de Correos es el que da fe o acredita la recepción. El funcionario de Correos lo único que realiza es entregar materialmente a su destinatario el sobre que contiene la resolución notificada; la recepción se acredita con el acuse firmado por el receptor; de lo único que se da fe pública en sentido estricto es de los extremos mencionados en el art. 261 I LEC, y lo hará el Secretario que el único funcionario competente para hacerlo (art. 281 LOPJ). En segundo lugar, pensamos que no existe un problema de fe pública en sentido estricto, ya que no quedan bajo ésta hechos que no se han realizado en presencia del Secretario (u Oficial), sino que el Secretario únicamente dará fe de lo que realmente puede darla (de los puntos citados). Lo que ocurre es que la Ley considera que la notificación se ha realizado con perfección formal en cuanto se acrediten los extremos comentados.

Lo anterior, ¿es suficiente acreditación? Además, ha de tenerse en cuenta que el acuse de recibo puede contener simplemente la firma (a veces, ilegible) del receptor, sin que se haya consignado el nombre completo de éste. Y aún en el caso de que se hayan recogido todos los datos del receptor, no se tiene constancia de que sea realmente el destinatario de la notificación, ya que el funcionario de Correos no exige ninguna identificación¹⁴⁹. La ley considera que sí que es suficiente acreditación. Se considera que la notificación así realizada ofrece suficientes garantías para que se entienda hecha con perfección: por un lado, quizás por el carácter funcional del sujeto que ejecuta materialmente el acto de comunicación y, por otro, porque, según el llamado principio de normalidad, si hay un acuse de recibo firmado por la persona a quién iba dirigido el acto, lo habitual será que se haya producido la recepción que se esperaba.

¹⁴⁹ No parece claro que el funcionario de Correos tenga facultades para pedir a quien recibe la notificación que se identifique. Si una persona recibe, en perjuicio de otra, una notificación postal, el verdadero destinatario podrá alegar y probar que a él no le llegó el acto de comunicación, y perdió las oportunidades procesales que de él se derivaban. Un ejemplo de la situación descrita puede ocurrir en los procesos de familia, en los cuales es posible que la persona que efectivamente reciba la notificación tenga intereses contrapuestos a aquella a quien va dirigida, y quizás la primera firme la notificación en lugar de la segunda, y no se lo comunique. En un caso de estos, no sólo se presentan dificultades en la notificación postal, sino también en la realizada de forma personal por el Oficial del Juzgado, ya que éste también —al igual que el funcionario de Correos— tiene facultades para exigir al destinatario del acto de comunicación que acredite —por ejemplo, presentando el DNI— los datos relativos a su identidad que se hacen constar en la diligencia que da fe del acto de notificación.

Algo parecido sucede en las notificaciones que se realizan a través del ‘Salón de Procuradores’. La copia de la resolución que se notifica, junto con una diligencia que la encabeza, se deja por el empleado de ese servicio en el cajetín del Procurador que corresponda, para que éste recoja la copia y firme la diligencia. La diligencia (o una copia de más) firmada por el Procurador servirá para acreditar en los autos la recepción del acto de comunicación. Aquí tampoco puede el Secretario dar fe de haber entregado la copia de la resolución notificada al Procurador destinatario, ya que no presencia esa entrega¹⁵⁰. El Secretario, en orden a acreditar la recepción, lo único que puede hacer es unir a los autos el ‘recibí’ del Procurador. Cosa distinta es que la ley considere que ese hecho es suficiente para garantizar la corrección del acto de comunicación. En realidad, la LOPJ (en su art. 272) ni siquiera exige la firma del Procurador destinatario, sino que es suficiente con el sello del servicio referido: *“La recepción de la notificación por este servicio producirá plenos efectos”*.

¹⁵⁰ De hecho, algunos Secretarios se niegan a firmar la diligencia que actúa como ‘recibí’ del Procurador. Algunos proponen una composición mixta de tal servicio de recepción de notificaciones: que haya, además de personal del Colegio de Procuradores, algunos Secretarios (u Oficiales en quienes se delegue) para que den fe de la entrega. Aunque pensamos que tampoco podrían acreditar la entrega material a cada Procurador, ya que por el elevado número de notificaciones de cada día, se seguirían dejando en el cajetín de aquéllos; luego, no se avanzaría mucho en cuanto a los hechos que pueden quedar acreditados bajo la fe pública.

3.1.4. Evolución en el modo de acreditar la recepción de las notificaciones.

Así, en los dos supuestos mencionados (en la notificación postal y en la realizada en el 'Salón de Procuradores'), la acreditación del acto de comunicación no se realiza porque el Secretario o el Oficial habilitado extiendan una diligencia que firman tanto el sujeto activo como el pasivo de la notificación (vieja idea del art. 263 LEC), sino por el hecho de que se incorpora a los autos un escrito que garantiza de manera suficiente, al entender de la ley por lo menos, la recepción del acto por quien corresponde (nueva idea de los arts. 261 LEC y 272 LOPJ). Como puede observarse, pensamos que ha habido una evolución en la forma de entender cómo se han de acreditar los actos de comunicación; creemos que esta evolución ha sido consecuencia de la imposibilidad actual de que las notificaciones sean realizadas, en cuanto a sus actos materiales de ejecución, por el Secretario judicial.

El diligenciamiento del acto de comunicación por parte del Secretario, al igual que ocurre en los casos del art. 273 LEC, se produce, como dice GUASP DELGADO en relación con aquéllos, no tanto por 'documentación', como por 'incorporación': "La complicación del acto de citación (o emplazamiento) en el supuesto que ahora se estudia viene producida por el hecho de que la lleva a cabo, no el funcionario encargado de dar fe de la realización de los actos procesales, sino otro auxiliar cuya actividad no puede constar por su mera afirmación o relación por escrito. El inconveniente se refleja igualmente en la práctica del acto de formación correspondiente que ya

no consiste en la descripción por escrito de la citación o emplazamiento verificados; en efecto, en este caso el acto de formación no es una documentación sino una incorporación: la incorporación a los autos del ejemplar duplicado de la cédula que se extendió para ello precisamente, firmado por el destinatario de la misma o el receptor o los testigos”¹⁵¹.

Antes, en un mismo escrito (la diligencia del art. 263 LEC) constaban la firma del Secretario (o del Oficial) y la del destinatario (o receptor). Ahora, hay dos escritos: de un lado, la diligencia del Secretario que ordena la notificación (su emisión), y de otro, un escrito aparte que contiene la firma del destinatario, justificativa de su recepción. En medio, por así decirlo, habrá una actividad material por la que se hace llegar la copia de la resolución o su cédula a quien corresponda. El escrito que justifica la entrega, como hemos dicho, puede ser variado (y varía según quien realice la actividad material intermedia): o bien una diligencia (o copia de resolución) firmada por el Procurador que sirve de ‘recibí’; o un acuse de recibo postal firmado por el destinatario o receptor; o bien la copia de una cédula entregada por el Agente y firmada por la persona a quien se hizo¹⁵².

¹⁵¹ GUASP DELGADO; op. cit., pág. 755-756.

¹⁵² En ninguno de los tres casos se pretende que el Secretario dé fe de una actuación que no ha sucedido en su presencia, como es la entrega material de la ‘notificación’ (ya sea de la copia de una resolución o de una cédula de citación o emplazamiento que se haya de comunicar). Cosa distinta es que se argumente que el acto material de entrega de una notificación haya de ser realizado necesaria-

Además, téngase presente, que en todos los casos anteriores, no sólo es garantía de la recepción el escrito firmado por aquél que lo ha recibido, sino que también influye el hecho de que la realización material de la notificación se lleva a cabo por sujetos que también ofrecen suficientes garantías de realizar diligentemente la entrega de la resolución, al menos en teoría: el Agente es funcionario judicial, el de Correos es funcionario público, y los Procuradores desempeñan un oficio cuasi-funcionarial e impuesto por la ley.

Quizás pudiera pensarse que esa tendencia actual desapoderara al Secretario de su condición de titular exclusivo de la función notificadora, función que, como dijimos, le otorga la LOPJ (art. 279.3), por lo que se estaría contraviniendo esta ley. En nuestra opinión no es así. No sólo consideramos acertada esa tendencia que ya es legal, por ajustarse más a la realidad actual de la carga de trabajo del Secretario, sino que, además, pensamos que las formas notificatorias señaladas respetan la titularidad que el Secretario tiene de la práctica de las notificaciones.

En toda notificación de una resolución judicial, tenga el Secretario mayor o menor participación en los actos materiales de la misma, siempre realiza al menos las siguientes actuaciones: 1º) or-

mente por el Secretario o por el Oficial en quien delegue. Sobre este punto, se ha entendido en la ley (tanto en la LOPJ, como en la LEC) que, como hemos dicho, aunque el Secretario tenga la titularidad de la función notificadora, esa facultad no implica que no puedan participar otros sujetos en los actos de ejecución material de las notificaciones. Recordamos, en este sentido, los siguientes preceptos ya comentados: arts. 272, 282, 485, 486, 487 LOPJ, y arts. 261, 273, 722 LEC

dena que se realice la notificación, ordinariamente mediante una diligencia; 2º) controla, además, que ésta se lleve a cabo en la forma y del modo previsto en la ley, según la clase de notificación de que se trate; 3º) cuando llega al Juzgado un escrito que acredita la recepción por el destinatario, examina si garantiza suficientemente la efectividad de la comunicación, y de no ser así, puede mandar que se repita el acto¹⁵³; 4º) si el escrito referido ofrece garantías, lo une a los autos y tiene por hecha la notificación. Todas estas actuaciones del Secretario, por las que emite y ordena la notificación, y vigila su legalidad y efectividad, le convierten (más bien, le mantienen) en sujeto activo de las notificaciones, en consonancia, pensamos, con el art. 279.3 LOPJ¹⁵⁴. Si se quiere, podría hablarse de un sujeto activo formal de las notificaciones (que será siempre el Secretario) y un

¹⁵³ En este sentido, téngase presente la doctrina del TC sobre la efectividad de las notificaciones, que exige, no sólo el cumplimiento formal de los requisitos legales, sino que se asegure, en la medida de lo posible, la recepción por el destinatario. Un buen ejemplo de esta doctrina se encuentra en la STC 236/1992 de 14 de diciembre: "La citación no pueda reducirse a una mera formalidad prescrita por la Ley o a un simple requisito de forma para proceder a la realización de los subsiguientes actos procesales; para dar cumplida satisfacción al derecho a la tutela judicial efectiva, no basta con la mera observancia formal del requisito de la citación, sino que es preciso, además, que el órgano judicial asegure, en la medida de lo posible, su efectividad real".

¹⁵⁴ En un sentido parecido, al hablar de la notificación practicada por Agente del art. 273 LEC, hablaba GUASP DELGADO (op. cit., pág. 755): "la intervención del Secretario en este tipo de actos no queda excluida por completo puesto que él debe, a parte de practicar el correspondiente acto de formación, extender la cédula de citación (o emplazamiento) por duplicado y dar el encargo al Agente; la misión de éste se centra, por tanto, en el acto de la entrega que es el que propiamente le corresponde efectuar". Pensamos que no sólo el Secretario no queda excluido de la comunicación sino que realiza los actos más importantes y más apropiados a su función.

sujeto activo material (que será quien lleve a cabo los actos de ejecución material de la notificación).

3.1.5. Reflexión en torno a la fe pública judicial.

Otra pega a, lo que podríamos llamar, la ‘descentralización’ de los actos materiales de la notificación en sujetos distintos del Secretario, puede consistir en la necesidad de que determinadas actuaciones gocen de la fe pública del Secretario¹⁵⁵.

Si acudimos a la LOPJ para examinar qué se indica sobre la fe pública, observamos que existe un título que lleva el rótulo ‘De la fe pública y de la documentación’, que es el Título IV del Libro III, y que contiene tres capítulos sobre: las funciones de los Secretarios; la dación de cuenta y la conservación de los autos; y las diligencias de ordenación y las propuestas de resolución. Dentro del capítulo relativo a las funciones, como hemos dicho, el art. 281 LOPJ establece: “1. *El Secretario es el único funcionario competente para dar fe con plenitud de efectos de las actuaciones judiciales, correspondiéndole también la facultad de documentación en el ejercicio de sus funciones, ostentando el carácter de autoridad*”; y “2. *La plenitud de la fe pública en los actos en que la ejerza el Secretario no precisa la intervención adicional de testigos*”.

¹⁵⁵ “Concepto de fe pública que puede ser definida como la facultad que confiere un Estado a un funcionario público, al que se le asigna el que carácter de autoridad, para dar certeza y presunción de veracidad y autenticidad a los actos en los

Luego, en ese precepto no se mencionan expresamente actuaciones concretas de las que tenga que dar fe el Secretario; lo que se dice es que el Secretario documentará toda actuación en la que participe *en el ejercicio de sus funciones*, y que las actuaciones que documente gozarán de *la plenitud de la fe pública*. Así, más que hablar directamente de actuaciones que precisan la fe del Secretario, hay que referirse de un modo indirecto a qué funciones debe éste desempeñar, en cuyo ejercicio dará fe pública con plenos efectos. En este sentido, es cierto que una de las funciones que el mismo capítulo de la LOPJ atribuye a los Secretarios es *la práctica de las notificaciones*; pero acabamos de decir que la titularidad de esa función es compatible con la intervención en ella de otros sujetos distintos. Sí que será consecuencia del art. 281 LOPJ que el Secretario dé fe de las actuaciones concretas en las que participe en el ejercicio de su función notificadora, ya sean éstas más o menos.

Es decir, no hay ninguna disposición expresa de la LOPJ, ni en nuestra opinión debe haberla, que indique de modo expreso que la entrega de la resolución que se haya de notificar se realice necesariamente por el Secretario u Oficial habilitado. En cambio, sí se dispone en la LEC algo parecido: que determinados actos de comunicación, los referidos en el art. 261 IV, deben realizarse en forma personal, forma que según la regulación actual de la LEC implica que se notifique en el domicilio del destinatario por quien puede dar

que intervenga en aras de conseguir la seguridad jurídica y como garantía del proceso" (VIEITES PÉREZ: op. cit, pág.15).

fe del acto. Pero es una opción legal para unos casos concretos. En otros, en el mismo precepto (art. 261 I), se establece que la dación de fe del Secretario se limite a la remisión y contenido del sobre que se envía por correo certificado.

Además, si se repasa la jurisprudencia existente sobre la fe pública, cuando el TC se ha referido a este tema¹⁵⁶, ha sido para declarar cuáles son los efectos que conlleva una actuación de la que ha dado fe el Secretario, pero nunca ha indicado actuaciones concretas que requieran necesariamente la dación de fe de éste último. En resumen, se ha dicho: que la fe pública conlleva una presunción de veracidad de los hechos que documente el Secretario (SSTC 276/1993 de 20 de septiembre y 25/1997 de 11 de febrero)¹⁵⁷; para desvirtuar esos hechos se necesitará una declaración judicial de falsedad documental, y no serán suficiente las meras alegaciones de las partes (STC 155/1989 de 5 de octubre)¹⁵⁸, sino que se requiere

¹⁵⁶ También el TS, como veremos con ejemplos de sentencias que situamos en las siguientes notas al pie.

¹⁵⁷ Por ejemplo, si existe contradicción entre las fechas que constan, de una parte, en una diligencia extendida por el Secretario y, de otra, en otro tipo de documento, se presume verdadera la primera, como en el caso de la STS 25.VII.90 (RJ 1990\6180). En el mismo sentido, la STC 76/1997 de 21 de abril.

¹⁵⁸ Esta sentencia, a su vez, ha sido citada por otras del TS, también en relación con las notificaciones. Veamos dos ejemplos. STS 14.XI.90 (RJ 1990\8711): "En principio, no cabe dudar de la legitimidad que ampara una razonable presunción de veracidad de las manifestaciones consignadas en las diligencias de los actos de comunicación que no pueden desvirtuarse en lo esencial salvo que se declare la falsedad del documento. Como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 155/1989, de 5 de octubre (RTC\155) (Sala 1ª, recurso de amparo 929/1987) respecto de requisitos omitidos en una cédula de citación y estando la diligencia bajo le

prueba en contra con hechos ciertos y paladinos (STC 37/1990 de 1 de marzo)¹⁵⁹.

Por tanto, ya que ni la LOPJ ni la jurisprudencia detallan qué notificaciones deben documentarse bajo la fe pública judicial, habrá que estar a lo que sobre este punto diga la LEC. Que, como sabemos, exige la fe pública en las notificaciones del art. 261 IV: emplazamientos y citaciones de los que se derive la personación del notificado, y todos los requerimientos. Nosotros somos partidarios de esta orientación: que el Secretario o el Oficial habilitado (más bien, éste último, que es el que realmente notifica) quede reservado, sobre todo, para hacer materialmente aquellas notificaciones que den noticia de la existencia del pleito y, por tanto, sean salvaguarda de una manera especial del derecho de defensa del destinatario. En estos supuestos, dada la trascendencia procesal (y constitucional) del acto, es bueno, quizás, que sea realizado por quien puede dar fe de lo que ocurra; así, si existe una diligencia que documenta la prác-

fe pública, en tanto no se declare judicialmente la repetida falsedad, hay que dar por sentada la regularidad legal de la notificación hecha". STS 24.VII.91 (RJ 1991\5575): "fe pública judicial que no puede quedar destruida por las simples declaraciones testificales del receptor de la cédula en el pleito de que no la recibió, pues estando la diligencia bajo aquella fe, en tanto que no se declare judicialmente su falsedad, hay que dar por sentada la regularidad legal de lo actuado (Sentencia del Tribunal Constitucional 155/1989, de 5 de octubre (RTC\155), Sala 1ª)".

¹⁵⁹ En el mismo sentido, la STS 11.VII.94 (RJ 1994\6387): "Como no se ha probado la falta de certeza o veracidad de lo expresado en dicha diligencia de notificación, al contenido de ella (cubierto, se repite, por la fe pública judicial) ha de estarse y, por tanto, tenerse por cierto".

tica de una notificación, aunque no esté firmada por su destinatario, la comunicación será válida.

El resto de actos de comunicación pueden llevarse a cabo, en su sentido más material, por sujetos o servicios distintos: por Correos, por el Agente judicial, por el ‘Salón de Procuradores, etc.; siempre que, por un lado, esas personas o servicios ofrezcan suficientes garantías y estén previstos legalmente; y, por otro, que se reciba en el Juzgado un acto escrito del que se presuma razonablemente —y por ley— la recepción del acto por su destinatario. En estos supuestos, la fe pública del Secretario u Oficial queda para lo siguiente: acreditará que se ha enviado una notificación (por correo, a través de Agente, o al ‘Salón de Procuradores’) de una resolución (cuyo original está en los autos, por tanto se da fe del contenido de lo enviado), y que ha llegado a la Secretaría y se ha unido a los autos (por ofrecer suficientes garantías de recepción efectiva) un acto escrito firmado por el destinatario (un acuse de recibo, la copia de una cédula, o un ‘recibí’ del Procurador). En todos los casos el planteamiento de fondo es: que se haga la notificación al modo de la practicada por Agente (en el art. 273 LEC ó en el 166 LECr), y que el Secretario acredite el acto a la manera de la notificación postal (art. 261 I LEC).

3.1.6. Posibilidad de mayor participación del Agente judicial en la comunicación procesal.

Por último y en relación con lo anterior, queremos indicar que somos partidarios de dar más juego al Agente judicial en la realiza-

ción de las notificaciones. Nos parece una forma intermedia entre la notificación realizada por el Oficial y la que se practica por el funcionario de Correos. Es decir, para casos en que haya que acudir al domicilio del interesado, normalmente por no tener éste Procurador que le represente, si no estamos ante una notificación que requiera la fe pública (art. 261 IV), que el Agente obviamente no puede dar, pero, sin embargo, haya necesidad de una mayor seguridad o rapidez que la que ofrecería la vía postal, puede encargarse la comunicación al Agente judicial. Esto, aunque el destinatario sea una parte procesal, ya que, aunque no tenga cabida en el art. 273 LEC, se puede entender aplicable el art. 261 III (en relación además con el 487 LOPJ): *“Cuando lo aconsejen circunstancias particulares o exigencias de mayor celeridad, se podrá disponer que la comunicación se practique por el servicio de telégrafos o por cualquier medio idóneo de comunicación, adaptándose las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado del cual deberá quedar constancia en autos”*.

El Agente presenta diversas ventajas en comparación con la notificación por medios postales y, sin embargo, en el proceso civil está muy limitada su actuación en las notificaciones. Algunas ventajas son: 1º) Puede consignar en la diligencia de comunicación los distintos hechos y circunstancias que sucedan al realizar la notificación, cosa que ordinariamente no hace con tanto detalle el funcionario de Correos; éste se limita a comprobar si está el interesado: si está, le entrega el sobre y le hace firmar el acuse; y si no está, devuelve el sobre al juzgado, y sucintamente consigna lo sucedido

(esto suele hacerlo con frases genéricas, como 'ausente en horas de reparto', o 'cambio de domicilio', etc.).

2º) Los hechos que queden acreditados en la diligencia que extienda el Agente no gozarán de la misma presunción de veracidad que tiene lo que está bajo la fe pública (es decir, no será preciso para su contradicción la declaración judicial de falsedad documental). Sin embargo, tendrán un cierto valor en cuanto a su autenticidad, ya que han sido extendidos por un funcionario judicial, y para desvirtuarlos pensamos que será necesario al menos acreditar otros hechos contrarios que ofrezcan mayores garantías de veracidad.

3º) El Agente, no sólo tiene más posibilidades a la hora de consignar lo sucedido en la diligencia de comunicación, sino que también tiene más margen de actuación para lograr la efectividad del acto; quizás por su mayor especialidad en la función (*'realizan actos de comunicación'*, dice el art. 487 LOPJ) en relación con el funcionario de Correos, y por su mayor 'relación' con la notificación en cuestión (ya que proviene de la Secretaría en la que trabaja).

4º) Además, esa mayor 'cercanía' con el acto de comunicación, también ofrece importantes ventajas desde un punto de vista funcional: por ejemplo, cuando la comunicación haya sido negativa, el Juzgado tendrá noticia enseguida de ese resultado, y podrá poner los medios oportunos para remediarlo (como repetir el acto, cuando sea el caso); desde luego de manera más rápida que si tiene que esperar a que Correos devuelva el sobre que no ha podido entregar; sabiendo, además, que antes de devolver el sobre al Juzgado se deja nota de aviso en casa del interesado, para que pase a recogerlo a una oficina postal próxima; sólo si pasados unos días no

acude allí el destinatario, se devolverá el sobre al Juzgado, lo cual puede retrasar mucho más el intento de repetición o la solución que se estime conveniente.

3.2. EL SUJETO PASIVO DE LA COMUNICACIÓN PROCESAL.

3.2.1. La parte o su representante procesal como destinatarios principales de las notificaciones.

En relación con el sujeto pasivo de las notificaciones, ya dijimos que, primero de todo, había que distinguir entre destinatario y receptor. El destinatario es aquella persona a quien se dirige la resolución judicial que se notifica, cuyo conocimiento interesa provocar, siendo ésta en propiedad el sujeto pasivo de las notificaciones. Sin embargo, aunque la notificación se dirija a su destinatario, le ley permite que otros sujetos distintos se hagan cargo de su recepción: nos estamos refiriendo a los llamados ‘receptores subsidiarios’ del art. 268 LEC.

Es el art. 260 I LEC el que se encarga de regular el sujeto pasivo de las notificaciones. Se dispone en ese precepto que, en primer lugar, las resoluciones “*se notificarán a quienes sean parte en el juicio*”; luego son las partes del proceso los destinatarios principales de las notificaciones. Ahora bien, cuando la parte está representada por Procurador, éste “*oírán y firmarán los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias, que deban hacerse a su parte durante el curso del pleito y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniera en ellas directamente el poder-*

dante, sin que le sea lícito pedir que se entiendan con éste” (art. 6 LEC).

Si quien actúa como parte es la Administración General del Estado (o alguno de sus Organismos autónomos) será representada (y defendida) en juicio por los Abogados del Estado, según se dispone en el artículo 1 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas). En este caso, en relación con los actos de comunicación, el art. 11 de esa ley dispone: “1. *En los procesos seguidos ante cualquier jurisdicción en que sean parte la Administración General del Estado, los Organismos autónomos o los órganos constitucionales, salvo que las normas internas de éstos últimos o las leyes procesales dispongan otra cosa, las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal se entenderán directamente con el Abogado del Estado en la sede oficial de la respectiva Abogacía del Estado.*

2. *Cuando las entidades públicas empresariales u otros Organismos públicos regulados por su normativa específica sean representados y defendidos por el Abogado del Estado se aplicará igualmente lo dispuesto en el apartado anterior.*

3. *Serán nulas las notificaciones, citaciones, emplazamientos, y demás actos de comunicación procesal que no se practiquen conforme a lo dispuesto en este artículo*¹⁶⁰.

Hay que señalar que el privilegio procesal de que las notificaciones sean realizadas en la sede oficial del Abogado del Estado se ha criticado por la doctrina, ya que, según MONTERO AROCA, “el privilegio aquí no es del Estado, sino del abogado mismo”, por lo que este autor considera que “carece de cualquier justificación objetiva”¹⁶¹. Además de su dudosa justificación, también se criticaba su falta de legalidad, ya que, hasta la reciente ley, se encontraba recogido únicamente en un Real Decreto¹⁶². De hecho, antes de la entrada en vigor de la reciente ley de 1997, en algunas sentencias del TS, como las SSTS 27.I.92 y 25.II.92, se entendía derogado ese privilegio, como consecuencia de la LOPJ (art. 447.1).

LÓPEZ-FONT MÁRQUEZ, en un comentario a esas dos sentencias, dice: “Respecto al privilegiado *régimen de notificaciones*, y ante la objeción del Letrado de no haber sido emplazado en su sede

¹⁶⁰ En la disposición adicional cuarta de la misma ley se extiende la aplicación de esta regla a las Comunidades Autónomas y entidades públicas dependientes de ellas.

¹⁶¹ MONTERO AROCA (con ORTELLS RAMOS, GÓMEZ COLOMER y MONTÓN REDONDO): *Derecho Jurisdiccional*. Tomo II. Proceso civil. Editorial Tirant lo blanch, Valencia, 1997, pág. 78.

¹⁶² En el art. 56 del Real Decreto, de 27 de julio de 1943, que aprueba el texto refundido del Reglamento Orgánico de la Dirección General de lo Contencioso y Cuerpo de Abogados del Estado.

funcional u oficina, sino en el domicilio del propio Consorcio de Compensación de Seguros, recuerda el TS que, en contra de lo establecido en el Estatuto del 25 y por el Reglamento Orgánico de la Dirección General de lo Contencioso de 27 de julio de 1943, los artículos 681 y 683 LEC y el propio artículo 41 Cc remiten al lugar donde las personas jurídicas tengan su representación legal, normas generales reforzadas en el artículo 447.1 de la LOPJ, por el puede suceder que: “...el Organismo autónomo en cuestión encomiende su defensa no al Abogado del Estado, sino a Abogado colegiado, especialmente designado al efecto, ...esta doble posibilidad arguye claramente que el domicilio del emplazamiento no puede ser el del Abogado del Estado, sino el de la entidad en cuestión”¹⁶³.

3.2.2. Posibilidad de notificación a terceros.

Pero las resoluciones judiciales no sólo se comunicarán a las partes procesales, sino que, como establece el segundo párrafo del art. 260 LEC, *“también se notificarán, cuando así se mande, a las personas a quienes se refieran o puedan deparar perjuicio”*. Este precepto nos parece poco afortunado, ya que deja lugar a dudas. Y la primera duda es qué quiere decir la expresión *“cuando así se mande”*¹⁶⁴. Pensamos que ese inciso no está indicando que sea dis-

¹⁶³ LÓPEZ-FONT MÁRQUEZ: “La derogación del fuero territorial del Estado y sus Organismos autónomos y del régimen especial de notificaciones”, en la *Revista española de Derecho Administrativo*, nº 75, Editorial Cívitas, Madrid, 1992, pág. 437.

¹⁶⁴ SÁNCHEZ SÁNCHEZ dice al respecto: “Puede suscitar dudas la expresión ‘cuando así se mande’. Una interpretación amplia nos llevaría a entender que sólo se debe hacer el acto de comunicación si el Juzgado o tribunal lo cree conve-

crecional del tribunal el notificar o no a las personas mencionadas en el segundo párrafo del 260 LEC (personas a las que la resolución se refiera o pueda perjudicar), ya que dicha notificación será tan imperativa como en los casos del primer párrafo del mismo precepto (notificación a las partes), aunque aquel mandato sea más difícil de cumplir o menos exacto. La expresión “*cuando así se mande*”, en los supuestos indicados, se sustituye por otra más clara en el artículo 270 LOPJ (que reproduce el 260 LEC en esa ley), al decir “*cuando así se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de conformidad con la ley*”¹⁶⁵.

Pero la duda más importante es a qué sujetos, que no sean parte en el proceso, se deben notificar las resoluciones judiciales por ser “*personas a quienes se refieran o puedan deparar perjuicio*”. Esta cuestión no es pacífica en la doctrina. Nos parece que para acometerla, hay que tomar como punto de partida la consideración de que nuestro proceso civil se rige por el principio dispositivo. Según este principio, la delimitación del objeto del proceso queda a la libre disposición de las partes; teniendo en cuenta que uno de los

niente. Algo se restringe en la LOPJ al añadirse ‘*de conformidad con la Ley*’, pero sigue sin clarificarse del todo el problema. El TC tampoco ha dado luz cuando ha considerado necesario que se realicen ‘*siempre que se den las circunstancias necesarias*’ (op. cit., pág. 1111)”.

¹⁶⁵ Puede que el inciso “*cuando así se mande*” se redactara pensando en recoger supuestos concretos en que la ley previera expresamente una concreta notificación, como por ejemplo en los artículos 1489-1491 LEC; pero si esto es así, quizás se podía haber empleado otra expresión más clara, del orden de “también se notificará a los terceros en los casos que prevea la ley”.

elementos que configuran el objeto (una de las “identidades procesales de la acción) es el subjetivo; por tanto, es el actor quien elige las personas frente a las cuales interpone la demanda, y las posibilidades del tribunal de llamar al proceso a personas distintas de las allí designadas son muy reducidas. Partiendo de este principio, ¿a qué terceros en sentido amplio es posible notificar las resoluciones de un proceso?

Según GIMENO SENDRA el art. 260 LEC impone al tribunal la obligación de notificar, no sólo a las partes formales (260 I), sino también a las partes materiales (260 II), es decir, a los sujetos afectados por la relación jurídica material que haya dado lugar al pleito. Este autor dice así: “De la notificación de resoluciones judiciales depende en no pocas ocasiones el pleno ejercicio del derecho constitucional de defensa, lo que ha de obligar al órgano jurisdiccional (porque las normas constitucionales son de orden público y vinculan a todos los poderes del Estado) a una vigilancia de oficio acerca de la comunicación de actos procesales a las partes materiales especialmente cuando de esta puesta en conocimiento puedan depender sus posibilidades de alegación, prueba e impugnación”¹⁶⁶.

En relación con la afirmación citada, somos de la opinión de CEDEÑO HERNÁN, quien al respecto dice que “una interpretación tan extensiva que cargue al juez con un deber de buscar a todos los posibles perjudicados, al margen de que sería inviable en la práctica,

¹⁶⁶ GIMENO SENDRA: op. cit., pág. 154.

convertiría al juez civil en investigador y chocaría frontalmente con el principio dispositivo que inspira nuestro sistema procesal civil”¹⁶⁷. Efectivamente, en nuestro derecho, como hemos adelantado, está vedada la *iussu iudicis*: el tribunal no puede emplazar a quien no se haya incluido en la demanda, con la carga de la comparecencia; es decir, con la consecuencia de que si no se persona en las actuaciones, se le declare en rebeldía y se continúe el juicio en su ausencia.

Podría pensarse que la posición señalada puede causar perjuicios serios en los casos en que exista el peligro de que se extiendan los efectos de la cosa juzgada a la persona que no fue emplazada, por ejemplo, si se trata de un copropietario de un bien, que no ha sido llamado al juicio por el actor. En esos casos, estaríamos ante lo que la jurisprudencia llama ‘litisconsorcio pasivo necesario’, y seguimos afirmando con CEDEÑO HERNÁN que “en puridad, ni el juez puede hacer declaraciones relativas al litisconsorte preterido, por imperativo de su deber de ser congruente, ni éste puede tener la condición de perjudicado”¹⁶⁸ porque, según la jurisprudencia, la omisión de un litisconsorte necesario impide al juez entrar a resolver la cuestión de fondo y, por lo tanto, la única resolución que podrá dictar para poner fin al proceso será una sentencia absolutoria de la ins-

¹⁶⁷ CEDEÑO HERNÁN: *La tutela de los terceros frente al fraude procesal*, Editorial Comares, Granada, 1997, pág. 66.

¹⁶⁸ Se hace referencia a la condición de perjudicado porque, recordamos, el supuesto que prevé el artículo 260 LEC es la notificación de resoluciones judiciales a “las personas a las que se refieran o puedan deparar perjuicio”.

tancia, la cual no perjudicará en modo alguno al litisconsorte excluido”¹⁶⁹.

Sin embargo, hay autores que están a favor de llamar al juicio a los litisconsortes omitidos, como MONTERO AROCA, quien afirma que “quizás lo más oportuno fuera conceder al juez la facultad (de-recho-deber) de ordenar la integración del contradictorio llamando a los litisconsortes ausentes y concediéndoles un plazo perentorio para su personación en los autos. Si éstos se personan, el proceso continúa con ellos con normalidad. Si, por el contrario, dejan transcurrir el plazo fijado, el proceso continuará sin ellos, ya que se han colocado voluntariamente en rebeldía”¹⁷⁰. Pero, pensamos, que se refiere a un supuesto de futuro, porque actualmente en nuestro Derecho no es posible¹⁷¹, y así resuelven nuestros tribunales: cuando aprecian el litisconsorcio no constituido, lo advierten a las partes si hay oportunidad procesal, y si las partes no lo corrigen, dictarán

¹⁶⁹ CEDEÑO HERNÁN: op. cit., pág. 67.

¹⁷⁰ MONTERO AROCA: *La intervención adhesiva simple*, Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1972, pág. 22.

¹⁷¹ Y no es posible por la razón antedicha de que esa notificación implicaría una llamada al proceso de oficio, a una persona no designada en la demanda, a la que se impone la carga de la comparecencia; lo cual, en cuanto a este último punto, resulta lógico, porque si al litisconsorte preterido se le notifica la pendencia del proceso y se le dejara que eligiera voluntariamente intervenir o no, sin que su inactividad le acarrease consecuencias desfavorables, se le colocaría en una posición de ventaja procesal; de la que incluso puede derivarse la preferencia por la continuación del proceso sin su intervención —con clara intención dilatoria—, confiado en la abstención de oficio del tribunal por la irregular constitución de la litis.

sentencia absolutoria de la instancia decretando la nulidad de lo actuado.

Caso distinto es aquél en el que se extiende legalmente la cosa juzgada y por la naturaleza de los derechos en juego no se provoca la necesidad de litisconsorcio, como por ejemplo en las cuestiones relativas al estado civil (art. 1252 II) o la capacidad. En estos supuestos, CEDEÑO HERNÁN¹⁷² no tiene inconveniente en permitir que, en el marco del artículo 260 II, se notifique la pendencia del proceso “a aquellos terceros que, además de resultar afectados por la extensión de la cosa juzgada, sufran un perjuicio perceptible sobre algún derecho o relación jurídica propio o tengan evidente interés”. Esta autora pone el siguiente ejemplo: “Así, no nos parece inadmisibles notificar la pendencia de un proceso de incapacitación a los parientes del presunto incapaz que, a tenor del artículo 203 del Código Civil, están legitimados para promover la incapacitación, pero que, a pesar de ello, no han presentado la demanda y siempre que sean conocidos”. La autora citada admitiría, pues, “la comunicación personal de la pendencia del proceso a aquellos posibles perjudicados cuya identidad sea conocida por el juez por deducirse de los autos, dándoles así la oportunidad efectiva de entrar en el proceso como intervinientes adhesivos y de prevenir, de este modo, los eventuales efectos negativos que la sentencia pueda ocasionarles”.

¹⁷² CEDEÑO HERNÁN: op. cit., pág. 65.

Nos inclinamos por la opinión de CEDEÑO HERNÁN, quien afirma que la finalidad del artículo 260 II LEC (y de su correlativo 270 LOPJ) es otorgar un instrumento al Juez para evitar el fraude procesal en perjuicio de terceros. Así lo expresa: "En efecto, en aquellos casos en que el Juez aprecie en los autos indicios suficientes para estimar que el proceso está siendo utilizado por las partes como medio para, aprovechando los efectos que la sentencia pueda ocasionar en la esfera jurídica de un tercero, causar una lesión en los derechos o relaciones jurídicas de quien no es parte litigante¹⁷³, ordenará, con base en los citados preceptos, la comunicación de la pendencia del proceso al tercero cuya defraudación se pretende. El sujeto destinatario de la notificación podrá, si lo estima conveniente, constituirse en parte mediante una intervención adhesiva, simple o litisconsorcial según los casos, impidiendo de este modo que la confabulación de las partes alcance el objetivo perseguido por ellas"¹⁷⁴.

Esa notificación, sin embargo, no supone un caso de *iussu iudicis* "porque el órgano jurisdiccional no llama al tercero para persuadirle de que se constituya en parte, sino que se limita a comunicarle la existencia de un proceso y es el tercero el que voluntariamente puede intervenir o, si lo prefiere, mantenerse en activo"¹⁷⁵. Es

¹⁷³ Según esta autora, "ejemplo típico es el proceso convenido entre arrendador y arrendatario con el fin de lograr la extinción del contrato de subarriendo".

¹⁷⁴ CEDEÑO HERNÁN: op. cit., pág. 68.

¹⁷⁵ CEDEÑO HERNÁN: op. cit., pág. 69.

decir, como no se trata en propiedad de un emplazamiento, sino de la notificación de la pendencia del proceso, al tercero así notificado no se le impone la carga de la comparecencia, y puede elegir, entre personarse en las actuaciones, o esperar al resultado del pleito; en este último caso, si estima que existió fraude podrá acudir al recurso de revisión por maquinaciones fraudulentas del art. 1796.

El anterior planteamiento no parece contrario al principio dispositivo, ya que, aunque el tribunal valore como fraudulenta una conducta y ordene la notificación a un sujeto que las partes no han querido traer al juicio, “no puede admitirse una interpretación tan rigurosa del principio dispositivo que convierta el proceso en un campo de batalla donde todo tipo de armas y ardidés estén permitidos y donde los litigantes de mala fe puedan trastocar los fines del proceso utilizándolo como un instrumento de agravio a terceros, revistiendo de una apariencia jurídica sus corrosivas intenciones”¹⁷⁶, máxime si se tiene en cuenta que el proceso es un instrumento público que sirve para el ejercicio de la función jurisdiccional, aunque los intereses que puedan ventilarse sean privados¹⁷⁷.

3.2.3. Los receptores subsidiarios del art. 268 LEC.

Una vez vistos los posibles destinatarios de las notificaciones, podemos referirnos ahora a aquellos sujetos que antes hemos califi-

¹⁷⁶ CEDEÑO HERNÁN: op. cit., pág. 69-70.

¹⁷⁷ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit. Tomo I, pág. 125 y ss.

cado de ‘receptores subsidiarios’. Cuando la parte procesal que debe ser notificada no tenga Procurador que la represente, tanto porque no lo precise, como porque todavía no lo haya designado, si se acude al domicilio del destinatario del acto de comunicación y no se le encuentra en él, el art. 268 LEC admite como receptores subsidiarios *“al pariente más cercano, familiar o criado, mayor de catorce años, que se hallare en la habitación del que hubiere de ser notificado, y si no se encontrare a nadie en ella, el vecino más próximo que fuere habido”*.

Como dice la STC 186/1997 de 10 de noviembre, “sólo cuando la citación o el emplazamiento personal no sea factible, la ley admite que se realice con un tercero al que por su relación con el interesado (familiar, empleado, vecino) se presume que le hará llegar el acto de comunicación”. Así, establece el TC en otro lugar (STC 39/1987 de 3 de abril), “no es exigible, legal y constitucionalmente, que la cédula de citación sea entregada personalmente al destinatario, pues tal exigencia podría perturbar el normal desenvolvimiento de la justicia, sí lo es, en cambio, cualquiera que sea la forma en que la citación se realice, el que, en los casos en que la comunicación no pueda ser recibida por el propio destinatario, lo sea por una de las personas a quienes la Ley impone la obligación de hacerla llegar a aquél, ya que estos requisitos constituyen la garantía mínima para que el destinatario pueda ejercitar el derecho de defensa que la Constitución le reconoce”.

Entre los sujetos que la ley permite que sean receptores subsidiarios de las notificaciones, podemos distinguir dos grupos de

personas: de un lado, aquéllas “que se hallaren en la habitación del que hubiere de ser notificado” y, de otro lado, “el vecino más próximo que fuere habido”. Creemos que existen diferencias notables, entre ambos grupos, en orden a la seguridad en la recepción por el destinatario.

Si comenzamos por el primer grupo indicado, diremos, que está formado por personas, que se encuentran dentro de la vivienda del destinatario y que son mayores de catorce años¹⁷⁸. Pensamos con el TC que estas personas sí ofrecen garantías suficientes de hacer llegar la notificación al destinatario: “es razonable entender que, en circunstancias normales, el emplazamiento de cualquier miembro de la familia en el domicilio familiar, al menos en los procesos civiles sobre derechos patrimoniales, es suficiente para evitar la indefensión, salvo que concurren factores excepcionales que co-

¹⁷⁸ Destaca SÁNCHEZ SÁNCHEZ (op. cit., pág. 1123) que “el límite de la edad para el receptor (ha de ser mayor de catorce años), también figura en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 372) y en el reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas (art. 83 del RD 1999/1981, de 20 de agosto); no obstante, en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común 3071992, de 26 de noviembre (art. 59), no se hace mención alguna de la edad del que recibe la cédula, bastando que conste su identidad, y en la Ley de Procedimiento laboral (art. 57.1) se exige que sea mayor de dieciséis años”.

GUASP DELGADO (op. cit., pág. 744) añade que “se olvida la ley de otras incapacidades distintas de la edad, p. e. la demencia, que también debieron haber sido mencionadas aquí con una fórmula genérica: p. e. exigiendo que no concorra en el receptor ninguna de las causas de incapacidad natural para ser testigo que señala el Cc”.

rresponde demostrar al que los alega” (STC 289/1993 de 4 de octubre).

Hace bien el TC en precisar ‘derecho patrimoniales’, porque, sin embargo, sí existen riesgos de que el notificado no reciba la comunicación procesal, cuando el juicio sea sobre derechos de familia y el pariente receptor de la cédula esté enemistado con el destinatario de la misma. La legislación no prevé este supuesto, que puede acarrear consecuencias fatales para el familiar destinatario de la notificación, que no se encuentre en su domicilio cuando aquélla se practique; sobre todo si se tiene por válida la comunicación, como en la STS 22.XII.95 (RJ 1995\9432): “La notificación del embargo del referido apartamento-bungalow, practicado en dicho juicio ejecutivo, y de la sentencia recaída en el mismo, fue practicada en el aludido domicilio conyugal y, al no hallarse en el mismo doña A.V.G., se extendió la diligencia correspondiente con su esposo don P.P.A., quien, al ser instruido en sus obligaciones como receptor de dicha notificación para su esposa, no hizo manifestación alguna en el sentido de que ésta tuviera un domicilio distinto, ni de que se hallaran separados de hecho, sino que manifestó quedar enterado y firmó, por lo que dicha notificación, como con acierto ha entendido la sentencia recurrida, fue practicada correctamente, conforme a los establecido en el artículo 268 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”¹⁷⁹.

¹⁷⁹ Nos parece desacertado este fallo y no concorde con la doctrina del TC citada en el texto principal, ya que si existen ‘factores excepcionales’ y quedan probados, la solución habría de ser declarar la invalidez de la notificación, ya que no ha

Pero, fuera estos casos, la notificación realizada a una persona que se encuentre dentro del domicilio del destinatario, precisamente por eso, sí garantiza, en nuestra opinión, la recepción de éste último. Los distintos sujetos que pueden recibir la comunicación, en este supuesto, son “el *pariente más cercano, familiar o criado*”. SÁNCHEZ SÁNCHEZ precisa: “al hacerse referencia al ‘*pariente más cercano*’, no se establece un límite, sino un orden de preferencia. Distingue la LEC entre ‘*pariente*’ y ‘*familiar*’, quizá pensando en la posible existencia de personas que, sin vínculos de consanguinidad o afinidad, tengan estrechas relaciones de amistad. (...) Cuando se habla de ‘*criado*’ ha de entenderse cualquier persona en situación laboral de dependencia respecto de aquel a quien va dirigida finalmente la cédula”¹⁸⁰.

Sin embargo, la notificación realizada “*al vecino más próximo que fuere habido*” presenta serios inconvenientes, como veremos a continuación. Antes, podemos precisar con GUASP DELGADO qué hay que entender por ‘*vecino más próximo*’. “Por ‘*vecino*’ debe entenderse una persona que habite en las proximidades del destinatario de la notificación, no siendo aplicable aquí el concepto de vecindad según el derecho administrativo; no se señalan límites a tal proximidad porque la ley quiere garantizar que alguien, en último término, se haga cargo de la cédula de notificación; la mayor o menor

cumplido su fin, por no llegar en tiempo oportuno a su destinatario. Lo contrario sería estar a favor de un cumplimiento formal de los requisitos legales, que no garantiza, como exige el TC, la efectividad de las notificaciones.

¹⁸⁰ SÁNCHEZ SÁNCHEZ: op. cit., pág. 1112.

proximidad sirve, no obstante, de criterio para elegir un vecino a otro puesto que debe entregarse al vecino '*más próximo*' que fuere habido; se comprende que este requisito de la mayor proximidad ha de aplicarse de modo prudencial y sin ningún carácter rigorista: basta señalar, por ello, en líneas generales, que serán preferidos los vecinos de la misma casa, comenzando por el portero¹⁸¹, que es a estos efectos, un vecino, a los de las casas inmediatas y los de éstas a los restantes de la misma calle"¹⁸².

En la práctica, cuando se quiere notificar a una persona a través de su vecino, se encuentran muchas dificultades, que resume con acierto y gran conocimiento de la realidad del foro SÁNCHEZ SÁNCHEZ: "(...) pues el receptor puede no coincidir en horarios con la persona a quien se dirige la notificación o encontrarse en mala relación con él; estas circunstancias pueden hacer prácticamente imposible cumplir con el cometido que se le ha encargado; de ahí que, frecuentemente, quien recibió la cédula se limite a depositarla en el buzón del notificado, quedando incumplido el mandato de la ley. Para llegar a ese resultado, habría bastado con que la ley hu-

¹⁸¹ La consideración del portero como 'vecino' a los efectos del art. 268 es antigua; ya aparece en la STS 15.XII.14. Incluso, algunos funcionarios que practican notificaciones apoyan esa opinión en una Ordenanza de Trabajo de Empleados de Fincas Urbanas, aprobada por Orden ministerial de 13 de marzo de 1974, que en su art. 14 expone las obligaciones específicas de estos trabajadores, y el párrafo 4º de este artículo expresa lo que sigue: "*se hará cargo de la correspondencia o avisos que reciba para los ocupantes del inmueble y para la propiedad o administración de la finca, haciéndolo llegar a manos del destinatario con la mayor diligencia*".

¹⁸² GUASP DELGADO: op. cit., pág. 745.

biese permitido al notificador depositar la cédula, directamente, en el buzón.

“También es posible que, a pesar de la buena voluntad del receptor de la cédula, por ocupaciones o viajes suyos, del notificado o de ambos, el destinatario reciba la cédula transcurridos los plazos para poder actuar en el proceso, cuestión no siempre fácil de demostrar, con los posibles perjuicios que este hecho puede causar.

“En la práctica los funcionarios notificadores se encuentran, por tanto, con muchos obstáculos no previstos en la ley que dificultan el cumplimiento de su función. Así, por ejemplo, no está previsto en la LEC el supuesto de que quien ha de recibir la cédula se niegue a hacerlo, lo que cada vez sucede con más frecuencia. Aunque es indudable que esa conducta puede dar lugar al delito del art. 237 del CP o la falta del art. 570 del mismo texto legal (se refiere a la desobediencia a la autoridad), ello exige una prueba que tampoco es fácil de conseguir.

“Tampoco está prevista en la ley la solución para el supuesto de que, existiendo portero automático, nadie quiera abrir al funcionario notificador, con lo que ni siquiera éste llega a conocer con quien habló.

“Todo lo expuesto da lugar, en muchas ocasiones, a graves deficiencias en las notificaciones que se practican y, a veces, a grandes retrasos en la tramitación de los procesos. Indudablemente tales dificultades no justifican nunca la infracción de lo exigido por la ley y la publicación de edictos, pues ello conllevaría la realización de un acto viciado de nulidad, según el art. 238 de la LOPJ, y que le-

sionaría el art. 24 de la Constitución, como tiene declarado, reiteradamente, el Tribunal Constitucional”¹⁸³.

De la cita anterior se deduce que puede haber casos en los que, pese a que se cumpla literalmente con el tenor de la ley, la notificación no sea eficaz. Es decir, es posible que se entregue la cédula a quien la ley habilita y se observen todas las formalidades que para dicha cédula se exigen y, sin embargo, la notificación no llegue a su destinatario. Esto puede ocurrir por la simple pasividad del receptor, como en el caso de la STC 25/1996 de 13 de febrero, en el que se entregó la cédula de citación a una empleada del hogar de uno de los vecinos del edificio y no la hizo llegar a su destinatario. Pero también puede darse por la malicia del vecino receptor, como en el supuesto de la STC 39/1996 de 11 de marzo, donde aquél retrasó dolosamente la entrega de la cédula a su destinatario, ya que era arrendatario de un local afectado por las obras en litigio, y había declarado como testigo de la parte contraria y estaba interesado en que el destinatario no recurriera la sentencia objeto de notificación.

El problema está en que, como en los ejemplos mencionados, se considere por el órgano juzgador que la notificación así realizada es válida, ya que se ajusta a la legalidad vigente, y se desoigan las alegaciones del destinatario que no recibió oportunamente su notificación sin tener en esto culpa alguna. En esos casos el TC vino a

¹⁸³ SÁNCHEZ SÁNCHEZ: op. cit., pág. 1124.

corregir la falta de la notificación y declaró su nulidad por entender que suponía una lesión del art. 24.1 CE¹⁸⁴.

Luego si el cumplimiento escrupuloso de la ley lleva, ante un mismo supuesto, en multitud de ocasiones, a la ineficacia de un modo concreto de llevar a cabo las notificaciones, parece claro que lo que falla es, precisamente, esa previsión legal. Nosotros somos partidarios de limitar las notificaciones que se practiquen a los vecinos de los destinatarios a los solos supuestos en que el vecino en cuestión acepte voluntariamente el encargo de dar traslado de la notificación a quien corresponda. La supresión total de ese modo de notificar conllevaría también bastantes dificultades, porque, en ocasiones, es el único remedio que queda para intentar realizar la notificación personal antes de acudir a los edictos.

Somos conscientes de que la limitación apuntada también es problemática, ya que, si en la actualidad es difícil convencer a los

¹⁸⁴ En la STC 25/1996 se declara: "La ausencia de entrega de la cédula de citación, habría así provocado en el presente caso, que se haya producido indefensión material en el recurrente de amparo, que no ha tenido conocimiento de la citación efectuada, ni de la convocatoria para la celebración de vista oral, sin que le pudiera ser imputada falta de diligencia alguna, toda vez que no consta que conociera el señalamiento realizado, ni tuviera medio alguno para conocer, como ya se indicó, la existencia de un procedimiento judicial seguido contra él, del que ninguna noticia había tenido hasta el momento fáctico de la notificación de la Sentencia recaída". Por su parte, la STC 39/1996 concluyó que "la negativa del órgano judicial a enjuiciar los motivos alegados por la promotora del presente recurso de amparo, al limitarse exclusivamente a examinar la regularidad formal de la diligencia acreditativa de la práctica de la notificación a través de tercera persona, ha supuesto una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE".

vecinos de que acepten las notificaciones ajenas, en la medida en que se deje un margen mayor de libertad, esa dificultad puede crecer considerablemente. Pero como contrapartida se obtendrá una cierta seguridad de que la notificación realizada mediante el vecino del destinatario llegará a su fin; ya que se pretende que el Oficial actuante encargue una notificación sólo al vecino que le ofrezca una garantía suficiente de que va a cumplir su cometido, por la disposición favorable con que recibe ese encargo.

Por último, señalamos que el art. 268 LEC parece tomar en consideración exclusivamente las notificaciones realizadas a las personas físicas en su domicilio, al prever como receptores subsidiarios sólo los casos de parentesco, servicio o vecindad. Según GUASP DELGADO, si se hubiese pensado en las personas jurídicas, se habría fijado también “en la dependencia como una de las relaciones que justifican la recepción de la cédula y que tiene, en ocasiones, mayor importancia que algunas de las expresamente mencionadas; piénsese p. e. en el empleado de un banco o en el dependiente de una casa comercial”¹⁸⁵.

¹⁸⁵ GUASP DELGADO: op. cit., pág. 743-744. En relación con esto, es de destacar que, en la “Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil” (op. cit., pág. 277) se propuso incluir la dependencia y abrir más el abanico de receptores subsidiarios: “La copia literal de la resolución será entregada al propio interesado y, caso de no ser habido, al pariente más cercano, familiar o dependiente mayor de catorce años que se hallaren en la habitación del interesado, o al encargado del hotel o apartamento donde éste habite; y si no se encontrare a nadie en esos lugares, al vecino más próximo que fuere habido” (art. 236 propuesto).

Así, en la ley no se hace ninguna previsión para los supuestos en los que el sujeto pasivo de la notificación sea una persona jurídica. En estos casos, en la práctica, lo que se suele hacer es, primero, intentar la notificación personal al representante legal de la entidad a la que se notifique, y si éste, en el momento de practicar la notificación, no está, se notificará por cédula a cualquiera de los empleados que en ella trabajen¹⁸⁶.

En ocasiones, cuando el destinatario del acto de comunicación es una empresa, en el domicilio al que se acude, no quieren hacerse cargo de la notificación e indican que ésta ha de enviarse al domicilio social, que está en otra ciudad. Si esto se acredita en la diligencia, la notificación se devuelve al Juzgado de origen para que, por exhorto, haga que la comunicación siga su curso. De todas formas, hay que tener en cuenta la STS 4.VI.91 (RJ 1991\4417) en la que se establece que es válido como receptor de la comunicación el representante regional de la compañía mercantil en lugar diferente al de su domicilio social.

¹⁸⁶ En algunas ciudades grandes, hay un buen número de empresas (bancos, aseguradoras, grandes compañías, etc.) que, por su frecuente número de pleitos, reciben los actos de comunicación en la propia sede del Servicio Común de Notificaciones, sin que tenga que acudir un Oficial de este servicio a su domicilio social a practicar el acto de comunicación.

CAPÍTULO 4:
EFICACIA E INEFICACIA
DE LA NOTIFICACIÓN PROCESAL.

4.1. VALIDEZ, NULIDAD Y SUBSANACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN PROCESAL.

4.1.1. La validez según el principio de recepción y la nulidad de las notificaciones.

Como ya señalamos, el tenor del art. 279 LEC es el que sigue:
“Serán nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto en esta sección.

Sin embargo, cuando la persona notificada citada o emplazada se hubiere dado por enterada en el juicio, surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho con arreglo a las disposiciones de la ley.

No por esto quedará relevado el actuario de la corrección disciplinaria en el artículo que sigue”.

Si examinamos el precepto citado, interpretando *a sensu contrario* su párrafo primero, llegamos fácilmente a la conclusión de que la validez de las notificaciones depende de que, al realizarse, se observen las normas dispuestas en la sección de la LEC reguladora de aquéllas. En palabras de DE LA OLIVA SANTOS, “las notificaciones de toda especie surten efecto no según su eficacia material (que se reciba realmente la comunicación pretendida), sino según su regularidad formal (que se cumplan todos los requisitos legalmente establecidos para su práctica)”¹⁸⁷. Es decir, una notificación será válida en cuanto se acredite en las actuaciones que se ha llevado a cabo del modo previsto en alguna de las cuatro formas establecidas legalmente para su realización, esto es, cuando quede constancia de su recepción por cualquiera de los sujetos que la ley permite.

Por eso, se dice, y citamos a GÓMEZ-ORBANEJA, que “las notificaciones están regidas por el principio de recepción, no por el principio de conocimiento. O sea, que producen plenamente sus efectos cuando se observen todas las reglas establecidas por la ley para que el acto notificado llegue a su destinatario, sin que sea necesario —ni tampoco suficiente— probar que el destinatario ha tenido, en efecto, conocimiento del contenido del acto”¹⁸⁸. En el mismo sentido, ORTELLS RAMOS, afirma: “Los actos de comunicación están destinados a crear un estado de conocimiento en su destina-

¹⁸⁷ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 172.

¹⁸⁸ GÓMEZ-ORBANEJA: op. cit., pág. 217. Con parecidos términos, SÁNCHEZ SÁNCHEZ (op. cit., pág. 1110) y COMELLAS SALMERÓN (op. cit., pág. 951).

rio, pero ello no significa que su perfeccionamiento, la producción de efectos jurídicos ligados a ellos, dependa de que dicho conocimiento se haya logrado efectivamente. La plena producción de sus efectos jurídicos por los actos de comunicación depende de su realización válida, es decir, de haberse practicado con cumplimiento de los requisitos legales que han sido expuestos”¹⁸⁹.

Entre los efectos jurídicos que la notificación válidamente realizada produce, RAMOS MÉNDEZ cuenta los siguientes: “Las notificaciones efectuadas regularmente hacen llegar a conocimiento de los interesados una resolución del Tribunal. Por ello su efecto principal es el efectivo cumplimiento del principio de audiencia de los interesados en relación con las alegaciones de la otra parte y las decisiones del Tribunal. Dicho momento determina asimismo el nacimiento de nuevas expectativas y cargas procesales respecto de la parte notificada. Entre otras cosas, debido a la dinámica del proceso, la notificación marca el *dies a quo* para el cómputo de los términos y plazos procesales”¹⁹⁰. En relación con este último punto, el art. 303 LEC establece que, “*los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento*”.

Y si los actos de comunicación son válidos cuando se ajustan a la legalidad, por el contrario, como se indica en el tenor literal del

¹⁸⁹ ORTELLS RAMOS: op. cit., pág. 399.

¹⁹⁰ RAMOS MÉNDEZ: op. cit., pág. 384.

art. 279 I LEC, “*serán nulas las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto en esta sección*”, y “*con nulidad radical*”, como dice DE LA OLIVA SANTOS¹⁹¹, aunque los defectos en las notificaciones sean subsanables (como se observa en el segundo párrafo del mismo precepto). En puridad, como señala el mismo autor, si se considera la nulidad radical desde un punto de vista ontológico debería definirse, al igual que la nulidad relativa y la irregularidad, “*por la singularidad de sus respectivas causas*”¹⁹², es decir, *por la esencia de sus defectos*; lo que nos llevaría a distinguir la nulidad absoluta (o radical), de la relativa (o anulabilidad), en que la primera debería causarse siempre por defectos insubsanables, mientras que la segunda lo sería por faltas que por el contrario pueden subsanarse.

Sin embargo, desde una perspectiva procesal, “son más bien los efectos jurídicos distintos los elementos que perfilan expresivamente la diferenciada realidad de los actos nulos, anulables e irregulares”. Por tanto, “hay nulidades absolutas provocadas por vicios o defectos subsanables y hay vicios insubsanables, en sí mismos, que no originan nulidad radical, sino simple anulabilidad”. Precisamente, como ejemplo de lo primero, “el defecto en el emplazamiento en primera o segunda instancia se subsana mediante la comparecencia

¹⁹¹ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 172.

¹⁹² DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 136.

(como los defectos en cualesquiera notificaciones) y, sin embargo, vicia con nulidad radical todo lo actuado”¹⁹³.

En relación con los distintos efectos que provocan, se puede decir que “la declaración de nulidad absoluta produce efectos *ex tunc*, esto es, desde el momento de la realización del acto radical o absolutamente nulo”; y en la nulidad relativa, “la declaración surtiría efectos *ex nunc*, esto es, desde ella misma, justamente porque lo que habría sería una anulación y no la declaración de una nulidad preexistente”¹⁹⁴. (Y, para completar el cuadro, la irregularidad de un acto no conlleva “ninguna consecuencia en el plano procesal propiamente dicho, sino sólo en el administrativo o disciplinario”)¹⁹⁵.

Así, cuando una notificación sea defectuosa, por incumplimiento de algún requisito legal, será nula de pleno derecho; y cuando esta nulidad radical se declare, como consecuencia, provocará la ineficacia del acto de comunicación y de todas las actuaciones subsiguientes que de él dependan.

4.1.2. La subsanación de las notificaciones defectuosas.

Pero, ¿qué ocurre si la notificación defectuosa llega a conocimiento puntual y oportuno del destinatario, aunque exista una falta

¹⁹³ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 136.

¹⁹⁴ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 135.

¹⁹⁵ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 137.

en el acto de comunicación? En estos casos, como adelantábamos, el interesado podrá subsanar esa falta: *“cuando la persona notificada, citada o emplazada se hubiere dado por enterada en el juicio, surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho con arreglo a las disposiciones de la ley”* (art. 279 II LEC). Es decir, la subsanación operará si el acto de que se trata llega a conocimiento del interesado, pese al defecto en la comunicación, y éste “se comporta conscientemente como si la notificación hubiese sido practicada con arreglo a todas las prescripciones legales (no es suficiente, por tanto, con saber que el ‘notificado’ se enteró realmente de la resolución objeto de la notificación defectuosa)”¹⁹⁶.

En ese último sentido, precisa con acierto GUASP DELGADO que “es erróneo creer que lo decisivo para la convalidación sea la práctica de un acto que demuestre el conocimiento efectivo que tiene el destinatario de la comunicación; si fuera así no cabría que la parte impugnara en ningún caso la actividad defectuosa porque dicha impugnación demuestra precisamente que la parte conoce el vicio de que se trata y la existencia del acto mismo; lo que es preciso, por tanto, es la demostración de una voluntad incompatible con la voluntad de impugnar la comunicación: la ley no dice que ésta

¹⁹⁶ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 172. Con parecidos términos, ORTELLS RAMOS señala que *“darse por enterado en el juicio supone adoptar en él una conducta congruente con el acto de comunicación imperfectamente realizado. Otra opción del destinatario es instar la declaración de nulidad y la reproducción del acto de manera válida”* (op. cit., pág. 400).

producirá efectos cuando el destinatario se entere sino cuando se dé por enterado. Ahora bien, para ello tampoco es necesaria una declaración expresa de querer convalidar el acto defectuoso; basta con la aceptación tácita o presunta del mismo, mediante la realización de una conducta procesal inequívoca”¹⁹⁷.

Es de destacar que el último autor citado considera que la subsanación puede producirse de dos maneras: una, por ‘convalidación’, cuando el destinatario demuestra una voluntad de sanar el acto; y otra, por ‘no invalidación’, cuando se declara o manifiesta una “voluntad abdicativa que renuncia a anular el acto defectuoso y a producir su eficacia”¹⁹⁸. Apoya esta distinción en la opinión de que los defectos en las notificaciones pueden producir, tanto la nulidad, como la anulabilidad (aparte de la irregularidad y la inexistencia), de tal manera que los actos nulos se pueden convalidar, mientras que los anulables se subsanarán si no se invalidan.

Nosotros, como hemos dicho, somos de la opinión de que todos los defectos a que se refiere el art. 279 LEC provocan la nulidad absoluta; y esto, aparte de por la difícil calificación en distintas categoría de los defectos que pueden tener lugar en la práctica de las notificaciones, sobre todo, porque, cualquiera que sea ese defecto, la consecuencia será la misma en todos los casos en que se declare la existencia de un vicio que provoca la nulidad de la notificación: se

¹⁹⁷ GUASP DELGADO: op. cit., pág. 764.

¹⁹⁸ GUASP DELGADO: op. cit., pág. 765.

dejará sin efecto esa notificación y se invalidarán las actuaciones subsiguientes. Esto ocurrirá aunque se diga —a nuestro entender, erróneamente— que se ha ‘anulado’ la notificación viciada, en lugar de decir —como sería lo correcto— que se ha ‘declarado su nulidad’.

Sin embargo, aunque disintamos de la distinción de defectos en la que GUASP DELGADO basa la doble configuración de la ‘subsanción’ de notificaciones defectuosas, sí nos parece aprovechable la consideración de que aquélla puede producirse de dos maneras distintas. La primera, como hemos dicho, mediante la manifestación de voluntad —del destinatario— de convalidar el acto de comunicación viciado, cuando ese vicio no le ha provocado ningún menoscabo procesal porque de lo contrario lo impugnaría. La segunda manera de producirse la subsanción tiene lugar cuando el defecto en la notificación se le imputa al interesado, debido a su pasividad o negligencia, en la medida en que éste tiene conocimiento puntual del acto defectuosamente notificado y sin embargo no actúa de modo oportuno.

El destinatario de una notificación defectuosa, que pese a serlo llega a su conocimiento, puede, o bien tenerla por válida si no daña sus derechos y oportunidades procesales, o bien impugnarla cuando sí suceda eso último. Lo que no puede hacer es dejar que las actuaciones avancen sin hacer notar la falta y, posteriormente, cuando sea de su interés, pretender la declaración de nulidad de una notificación, que si bien inicialmente fue nula, luego ha quedado subsanada, precisamente por su pasividad o negligencia.

En ese sentido, nuestros tribunales imputan la falta en la notificación al destinatario que, teniendo conocimiento de la misma, no solicita la 'subsanción' de la falta en la primera oportunidad procesal que tenga¹⁹⁹. A título de ejemplo, en la STS 14.VII.83 (RJ 1983\4223) se recuerda que "constituye un principio general el de que cualquiera que fueren los defectos de las notificaciones, emplazamientos o citaciones, la falta queda corregida, como muy bien dijo el Tribunal 'a quo', por la constitución del interesado en el proceso sin pedir, de modo inmediato, la subsanción del defecto [SS de 4 febrero 1904, 9 febrero y 1 marzo 1965, (RJ 1965\535), y 31 diciembre 1969 (RJ 1969\6217)]"²⁰⁰. El problema está en que, en estos ca-

¹⁹⁹ "El necesario enlace de unas diligencias judiciales con otras requiere que los errores se subsanen inmediatamente, no pudiendo decirse que se pidió la subsanción si no se utilizaron en tiempo los recursos legales contra las resoluciones origen de la falta y careciendo de eficacia la tardía alegación de infracciones procesales si fueron consentidas en algún momento en que pudo recurrirse, pues en este punto es preciso constante oposición y protesta [Sentencias de 28 de septiembre de 1948 (RJ 1948\1129), 28 de junio de 1952 (RJ 1952\1528), 3 de octubre de 1963 (RJ 1963\3963) y 14 de mayo de 1968 (RJ 1968\3734), entre otras]".

²⁰⁰ En particular, para apreciar la existencia de indefensión en el recurso de casación por infracción de una norma "*de las que rigen los actos y las garantías procesales*" (art. 1692.3º LEC), como son las que regulan las notificaciones, el art. 1693 exige "*que se haya pedido la subsanción de la falta o transgresión en la instancia que se hubiere cometido y que, de haberlo sido en la primera instancia, se reproduzca en la segunda*". Como ejemplo, la STS 4.VI.91 (RJ 1991\4417) dice que el quebrantamiento de forma por falta de emplazamiento "no produce indefensión, cuando habiendo podido pedir la subsanción de la falta no se hizo como debe hacerse en el primer escrito de personación al tiempo que se apelaba". Según la STS 10.VI.93 (RJ 1993\5407), "los defectos formales no denunciados en el oportuno momento procesal carecen de trascendencia en cuanto imputable a la inercia de la parte su no corrección, no siendo por tanto de tener en cuenta en casación".

Y es que, como se dice en la STS 13.VII.95 (RJ 1995\6005), "la finalidad de los actos de comunicación procesal consiste en llevar al conocimiento per-

sos, el término 'subsana' lleva a la confusión, porque no quiere decir que el interesado quiera 'sanar' el defecto, en el sentido de 'convalidarlo', sin más bien todo lo contrario: quiere 'impugnar' ese defecto. Así, en esos supuestos, si no se impugna oportunamente, queda el defecto 'subsana' por su 'no invalidación', en los términos de GUASP²⁰¹.

sonal de los litigantes las decisiones y resoluciones judiciales, a fin de que puedan adoptar la conducta procesal que consideren oportuna en defensa de sus derechos e intereses, buscando por ello, siempre que sea factible, el emplazamiento personal, como máxima garantía; pero, producido tal conocimiento, ha de facilitarse la continuación del proceso; (...) y si esto ocurre, aunque el acto de comunicación adoleciere de alguna irregularidad, debe producir plenos efectos, pues lo que no puede proteger el derecho es el desinterés, la pasividad o negligencia del interesado que adquirió, a pesar de un posible defecto de comunicación, conocimiento del acto o resolución judicial por otros medios distintos, supuesto en el que no puede alegar indefensión, al depender su conducta activa o pasiva de su exclusiva conveniencia y acomodo".

²⁰¹ Lo que ocurre es que con el mismo término, 'subsana', se está haciendo referencia a tres cosas distintas, a tres conductas diferentes del destinatario de una notificación defectuosa; lo cual puede llevar a equívocos y, por tanto, quizás sea preferible el empleo de distintos términos para designar las distintas conductas. Se podría reservar el empleo del término '*subsana*' para designar aquella conducta del destinatario por la que manifiesta, expresa o tácitamente, pero de modo voluntario, su intención de no tomar en cuenta el defecto en la notificación y de comportarse como si éste no se hubiera producido (es decir, para los casos del art. 279 II). Si lo que pretende el interesado es dejar sin efecto la notificación que adolece de un vicio, y que se repongan las actuaciones al estado anterior a ese defecto, para recuperar las oportunidades procesales que haya podido perder, en este caso, la acción realizada por el notificado responde más propiamente al término '*impugnar*', que a la expresión 'pedir la subsana de la falta' (la cual se utiliza en el art. 1693 LEC). Por último, si el destinatario de una notificación defectuosa no impugna oportunamente el defecto, ese vicio, más que quedar 'subsana', lo que ocurrirá es que se le '*imputa*' al propio interesado, y esto por su pasividad o negligencia, no por su voluntad de 'sanar' o 'convalidar' la falta. Aunque en algunos casos las consecuencias

Cuando el destinatario de un acto de comunicación viciado de nulidad subsana la falta, dispone el art. 279 LEC que *"surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho con arreglo a las disposiciones de la ley"*. Es decir, la notificación defectuosa que se convalida producirá sus efectos, no desde el momento de su realización, sino desde aquél en que el destinatario se da por enterado de esa notificación en el juicio, es decir, *"es eficaz desde el momento en que se produzca esa conducta"*²⁰². Por tanto, si del acto de comunicación defectuoso se deriva un plazo o término para que el notificado se persone o comparezca, o para que realice una determinada actuación procesal, ese plazo o término empezará a correr al día siguiente de que el destinatario subsane la falta, y no *"desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o notificación"*, como dice el art. 303 LEC.

Parece muy lógico que si el destinatario de la comunicación acepta a convalidar una notificación viciada de nulidad por un defecto —en principio— del órgano que la emitió, será porque al subsanarla no pierde las oportunidades o derechos procesales que se deriven de esa notificación, porque, si así no fuera, lo que haría sería impugnarla. Esto, que es tan claro, no se entiende con tanta faci-

sean las mismas, como en el primer caso citado y en el tercero, en los cuales se tiene por buena la notificación defectuosa, sin embargo, la utilización de distintos términos sirve para mostrar la diferente actitud de su destinatario.

²⁰² ORTELLS RAMOS: op. cit., pág. 400. En el mismo sentido, decía GÓMEZ-ORBANEJA: "Surtirá entonces la notificación irregular sus efectos, pero no desde el día que se hiciera, sino desde el día en que se dé por enterado aquél" (op. cit., pág. 217-218).

lidad por nuestros tribunales; por ejemplo, en la STS 20.VI.92 (RJ 1992\5363) se considera subsanado un emplazamiento que se ha realizado defectuosamente porque el destinatario se personó en las actuaciones, y sin embargo, no se le deja contestar a la demanda. ¡Curioso concepto de ‘sanación’ de un acto incorrecto, insistimos, por defecto del tribunal, cuando de ella se deriva una situación perjudicial para quien no tiene culpa!²⁰³

En los casos en que el destinatario de un acto de comunicación viciado de nulidad se da por enterado en el juicio, y por esto se tenga por subsanado el defecto y, sin embargo, no se repongan al interesado las oportunidades que ha perdido, en esos supuestos, se provocará la indefensión del así notificado al privarle injustamente de medios de defensa a los que tenía derecho. Un ejemplo claro de esto, a nuestro entender, tiene lugar cuando aquél no logra que se retrotraigan las actuaciones al momento del emplazamiento, el cual fue defectuoso y le llevó a no tener noticia del pleito hasta que se le notificó la sentencia en primera instancia; ya que el TS considera que se satisface de manera suficiente el derecho de defensa porque el recurso de apelación “le fue admitido, y en esa segunda instancia,

²⁰³ Afortunadamente, ejemplos existen en los que se considera subsanado un emplazamiento incorrecto, no sólo porque el destinatario se haya personado, pese al defecto, sino también en la medida en que ha tenido ocasión de contestar a la demanda, como en la STS 13.XII.94 (RJ 1994\10702).

a petición suya, se recibió el pleito a prueba y propuso toda la que estimó convenirle” (STS 15.XI.88, RJ 1988\8449)²⁰⁴.

Nos parece desacertada la solución anterior, ya que, aunque en la segunda instancia se puedan subsanar algunas actuaciones²⁰⁵, lo que no parece subsanable en sí mismo es que se pierda —de modo completo— el derecho a la doble instancia que tienen todas las partes procesales, permitiéndose así una situación de desventaja procesal del demandado frente al actor, que choca frontalmente contra la igualdad. Así lo ha declarado el TC en su sentencia 182/1983 de 18 de noviembre: “la garantía del artículo 24 de la CE implica el derecho a no sufrir indefensión por falta de emplazamiento en cualquiera de las instancias, sin que pueda entenderse corregida o subsanada la indefensión por falta de emplazamiento producida en la primera por el hecho de que la comparecencia en apelación ni aún cuando en esta vía haya conocido el Tribunal *ad quem* sobre el fondo del asunto”.

²⁰⁴ En el mismo sentido, las SSTS 3.IV.87 (RJ 1987\2486) y 30.I.95 (RJ 1995\388).

²⁰⁵ Como en el ejemplo que se ofrece en la STS 27.II.95 (RJ1995\1647): “la estimación de un motivo de casación cuando lleva aparejada indefensión de la parte que la aduce, y es lo cierto que en el supuesto de autos no se produjo ninguna clase de indefensión, pues la única que se alega, que es la del acortamiento del plazo para pedir de nuevo la confesión del Alcalde del Ayuntamiento demandado, que ya había prestado anteriormente confesión judicial, fue sanada en la segunda instancia, accediéndose a la práctica de una nueva prueba de confesión, por lo que, inexistente la indefensión de los actores, no cabe estimar este primer motivo, que debe, así, ser rechazado”.

De la misma opinión es BACHMAIER WINTER, que cita a su vez otra sentencia del TC: "La ausencia involuntaria del demandado durante la primera instancia no se subsana sin más con la posibilidad de apelar, pues con ello se estaría privando realmente al declarado rebelde de una verdadera segunda instancia y, en consecuencia, quedaría situado en una posición de desigualdad procesal contraria a los principios del art. 24 de la Constitución. Así lo ha declarado expresamente el Tribunal Constitucional en STC 195/1990 de 29 de noviembre (FJ 5º), con referencia a un caso de falta de correcto emplazamiento en el que se cuestionaba la existencia de indefensión en relación con la facultad de que dispone el demandado para recurrir en apelación: 'las garantías constitucionales del proceso son exigibles en todas y cada una de las fases del mismo, porque tener un derecho a una doble instancia supone tener derecho a ser oído y defenderse en ambas. Y verse privado de hacerlo en una, acarrea la privación de una posibilidad legalmente ofrecida, que es precisamente la de poder defenderse ante dos tribunales distintos'"²⁰⁶.

4.1.3. Introducción del principio de conocimiento en las notificaciones ineficaces.

Hemos considerado qué ocurre cuando la notificación se practica de acuerdo con sus normas reguladoras y llega a conocimiento

²⁰⁶ BACHMAIER WINTER: *La rebeldía en el proceso civil norteamericano y español*, Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1994, pág. 237.

del interesado (será válida y producirá todos sus efectos); también hemos visto lo que pasa en los casos en que se incumple alguna exigencia legal, que provoca el desconocimiento oportuno de la comunicación por su destinatario (estará viciada de nulidad radical); al igual que sabemos que si el notificado, pese al vicio en la comunicación, obtiene conocimiento de la misma puede, o bien darse por enterado en el juicio (y así subsanará la notificación defectuosa), o bien impugnar ese defecto (lo que hará normalmente cuando por éste haya perdido oportunidades procesales). Sin embargo, queda por estudiar un supuesto (que pasa un tanto desapercibido a la doctrina): ¿qué ocurre cuando se observan todas las formalidades legales y, sin embargo, el acto de comunicación no llega a su destinatario?²⁰⁷

En esos casos, si se atiende al denominado 'principio de recepción', la solución será tener por válida la notificación, puesto que se han respetado todas las normas que rigen la comunicación procesal, y constará en las actuaciones un 'acto escrito' del que se derive la 'recepción' por un sujeto válido, como puede ser: una diligencia firmada por un vecino, o un acuse de recibo firmado por un familiar. Sin embargo, como es obvio, en estos supuestos, la notificación no

²⁰⁷ Realmente llama la atención el caso en el que, pese a que se observan escrupulosamente los requisitos que la ley impone en la práctica de las notificaciones, se llega a la invalidez del acto de comunicación. Llama a la atención, pero así sucede, como vimos al tratar de las notificaciones realizadas por medio de un receptor subsidiario; supuesto éste —aunque no el único— en el que con alguna frecuencia ocurre lo indicado. Desde luego, una de las cosas que manifiestan claramente estos supuestos es que, en algunos casos, la legislación es deficiente.

ha cumplido su fin esencial, cual es, que llegue a conocimiento del interesado la resolución que se comunica, para que éste pueda adoptar una conducta defensiva²⁰⁸. Luego, si se resuelve conforme al principio de recepción, el resultado puede ser injusto, al tener por notificado a alguien que desconoce completamente el acto que se le comunica y, además, por causas ajenas a su voluntad.

Pese a lo cual, en algunas sentencias, el TS se atiene al principio citado. En la STS 17.V.93 se invoca expresamente el principio de recepción y la solución del caso viene de su mano: un acreedor hipotecario insta la subasta de una finca, garantizada por hipoteca, y cede el remate a favor de un tercero que adquiere la finca subastada. La citación para la subasta se realiza, cumpliendo todas las formalidades legales, en la persona del conserje de la finca, el cual no llega a entregar la notificación a los dueños de la casa; éstos, desconociendo lo anterior, venden a su vez la casa a otra persona diferente. Luego, la citación practicada de ese modo provoca un perjuicio claro al notificado y a terceros. Sin embargo, como se cumplen los requisitos legales del art. 268, se tiene por válido ese acto de comunicación²⁰⁹.

²⁰⁸ STC 121/1988 de 21 de junio: "(...) los actos de comunicación del órgano jurisdiccional con las partes poseen una especial trascendencia, ya que son los medios idóneos para que la tutela judicial sea efectiva, como exige el art. 24 de la Constitución. Sólo mediante el conocimiento de las resoluciones judiciales pueden las partes adoptar una conducta defensiva (...)".

²⁰⁹ Efectivamente, en esa sentencia se dice, de un lado, que "los actos judiciales de comunicación de resoluciones se rigen por el principio de la recepción y no

De la misma manera, como ya señalamos, la STS 22.XII.95 (RJ 1995\9432) consideró válida la notificación que se realizó a una señora en la persona de su marido, el cual no manifestó que se hallaba separado de ella y que ésta vivía en un domicilio distinto; ello provocó que se embargara el piso de la referida señora sin su conocimiento²¹⁰.

por el del conocimiento y que, en concordancia con ello, los requisitos que establece el art. 268 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vienen establecidos en función de que quede debidamente constatada la identidad del receptor de la cédula". Y de otro: "los requisitos exigidos por el citado artículo 268 aparecen cumplidos en la diligencia a que nos venimos refiriendo, como acertadamente han entendido las coincidentes sentencias de la instancia, ya que al haber de practicarse la notificación y citación a los señores (...), al no ser hallados los mismos en el referido domicilio, el Secretario judicial practicó la notificación y citación por medio de cédula (art. 266 de la citada Ley Procesal Civil), que fue entregada a una persona que quedó plenamente identificada por medio de sus apellidos (señor C.R.) y que, como se ha dicho al examinar el motivo anterior, era el recepcionista o conserje del mencionado edificio, con lo que es debidamente conocida la relación que le unía con los destinatarios de la notificación y citación, a quienes el referido y totalmente identificado recepcionista o conserje quedó obligado a entregarles la cédula tan pronto como regresaran o de pasarles el oportuno aviso".

²¹⁰ Aunque ya hemos hecho referencia a esta sentencia en epígrafes anteriores, tiene interés reproducir aquí su cita: "La notificación del embargo del referido apartamento-bungalow, practicado en dicho juicio ejecutivo, y de la sentencia recaída en el mismo, fue practicada en el aludido domicilio conyugal y, al no hallarse en el mismo doña A.V.G., se extendió la diligencia correspondiente con su esposo don P.P.A., quien, al ser instruido en sus obligaciones como receptor de dicha notificación para su esposa, no hizo manifestación alguna en el sentido de que ésta tuviera un domicilio distinto, ni de que se hallaran separados de hecho, sino que manifestó quedar enterado y firmó, por lo que dicha notificación, como con acierto ha entendido la sentencia recurrida, fue practicada correctamente, conforme a los establecido en el artículo 268 de la Ley de Enjuiciamiento Civil"

Sin embargo, últimamente el TC viene a corregir el excesivo formalismo de ese principio, y si la parte que ha sido notificada de manera correcta, es decir, con observancia de las exigencias que la ley establece, sin embargo, no llega a alcanzar conocimiento puntual del acto de comunicación en cuestión sin mediar responsabilidad de su parte, podrá alegar y probar ese desconocimiento inculpable y obtener así la nulidad de la notificación. Esta es la solución a la que se llega en recientes sentencias, como las ya señaladas al estudiar la notificación al vecino del destinatario, SSTC 25/1996²¹¹ y 39/1996²¹².

²¹¹ Recordamos que en esta sentencia se resuelve un recurso de amparo en el que “el recurrente alega la vulneración del art. 24.1 CE, al habérsele provocado evidente indefensión por su desconocimiento de la citación para la celebración de vista pública... como consecuencia de la entrega de la cédula de citación... a una empleada del hogar de uno de los vecinos del edificio, que a su vez no se la entregó al ahora recurrente en amparo previamente a la celebración del juicio” (F.J. 1º). “La ausencia de entrega de la cédula de citación, habría así provocado en el presente caso, que se haya producido indefensión material en el recurrente de amparo, que no ha tenido conocimiento de la citación efectuada, ni de la convocatoria para la celebración de vista oral, sin que le pudiera ser imputada falta de diligencia alguna, toda vez que no consta que conociera el señalamiento realizado, ni tuviera medio alguno para conocer, como ya se indicó, la existencia de un procedimiento judicial seguido contra él, del que ninguna noticia había tenido hasta el momento fáctico de la notificación de la Sentencia recaída” (F.J. 3º). Así, como “la citación, en definitiva, no cumple sus objetivos cuando por causa ajena al destinatario no llega a su conocimiento” (F.J. 2º), el TC en este caso decidió: “reconocer el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión” (Fallo 1º); declarar la nulidad de las sentencias que se dictaron (Fallo 2º); y “retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la citación” (Fallo 3º).

²¹² A su vez, en este caso, el receptor de la cédula era arrendatario de un local afectado por las obras en litigio, y había declarado como testigo de la contraparte en el proceso civil: el vecino demoró maliciosamente la entrega durante diez días;

Por tanto, nos parece razonable otorgar una presunción de validez a la notificación que se practica cumpliendo todos los requisitos que la ley exige: el acto de comunicación, realizado en legal forma, será válido y desplegará sus efectos en cuanto quede acreditada en las actuaciones su recepción por uno de los sujetos que el ordenamiento permite. Pero, habida cuenta de los derechos en juego (que pueden ser manifestaciones del derecho de defensa y, por tanto, de índole constitucional), opinamos que esa presunción de validez debe serlo *iuris tantum*, es decir, tiene que ser posible alegar en contra y probar, cuando así haya sucedido, la falta de efectiva recepción de la notificación y, por tanto, el efectivo desconocimiento inculpable del acto por el notificado²¹³.

estaba objetivamente interesado en que la actora —destinataria de la comunicación— no recurriera la sentencia objeto de notificación. En esta sentencia el TC concluye que “la negativa del órgano judicial a enjuiciar los motivos alegados por la promotora del presente recurso de amparo, al limitarse exclusivamente a examinar la regularidad formal de la diligencia acreditativa de la práctica de la notificación a través de tercera persona, ha supuesto una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE”.

²¹³ Esta solución ya era apuntada por COMELLAS SALMERÓN en 1968, en relación con los tribunales italianos: “La Corte de Apelación de Turín, en 1947, ha declarado que el modo y la forma de la notificación están preordenadas, no hacia la certeza absoluta, sino hacia la certeza legal, o sea, a la presunción de que los actos han sido llevados a conocimiento del intimado y que tal presunción, es tanto más fuerte, cuanto más cercana a la persona del destinatario, es aquella a la que el acto viene consignado. Esta afirmación, no parece del todo exacta, en cuanto observada la forma requerida por la Ley, la presunción de conocimiento opera en todos los casos con igual rigor. En cambio, el Tribunal de igual clase de Venecia, ha establecido que aquella presunción puede ser desvirtuada, con la demostración precisa de que la entrega no fue eficaz, y al no llegar a conocimiento del destinatario por error, excusable o no, le resta eficacia” (op. cit., pág. 951-952).

En ese sentido, como expresa la STC 186/1997 de 10 de noviembre, “este Tribunal ha otorgado el amparo en aquellos supuestos en que practicada la notificación o el emplazamiento con un tercero, los órganos judiciales no atendieron las alegaciones del interesado que acreditó que la persona que había recibido el acto de comunicación procesal no se lo hizo llegar en tiempo hábil para poder ejercitar adecuadamente el derecho de defensa”.

Un buen ejemplo de esa orientación se encuentra en la STC 275/1993 de 20 de septiembre, en la que se emplazó por correo certificado en la persona del conserje de la finca, y “la parte alegó y trató de probar que una causa no imputable a la misma había impedido que la cédula de emplazamiento le fuera entregada. Sin entrar en esa alegación y sin examinar esa prueba, la Audiencia se ha limitado a denegar la petición de nulidad de actuaciones basándose exclusivamente en constar el emplazamiento en forma, lo que en ningún momento había negado el apelante. Ha estimado así una presunción *iuris et de iure* de recepción del emplazamiento a través de tercero que contradice incluso lo previsto en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil” (y respecto a este último punto, se refiere al art. 776.2)²¹⁴.

²¹⁴ Esta sentencia continúa así: “Una vez cuestionada esta recepción directa, debería haberse pronunciado, a la vista de las circunstancias del caso, de la prueba aportada, y también de la trascendencia que suponía para la parte la firmeza de la Sentencia, sobre si estimaba que el emplazamiento había llegado efectivamente a conocimiento de la parte, confirmando entonces el Auto que declaró desierta la apelación o, en otro caso, acceder a la petición de nulidad de dicho Auto y de re-

Lo anterior, además, no sólo ocurre en los casos en que se haga la notificación a través de un receptor subsidiario del art. 268 LEC, aunque este sea el supuesto más frecuente, sino en todos los casos en que, pese a haberse realizado la notificación en legal forma, aquélla no ha llegado a conocimiento del interesado por causa no imputable a éste último; como ocurre en la STC 59/1998 de 16 de marzo, en la que se notificó al Procurador de la parte, pero “el representante procesal de los demandantes había fallecido el mismo día en que se practicó la notificación a través del servicio constituido al efecto por el Colegio de Procuradores (art. 272.2 LOPJ), lo que obviamente impedía que la notificación llegara a su conocimiento”.

En la última sentencia citada se establece: “de la misma forma que el TC ha considerado que una notificación defectuosa no siempre produce vulneración del art. 24.1 CE, sino solamente cuando impide el cumplimiento de su finalidad, cabe afirmar que produce indefensión constitucionalmente relevante dar plena eficacia a aquellas notificaciones, correctamente practicadas en el plano formal, cuando se acredita que no sirvieron para poner en conocimiento del Procurador, y a través del mismo, del interesado, la resolución a que se refieren, siempre y cuando dicho efecto no sea debido a causas

troacción de las actuaciones para permitir el emplazamiento y personación de la actora. El órgano judicial no se debería haber negado a realizar actividad alguna de comprobación de los motivos alegados por la actora del no conocimiento del emplazamiento, ni limitarse a afirmar la corrección legal de la notificación. Ha interpretado así la normativa reguladora de los actos de comunicación de modo no conforme con la función constitucional que estos actos cumplen, lo que habría lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente” (STC 275/1993).

imputables a los mismos. En tales casos no pueden los órganos judiciales prescindir de cualquier enjuiciamiento de los motivos alegados por la parte sobre la no recepción de la notificación”.

Como puede observarse esa consideración tiene una relación clara con la doctrina del TC sobre la efectividad en las notificaciones, que comentamos. Como recordatorio de esta doctrina, citamos la STC 318/1993 de 25 de octubre: “no basta con un cumplimiento meramente formal de dicha exigencia sino que, en la medida de lo posible, es preciso que el órgano judicial se cerciore de que se ha producido la citación a juicio en debida forma (por todas, STC 242/91), para lo cual deberá asegurarse por todos los medios a su alcance de la recepción de dicha comunicación por el afectado”; “sin que a tales efectos pueda contentarse con la existencia de una diligencia en la que se afirma que se ha practicado la notificación pero no se acredita si la correspondiente cédula ha sido entregada al interesado o a un tercero, ni se especifica la forma en que ha tenido lugar o el contenido de la misma”.

Como conclusión, podemos decir que si bien las notificaciones en general producen efectos según su validez formal (en cuanto queda acreditada su *recepción*), sin embargo, el *conocimiento efectivo* del acto comunicado tiene también su importancia. Así, en los casos de incumplimiento de algún requisito legal, si la notificación llega a *conocimiento* del interesado y éste se hace valer ‘en el juicio’, la notificación quedará subsanada; y de modo análogo, en los supuestos en que se observen todas las exigencias legales, si el destinatario acredita en las actuaciones su *desconocimiento* efectivo e

inculpable, la notificación formalmente válida podrá declararse nula. Luego el llamado *principio de recepción* viene a ser matizado en bastantes ocasiones por el que podríamos denominar *principio de conocimiento*, y esto a raíz, en buena parte, de la doctrina del TC sobre la efectividad en las notificaciones.

En sede jurisdiccional, el título de habilitación para declarar nula una notificación cuando no haya infracción de norma reguladora de los actos de comunicación, no será pues el art. 279 LEC, sino que habrá que acudir al art. 238.3 LOPJ, que dispone que los actos judiciales serán nulos de pleno derecho cuando se realicen “*con infracción del principio de audiencia... siempre que efectivamente se haya producido indefensión*”.

4.2. DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN.

4.2.1. Denuncia de la nulidad de una notificación durante la pendencia del proceso.

Cuando se ha practicado una notificación incurriendo en un vicio de nulidad, sea por lo que fuere, el destinatario de la misma puede, como hemos dicho, o bien subsanar ese defecto, comportándose como si no hubiera acaecido, o bien impugnar el acto de comunicación. Esto último es lo que hará el interesado si el acto en cuestión no llega a su conocimiento, o si llega de modo inoportuno, en el sentido de que ya no sea posible que se le repongan las oportunidades procesales perdidas sin dejar sin eficacia parte —o todo— de lo ya actuado. Las vías para hacer valer la nulidad se recogen en el art. 240 LOPJ. Este precepto ha sido modificado recientemente por la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Durante la pendencia del proceso, la nulidad de un acto procesal (también, por consiguiente, la de un acto de comunicación) se puede tanto apreciar de oficio, como denunciar a instancia de parte. Esto no ha variado con la reforma de 1997. El control a instancia de parte se dispone en el art. 240.1 LOPJ. Según este precepto, el cual no ha sido reformado, las partes podrán impugnar la nulidad de una notificación defectuosa *“por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate o por los demás medios que*

establezcan las leyes procesales". Como dice DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, este precepto es una norma de remisión: "Las nulidades procesales deben hacerlas valer las partes a través de los recursos y demás medios que establezcan la leyes, es decir, a través de la pléyade de vías (excepciones, oposiciones, impugnaciones, recursos ordinarios y extraordinarios, etc.) que constituyen el tratamiento procesal de las instituciones procesales. No existe un tratamiento procesal específico de la ineficacia de actos procesales"²¹⁵; y, por tanto, tampoco de la ineficacia de los actos de comunicación.

Por su parte, es el segundo apartado del mismo 240 el que se encarga de regular el control de oficio de la nulidad de los actos procesales. Según éste, el tribunal podrá, *"antes de que hubiere recaído sentencia definitiva, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas la actuaciones o de alguna en particular"*, que haya sido causada por vicio en un acto de comunicación. Así, por un lado, se requiere que no sea posible la subsanación, es decir, que no se puedan reparar las consecuencias del defecto en la notificación sin dejar sin eficacia las actuaciones que se van a declarar nulas; por otro lado, se establece un límite objetivo-temporal a esa apreciación de oficio, al exigir que no haya recaído sentencia definitiva, esto es, la litis debe estar todavía pendiente. Además, en este caso, no se produce un reenvío, sino que se establece una forma concreta de llevarse a cabo esa decla-

²¹⁵ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ: "La reforma del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: luces y sombras", en *Tribunales de Justicia*, nº 2, Editorial La Ley, Madrid, 1998, pág.142.

ración de nulidad: el tribunal, antes de proceder a esa declaración, debe dar audiencia a las partes.

En ese sentido, puede entenderse que la audiencia previa de las partes conlleva abrir —también de oficio— un incidente. Es más, en la medida en que el incidente de nulidad de actuaciones fue suprimido por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ considera que, mediante la LOPJ de 1985, “el incidente de nulidad de actuaciones pasaba a ser promovible de oficio pero no a instancia de parte y a carecer de una clara regulación”²¹⁶. Sin embargo, de la reforma de 1997 surge un problema, en relación con este punto, ya que se introduce en el art. 240.2 el inciso “a instancia de parte”. Luego, ¿es posible denunciar la nulidad de una notificación (de un acto procesal, en general) durante la pendencia del proceso, no sólo por medio de los recursos y demás medios que establezcan las leyes, sino también, con carácter general e incondicionado, a través del incidente del art. 240.2?

Opinamos con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, autor que se ocupa con acierto de este problema, que lo anterior “sería algo absolutamente injustificado y pernicioso. Durante la pendencia del proceso los justiciables tienen vías adecuadas y suficientes para denunciar

²¹⁶ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ: “Un pequeño gran problema: indefensión y sentencia firme”, en *Tribunales de Justicia*, nº 5, Editorial La Ley, Madrid, 1997, pág. 514. En otra sede, el mismo autor expresa: “Ciertamente se trata de un incidente que carece de regulación legal específica, por lo que, con las modulaciones necesarias, habrá que aplicar el procedimiento común de los incidentes propio del órgano jurisdiccional de que se trate” (“La reforma...”, op. cit., pág. 142).

las nulidades procesales. Resultaría grotesco que, pese a contar con un recurso ordinario para denunciar una nulidad, se pudiera plantear dicha cuestión a través de un incidente —ya fuera porque el justiciable dejó pasar el plazo sin recurrir o porque el recurso fue desestimado— y el tribunal tuviera el deber de sustanciar ese incidente”²¹⁷. No sucede lo mismo en los casos en que la nulidad procesal sea advertida después de la firmeza de la sentencia, situación para la cual no existía remedio ordinario en la vía jurisdiccional por el que las partes pudieran hacerlo valer; la solución de este problema, como veremos en el epígrafe siguiente, es la verdadera razón de la reforma de 1997 (al añadir los nuevos números 3 y 4 del art. 240 LOPJ). De todos modos, algún sentido lógico habrá que atribuir al inciso “a instancia de parte” del art. 240.2.

Según el propio DíEZ-PICAZO GIMÉNEZ, “se trata de entender que el incidente de nulidad de actuaciones *lite pendente* promovido a instancia de parte es posible únicamente en aquellos casos en que el justiciable carece de otra vía procesal para hacer valer la nulidad. Cuando no hay recurso ni otro remedio previsto por la ley, la

²¹⁷ DíEZ-PICAZO GIMÉNEZ: “La reforma...”, op. cit., pág. 143. Este autor precisa: “Todo lo que puede ser hecho de oficio puede ser hecho igualmente a instancia de parte. Pero existe un matiz fundamental: si alguna de las partes solicita del tribunal que promueva de oficio el incidente de nulidad de actuaciones del artículo 240.2 LOPJ, el tribunal no tiene el deber inexcusable de hacerlo. Puede rechazar fundadamente a *limine* la petición, porque no existe un derecho de la parte a que el incidente sea tramitado, a diferencia de lo que sucede cuando la parte hace valer la nulidad a través de un recurso o de otro medio legalmente previsto, en cuyo caso el tribunal sí está obligado a admitirlo y resolverlo. La diferencia es importante” (op. cit., pág. 142).

parte podría promover un incidente y el tribunal tendría el deber de sustanciarlo”²¹⁸. De la misma opinión es MORENILLA ALLARD, pero a éste tal supuesto le parece “de difícil, por no decir imposible, aplicación. No alcanzamos a imaginar una resolución judicial que, produciendo indefensión, y antes de adquirir firmeza, solamente pueda ser impugnada a través del apartado segundo del art. 240, sin que, previamente, no haya sido posible su denuncia mediante recursos u otros medios legalmente previstos”²¹⁹. A este respecto, el primer autor citado piensa que “básicamente, se trataría de aquéllos casos en que la nulidad no es imputable a una resolución judicial, sino que se deriva de una actuación material o de una omisión”; lo cual sería plenamente aplicable a los supuestos de notificaciones defectuosas en los que el vicio haya consistido, precisamente, en una omisión o falta de diligencia por parte del sujeto que realiza —o debía realizar— los actos de ejecución material de la notificación.

²¹⁸ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ: op. cit., pág. 143.

²¹⁹ MORENILLA ALLARD: “El ‘incidente de nulidad de actuaciones’ según el nuevo artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: consideraciones críticas”, en *La Ley*, nº 4498 (12.III.98), Madrid, 1998, pág. 2.

4.2.2. Medios de impugnación de las notificaciones nulas tras la firmeza de la sentencia.

A) Necesidad de un cauce jurisdiccional para impugnar 'post sententiam' la nulidad procesal de forma ordinaria.

Como hemos adelantado, la reforma de la LOPJ de 1997 ha venido a paliar la ausencia de vías para denunciar las nulidades procesales que sean advertidas después de que la sentencia sea firme. Esto había sido reivindicado por la doctrina desde que se suprimió el incidente de nulidad de actuaciones en el año 1984. Pensamos que tiene interés narrar, aunque sea brevemente, lo que puede ser denominado como antecedentes de esa reforma.

Según la legislación anterior, como cuenta DE LA OLIVA SANTOS “no puede ser declarada oficiosamente la nulidad radical originada por defectos que se produzcan al dictar sentencia o inmediatamente antes, pero si la sentencia definitiva es irrecurrible, tampoco cabe lograr el reconocimiento de la nulidad por la vía de un recurso... con lo que, no existiendo '*los demás medios*' que la LOPJ alegremente considera establecidos en las leyes procesales, se aboca a un callejón sin salida, en situaciones de patente antijuricidad”²²⁰.

A ese ‘callejón sin salida’ llegaba, por ejemplo, quien fuera emplazado defectuosamente y, a causa de ese defecto, sólo supiera

²²⁰ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 142.

de la existencia de un proceso contra él cuando la sentencia era ya firme; ya que, en esos casos, ni podía interponer recursos, ni era posible la apreciación de oficio de la nulidad del emplazamiento. ¿Cómo se denunciaba la nulidad en esos supuestos? La ley no establecía “*otros medios*”; únicamente eran utilizables las vías extraordinarias de rescisión de sentencias firmes —la audiencia al rebelde y la revisión por maquinaciones fraudulentas del actor— en los casos en que fueran procedentes. Pero no existían cauces ordinarios en la vía jurisdiccional. El único remedio ‘ordinario’ era el recurso de amparo directo ante el TC, por indefensión procesal; sin embargo, esta solución parecía contradecir el carácter subsidiario del recurso de amparo. Por lo cual, el TC planteó una ‘autocuestión’ de constitucionalidad del art. 240 LOPJ, que resolvió en la STC 185/1990 de 15 de noviembre²²¹.

En esa sentencia se concluyó a favor de la constitucionalidad de ese precepto, pero insistiendo en la subsidiariedad del recurso de amparo; para lo cual, de un lado, exhortó al legislador para que creara un cauce legal que hiciera posible la protección en el ámbito jurisdiccional de las violaciones de derechos fundamentales, y por otro

²²¹ Antes de esa sentencia, hubo otros intentos de remediar la situación descrita. Alguno, como el de la STC 110/1988 de 8 de junio, aunque laudable en su intención, fue desafortunado en su resolución, ya que trató de establecer que una sentencia no era definitiva, hasta que fuera “definitivamente ejecutada”, lo cual iba en contra de lo que legal y doctrinal se ha entendido siempre por tal concepto. Esa interpretación se abandonó pronto, en la STC 22/1989 de 1 de febrero, y ofreció como solución la única que entonces era posible, el recurso de amparo ante el TC. Por eso, en las SSTC 211, 212 y 213/1989 se plantea la autocuestión mencionada.

lado, animó a los tribunales a que, mientras tanto, hicieran una interpretación amplia y flexible de los medios de rescisión de sentencias firmes “para permitir la tutela en fase jurisdiccional de los derechos fundamentales”.

Esto último es lo que han venido haciendo nuestros tribunales durante unos años, en especial interpretando de manera extensiva el —mal llamado— ‘recurso’ de audiencia al rebelde. El cual está configurado legalmente para proteger al litigante declarado en rebeldía, por causas ajenas a su voluntad, pero habiéndose realizado el emplazamiento de modo correcto²²²; sin embargo, haciendo eco de esa doctrina del TC, también se ha concedido la audiencia al rebelde aunque haya sido nulo el acto de comunicación inicial²²³. La STC

²²² En ese sentido, BACHMAIER WINTER (en “Emplazamiento edictal, sentencia *inaudita parte* y audiencia en rebeldía”, *Revista de Derecho del Trabajo*, nº 81, Editorial Cívitas, Madrid, 1997, pág. 124) declara: “La audiencia en rebeldía, tal y como está regulada en nuestra LEC —arts— 773 a 786—, se configura como un remedio excepcional frente a una sentencia firme, cuando en el proceso se ha vulnerado uno de los principios esenciales del proceso: el principio de audiencia. Pero la regulación de la audiencia en rebeldía está configurada sobre la premisa de que la notificación realizada por el órgano judicial ha sido legalmente correcta. Desde esa perspectiva se justifica que, para su concesión, la LEC exija el cumplimiento de unos requisitos, que la jurisprudencia venía exigiendo de forma estricta para no desvirtuar el principio de invariabilidad de las sentencias que revisten fuerza de cosa juzgada”.

²²³ En opinión de la autora de la nota anterior, “aunque la audiencia esté prevista para supuestos en que la notificación se haya realizado correctamente, no existe motivo para entender que no es una vía posible para subsanar la infracción del principio de audiencia originada por una defectuosa comunicación de la demanda. Lo contrario supondría, además, el contrasentido de que una infracción más grave —como es la ausencia de válida notificación— no podría ser corregida por esta vía, y el desconocimiento de la demanda que no es imputable directamente al

15/1996, de 30 de enero, establece: “una interpretación conforme a la Constitución de la regulación de la audiencia al rebelde, conduce a aceptar su viabilidad para atender las pretensiones de rescisión de sentencias firmes por haberse desarrollado el proceso sin intervención del demandado, siempre que ello constituya un supuesto de indefensión, lo mismo si ha existido un emplazamiento válido, obediendo su incomparecencia a causas extrañas que le impidieron comparecer, que si la indefensión está causada directamente por la irregularidad del emplazamiento realizado por el juzgado o tribunal. Así lo viene entendiendo repetidamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS de 5 de octubre de 1983 [RJ 1983\5068], 5 de junio de 1990 [RJ 1990\4737], 14 de mayo de 1993 [RJ 1993\3551], 19 de febrero, 4 de marzo y 30 de septiembre de 1994 [RJ 1994\1100, 1775 y 7141], etc.)”²²⁴.

órgano judicial sí justificaría la audiencia al rebelde. Por tanto, de acuerdo con la interpretación flexible —y favorecedora de los derechos fundamentales— que propone el Tribunal Constitucional en materia de audiencia al rebelde, ese instrumento procesal es sin duda utilizable para subsanar también las indefensiones provocadas por actos de comunicación irregulares” (op. cit., pág. 125-126).

²²⁴ Un problema distinto, pero en plena relación con el comentado, es que, en la medida en que se puede solicitar la ‘audiencia en rebeldía’ en los casos mencionados, esto puede ser exigido de modo obligado antes de acudir al amparo, para agotar la vía judicial previa. La misma STC 15/1996 de 30 de enero provocó un giro en la doctrina del Alto Tribunal sobre este punto: unos años antes se consideraba innecesario (SSTC 188/1990 y 8/1993), pero se fue apuntando tímidamente hacia su exigencia (SSTC 310/1993 y 134/1995), para pasar a declararse de modo expreso en la citada STC 15/1996, en la que efectivamente se inadmite el recurso de amparo, por falta de agotamiento de la vía jurisdiccional (solución que se reitera en las posteriores SSTC 5/1997 y 186/1997). Excede el objeto de nuestro trabajo comentar esta doctrina del TC, la cual ha sido analizada (y criticada) ya por bastante doctrina,

El otro medio de rescisión de sentencias firmes que se ha empleado para denunciar la nulidad de un emplazamiento defectuoso es el —también mal llamado— ‘recurso’ de revisión del art. 1796 LEC por ‘maquinaciones fraudulentas’. Por esta vía se puede impugnar la notificación que está viciada por la mala fe del actor y no, por tanto, a causa de una falta atribuible al órgano judicial. Son casos en que la conducta maliciosa del actor provoca que se desarrolle el proceso sin que el demandado tenga noticia de él, ni oportunidad de defenderse, normalmente logrando que se le emplaze por edictos, en lugar de en forma personal. La STS 14.I.97 (RJ 1997\114) define esas ‘maquinaciones fraudulentas’ como “todo artificio realizado personalmente o con auxilio de engaño por la parte que haya obtenido la sentencia deseada, o por quienes la representen, que implique una conducta o actuación maliciosa, causante de indefensión”. Según la jurisprudencia del TS, esa actuación de mala fe del actor, que puede provocar la rescisión de la sentencia firme, puede consistir, tanto en no emplear una mínima diligencia para localizar un domicilio donde emplazar personalmente al demandado, como en

entre la que destacamos: BACHMAIER WINTER: “Inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa: el discutible requisito de acudir previamente a la audiencia al rebelde en los casos de sentencias dictadas *inaudita parte*”, en *Revista de Derecho del Trabajo*, nº 88, Editorial Cívitas, Madrid, 1998, págs. 313-320; GARBERÍ LLOBREGAT: “La nueva (y polémica) doctrina del Tribunal Constitucional sobre el ‘recurso de audiencia al rebelde’: a propósito de la STC 15/1996, de 30 de enero”, en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, nº 240, Madrid, 1996, págs. 1-5; MOLINA NAVARRETE: “Subsidiariedad del recurso de amparo y audiencia al rebelde en el proceso laboral: ¿exceso de jurisdicción constitucional o interpretación ‘odiosa’ de la legalidad? A propósito de la STC 15/1996, de 30 de enero”, en *Actualidad Laboral*, nº 9, Editorial La Ley, Madrid, 1997, págs. 177-189.

ocultar datos sobre el domicilio de este último o señalar en la demanda conscientemente un domicilio dónde el actor sabe que no se va a encontrar al notificado, a los efectos de que no se haga la notificación en forma personal sino mediante la publicación de los edictos.

Pese al empleo de las dos vías de impugnación comentadas (la audiencia al rebelde y la revisión), que por extraordinarias sólo son utilizables —aunque sea de modo ‘extensivo’— en los supuestos que les son propios, antes de la reforma de la LOPJ de 1997, seguía siendo necesario establecer legalmente un cauce para que el destinatario de una notificación defectuosa, que tuviera conocimiento de la misma después de la firmeza de la sentencia, pudiera hacer valer ese vicio de nulidad de forma ordinaria en sede jurisdiccional. Como señala con acierto BACHMAIER WINTER, “el hecho de que el recurso de amparo se haya convertido en recurso directo frente a las nulidades cuando la sentencia sea firme, unido al gran número de situaciones de indefensión que en la práctica se producen por defectos en los actos de comunicación —‘rebeldías’ involuntarias—, ha traído consigo una indeseable sobrecarga de trabajo para el TC: indeseable por indebida, ya que le ha forzado a actuar como una instancia jurisdiccional más, para asegurar la efectiva protección de los derechos procesales de las partes”²²⁵.

²²⁵ BACHMAIER WINTER: op. cit. *La rebeldía...*, pág. 246.

B) El incidente de nulidad de actuaciones del art. 240.3 LOPJ.

Todavía quedaba, por tanto, por acoger la segunda indicación que el Alto Tribunal hizo en su STC 185/1990, y esto es lo que ha sucedido con la reforma del art. 240 LOPJ, operada por la L.O. 5/1997, de 4 de diciembre. Mediante ésta se ha introducido “un incidente de nulidad de actuaciones como medio de rescisión de resoluciones judiciales firmes dictadas en los procesos en los que se hubiera causado al justiciable una indefensión que éste no hubiera tenido oportunidad de denunciar con anterioridad a la firmeza de la sentencia”²²⁶. La necesidad de un medio para esa finalidad era un clamor unánime en la doctrina²²⁷.

Así, la mencionada reforma ha consistido en añadir al art. 240 un número 3 y un número 4 de nueva creación; el primer párrafo del número 3 dice así: *“No se admitirá el incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones*

²²⁶ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ: op. cit. “La reforma...”, pág. 130.

²²⁷ Aunque hay quien piensa, como BORRAJO INIESTA, que era preferible haber seguido interpretando de manera amplia y flexible los medios ya existentes en nuestra legislación; opinión que no compartimos. Ese autor propone “detectar los problemas de indefensión más comunes que se producen en el funcionamiento de nuestro Tribunales; y adoptar los cauces y herramientas procesales que ya existen (en gran profusión) en nuestras leyes procesales para reparar esas indefensiones concretas: así, el recurso de revisión o la audiencia al rebelde o, si se estima preferible no destejer una vez más el proceso fenecido con fuerza de cosa juzgada, indemnizar al perjudicado por el error o el funcionamiento anormal de la Justicia” (“Sombras de la reforma sobre nulidad de actuaciones: una réplica”, en *Tribunales de Justicia*, nº 3, Editorial La Ley, Madrid, 1998, pág. 265).

fundada en defecto de forma, que hubieran causado indefensión, o en la incongruencia del fallo, siempre que los primeros no haya sido posible denunciarlos antes de recaer sentencia o resolución que ponga fin al proceso y que éstas no sean susceptibles de recurso en el que quepa reparar la indefensión sufrida”.

¿Es posible denunciar por esta vía la nulidad de una notificación defectuosa, advertida tras sentencia firme? A nosotros nos parece claro. En el precepto transcrito se habla de ‘defecto de forma’, lo que, como dice DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, “equivale aquí, aunque la expresión no sea afortunada, a *procesales*. Defecto de forma es, pues, cualquier defecto procesal, es decir, *lato sensu*, la infracción de cualquier norma procesal”²²⁸; entre las cuales podemos incluir, obviamente, aquéllas que regulan las notificaciones, en consonancia con el art. 279 LEC.

Como también se dispone en el propio tenor del 240, y comenta el mismo autor, “debe tratarse, además, de una infracción que haya causado indefensión al justiciable y, a este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que hay normas procesales cuya infracción no es susceptible en ningún caso de causar indefensión y, en segundo lugar, que para que la infracción de la norma procesal cause indefensión es necesario que la misma haya provocado una privación o limitación de medios de defensa —de alegación y/o de prueba— de carácter definitivo —es decir, no susceptible de ser sa-

²²⁸ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ: op. cit. “La reforma...”, pág. 131.

nada—, no imputable al justiciable que la padece, y que haya provocado una lesión en los derechos o intereses sustantivos en juego en el proceso”²²⁹.

Estamos muy de acuerdo con la anterior doble afirmación; la cual se puede predicar plenamente de las infracciones de las normas reguladoras de las notificaciones. Sobre el primer punto, el relativo a que existen infracciones que nunca provocan indefensión, diremos, que en esos casos, en nuestra opinión, no es posible emplear este incidente de nulidad de actuaciones, ni ningún otro medio de impugnación (recursos ordinarios o extraordinarios, por ejemplo) por el que se pretenda declarar ineficaces algunas actuaciones procesales ya tramitadas; ya que, si se denuncia la nulidad de un acto de comunicación (o de un acto procesal cualquiera) será para solicitar que se repongan —que se subsanen— las oportunidades o derechos procesales que el vicio causante de la nulidad haya hecho perder a quien impugna. Si no se perdió ni limitó ningún medio de defensa, no hay razón para impugnar.

En ese sentido la STS 4.VI.91 (RJ 1991\4417) recuerda “la necesidad de que al recurrente, con motivo de la falta que denuncia, se le haya producido indefensión, exigencia ésta cuyo fundamento es obvio al derivar de la improcedencia de esterilizar una serie de actuaciones e incluso todo un proceso sin razón que lo justifique”, y cita otras SSTs de la misma doctrina: 19.II.87 (RJ 1987\717),

²²⁹ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ: *idem*.

14.V.87 (RJ 1987\3444) y 22.V.87 (RJ 1987\3554). En la misma línea, la más reciente STS 11.X.96 (RJ 1996\7559) establece que “la indefensión prohibida por el artículo 24.1 de la CE no nace de la simple infracción de las normas procesales, sino que debe llevar consigo la privación del derecho de defensa y el perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado (SSTC 102/1987 de 17 de junio y 155/1988 de 22 de julio)”²³⁰.

En segundo lugar, y muy en relación con lo anterior, estamos de acuerdo con el concepto de indefensión de la cita de DíEZ-PICAZO GIMÉNEZ, el cual coincide con el que se señala en la juris-

²³⁰ En particular, en relación con el recurso de casación, la STS 15.II.93 (RJ 1993\2282) declara: “no siendo bastante para que prospere una impugnación de esta naturaleza, el quebrantamiento de una forma esencial del juicio si no va acompañada de indefensión” (y cita, a su vez, las SSTs 3.III.83 (RJ 1983\1418), 9.III.84 (RJ 1984\1209), y 27.II.89 (RJ 1989\1405)).

Sin embargo, en ese caso sí se produjo indefensión para la parte recurrente al omitirse la citación para sentencia, lo que impidió, por tanto, que se pudiera solicitar la celebración de la vista; en este supuesto el TS estima que se limitó un medio de defensa al que se tenía derecho: “Es claro que se han vulnerado las formas esenciales del proceso al haberse privado a las partes de la posibilidad de solicitar la celebración de la vista que prevé el art. 756 de la citada Ley, sin que pueda entenderse, como hace la Sala *a quo*, que tal omisión de citación de las partes para sentencia constituya una simple irregularidad procesal y así se pone de manifiesto si se tiene en cuenta cuál sea el contenido de la vista oral del art. 756 que no es otro que aquel que para el juicio de mayor cuantía establece el art. 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; tal omisión no puede quedar justificada por el hecho de que la celebración de vista dependa de la previa petición de parte o de que, señalada vista, no vengán obligadas las partes a asistir al acto, por cuanto que reconocida legalmente a las partes la facultad de solicitar la celebración de vista, no puede privárseles de tal facultad por un acto atribuible exclusivamente al órgano jurisdiccional, limitando así el derecho de defensa contradictoria de las partes, las que sólo vendrán obligadas a soportar las consecuencias de la no celebración de vista cuando ello se deba a su voluntad expresa o tácita”.

prudencia del TC, como puede observarse en las dos últimas sentencias citadas. Y no sólo en las SSTC 102/1987 y 155/1988, sino que también en otras, como las SSTC 145/1990 y 56/1992, se entiende que existe indefensión cuando se priva a la parte procesal de algún instrumento de defensa (oportunidad de alegar y probar) que el ordenamiento ponga a su alcance o se impida la aplicación efectiva del principio de contradicción²³¹.

Así, es preciso que el defecto en la notificación provoque indefensión, pero, como se declara en la STC 276/1993 de 20 de septiembre, “entendida tal indefensión en el aspecto material que es el que ha de ser tenido en cuenta desde la perspectiva constitucional (SSTC 161/1985, 90/1988 y 53/1989)”. “A estos efectos, la doctrina del TC diferencia entre notificación que, no obstante producida con incumplimiento de los requisitos procesales, realiza su finalidad de poner en conocimiento del destinatario el acto que ha de ser comunicado, en cuyo caso, y al tratarse de una mera indefensión formal, no tiene relevancia constitucional, y aquélla, que además de ser defectuosa procesalmente, tampoco cumple tal finalidad de conocimiento: que sí origina indefensión material y por tanto tiene trascendencia constitucio-

²³¹ Un ejemplo en materia de notificaciones donde se aplica con claridad ese concepto de indefensión se encuentra en la STS 28.XI.96 (RJ 1996\8401); aquí, se omite el emplazamiento de la parte apelada ante la Audiencia, lo que provoca su incomparecencia en el recurso, “causando a la entidad hoy recurrente auténtica indefensión al no poder mantener ante la Audiencia la tesis del Juzgado que le había sido favorable, de manera que (...), es procedente, por aplicación del art. 1715.1.2º, reponer las actuaciones al estado y momento en que se incurrió en la falta, es decir, al emplazamiento para ante la Audiencia”.

nal. En este sentido se pronuncian las SSTC 171/1987 de 3 de noviembre, 194/1988 de 19 de octubre, 155/1989 de 5 de octubre, 174/1990 de 12 de noviembre”²³².

Además, según la jurisprudencia constitucional, la indefensión no puede traer su causa en la inactividad del interesado. Existen abundantes sentencias del TC que insisten en que la pasividad o negligencia del destinatario hacen desaparecer la indefensión de aquél que, pudiendo hacerlo, no recibió oportunamente el acto de comunicación defectuoso²³³. La diligencia que, según esas sentencias, se exige al interesado que tiene noticia del acto por medios extraprocesales podemos resumirla en dos puntos:

a) Quien conoce, debe comparecer. En la STC 14/1992 de 10 de febrero se señala que “si conociendo la existencia del proceso, y teniendo la oportunidad de hacerlo, aquél no comparece ni defiende sus derechos, ninguna vulneración de garantías procesales puede aducir, pues si hubo falta de defensa fue por su negligencia o por su voluntario apartamiento del juicio”.

²³² BACHMAIER WINTER: op. cit. *La rebeldía...*, pág. 226.

²³³ SSTC 70/1984, 56/1985, 172/1985, 181/1985, 182/1985, 150/1986, 36/1987, 39/1987, 55/1987, 107/1987, 141/1987, 182/1987, 188/1987 198/1987, 57/1988, 129/1988, 159/1988, 110/1989, 194/1998, 142/1989, 166/1989, 211/1989, 37/1990, 48/1990, 58/1990, 72/1990, 101/1990, 117/1990, 174/1990, 118/1993, 331/1994 y 334/1994, entre otras.

b) Quien comparece, debe denunciar la falta (en el primer trámite procesal de que disponga). “El hecho de no impugnar en el debido momento la falta procesal no sólo implica su tácito consentimiento, sino que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, hace desaparecer la situación de indefensión, al ser imputable a un error o negligencia de la parte”²³⁴. En ese sentido, no habrá indefensión “cuando, aun habiéndose quebrantado la legalidad procesal por el juzgador, la propia interesada, por impericia o por negligencia, no haya utilizado sus posibilidades de defensa, desdeñando los remedios hábiles para hacer valer sus intereses y cooperando con ello al menoscabo de su posición procesal” (STC 102/1987 de 17 de junio).

En conclusión, se podrá emplear el incidente de nulidad de actuaciones del art. 240.3 LOPJ cuando se haya infringido una norma de las que rigen las notificaciones, y ese incumplimiento legal haya provocado indefensión en el destinatario, es decir, la pérdida de algún medio de defensa del interesado; pero, además, es necesario que éste último no haya tenido conocimiento oportuno, ni siquiera extraprocesal, de la existencia de ese acto de comunicación defectuoso. Se requiere, en palabras de MORENILLA ALLARD, “que el vicio formal del acto no haya podido ser denunciado en la instancia antes de recaer la resolución que puso fin a la misma y que esta resolución no fuera susceptible de *‘recurso en el que quepa reparar la indefensión sufrida’*. Por tanto, de existir un medio de impugnación apto para corregir la indefensión padecida, ya no será posible acudir

²³⁴ BACHMAIER WINTER: op. cit. *La rebeldía...*, pág. 235.

al incidente, con independencia de si el litigante agraviado ha dejado precluir el plazo para la interposición del recurso, o si recurre la resolución sin éxito”²³⁵.

El segundo párrafo del art. 240.3 LOPJ se ocupa de la competencia para resolver ese incidente y del plazo en el que puede plantearse; por su parte, el art. 240.4 trata de cuestiones relativas al procedimiento que debe seguirse. Pensamos que el comentario de uno y otro excede el ámbito de nuestro trabajo, por lo que nos limitamos a transcribir esos preceptos. El primero de ellos dice así: “*Se-
rá competente para conocer de este incidente el mismo Juzgado o
Tribunal que dictó la sentencia o resolución que hubiere adquirido
firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de veinte días, desde la
notificación de la sentencia, la resolución o, en todo caso, desde que
se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que,
en este último supuesto, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones
después de transcurridos cinco años desde la notificación de la
sentencia o resolución. El Juzgado o Tribunal inadmitirá a trámite
cualquier incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones*”.

A su vez, el art. 240.4 es como sigue: “*Admitido a trámite el
escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios a que se refie-
re el apartado 3 de este artículo, no quedará en suspenso la ejecu-
ción y eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se
acuerde de forma expresa para evitar que el incidente pudiera per-*

²³⁵ MORENILLA ALLARD: op. cit., pág. 3.

der su finalidad, y se dará traslado de dicho escrito, junto con copia de los documentos que se acompañasen, en su caso, para acreditar el vicio o defecto en que la petición se funde, a las demás partes, que en el plazo común de cinco días podrán formular por escrito sus alegaciones, a las que acompañarán los documentos que estimen pertinentes”.

C) Medios extraordinarios de rescisión de sentencias firmes.

Junto al incidente de nulidad de actuaciones descrito, el destinatario de una notificación que haya sufrido indefensión, porque no la ha recibido de manera puntual y oportuna o en modo alguno, puede denunciar esa indefensión también por los cauces extraordinarios que ofrece el ordenamiento en la medida en su situación se ajuste al supuesto de hecho, en cada caso, para los que están previstos.

En ese sentido, antes hemos hablado de la audiencia en rebeldía y de la revisión por maquinaciones fraudulentas. Respecto al primer medio, hemos dicho que, por la interpretación extensiva que aconsejó el TC, mediante aquél se permitía impugnar la indefensión en la que quedaba quien había sido declarado en rebeldía de modo involuntario, tanto cuando se realizaba correctamente el emplazamiento, como cuando se practicaba defectuosamente. Sin embargo, ya que ese cauce está legalmente previsto para los casos en que se ha llevado a cabo de forma válida el acto de comunicación inicial, y ya que ahora existe una vía apropiada para denunciar los actos procesales defectuosos, podemos concluir que actualmente el litigante rebelde indefenso habrá de acudir al medio de impugnación acorde

a la validez —la audiencia en rebeldía— o la nulidad —el incidente del art. 240.3— de la primera notificación.

En relación con el ‘recurso’ de revisión, en primer lugar, diremos que esta vía de rescisión de sentencias firmes viene recogida en el art. 1796 LEC, cuyo número 4º dice que procederá “*si la sentencia firme se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta*”. La STS 18.III.94 dispone que “por maquinación fraudulenta, como causa fundamentadora del recurso de revisión, se ha de entender todo artificio realizado personalmente o con auxilio extraño por la parte que haya obtenido la sentencia deseada, o por quienes le representen, que implique una conducta o actuación maliciosa llevada a cabo mediante falacia o engaño por el litigante vencedor, con consciente y voluntario aprovechamiento de actos directos o inmediatos que provocan una grave situación de irregularidad procesal [SSTS de 24 julio, 6 y 18 octubre 1993 (RJ 1993\6481, RJ 1993\7309 y RJ 1993\7612)], pudiendo comprenderse dentro de la misma aquellas actividades de la actora dirigidas a dificultar u ocultar al demandado la iniciación del juicio con objeto de obstaculizar su defensa, asegurando así el éxito de la demanda [SS. 7 mayo 1991 (RJ 1991\3579), 8 junio 1992 (RJ 1992\5175), 24 julio y 6 octubre 1993 (RJ 1993\6481 y RJ 1993\7309)]”²³⁶.

²³⁶ En el mismo sentido: SSTS 24.II.97 (RJ 1997\1192), 4.XII.96 (RJ 1996\8807), 2.XII.96 (RJ 1996\8805), 18.XI.96 (RJ 1996\8421), 7.XI.96 (RJ 1996\8418), 14.IX.96 (RJ 1996\8237), STS 18.X.96 (RJ 1996\7163), 10.IX.96 (RJ

En relación con las notificaciones, como adelantamos, podemos clasificar en tres grupos, de menor a mayor grado de malicia, las conductas del actor que suponen maquinación fraudulenta y que, por tanto, son susceptibles de ser denunciadas por esta vía de la revisión. El primero de ellos, en el que la mala fe es más ténue —pero que provoca igualmente la rescisión de la sentencia firme— estaría integrado por aquellos supuestos en los que el actor afirma que desconoce el domicilio del demandado, sin hacer gestión alguna para averiguarlo, cuando con el empleo de una mínima y elemental diligencia hubiera localizado un domicilio donde llevar a cabo su emplazamiento personal, y de esta manera provoca, sin embargo, que la comunicación se practique por edictos²³⁷.

Un segundo grupo de maquinaciones fraudulentas del actor podría estar formado por casos en los que aquél, no sólo no investiga razonablemente, sino que además oculta datos que afectan a la comunicación con el demandado. En la STS 30.I.84 se dice: “no

1996\6559), 9.IX.96 (RJ 1996\6555), 6.X.93 (RJ 1993\7309), 7.V.91 (RJ 1991\3579), 6.XI.90 (RJ 1990\8529), 7.IV.87 (RJ 1987 \2496), 3.III.87 (RJ 1987\1410), 30.I.84 (RJ 1984\391), 23.XI.83 (RJ 1983\6495).

²³⁷ Por una mayor claridad expositiva, estudiamos esos casos al analizar la *notificación por edictos*. Aquí nos limitamos a enumerar algunas sentencias que recogen ejemplos de dichos supuestos, que no citaremos en ese lugar: SSTs 13.I.97 (RJ 1997\10); 12.XI.96 (RJ 1996\8419); 7.XI.96 (RJ 1996\8418); 5.XI.96 (RJ 1996\8140), 18.X.96 (RJ 1996\7163), 24.VII.95 (RJ 1995\5601), 27.XII.94 (RJ 1994\10326), 26.VII.94 (RJ 1994\6786), 26.V.93 (RJ 1993\3984), 16.XII.91 (RJ 1991\9714), 18.I.91 (RJ 1991\299), 17.XII.90 (RJ 1990\10073), 20.III.90 (RJ 1990\1709), 31.X.89 (RJ 1989\7039), 10.VII.89 (RJ 1989\5596), 30.V.89 (RJ 1989\3903), 18.XI.88 (RJ 1988\8605), 19.VII.88 (RJ 1988\8462), 11.V.87 (RJ 1987\3394), 3.III.87 (RJ 1987\1410), 18.V.81 (RJ 1981\2168).

puede olvidarse, que cuando se conoce la existencia de alguna situación no ordinaria especialmente en lo que a efectos de comunicación entre órganos judiciales y litigantes se refiere, que pueda determinar cambios o alteraciones de carácter procesal, dichas anomalías o circunstancias deben ser puestas de relieve al juzgador en el escrito de demanda, principalmente cuando su ocultación pueda producir indefensión en el demandado²³⁸.

Son muy numerosos los supuestos de este segundo bloque; podemos enunciar —aunque sea de modo telegráfico— algunos ejemplos recientes: actor que no facilitó las señas completas del demandado, lo que motivó el emplazamiento por edictos, ante el fracaso de la citación personal (STS 19.X.96, RJ 1996\7165); actor que

²³⁸ Esta sentencia continúa: "esto es, precisamente, lo acontecido en el presente caso, dado que apareciendo acreditado que E., S. A. conocía el estado de suspensión de pagos en que se encontraba A. E., S. A., así como la existencia de una Comisión de acreedores encargada de los asuntos de aquélla, es evidente, que dicha omisión, al ser causa de la no presencia de la entidad demandada en el juicio de desahucio, impidió que la misma se pudiera defender adecuadamente, lo que además de vulnerar el principio de contradicción que impera en el marco del proceso civil, infringe el art. 24, 1, de la Constitución, quedando tal maniobra comprendida en el ámbito conceptual que marca el núm. 4 del art. 1796 de la LEC cuando declara que ha lugar a la revisión de una sentencia firme si la misma *se hubiere ganado injustamente en virtud de... maquinación fraudulenta*".

Otro ejemplo claro, en el mismo sentido es el de la STS 25.I.97 (RJ 1997\844): "Es llano que la Compañía Telefónica tenía plenamente identificado el chalet o mansión, no sólo por sus datos registrales, a los que aludía en su escrito de 1 de febrero de 1991 dirigido al Juzgado, sino también por haber instalado en él las líneas telefónicas y teléfonos, lo que implica saber la localización exacta, que pudo indicar al Juzgado para que allí se practicara el emplazamiento, en lugar de solicitar que se llevase a cabo por edictos, provocando la rebeldía (...). Y como esta Sala tiene dicho que la mala fe se produce en ocasiones cuando debiendo aclararse una situación se guarda silencio, la maquinación fraudulenta ha de estimarse".

manifiesta desconocer el domicilio del demandado, y que, posteriormente, cuando ya obtuvo sentencia firme y a la hora de practicar el embargo, afirma haberlo averiguado (STS 10.IX.96, RJ 1996\6559); actor que oculta un segundo domicilio del demandado en el que fue citado en anterior acto de conciliación celebrado entre las partes (STS 20.IV.96, RJ 1996\3583); actor que conocía el domicilio del representante legal de la sociedad demandada (STS 15.IV.96, RJ 1996\3091); actor que conocía el verdadero domicilio de los demandados en Bélgica por su misma dirección letrada, quien sabía tales datos (STS 18.IV.95, RJ 1995\3425). Además, abundan aquéllos casos de litigios entre familiares, o procesos matrimoniales, donde resulta fácil probar que el actor conocía y ocultó el domicilio del demandado²³⁹.

Un tercer y último grupo de conductas fraudulentas del actor tiene lugar cuando éste señala conscientemente, como domicilio para el emplazamiento, un lugar en el que sabe que no se podrá encontrar al demandado. Por ejemplo, en el caso de la STS 28.II.97 (RJ 1997\1324), el actor conocía exactamente el domicilio del de-

²³⁹ Algunos ejemplos de maquinaciones fraudulentas en ese último sentido son: STS 24.II.97, RJ 1997\1192 (*juicio sobre reclamación de cantidad contra hijo y esposa tras separación judicial, en el que los demandados continuaban viviendo en el domicilio familiar*); STS 2.XII.96, RJ 1996\8805 (*litigio entre familiares*); STS 11.IX.96, RJ 1996\6610 (*juicio de divorcio*); STS 30.VII.96, RJ 1996\6066 (*proceso de separación matrimonial*).

Otros ejemplos menos recientes de ocultación del domicilio del demandado por el actor, que provoca maquinación fraudulenta, pueden encontrarse en SSTs 20.III.90 (RJ 1990\1709), 31.X.89 (RJ 1989\7039), 19.VII.89 (RJ 1988\8462), 11.V.87 (RJ 1987\3394), y 18.V.1981 (RJ 1981\2168).

mandado y fijó en la demanda otro domicilio distinto al legal y real; y en la STS 4.XI.96 (RJ 1996\8420), el actor es un Banco que conocía el domicilio del demandado según se desprende de la correspondencia bancaria con él mantenida, y sin embargo facilita al Juzgado, en su lugar, el que le perteneció hacía varios años, provocando así el emplazamiento edictal. Otros ejemplos son: dar como domicilio del demandado el local objeto del desahucio y no el real que conocía el actor (STS 6.II.93)²⁴⁰; señalar como domicilio el local de comercio de la parte demandada a sabiendas de que estaba cerrado y conociendo el verdadero y habitual (STS 19.VII.88)²⁴¹; o si se emplaza al ejecutado en lugar diferente al domicilio que constaba en la póliza de préstamo (STS 23.XII.96, RJ 1996\8985).

Por último, diremos que, en cualquiera de estos tres grupos de conductas, la negligencia del propio demandado hace desaparecer

²⁴⁰ Aunque también puede haber maquinación fraudulenta si antes de acudir a los edictos no se intenta la notificación, precisamente, en el domicilio objeto del desahucio. Por ejemplo, en el supuesto que plantea la STS 4.X.94 se citó al demandado en un juicio de desahucio en el domicilio señalado en la demanda, y al fracasar, se le citó seguidamente por edictos, cuando “debió ser citado en primer lugar en la vivienda que aparece en el contrato de arrendamiento cuya resolución se pretendía”. Ejemplos de casos parecidos son los de las SSTs 24.VII.93 y 17.X.91.

²⁴¹ Como en el caso —más reciente— de la STS 13.VII.96, que trata de un “domicilio perfectamente identificado y sabido del demandante de revisión, que se ocultó en la demanda, al sustituirlo por el correspondiente a su establecimiento comercial, que, coincidentemente, llevaba cerrado varios meses antes a la práctica de la diligencia de emplazamiento, la que, inevitablemente, resultó negativa y fue aprovechado para provocar la citación edictal”.

el fraude del actor²⁴². Esto está en consonancia con la doctrina del TC ya comentada, según la cual, no puede alegarse indefensión con relevancia constitucional si resulta acreditado que de la situación creada tuvo como concausa determinante la propia conducta procesal del interesado que reclama²⁴³.

²⁴² Como queda claro en la STS 3.VII.96 (RJ 1996\5554): "La recurrente no puede alegar que desconoció por completo el proceso de divorcio contra ella promovido, ya que tiene reconocido que tuvo noticia suficiente del mismo, al haber recibido la documentación adecuada que se le remitió por conducto notarial, y si bien se trata de una notificación extrajudicial, no por ello carece de eficacia a los efectos revisorios pretendidos y aleja toda situación de intriga y amañío procesal, generador de efectiva indefensión..."

O en la STS 18.X.93: "(...) de manera que si realmente las sociedades a emplazar no ejercían actividad alguna o cambiaron de domicilio, no debieron hacerlo constar en los documentos que dieron motivo al litigio, cuando en los mismos eran desconocidas, por lo que la actuación del Juzgado y la parte contraria fue plenamente correcta, al no existir prueba alguna que lo contradiga, y cualquier perjuicio que pudieran sufrir las sociedades actoras en revisión sólo puede achacarse a su negligencia, pues siguen utilizando en toda la documentación los domicilios dichos (...)".

Otros ejemplos más, pueden ser: el de la STS 30.XI.96 (RJ 1996\8366), donde se declara la inexistencia de ocultación maliciosa del domicilio del demandado si éste tiene conocimiento del proceso y posibilidad de comparecer y ejercitar su derecho de defensa; el de la STS 17.IV.96 (RJ 1996\2961) en la que se establece que la negligencia del Procurador que no traslada a su parte y al Letrado la resolución notificada también hace desaparecer la maquinación fraudulenta.

²⁴³ A título de ejemplo, la STC 129/1988, de 28 de junio de 1988, dispone: "(...) formulada demanda de separación matrimonial por la esposa, el Juzgado competente dictó sendas providencias emplazando al demandado y acordando la celebración de la comparecencia a que se refiere el art. 1897 LEC, con citación de las partes, librando exhorto para la citación del demandado en Madrid, en las oficinas centrales del Banco en que presta servicio, lugar que conforme a la prueba practicada se estimó adecuado para notificaciones. Practicadas las diligencias oportunas, y tras una primera suspensión de la comparecencia señalada por no constar la citación en forma del demandado no comparecido, se reiteró la citación para una nueva

D) *El recurso de amparo como remedio último y subsidiario.*

El destinatario de una notificación defectuosa que a causa de la misma ha sufrido indefensión, y no le ha sido reparada en sede jurisdiccional, tendrá en último lugar, como remedio subsidiario, la posibilidad de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional por violación de derechos fundamentales, con base en el art. 24.1 CE: *“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”*.

Para la admisión de este recurso se exige (art. 44 LOTC), además de su interposición en el plazo de veinte días y de que se haya agotado previamente la vía jurisdiccional²⁴⁴, que la infracción

comparecencia, constatando fehacientemente la práctica de la misma en tiempo y forma, para permitir la personación del demandado que, sin embargo, no acudió al acto, celebrándose éste sin su presencia. El Auto de 10 de enero de 1983 resolvió sobre las medidas provisionales solicitadas por la demandante. Resulta de lo que antecede, así como de las prueba practicada sin limitación alguna en el procedimiento preliminar, que el demandante de amparo tuvo conocimiento suficiente y en tiempo oportuno para comparecer y probar lo que a su derecho conviniera en el trámite de adopción de medidas provisionales, *sin que pueda alegarse indefensión con relevancia constitucional si luego se acredita que se tuvo oportunidad de defensa o resulta acreditado que de la situación creada tuvo como concausa determinante la propia conducta procesal del interesado que reclama (STC 198/1987)”* (la cursiva es nuestra).

²⁴⁴ No nos detendremos a estudiar estos dos requisitos de admisibilidad del recurso de amparo, ya que exceden de nuestro trabajo y no presentan especialidades relevantes en materia de notificaciones. Simplemente diremos: en relación con el plazo de veinte días, que se computa, bien desde la notificación de la resolución que se recurre —según el tenor del art. 44 LOTC—, bien desde que se adquiere efectivo conocimiento de la misma —según la jurisprudencia constitucional—; la resolución relevante a estos efectos es la que pone fin a la vía judicial, sin que inte-

que se recurre sea imputable al órgano judicial, es decir, que exista una actuación indebida del tribunal, ya sea ésta un acto o una omisión.

Esa falta imputable al órgano puede consistir en el incumplimiento de algún requisito legal de la regulación de los actos de comunicación; aunque —como señala BACHMAIER WINTER²⁴⁵— “el defecto de la comunicación y el desconocimiento de la misma por el demandado no guarden relación alguna de causalidad (téngase presente que la ausencia de algún dato en la cédula de emplazamiento no siempre privará de efectividad a dicha cédula, mientras que en otros casos una comunicación formalmente correcta no llegará a manos del destinatario)”. Es decir, en esta materia el TC adopta un criterio formalista, y en opinión de la autora citada, “el criterio formalista no es el más idóneo para apreciar la nulidad de lo actuado (aunque sí sirva a los efectos de apreciar que concurre el presupuesto para recurrir en amparo). En los casos de rebedía involuntaria, lo esencial es, me parece, determinar si convergen dos elementos: la falta de diligencia por parte del órgano judicial para dar efectividad a la comunicación, y el desconocimiento por parte del demandado”.

Efectivamente, en materia de notificaciones, la infracción que se atribuye al tribunal, causante de indefensión, muchas veces no es

rrumpan ese plazo los recursos improcedentes. Y en relación con el agotamiento de la vía jurisdiccional, podemos señalar que antes de acudir al amparo habrá que utilizar el cauce que en esa vía sea procedente —de los distintos medios de impugnación estudiados en este epígrafe—, atendiendo al tipo de infracción que se recurra y al momento en que sea advertida por el interesado.

²⁴⁵ BACHMAIER WINTER: op. cit., pág. 233.

tanto la falta de observancia de alguna norma que rija dichos actos, cuanto la falta de diligencia debida para garantizar la efectividad del acto de comunicación. Entendiendo por tal diligencia —según la doctrina del TC que estudiamos— el aseguramiento de la recepción de la notificación por la persona a quien se dirija²⁴⁶. En este sentido, la reciente STC 186/1997, de 10 de noviembre, recuerda que “el derecho de defensa (...) impone a los órganos judiciales un especial deber de diligencia en la realización de los actos de comunicación procesal, que asegure, en la medida de lo posible, su recepción por los destinatarios, dándoles así la oportunidad de defensa y de evitar la indefensión (SSTC 167/1992, 103/1993, 316/1993, 317/1993, 334/1993 y 108/1994)”²⁴⁷. Así, como se dice en la STC 236/1992 de 14 de diciembre, “la citación no pueda reducirse a una mera formalidad prescrita por la Ley o a un simple requisito de forma para proceder a la realización de los subsiguientes actos procesales; para dar cumplida satisfacción al derecho a la tutela judicial efectiva, no basta con la mera observancia formal del requisito de la citación, sino que

²⁴⁶ Aunque en ocasiones esa falta de diligencia debida sea a veces muy tenue (o inexistente). Como en el caso de la STC 25/1996, donde se entrega la cédula de citación a la empleada del hogar de un vecino del destinatario, y ésta no se la hace llegar a este último. La única falta de diligencia del Juez es fiarse de que la persona que recibe la cédula —una de las habilitadas en el art. 268 LEC— se la hará llegar a quien corresponde. En esta sentencia se decreta la nulidad de la citación y se retrotraen las actuaciones al momento anterior a ésta; luego también se puede observar un cierto formalismo al aplicar el mencionado requisito del art. 44 LOTC.

²⁴⁷ Casi con idénticos términos, también las SSTC 99/1991, 141/1991, y 105/1993.

es preciso, además, que el órgano judicial asegure, en la medida de lo posible, su efectividad real”²⁴⁸.

Pero esa diligencia debida del tribunal para dar efectividad a la comunicación —que si se omite puede producir indefensión en el destinatario— tiene distintas manifestaciones en la práctica de las notificaciones; éstas se entienden mejor al explicar las distintos modos en que pueden llevarse a cabo los actos de comunicación. Nos parece conveniente exponer ahora, aunque sea brevemente y a modo de resumen de la jurisprudencia constitucional, cuál es la diligencia que cabe exigir en ese punto al órgano judicial en cada una de esas formas notificadorias:

a) En los casos en que así lo prevea la ley —y especialmente cuando se trate del primer acto de comunicación— deben ponerse todos los medios posibles para que el emplazamiento (o la citación) se realicen de *forma personal*²⁴⁹. Si es necesario se realizarán *averiguaciones sobre el domicilio del demandado*²⁵⁰.

²⁴⁸ Otras sentencias anteriores de la misma línea son: SSTC 37/1984, 81/1985, 156/1985, 48/1986, 36/1987, 39/1987, 157/1987, 155/1988, 109/1989 y 176/1992.

²⁴⁹ Entre las primeras sentencias en las que se habla de la obligación de los órganos de procurar el emplazamiento o la citación personal de los demandados, siempre que sea factible, asegurando de este modo que puedan comparecer en el proceso y defender sus posiciones frente a la parte demandante, se encuentran las SSTC 9/1981 y 37/1994.

²⁵⁰ En relación con este punto, está la carga del actor de señalar un domicilio —o varios— donde se pueda localizar al demandado. Cuando el actor en la deman-

b) Cuando el acto de comunicación se lleva a cabo en el domicilio de la persona a la que se dirige, debe realizarse, o bien *al propio interesado*, o bien *a alguien que ofrezca garantías* de que le va a hacer llegar la comunicación al destinatario²⁵¹.

c) También en relación con ese deber de diligencia del tribunal, que tienda a asegurar la recepción por el destinatario, se encuentra la doctrina del TC sobre la *subsidiariedad del emplazamiento por edictos*²⁵².

da no haya hecho constar ningún domicilio del demandado, el tribunal le requerirá para que así lo haga o que justifique cumplidamente la imposibilidad de hacer tal designación. En este último caso, si es preciso el tribunal debe realizar averiguaciones sobre el domicilio del demandado para posibilitar la notificación personal. O, como último caso, motivar que le ha sido imposible encontrar un domicilio donde el demandado pueda ser habido, antes de pasar al emplazamiento edictal.

²⁵¹ Esa certeza sobre la recepción del acto se puede tener razonablemente si quien lo recibe es alguien que se halle dentro del domicilio del notificando (como así se afirma en la STC 289/1993). Pero pensamos que no es tan clara la seguridad en la recepción si quien recibe el acto es un vecino, como indica que se haga el art. 268 LEC; a menos que aquél haya aceptado voluntariamente el encargo.

También se pueden señalar otros deberes de diligencia del órgano judicial en relación con esta forma de notificar: de no hallar en su domicilio al destinatario de la comunicación, ni a nadie que quiera hacerse cargo de ella, sería conveniente que realizara algunas averiguaciones (sobre si vive en ese domicilio el notificando, si es posible encontrarle a otras horas, etc.) con el objeto de intentar la repetición con éxito de la notificación, antes de acudir a los edictos.

²⁵² En la STC 186/97, de 10 de noviembre, se ofrece un buen resumen de esa doctrina: "el emplazamiento por edictos sólo cabe cuando no haya podido practicarse el emplazamiento, ni de forma personal ni a través de un tercero, a causa de ser desconocido el domicilio del demandado o hallarse en ignorado paradero (art. 269 LEC), por ser la vía edictal un medio subsidiario y último de realización de los actos de comunicación procesal, cuando sean inviables o inútiles los demás medios

d) Si la comunicación procesal se realiza por correo certificado con acuse de recibo son diferentes los cuidados que tendrá que poner el órgano judicial para que la notificación sea válida, de cara a asegurar su efectividad²⁵³, pero en resumen se puede decir que *si el tribunal tiene dudas* sobre si el destinatario ha recibido el sobre remitido (porque no le ha llegado el acuse de recibo, o porque no le llega firmado, o porque en él no se hace constar la identidad del re-

de comunicación procesal que la Ley establece. Pues la citación y el emplazamiento edictal son válidos constitucionalmente, pero por ser 'ficciones jurídicas con un significado más simbólico que real (...) cuya recepción por el destinatario no puede ser demostrada' han de entenderse necesariamente como 'un último y supletorio remedio (...) supletorio y excepcional (...) reservado para situaciones extremas, cuando la persona buscada no pueda ser habida' —STC 29/1997, y en el mismo sentido SSTC 97/1992 y 193/1993— habiendo de quedar sometida su práctica a condiciones rigurosas, entre las que se encuentran: a) haber agotado antes las otras modalidades de citación con más garantías (...); b) constancia formal de haberse intentado la práctica de los medios ordinarios de citación; y c) que la resolución judicial de considerar al denunciado como persona en ignorado paradero o con domicilio desconocido se funde en un criterio de razonabilidad que lleve a la convicción de la ineficacia de aquellos otros medios normales de comunicación (SSTC 234/1988, 16/1989, 196/1989, 9/1991 y 103/1994)".

²⁵³ Existen distintos ejemplos en la jurisprudencia del TC sobre la diligencia debida del tribunal en las notificaciones realizadas por correo. Desde luego, deberá unir al autos el acuse de recibo —como se exige en el art. 261 LEC— para garantizar la oportuna recepción por el destinatario (STC 1/1983). Cuando no sea el interesado quien reciba la notificación, el tribunal se asegurará de que lo hace una de las personas que legalmente se permiten —en el art. 268 LEC— y que está suficientemente identificada, para así tener garantía de que entregará la carta a su destinatario (STC 39/1987). El tribunal, además, en el caso de que fracase la notificación postal, pondrá los medios para sólo acudir a los edictos cuando realmente se hayan agotado los medios ordinarios; en este sentido, no es suficiente la nota del funcionario de Correos que dice 'ausente en horas de reparto' (STC 36/1987), o no realizar el segundo intento que exige el art. 261 II LEC (STC 18/1990). También se le imputará al Juez la falta de diligencia del funcionario de Correos, si no la corrige (STC 14/1987).

ceptor) *tendrá que mandar que se repita la remisión*, o bien pasar a *notificar de modo personal*, al menos según la legalidad vigente (cfr. 261 II LEC).

**II. PARTE ESPECIAL:
FORMAS DE NOTIFICACIÓN
EN EL PROCESO CIVIL**

CAPÍTULO 5:
NOTIFICACIÓN POR MEDIO
DE REPRESENTANTE PROCESAL.

5.1. LAS NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE PROCURADOR.

Al hablar de las distintas formas por las que pueden llevarse a cabo las notificaciones, dijimos que cuando la parte procesal se encuentra representada en el juicio por medio de Procurador, recibirá a través suyo todos los actos de comunicación que se le hagan, cualquiera que sea su clase²⁵⁴. El fundamento legal de esta forma notificatoria es el art. 6 LEC, que reproducimos de nuevo: *"Mientras continúe el Procurador en su cargo, oirá y firmará los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias, que deban hacerse a su parte durante el curso del*

²⁵⁴ Cosa distinta es lo que sucede en el proceso penal, en el que algunos actos de comunicación deben realizarse directamente al interesado, según dispone el art. 182 LECr, en los casos de comparecencia obligatoria del citado (referencia que se suprimió como vimos en la LEC) y cuando lo diga expresamente la ley (lo cual, en la LECr, sucede en bastantes más ocasiones que en la LEC). Una relación de éstas últimas, se recoge en DÍEZ RIAZA: *La Procuraduría*. Edita UPCO, Departamento de Publicaciones, Madrid, 1997, págs. 183-184.

pleito y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviene en ellas directamente el poderdante, sin que le sea lícito pedir que se entiendan con éste.

Sólo se exceptúan los emplazamientos, citaciones y requerimientos que la Ley disponga expresamente que se practiquen a los mismos interesados en persona”²⁵⁵.

La STS 15.X.92 (RJ 1992\8006) declara que la principal función de los Procuradores es la de recibir los actos de comunicación que se hagan a su parte, y que, por la disposición legal señalada, no se puede alegar indefensión cuando así se realice. Es de destacar, en este sentido, que el art. 6 LEC dispone que la intervención del Procurador en las notificaciones tendrá *“la misma fuerza que si interviene en ellas directamente el poderdante”²⁵⁶*. Como dice DÍEZ RIAZA, “ello no es una novedad si tenemos en cuenta que el Procurador actúa en nombre y representación de su poderdante, y los efectos de todo lo actuado en el proceso por el causídico recaen directamente en la persona que le confirió el poder, porque es un supuesto claro de representación directa”²⁵⁷. Aunque conviene precisar que “la notificación hecha al Procurador tiene la misma fuerza que si

²⁵⁵ Por su parte, es el art. 14.7 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales el que establece el deber de éstos de recibir los actos de comunicación que se dirijan a sus representados en el mismo sentido del art. 6 LEC.

²⁵⁶ Hay varias sentencias del TS que inciden este punto, como las SSTS 27.VI.83 (RJ 1983\3376), 19.IX.88 (RJ 1988\6834), 14.V.90 (RJ 1990\3727), 26.XI.90 (RJ 1990\9193).

²⁵⁷ DÍEZ RIAZA: op. cit., pág. 184.

interviniera en ella directamente el otorgante pero ello es a los solos fines del proceso”, según se declara en la STS 4.XII.86 (RJ 1986\7219).

Lógicamente, aunque exista ese mandato de representación, si el acto de comunicación, en lugar de dirigirse al Procurador de la parte, se realiza personalmente con el interesado, será correcto y no puede excusarse el destinatario que no comparece, alegando que debió ser notificado a través de su Procurador, como se establece en la STC 108/1987 de 26 de junio: “es evidente que el destinatario de esos actos es el interesado y el hecho de que la Ley autorice, salvo excepciones que no son del caso, a hacerlos a los Procuradores de las partes no significa otra cosa que la posibilidad de informar a los interesados a través de sus representantes en juicio, pero si los interesados son informados directa y personalmente es indudable que queda cumplida la finalidad del acto de comunicación y que el interesado no puede alegar indefensión si no hace caso del emplazamiento y no comparece en tiempo y forma de acuerdo con él”.

Esta forma de llevar a cabo la comunicación procesal, en la medida en que se encarga a un profesional, cualificado para esta función, evita y disminuye los retrasos y las dificultades de las notificaciones judiciales, como se dispone en la STC 153/1993 de 3 de mayo, (que cita a su vez otras SSTC: 130/1987, 147/1990 y 66/1992).

Por su parte, GRANIZO GARCÍA CUENCA expresa: “La notificación al Procurador, teniendo en cuenta la faceta orgánica de cola-

boración de éstos profesionales con los órganos jurisdiccionales, explica la preferencia de Juzgados y Tribunales, en orden a realizar las notificaciones a los Procuradores no sólo por las garantías, sino porque además la práctica real demuestra que al realizarse las notificaciones a los procuradores, se agiliza la tramitación de los procedimientos, se evitan posibles nulidades, y se reducen de forma muy importante las horas de trabajo y tiempo, que es necesario emplear en otro tipo de notificaciones, por ello hay que considerar la eficacia y garantía de esta forma de llevar a efecto los actos de comunicación”²⁵⁸.

Como puede observarse, el autor citado no sólo destaca la celeridad de la comunicación procesal realizada de esta forma, sino que también hace referencia a la seguridad en la recepción de las notificaciones así practicadas. “La notificación al Procurador, en orden a las garantías del ciudadano, es la que más se aproxima a la notificación personal; se hace tal afirmación desde los intereses del receptor de la comunicación, y que tal forma de notificación, tiene muchas más posibilidades de que su contenido sea conocido por el interesado, que cualquier otra, con excepción de la ya citada notificación personal. Pero esa garantía también incide sobre los intereses del órgano emisor de la comunicación, es decir sobre el órgano

²⁵⁸ GRANIZO GARCÍA CUENCA: “Los principios constitucionales de contradicción, audiencia y defensa en el proceso civil. En especial los actos de comunicación de las partes y del órgano judicial”, en *Principios constitucionales en el proceso civil*. Editado por el Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1993, pág. 203.

jurisdiccional, pues la prueba de notificación válida al Procurador presupone el conocimiento real del interesado”²⁵⁹.

Pensamos que la notificación por Procurador puede ser más garantista, incluso, que la realizada en forma personal. En primer lugar, porque la notificación personal puede realizarse a persona distinta del destinatario (a cualquiera de los sujetos recogidos en el artículo 268 LEC: parientes, personal del servicio doméstico, vecinos) con los riesgos que esto entraña de que se pierda o se demore la comunicación. En segundo lugar, porque aunque la reciba el mismo interesado, dada la complejidad del proceso (y en ocasiones del lenguaje empleado en las resoluciones judiciales), puede serle difícil entender el contenido de la notificación y saber cuáles son sus oportunidades procesales; lo que para el Procurador supone el contenido específico de su profesión. Además, como veremos enseguida, la notificación que se realiza por medio de Procurador puede llevarse a cabo en un tiempo muy reducido (en un par de días, si no hay problemas) y, desde luego, mucho antes que si se ha de acudir al domicilio del interesado a notificarle en forma personal.

Como se indica también en la última cita, en cuanto se acredita en las actuaciones que una notificación se ha realizado al Procurador de la parte que debía recibirla, la comunicación surte efecto y se presupone el conocimiento del representado. Si su Procurador no le traslada el contenido de la notificación (a él o a su Letrado),

²⁵⁹ GRANIZO GARCÍA CUENCA: op. cit., pág. 202-203.

este será un problema que queda en el ámbito de esa relación privada representante-representado. Es cierto que el Procurador tiene la obligación de dar traslado de las notificaciones que reciba, tanto al Letrado de la parte por él representada, como a la parte misma²⁶⁰. Pero esa obligación se deriva del mandato de representación, luego si se incumple, o se cumple de manera defectuosa²⁶¹, las consecuencias desfavorables que de ello se deriven no pueden trascender al proceso.

Esta cuestión fue abordada por el TC y quedó resuelta en la STC 147/90 de 1 de octubre: reproducimos un párrafo largo, en el que quedan claros, tanto los antecedentes, como los fundamentos jurídicos: "(...) no hay indefensión imputable al órgano judicial si se han cumplido escrupulosamente por el Juzgado las normas relativas a notificaciones cuando las partes actúan, como en este caso, representadas por Procurador (arts. 6 y 9 LEC), pues con él han de entenderse todas las diligencias y, en particular, las notificaciones. De manera que, la notificación efectuada al Procurador, produce los

²⁶⁰ Esta obligación se recuerda en la STS 10.II.92: "A partir de la notificación quedaba a la responsabilidad del procurador arbitrar los medios necesarios para que el letrado tuviese conocimiento seguro y puntual del contenido del proveído". Por su parte, la STS 25.IV.89 (RJ 1989\3454) delimita la obligación de dar traslado de las copias de notificaciones que recibe el Procurador al cliente, eximiendo de tal responsabilidad al Abogado cuando la postulación se lleve a cabo por ambos profesionales.

²⁶¹ Un ejemplo de cumplimiento defectuoso es el de la STS 7.II.84: "La fecha indicada por el Procurador en su relación interna con el Letrado de su cliente, no puede sobreponerse a la oficialmente recogida en la pertinente diligencia de notificación, suscrita por el propio Procurador, y junto a la firma del Oficial notificador".

mismos efectos que la realizada directamente a la parte (art. 6 citado), salvo en aquellos casos previstos en los núms. 1º y 2º del mismo precepto que aquí no son aplicables, únicos en los que se exige una notificación personal. No tiene que ver que fuera del proceso se produzca una situación como la anteriormente descrita, en la que, por la baja del Procurador y por el incumplimiento de las obligaciones a que se halla vinculado con su poderdante, se llegue a un resultado semejante al que tiene lugar por falta de notificación. Pero este resultado no genera indefensión en sentido propio ya que se desenvuelve en el ámbito exclusivo de las relaciones contractuales entre el Procurador y su representado, como certeramente señala el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones. De modo que si se ha producido algún perjuicio para la otra parte, no ha sido por defecto del órgano judicial, ni de la parte contraria, sino única y exclusivamente por defecto imputable exclusivamente al Procurador designado por ella (art. 9.2 LEC)”²⁶².

²⁶² Y es que, como se declara en la STC 101/89, “el resultado de indefensión que prohíbe el art. 24.1 de la Constitución es aquel que tiene su origen directo e inmediato en actos u omisiones de los órganos judiciales, estando excluidas de su ámbito protector las debidas a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representan o defienden”. Y, en ese sentido, “la ausencia de la debida comunicación entre Procurador, Letrado y recurrente es un hecho ajeno a cualquier acción u omisión del órgano judicial y no cabe, por tanto, derivar de él un recurso de amparo fundamentado en tal motivo” (ATC 111/92). Cuestión distinta es que haya existido un error no imputable al Procurador, como en el caso que resuelve la STC178/1995 de 11 de diciembre, en el que se practicó la notificación a un Procurador distinto de aquel al que la parte confirió el poder, lo cual provocó la indefensión de esta parte procesal.

Por tanto, la parte representada por un Procurador que omite su deber de recibir diligentemente las notificaciones, podrá exigirle a éste en otro proceso los daños y perjuicios que se le hayan derivado de ese incumplimiento²⁶³. Como dice DÍEZ RIAZA, “siendo ésta una de las principales actividades que llevan a cabo los Procuradores, es lógico que ante el incumplimiento de la misma o el cumplimiento defectuoso, los perjuicios económicos de ello sean de su cuenta, sin que tenga que sufrir el poderdante los de su falta de diligencia en el cumplimiento de su deber”²⁶⁴. Existe, incluso, algún ejemplo, en el que el representado exigió responsabilidades penales a su representante, como se refleja en la STS 20.XI.90²⁶⁵. Sin embargo, la notificación en cuestión que no haya sido transmitida oportunamente será válida, producirá todos sus efectos, sin que pueda el destina-

²⁶³ Sin embargo, nos parece implanteable el que, por principio, se exigiera al Procurador que acreditara el traslado que debe realizar de cada notificación a los clientes y letrados, ya que perdería la razón de ser esta figura, basada, además, en una relación de confianza mutua entre el representante y su representado. En este sentido se pronuncia la STS 14.VI.94 (RJ 1994\5231): “sería desorbitado exigir de los Procuradores que tengan que recoger la firma que acredite la entrega de todos y cada uno de los documentos que pasan por sus manos, máxime basándose en la confianza de la relación que les une a sus clientes y a los profesionales encargados de la dirección jurídica”.

²⁶⁴ DÍEZ RIAZA: op. cit., pág. 185.

²⁶⁵ Esta sentencia contiene un supuesto de prevaricación, motivado porque no le llegó al interesado un requerimiento, ya que el Procurador no estuvo atento al correo, omitiendo las medidas exigidas para el cumplimiento adecuado de sus deberes de garante.

rio, al tener noticia del acto que no se le trasladó, pedir que se retrotraigan las actuaciones²⁶⁶.

Sin embargo, aunque el planteamiento anterior sirva con carácter general, puede haber supuestos excepcionales en los que deba matizarse, al faltar esa relación de confianza propia del mandato de representación; especialmente, cuando el Procurador no haya sido nombrado por la parte que no recibió de modo oportuno sus notificaciones²⁶⁷. Como dice DÍEZ RIAZA, “presuponer esa relación de confianza es ir más allá de la realidad en muchos supuestos, sobre todo cuando es la primera vez que se ha otorgado el poder en favor del Procurador y especialmente cuando es el Abogado el que entra en contacto por primera vez con el cliente y no el Procurador a diferencia de lo que ocurre en el sistema anglosajón”²⁶⁸. Pero tales casos, por su carácter excepcional, deben examinarse uno a uno y con un criterio restrictivo.

²⁶⁶ Lo cual se declara expresamente en la STS 21.III.86.

²⁶⁷ En este sentido, es claro el supuesto de representación conferida por turno de oficio, como ha declarado el TC en algunas ocasiones. La STC 184/97 de 28 de octubre recuerda que en esos casos “la postulación procesal no se sustenta en una previa relación de confianza entre la parte y los profesionales que la asisten, sino que resulta de una designación llevada a cabo por el respectivo Colegio profesional, y sin mediación de apoderamiento alguno. Como declaramos en la STC 53/1990, el Tribunal, en el seno del proceso penal, debe velar por los derechos del justiciable, especialmente en los casos en que la dirección y representación se realiza mediante designación de oficio (fundamento jurídico 2º). En parecidos términos, la STC 91/1994 declaró que la inexistencia de una ‘relación de confianza exige un especial cuidado y protección de los particulares que se ven disminuidos en sus posibilidades efectivas de defensa en tales casos’ (fundamento jurídico 3º)”.

5.2. LA COMUNICACIÓN DE ACTOS PROCESALES EN EL SALÓN DE PROCURADORES.

También se ha señalado que antes, cuando el volumen de la actividad judicial era más reducido, el Procurador recorría los diferentes Juzgados donde las partes a las que representaba tenían causas pendientes, para hacerse cargo de la comunicación procesal de aquéllas. Las notificaciones se realizaban así en las Secretarías de los Juzgados, como dispone el artículo 264 I LEC. Pero, en la actualidad, ese *local que en cada Tribunal estuviere destinado a este fin* (practicar las notificaciones) de que habla ese precepto, ha dejado de ser la Secretaría del Juzgado para pasar a ser el salón de notificaciones que vino a instaurar el artículo 272.2 LOPJ: *“También podrá establecerse un local de notificaciones común a los varios Juzgados y Tribunales de una misma población, aunque sean de distinto orden jurisdiccional. En este supuesto, el Colegio de Procuradores organizará un servicio para recibir las notificaciones que no hayan podido hacerse en aquel local común por incomparecencia del Procurador que deba ser notificado. La recepción de la notificación por este servicio producirá plenos efectos”*²⁶⁹.

²⁶⁸ DÍEZ RIAZA: op. cit., pág. 188.

²⁶⁹ PRADO ARDITTO (“La notificación de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial”, en *Justicia* 86, Barcelona, 1986, págs. 87-88) señala que por esta solución que ofrece la LOPJ venían abogando, desde hace tiempo, algunos Secretarios judiciales: “En efecto, los Se-

Con este servicio previsto por la LOPJ, se rompe así la relación personal entre el Secretario judicial y el Procurador, que parecía establecer la Ley de Enjuiciamiento Civil, en orden a la comunicación procesal²⁷⁰. Las notificaciones que hayan de hacerse al representante procesal se realizarán en un local común, que se denomina en el foro 'Salón de Procuradores'. Este Salón de Procuradores es una dependencia habilitada en la sede de los Juzgados, donde los representantes procesales que trabajen allí tienen, cada uno, un cajetín donde reciben sus notificaciones. La organización de este servicio es competencia del Colegio de Procuradores de cada ciudad, ya que no existe más marco normativo que el art. 272.2 LOPJ. Vea-

cretarios de Sala de la Audiencia Territorial de Valencia, en una comunicación que elevamos, en el año 1981, al entonces Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial, por indicación del mismo, en la que se hacían diversas propuestas sobre diversas materias, para un mejor funcionamiento de las Secretarías, con respecto al problema que teníamos planteado con relación a las notificaciones a los Procuradores, decíamos lo siguiente: (...) Que se interese del Ilmo. Sr. Decano del Ilustre Colegio de Procuradores se designen uno o dos empleados del mismo Colegio para que reciban expedientes y sumarios y firmen notificaciones, requerimientos y demás actos de comunicación de todas las Secretarías de esta Audiencia, en nombre de todos los Procuradores. Para que esto sea perfectamente legal es necesario que todos y cada uno de los Procuradores les habilitarán al efecto, como está permitido. Estos empleados así habilitados se encargarían posteriormente de dar a lo recibido el curso correspondiente”.

²⁷⁰ Como, por otro lado, no podía ser de otra manera, si se tiene en cuenta el número de notificaciones diarias que se realizan en los Juzgados de una ciudad. Sin ánimo de exactitud y a título de ejemplo, en Madrid suele haber del orden de 30 a 40 notificaciones diarias en cada juzgado, y unos 500 procuradores.

mos cómo se practican las notificaciones que se realizan a través de ese servicio²⁷¹.

Sigamos los distintos pasos que hay que dar al notificar una providencia cualquiera. En primer lugar, una vez dictada por el Juez la resolución, el original se une a los autos y se sacan tantas copias como Procuradores haya que notificar, así como una copia más a los efectos que luego se dirán; a estas copias se adjunta una diligencia que extiende el Secretario o el Oficial habilitado y en la que

²⁷¹ Para realizar esta explicación vamos a seguir las Normas para el funcionamiento del local destinado a las notificaciones de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, en el Edificio de Plaza de Castilla, que se recogen en la Circular número 10, de 14 de abril de 1985, del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. Estas normas son fruto del Acuerdo adoptado el 28 de marzo del mismo año, entre el *Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid* y la *Junta de Magistrados-Jueces de Primera Instancia e Instrucción* con sede en el Edificio de la Plaza de Castilla, oída la Comisión de Secretarios.

Una cuestión que simplemente apuntamos es la referente a la competencia de la Junta de Jueces para dictar ese Acuerdo. La práctica de los actos de comunicación es competencia de los Secretarios judiciales, como establece la LOPJ (art. 279.3), y más específicamente el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios judiciales, en su art. 7.B. Quizás tendrían que ser éstos los que se encargaran de su regulación, pero no tienen una Junta, no tienen un cuerpo con personalidad jurídica. Lo único que se estableció en los trámites de regulación del Salón de Procuradores (de los Juzgados de Madrid) fue oír a la Comisión de Secretarios, que ni goza de capacidad de representación, ni de personalidad. Además, en el Reglamento que acabamos de citar se establece la dependencia orgánica de los Secretarios judiciales, no de los jueces, sino, por un lado, del Ministerio de Justicia (Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia), según los arts. 1 y 109, y por otro lado, del TSJ, que ostenta la superioridad sobre el territorio, conforme a los arts. 44-48.

figuran el Procurador o los Procuradores destinatarios²⁷². Esta diligencia se firma por el funcionario actuante²⁷³, y posteriormente será firmada también por cada Procurador destinatario al recibir la copia de la resolución notificada. Es el Agente judicial de ese Juzgado el que normalmente lleva la diligencia con las copias al Salón de Procuradores²⁷⁴.

En el Salón de Procuradores, un empleado de este servicio recoge las copias y su diligencia, y, tras comprobar que hay tantas copias como Procuradores se designan en la diligencia, sella y data todos estos escritos, y devuelve al Juzgado la copia de más para que se tenga constancia de la fecha de entrada de la notificación en

²⁷² Esto antes no era así. Según las normas reguladoras del Salón de Procuradores de Madrid, la resolución original (el 'original' como en dichas normas se denomina) se debía enviar a ese servicio, y la diligencia de notificación se realizaba materialmente con una estampilla que se situaba en la parte inferior de la resolución notificada. Esta estampilla se firmaba por el Oficial notificador y por el Procurador que recibía la comunicación. Aunque las propias normas establecen que *los originales de las resoluciones no serán sacados del local* existía el peligro de que se perdiese o se sustrajese la resolución original. Por tanto, muchos Juzgados ya no envían la resolución original, sino copias de ésta, que se acompañan de una diligencia, en folio independiente de las copias (para ser firmada).

²⁷³ Ya vimos que este diligenciamiento presenta dificultades, porque el Secretario o el Oficial no presencian la entrega de la copia de la resolución al Procurador destinatario; luego la diligencia que extiendan no puede acreditar esa entrega material, sino propiamente el envío de dicha copia al servicio y su contenido, al unirse a los autos el original.

²⁷⁴ Según las Normas referidas, letra a) "La entrega y recogida de los autos, folios o papeles sueltos que contengan notificaciones, se llevará a cabo, exclusivamente, en las horas de 8.00 a 10.00, los de carácter Civil (...), por el personal de cada Secretaría".

ese servicio²⁷⁵. Posteriormente, procede a dejar la copia de la resolución, con la diligencia para ser firmada, en el cajetín del Procurador destinatario; y son varios los Procuradores destinatarios de una misma resolución, se irá por orden para que cada Procurador vaya firmando la diligencia que acredita su recepción²⁷⁶.

Los Procuradores tienen obligación de acudir diariamente al servicio que comentamos, y revisar así su cajetín, para recibir las notificaciones que se les haya hecho. El Procurador recogerá la copia de la resolución notificada (para hacérsela llegar al Letrado de su parte) y firmará la diligencia acreditativa de su recepción (que se devolverá al Juzgado por el empleado del servicio)²⁷⁷. Los Agentes,

²⁷⁵ La norma b) dice así: "La entrega del original de las providencias o resoluciones en los procesos civiles, se efectuará, sin excepción, con tantas copias literales como Procuradores figuren en aquéllas más otra, a un empleado del Colegio en la mesa o mostrador en que éste se encuentre... Dicho empleado se limitará a comprobar estos extremos y si la fecha de notificación coincide con el día en que se practica, así como si vienen claramente especificados los Procuradores destinatarios y partes a quien representan... Conformados los extremos anteriores, el empleado del Colegio sellará con el fechador todas las copias y devolverá una de ellas al encargado de la Secretaría, como justificante de entrega. Por el contrario, en el supuesto de que faltase alguno de los requisitos anteriormente especificados, devolverá los originales y copias para la subsanación de la omisión que exista".

²⁷⁶ Norma d): "Seguidamente, los empleados distribuirán en sus casilleros, por medio de las carpetas en ellos existentes, los originales (...) y las copias de que se han hecho cargo. En el supuesto de que la notificación corresponda a más de un Procurador, el original quedará en el casillero de uno de ellos".

²⁷⁷ Esto es lo que sucede en la práctica, y así se refleja en la letra e) de las Normas reguladoras: "Los Procuradores por sí, o por medio de sus Oficiales habilitados, tomarán a diario las carpetas existentes en sus casilleros, a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y, si les conviniese, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, todos los originales de las resoluciones y sus correspondientes copias lite-

cada día, al llevar las notificaciones al servicio, también recogen las diligencias que han sido firmadas y devueltas por los Procuradores notificados; el Secretario unirá a las actuaciones esas diligencias²⁷⁸.

Pero, ¿qué ocurre en el supuesto de que el Procurador no acuda al salón a recoger las notificaciones o que, acudiendo, no las recoja? Porque una posibilidad, sin duda irregular, es que el Procurador vea la notificación que tiene en el cajetín, pero no quiera darse por notificado, por ejemplo, para que no le corra el plazo de la actuación que se le notifica. Vimos que el artículo 265 LEC establece que *“cuando los Procuradores no comparezcan en la Escribanía o local destinado al efecto, se les hará también la notificación en su domicilio”*. En algunos lugares donde se ha instaurado el servicio del que venimos hablando, a dichos efectos exclusivos, se toma como *domicilio de los Procuradores*, el salón de notificaciones referido, y se realiza la notificación por cédula al empleado del Colegio de Procuradores. Esto es, se hace la notificación domiciliaria de los arts. 266-268 LEC, pero considerando como receptor subsidiario al em-

rales, quedándose con dichas copias y, previa la firma de las notificaciones en los originales, entregarán éstos a los empleados del Colegio para que ellos los depositen también en el mismo día en el casillero de la Secretaría del Juzgado que corresponda”.

²⁷⁸ “Los empleados de las Secretarías encargados de llevar a cabo las notificaciones (agentes judiciales), al día siguiente, y también en el horario previsto en el apartado a) de estas Normas, tomarán los originales de los casilleros de sus Secretarías, devolviéndolos a la misma en el supuesto de que en aquéllos figuren las firmas de todos los Procuradores u Oficiales Habilitados de los mismos” (primer párrafo de la Norma f).

pleado del salón (en lugar de los mencionados en el 268: familiar, criado, vecino), que será quien firme la diligencia²⁷⁹.

De esa manera, se evita que el desarrollo del proceso quede en manos del representante procesal que no desea darse por notificado. Se viene así a dar cumplimiento al artículo 272.2 LOPJ ya citado: *“el Colegio de Procuradores organizará un servicio para recibir las notificaciones que no hayan podido hacerse en aquel local común por incomparecencia del Procurador que deba ser notificado. La recepción de la notificación por este servicio producirá plenos efectos”*. No sabemos si la intención del legislador al prever este último inciso era establecer la solución descrita, u otra más ‘radical’, como sería otorgar los efectos a la notificación desde que se recibe y se sella en ese servicio. De tal modo que posteriormente el empleado que ha recibido y firmado las notificaciones —al estar habilitado por los Procuradores del salón— repartiría las notificaciones a los Procuradores destinatarios, pero ya habrían surtido los efectos procesales de la comunicación. Si el Procurador acude o no a recoger las notificaciones, será de su responsabilidad, pero los términos

²⁷⁹ Este es el criterio que propuso la Junta de Jueces de Madrid y que fue aceptado por los Procuradores de esta ciudad: “Para el caso de que por razón de enfermedad o fuerza mayor, el Procurador o su Oficial Habilitado no hubiera podido concurrir a la firma de las notificaciones durante la mañana o la tarde del día en que las mismas fueron entregadas en el local del Colegio, el empleado de la Secretaría, al día siguiente, practicará la notificación por cédula a uno de los empleados del Colegio, cuya recepción producirá plenos efectos desde la fecha en que tal notificación por cédula se practique” (párrafo segundo de la Norma f) de la Circular 10/85 del Colegio de Procuradores de Madrid).

o plazos que en las notificaciones se señalen habrán ya empezado a contar.

Esa última interpretación posible del inciso '*la recepción de la notificación por este servicio producirá plenos efectos*' nos parece menos acertada que aquélla por la que se ha optado, ya que, de un lado, las notificaciones se dirigen a los Procuradores, que son los que por su preparación y función procesal ofrecen garantías de realizar de modo apropiado ese cometido y los empleados de ese servicio, al menos en algunos lugares y en la actualidad, no son Procuradores, sino empleados contratados por el Colegio de éstos, pero ajenos a esa corporación; además, muchos Procuradores, la mayoría, cumplen diligentemente su tarea y sólo unos pocos la incumplen, luego parece razonable que primero se intente realizar la comunicación al Procurador en cuestión, y en el caso de que falle, se practique la notificación al empleado en su lugar. Así, queda a cuidado del Juzgado, o mejor, de la parte que insta la notificación, velar para que ésta se lleve a fin con el Procurador que se resiste a darse por notificado²⁸⁰.

Como puede deducirse de la descripción que hemos hecho, las notificaciones que se realicen a través del Salón de Procuradores pueden llevarse a cabo con bastante rapidez; ordinariamente, si no

²⁸⁰ Los empleados del servicio pueden dar parte al Colegio, de los Procuradores que no cumplen con sus obligaciones. En ocasiones, se ha sancionado con la suspensión del Procurador que incumplía reiteradamente, y ha habido algún caso en el que se ha llegado a su expulsión.

existen problemas, puede tardarse un par de días desde que se emite la notificación hasta que se tiene por hecha y acreditada en los autos; y, aunque haya problemas, porque el Procurador destinatario incumpla, la manera de suplir ese incumplimiento no demora mucho su realización²⁸¹.

Por último, podemos señalar que el TC ha tenido ocasión de manifestarse recientemente a favor de la validez de este servicio, también desde una perspectiva constitucional, al decir, en la STC 59/1998 de 16 de marzo, que "desde el punto de vista de la tutela efectiva, nada hay que objetar al procedimiento establecido en el art. 272 LOPJ, dirigido sin duda, a facilitar la realización de los actos

²⁸¹ En la práctica, se sacan las copias de la resolución que haya que notificar al día siguiente en que ésta se dicte. Al siguiente día a éste último, antes de las diez de la mañana, el Agente lleva la notificación al salón, y si el Procurador acude antes de las doce, como está previsto, en ese mismo día se da por enterado, y se produce la comunicación; por tanto, en un total de dos días se puede realizar la notificación. Además, se puede añadir que, en el Salón de Procuradores de los Juzgados de Madrid, suelen entrar al día unas doce o trece mil notificaciones diarias; todas las que llegan al salón cada día antes de las diez de la mañana, se despachan antes de las doce, y se estima que hay un margen de error del 3-5% de las realizadas.

Una cuestión que retrasa este sistema ocurre cuando la misma notificación ha de realizarse a diferentes Procuradores, y solo hay una diligencia (para firmar) con las distintas copias de la resolución (porque copias ha de haber tantas como Procuradores que deban ser notificados, o sino, se devuelve la notificación al Juzgado). Si esto sucede, se dejará la diligencia (con la copia de la resolución) en el cajetín del Procurador que aparezca en primer lugar. Cuando éste lo firme, y lo devuelva al encargado, éste lo dejará (con otra copia) en el cajetín del segundo, y así hasta que lo firmen todos los representantes procesales. Lógicamente, se tardará tanto más, cuanto número de Procuradores haya. Si hubiera tantas diligencias, como Procuradores a notificar en el proceso, todo sería muy rápido, y es lo que sucede en algunos Juzgados; pero en otros no se hace así con el curioso pretexto de que los autos engrosan demasiado.

procesales de comunicación con los Procuradores de las partes. Sin embargo, de la misma forma que el TC ha considerado que una notificación defectuosa no siempre produce vulneración del art. 24.1 CE, sino solamente cuando impide el cumplimiento de su finalidad, cabe afirmar que produce indefensión constitucionalmente relevante dar plena eficacia a aquellas notificaciones, correctamente practicadas en el plano formal, cuando se acredita que no sirvieron para poner en conocimiento del Procurador y, a través del mismo, del interesado, la resolución a que se refieren, siempre y cuando dicho efecto no sea debido a causas que sean imputables a los mismos”.

Por tanto, en general, se considera una forma de notificar válida, pero, al igual que ocurre en el resto de casos, como vimos a tratar de la validez de las notificaciones, si el acto de comunicación no llega al interesado y se acredita ese desconocimiento efectivo e inculpable por parte de quien debía recibirlo, puede impugnarse la notificación. “En el caso —continúa la misma sentencia—, el Tribunal de apelación tuvo conocimiento de que el representante procesal de los demandantes había fallecido el mismo día en que se practicó la notificación a través del servicio constituido al efecto por el Colegio de Procuradores (art. 272.2 LOPJ), lo que obviamente impedía que la notificación llegara a su conocimiento. Ciertamente, la recepción de la notificación en el referido servicio debe producir plenos efectos, como el propio precepto legal establece. No obstante, en el supuesto se dio una circunstancia impeditiva, como fue el fallecimiento del Procurador el mismo día en que se recibió. Por lo tanto, dadas las excepcionales circunstancias del litigio, que excluyen toda

negligencia por parte del Procurador o del recurrente... ha de concluirse que, al considerar válidamente realizada la notificación y continuar adelante con el proceso, se ha vulnerado el derecho de defensa de los recurrentes en amparo”.

5.3. ¿ES VÁLIDA LA NOTIFICACIÓN REALIZADA AL ABOGADO, CUANDO NO HAY PROCURADOR?

Como acabamos de estudiar, el Procurador puede recibir y firmar todas las notificaciones que se hagan a la parte que representa, *“teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviene en ellas directamente el poderdante”*. Pero la LEC permite que el interesado comparezca por sí mismo, sin representación de Procurador, en algunas actuaciones procesales, como las que se recogen en el art. 4²⁸². En estos supuestos, surge la controversia sobre si el Abogado que defiende a la parte que así comparece puede o no recibir las notificaciones que a ésta se le hagan, también con la misma eficacia que si se realizaran al propio interesado.

En principio, no existe ninguna norma que habilite al Abogado en el mismo sentido que el art. 6 hace al Procurador. Lo que se dice expresamente en la LEC, a partir, como dijimos, de la reforma de 1992, es que el Abogado puede recibir las citaciones y los empla-

²⁸² Estas actuaciones son: los actos de conciliación; los juicios verbales, los de cognición y algunos de desahucio; los juicios universales (*cuando se limite la comparecencia a la presentación de los títulos de crédito o derechos, o para concurrir a Juntas*); los incidentes relativos a justicia gratuita, alimentos provisionales, embargos preventivos y diligencias urgentes que sean preliminares del juicio; y los actos de jurisdicción voluntaria (artículo 4 LEC).

zamientos que se realicen a la parte a la que asista (art. 271)²⁸³. Luego, fuera de estos casos, al no haber ninguna referencia en la ley, el Abogado no podrá hacerse cargo de las notificaciones y los requerimientos que reciba su defendido. En este sentido, coincidimos con TAPIA PARREÑO, cuando afirma: “Dentro del proceso la representación para recibir notificaciones sólo puede asumirla el Procurador que dentro de sus atribuciones, ostenta la de recibir notificaciones con los mismos efectos que si se entendieran con los poderdantes. Cuando la ley dispensa de la intervención de Procurador en determinados procesos (art. 4 LEC), los actos de comunicación deben realizarse con el interesado, recibiendo la notificación, sin que pueda valerse en principio de otra persona que no sea Procurador.

“El Abogado no puede actuar como representante y sólo puede asumir la dirección técnica en estos procesos, situación que no se ha modificado, entendemos con la reforma del art. 11 efectuada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal²⁸⁴.

“Ello no obstante, la comunicación practicada con este profesional, aunque irregular no provoca indefensión susceptible de amparo si, aún indiciariamente, se acredita que el Abogado puso en

²⁸³ El art. 271 II dice así: “Las citaciones y los emplazamientos de los que, siendo parte en el juicio estuvieren representados por Procurador o, cuando la Ley lo autorice, por Abogado, se harán por medio de representante”.

²⁸⁴ En este precepto se dice: “Tanto los Procuradores como los Abogados podrán asistir con carácter de apoderados o con el de auxiliares de los interesados a los actos de conciliación y a los juicios a que se refieren las excepciones del número 2º del párrafo segundo del artículo anterior, cuando las partes quieran valerse espontáneamente de ellos”.

conocimiento de sus defendidos el contenido de los actos procesales, siendo difícil observar en estos supuestos, situaciones de indefensión”²⁸⁵.

Este autor, en el último párrafo, tiene en consideración la STC 126/91 de 6 de junio, que trata sobre esta materia. En esta sentencia se afirma que “la notificación y emplazamiento hechos por el Juzgado del modo descrito²⁸⁶ como base del recurso no son sino actos irregulares, procesalmente incorrectos, imputables ciertamente al Juzgado de Primera Instancia, que debió entenderse con los interesados en persona... El problema reside en determinar, por consiguiente, si hubo o no efectivo conocimiento de las partes, si éstas fueron informadas por su Abogado de las vicisitudes procesales aludidas y, en suma, si sufrieron o no real y material indefensión, que es lo que el Tribunal Constitucional ha precisado como requisito para estimar los recursos de amparo en esta materia de actos judiciales de comunicación...”. En este sentido, afirma TAPIA PARREÑO que “la eventual estimación de una situación de indefensión contraria al art. 24.1 CE, cuando se ha realizado una notificación a un Letrado

²⁸⁵ TAPIA PARREÑO: “La doctrina del Tribunal Constitucional sobre actos de comunicación en el proceso civil”, en *Principios constitucionales en el proceso civil*. Editado por el Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1993, pág. 465.

²⁸⁶ En esta sentencia “la parte recurrida alega que la notificación de la Sentencia de la primera instancia, y el emplazamiento para acudir ante la segunda, se hizo de modo correcto y suficiente para satisfacer el derecho de la contraparte y la legalidad vigente, puesto que esas diligencias se entendieron con el Abogado que había defendido a los recurrentes y porque dicho Abogado podía representarlos, justificando esta tesis con la apelación al artículo 11 LEC”.

es muy difícil y se ha de reservar para casos extremos en los que efectivamente, se acredite el absoluto desconocimiento de las diligencias procesales, al haberse quebrado la relación negocial que unía al Letrado con el ciudadano”²⁸⁷.

Además, y para terminar, lo que no puede hacer una parte que resulta notificada a través de su Abogado, es impugnar únicamente la notificación de la sentencia que pone fin al proceso con un resultado adverso, porque, como indica el TC, una conducta así iría contra la ‘doctrina de los actos propios’: “Si bien la notificación de la sentencia que puso fin a la vía judicial fue hecha al Letrado, quien no ostentaba formalmente la representación de su cliente, no puede olvidarse que todas, sin excepción, las notificaciones que a lo largo de la tramitación del procedimiento se hicieron de las distintas resoluciones que se adoptaron en el seno del mismo, fueron también notificadas a dicho Letrado y, no obstante ello, el recurrente reaccionó

²⁸⁷ En nuestro supuesto, el TC tomó como indicio principal, de que la parte sí conocía la existencia del acto, la falta de acusación de silencio a su Abogado: “Ese silencio o falta de reproche al Abogado constituye, a la luz de la lógica de lo razonable, un elocuente indicio —además acreditado— que, unido a los otros que se dirán, sirven para fundar aquella presunción de conocimiento cierto que los interesados tenían de las actuaciones (apelación de la contraparte y notificación al Letrado)”. “Esos otros indicios base de la presunción judicial lo constituyen el contenido de las repetidas diligencias judiciales practicadas con el Abogado, en las que se hace constar que éste firma en nombre de los interesados y se obliga a dar cuenta a los mismos; el deber profesional del Letrado de hacerlo así; la pluralidad de partes —varios copropietarios— y su lógica relación de externa convivencia, al ser comuneros y copropietarios, con el demandante en el juicio; y la circunstancia de tener Sentencia ganada en primera instancia y valorar como preferente la no comparecencia en la apelación”.

frente a las mismas, se dio por notificado y formuló los escritos convenientes. La doctrina de los actos propios o regla que decreta la imposibilidad de *venire contra factum proprium*... y la regla de la buena fe... impiden, como decimos, aceptar la tesis del actor” (STC 198/1988 de 24 de octubre).

CAPÍTULO 6:
LA NOTIFICACIÓN
EN FORMA PERSONAL.

6.1. EL SERVICIO COMÚN DE NOTIFICACIONES.

Cuando una notificación ha de hacerse en forma personal, ordinariamente se lleva a cabo en el domicilio del destinatario del acto, como vimos. Los actos de comunicación que así deben practicarse se realizan por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, en las poblaciones donde estén instaurados. Este servicio se previó, como sabemos, en el art. 272.1 LOPJ, que volvemos a reproducir: *“En las poblaciones en que existieren varios Juzgados y el conjunto de la actividad judicial lo justifique, podrán establecerse servicios comunes dependientes de los Decanatos y de los Presidentes de las Audiencias Provinciales para la práctica de notificaciones y actos procesales de comunicación (...)”*.

El artículo que acabamos de citar está redactado según la versión introducida por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, por la que se reforma la LOPJ de 1985. Se modifican dos puntos

respecto a la redacción originaria. Por un lado, en cuanto a las clases de actos que pueden comunicarse mediante este servicio, se habla de '*notificaciones y actos procesales de comunicación*', mientras que en la versión primera se indicaban únicamente las '*notificaciones*'. Se ha hecho esta aclaración porque hubo quien erróneamente entendió que al referirse de modo exclusivo a las notificaciones, no podían realizarse por este servicio ni citaciones, ni emplazamientos, ni requerimientos²⁸⁸. Por otro lado, en la redacción de 1994 se posibilita la creación de estos servicios con dependencia también de *los Presidentes de las Audiencias Provinciales* y no sólo de *los Decanatos*, como se establecía en 1985. La exposición de motivos de la reforma establece que así "*se da una nueva redacción al apartado primero del artículo 272 de la LOPJ con el fin de aclarar*

²⁸⁸ En este sentido, cuando en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Madrid se iba a crear ese servicio, se dio traslado a la Junta de Secretarios judiciales de la propuesta del Decanato, y en el informe que esa junta emitió, se concluyó que "la regulación del art. 272 de la LOPJ sólo es aplicable a las notificaciones y no es aplicable ni a las citaciones ni a los emplazamientos ni a los requerimientos". Para justificar esta afirmación se dieron motivos varios, que pueden resumirse en una interpretación literal del artículo de la LOPJ citado y en una falta de consideración de las notificaciones como un género de actos de comunicación que admite las tres especies mencionadas.

Sin embargo, no faltaron Secretarios judiciales que enfocaron bien la cuestión, como PRADO ARDITTO, que escribió recién promulgada la LOPJ: "Habla el art. 272.1 únicamente de las notificaciones, omitiendo los otros tres actos de comunicación: citaciones, emplazamientos y requerimientos. Creemos, sin embargo, que emplea aquí la Ley la palabra notificaciones, en sentido genérico, equivalente a actos de comunicación, que comprende no sólo las notificaciones, en sentido estricto, sino también las citaciones, emplazamientos y requerimientos" (op. cit., pág. 85).

definitivamente el contenido de las funciones de los servicios comunes que, además, se extienden a las Audiencias Provinciales”.

El artículo 272 LOPJ es la única norma que trata de los servicios a los que nos referimos. El Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) elaboró en 1985 un borrador de Anteproyecto de Real Decreto, relativo al establecimiento de Servicios Comunes de actos de comunicación y embargos en determinadas poblaciones. En la exposición de motivos de ese borrador, entre otras cosas, se decía: *“La actividad de estos servicios comunes debe suponer, simplemente, la traslación a los mismos de la práctica material de las operaciones a realizar fuera de la sede del órgano judicial, como la concreta entrega de la cédula o copia de la resolución y recepción de firmas en los actos de comunicación, o la intervención de bienes y correspondiente documentación de lo actuado en los embargos, permaneciendo la elaboración de los documentos y su ulterior conservación y, en definitiva, la responsabilidad procesal de las actuaciones en cada uno de los órganos a los que aquéllas correspondan. La atribución de estas funciones a los servicios comunes dependientes del Juez Decano no encuentra obstáculo en los arts. 262 y 1442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil reguladores de la práctica de las referidas actuaciones”.* Pero esta iniciativa legislativa no se llegó a aprobar, ni ninguna otra con la misma finalidad; sin embargo, ha servido de modelo para la regulación particular que de estos servi-

cios se ha hecho por los Decanatos (o Presidencias de Audiencias) que han puesto en marcha oficinas de notificaciones²⁸⁹.

Estos servicios comunes se han establecido en varias ciudades, sobre todo en las grandes poblaciones²⁹⁰. En los lugares donde

²⁸⁹ Este Real Decreto fue aprobado por aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ el 6 de septiembre de 1985. Esta iniciativa constaba de nueve artículos y dos disposiciones adicionales. En el artículo 1º se preveía la creación de estos servicios *en las poblaciones en que existan diez o más Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de Primera Instancia o de Instrucción*, siendo posible también su establecimiento cuando el número fuera menor, si así se solicitaba y se justificaba su necesidad. El artículo 2º contenía el cometido de estos servicios: "(...) practicarán, a solicitud de cualesquiera órganos judiciales con sede en la misma población, las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos que deban tener lugar en cualesquiera procesos seguidos por aquéllos y que hayan de realizarse fuera de la sede de los respectivos órganos judiciales, pero dentro del término de su jurisdicción". El artículo 3º explicaba el modo concreto de practicar los actos de comunicación, y el artículo 4º cómo se realizarán los embargos. En el artículo 5º se establecía el orden de actuaciones que se seguirá en el servicio común: *por el orden en que hubiera tenido entrada en el mismo la documentación correspondiente*. Es el artículo 6º el que regula el sujeto activo de las actuaciones de estos servicios, mientras que el artículo 7º recoge el personal que compondrá tales servicios. El artículo 8º habla de *la planificación y distribución por sectores de población*; y el 9º preveía la adscripción a estos servicios de vehículos para la realización de sus funciones.

²⁹⁰ El primero de todos fue el instaurado en Madrid, que fue creado por Acuerdo Gubernativo número 93/87, de 6 de abril de 1987, del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez Decano de Madrid, y que comenzó a funcionar el 19 de mayo de ese año. El Acuerdo se acompañó de un Anexo de normas reguladoras del servicio, que nos puede servir de ejemplo para explicar algunas cuestiones de funcionamiento de estos servicios comunes.

En el apartado 1º del Anexo se dispone el establecimiento del Servicio Común de actos de comunicación y diligencias de embargo, "bajo la dependencia gubernativa del Decanato y la supervisión de la Junta de Jueces". En el apartado 2º se establece que "este servicio, bajo de dirección del Juez Decano, estará a cargo inicialmente de dos Secretarios de la Administración de Justicia, y se adscribirán

se hallan, cuando el Secretario de un Juzgado quiere practicar una notificación en el domicilio del interesado a través de este servicio, dicta una propuesta de resolución por la que solicita ser sustituido por el Secretario del servicio común²⁹¹.

Precisamente, en la medida en que los actos de comunicación que se practican por este servicio, son realizados por un funcionario judicial que no depende del Juzgado que tramita la causa, algunos, como DE FRUTOS VIRSEDA, han considerado que las notificaciones así llevadas a cabo están viciadas de nulidad: “Si aplicamos las reglas que nuestras leyes procesales nos dan para determinar la competencia territorial, objetiva y funcional llegamos a la convicción de que un Juzgado o Tribunal es competente para conocer de un asunto con exclusión de cualquier otro. Luego parece claro que los únicos funcionarios competentes para practicar los actos procesales de un proceso que corresponde en exclusiva a un Juzgado o Tribunal, si exceptuamos los casos de auxilio judicial tasados en nuestras leyes procesales, son los funcionarios adscritos a ese órgano juris-

a él 36 Oficiales, 12 Auxiliares y 54 Agentes de la Administración de Justicia” (posteriormente, el Ministerio de Justicia redujo a 36 el número de Agentes). Se dice en el apartado 3º que “su implantación se irá haciendo de forma escalonada, conforme lo vaya aconsejando la buena marcha del citado servicio”. En el apartado 4º, el partido judicial de Madrid se divide “en 18 Sectores que se corresponden con los 18 Distritos Municipales”.

²⁹¹ El apartado 5º del Anexo citado establece que “el Secretario de cada Juzgado formulará la correspondiente propuesta de providencia, que deberá obtener la conformidad del Juez respectivo, solicitando ser sustituido por un Secretario del servicio común o por alguno de los Oficiales, por razón de necesidad”.

diccional, bajo penal de nulidad, conforme previene el número 1 del art. 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”²⁹².

Nosotros pensamos que, en cuanto a actos de comunicación se refiere, no existe un problema tal de nulidad. La sustitución de los Secretarios entre sí, está prevista en la LOPJ (art. 483, regla 4ª). Si el Secretario del Juzgado en cuestión quiere libremente ser sustituido por el del servicio común, puede hacerlo; éste último a su vez, puede habilitar de modo permanente a los Oficiales que dependen de él para sean ellos los que realicen las diligencias de notificación y den fe pública de esos actos, como dispone el art. 282 LOPJ. Quizás se den problemas funcionales, en el sentido de que el Oficial que *practica la notificación desconocerá las circunstancias concretas del pleito de que trate*, y a la hora de dar explicaciones o facilitar la comunicación del acto estará más limitado. Además, su actuación se reduce a la entrega material de la notificación concreta. Pero el Secretario del Juzgado será, no sólo quien la ordene, sino también quien vele por si se ha llevado a cabo con las suficientes garantías; es decir, si la diligencia que extiende el Oficial actuante provoca dudas sobre la recepción efectiva de la notificación, podrá mandar que se repita el acto²⁹³.

²⁹² DE FRUTOS VIRSEDA: “Los servicios comunes de notificaciones y embargos (Nulidad de los actos procesales practicados por los funcionarios destinados en los mismos)”, en *La Ley*, nº 1, Madrid, 1992, pág. 1074.

²⁹³ Es decir, el Oficial del servicio que notifica no realiza por esto ningún acto de naturaleza propiamente jurisdiccional, en la que se precise tener competencia objetiva y territorial sobre el asunto. Incluso, en actuaciones de este estilo está pre-

De todas formas, sí vemos conveniente que cada actuación que se solicite de este servicio vaya acompañada de una resolución del Secretario del Juzgado que la pide, por la que se habilita al Secretario del servicio común (se solicita su sustitución); así se garantiza la validez de estos actos de comunicación en todo caso. Esa solicitud se enviará al servicio común, junto con dos copias de la resolución que se notifica: una, para entregar al destinatario del acto de comunicación o al receptor subsidiario, y otra, para acreditar la entrega del juzgado al servicio, a modo de recibo. Una vez que se practique el acto de comunicación, se registrará su resultado, y se devolverá al Juzgado correspondiente la diligencia, firmada por el Oficial notificador y por el receptor de la notificación, que documentará lo sucedido²⁹⁴.

visto el auxilio judicial, entre jueces, y las sustituciones, entre Secretarios. Además, al estar recogida esta posibilidad de comunicación en el art. 272 LOPJ se le está otorgando una cobertura legal, que estimamos suficiente. Cosa distinta es la referente a la participación de estos servicios en actos de ejecución, cuestión que excede el objeto de este trabajo.

²⁹⁴ El apartado 8º del Anexo dice así: "Los Auxiliares afectos al servicio depositarán la documentación recibida y clasificada en el casillero que corresponda de entre los 18 establecidos. De él podrá ser recogida a partir de las 8 por el grupo de funcionarios que tenga asignado ese Sector (...). Una vez practicadas —las diligencias— y registrado su resultado, las depositarán en el casillero destinado a cada Juzgado en la oficina del servicio. De allí serán recogidas por los funcionarios de los Juzgados que firmarán en tal momento su recepción en fotocopia confeccionada por el servicio sobre la lista a que se hace referencia en el apartado 7º, donde en la casilla correspondiente a observaciones, se habrá consignado por el servicio la devolución al Juzgado, con el resultado obtenido".

Así, los Secretarios que están al frente del servicio común se encargan: de la jefatura del servicio, de ejercer la fe pública judicial y de las demás funciones a que se refiere el artículo 473 LOPJ. Los Auxiliares destinados en ese servicio se ocupan de las tareas de recepción y registro de la documentación recibida de los Juzgados, de la distribución de esta documentación por zonas, y de la recogida de las diligencias de comunicación, de su registro y devolución a los respectivos Juzgados. Los Oficiales son los que realizan la práctica de las diligencias en los domicilios de los destinatarios. Irán solos cuando se trate de diligencias de comunicación, y acompañados del Agente judicial cuando sean diligencias de embargo. Estos Oficiales serán habilitados de acuerdo con el artículo 282 LOPJ.

Sólo se llevan a cabo por los servicios comunes de notificaciones, aquéllas que deban realizarse en forma personal²⁹⁵. Es decir, las indicadas en el art. 261 IV: *“cuando su destinatario sea o deba ser parte en el juicio o en cualquiera de sus instancias y dependa de la comunicación su personación en las actuaciones, cuando adopten la forma de requerimiento y en aquellos otros casos en que lo disponga la ley, o así lo acuerde el juzgador, por aconsejarlo las circunstancias particulares que concurran”*. Así, no se realizarán por este servicio aquellos actos de comunicación que la ley permita hacer por correo, o través de Procurador cuando la parte lo tenga.

²⁹⁵ En el último apartado del Anexo (el núm. 12º) se dispone que “seguirán practicándose en el Salón de esta Sede, destinado al efecto, las notificaciones a los Procuradores; aquéllas otras a las que se refiere el art. 261 de la Ley de Enjuiciamiento deberán verificarse en la forma que dicho artículo previene”.

El servicio común de notificaciones, desde su comienzo, está previsto para la realización de las diligencias de comunicación que hayan de practicarse fuera de la sede de los juzgados, las cuales se suelen denominar 'diligencias de calle'. Sin embargo, hay una práctica, extendida en algunos de estos servicios, por la que se ahorran acudir a notificar al domicilio de los interesados en gran número de ocasiones. Esta práctica consiste en enviar un telegrama al destinatario de la comunicación, para que se presente en estos servicios, y si así hace, se le notifica en la propia sede del servicio común. Si el notificado no acude en contestación al telegrama, entonces, será un Oficial del servicio el que vaya a notificarle a su domicilio.

Sin embargo, estas citaciones por telegrama presentan distintos inconvenientes. Para su estudio, reproducimos un ejemplo de telegrama enviado por estos servicios; el cual, después de un encabezamiento inicial en el que aparecen la fecha y hora de emisión, y el nombre y la dirección del destinatario, dice lo siguiente:

DE NOTIFICACIONES, CAPITAN HAYA, 66

017065699 588/96

PRESÉNTASE CON TELEGRAMA, DNI, PODER O LIBRO DE ACTAS, (U OTRA PERSONA CON AUTORIZACIÓN ESCRITA Y FOTOCOPIA DNI AUTORIZANTE), DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 1996 11-H. POR ASUNTO DE INTERÉS.

Los problemas que se derivan de una citación mediante un telegrama de este estilo, son los que siguen:

1º) En primer lugar, esta práctica no está prevista en la ley. Los servicios comunes fueron creados para realizar ‘diligencias de calle’: si la notificación se va a realizar en la sede de los Juzgados, donde debería efectuarse es en la Secretaría del Juzgado que la emitió. Estos servicios se amparan para realizar esta peculiar citación en el artículo 264 I LEC (“se harán las notificaciones en la Escribanía o en el local que en cada Tribunal estuviere destinado a este fin, si allí comparecieran los interesados”), entendiendo como ‘local destinado al fin de las notificaciones’ el del servicio común, lo cual no parece un sólido fundamento legal²⁹⁶.

2º) Otro problema que presenta este telegrama, si analizamos su contenido, es que no puede ser considerado una citación en sentido estricto, ya que no cumple los requisitos que exige el artículo 272 LEC para las cédulas de citación, en especial el referente al *objeto de la citación*, respecto a lo cual sólo se indica que el destinatario ha de presentarse “por asunto de interés”²⁹⁷.

²⁹⁶ Además, obsérvese, que cuando se instauró el otro servicio del que habla el art. 272 LOPJ, el Salón de Procuradores, en su normativa reguladora también se citó el mismo inciso del art. 264 LEC, como título de habilitación legal para la práctica de las notificaciones en ese lugar.

²⁹⁷ Si estudiemos el artículo 272 LEC, el cual señala qué debe contener la cédula de citación, en primer lugar se pide que aparezca “el Juez o Tribunal que hubiese dictado la providencia, la fecha de ésta y el negocio en que haya recaído”. De esto, en el texto del telegrama transcrito, únicamente aparece el número del Juzgado que emite la notificación, y además no es fácil que el interesado se percate de esto porque se indica con las tres primeras cifras del número de la izquierda que hay en la segunda línea (en nuestro ejemplo, el Juzgado 017). El número de la derecha marca el número de protocolo de los autos (588/96). Sin embargo, no cons-

3º) Por la imprecisión de su objeto, aunque se afirme el carácter voluntario de la comparecencia, es evidente que esto no se facilita. A nuestro entender, el problema radica en que la persona que recibe este tipo de telegramas no sabe, porque en el telegrama no se indica, que es libre de presentarse o no en la sede del servicio, en el sentido de que si desoye lo mandado no le pararán consecuencias desfavorables, ni conoce que le asiste la posibilidad de ser notificado en su domicilio²⁹⁸.

4º) No sólo no consta el objeto de la citación, sino que también ofrece dudas en relación con los documentos que debe traer el des-

tan, ni la fecha de la providencia que provoca la notificación, ni el negocio en que ésta ha recaído. Pero, sobre todo, el telegrama que comentamos no contiene el tercer requisito del 272: *"el objeto de la citación y la parte que la hubiese solicitado"*; tan sólo se dice la tan genérica frase 'por asunto de interés'; esto último es lo que realmente hace que no estemos ante una estricta citación. Por supuesto, tampoco aparece —porque no sería verdad— la prevención del párrafo quinto (*de que si no compareciere le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho*). Lógicamente, en nuestro telegrama sí se cumple el requisito número dos del artículo 272 LEC, ya que aparece *el nombre y apellidos de la persona a quien se hace la citación*. Y lo mismo cabe decir del cuarto punto, esto es, del *sitio, día y hora en que debe comparecer el citado*. Pero, obviamente, si estos dos requisitos no constaran sería imposible convocar a nadie. Por tanto, es bastante evidente que no estamos ante una cédula de citación.

²⁹⁸ SÁNCHEZ SÁNCHEZ (en *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, coordinados por ALBARCA LÓPEZ, Editorial Trivium, Madrid, 1994, pág.1118) señala que "no es correcta, por tanto, la corruptela de enviar una carta o un telegrama al notificado para que acuda al órgano judicial a fin de hacerle allí la notificación, aunque facilite la actuación de los Juzgados y Tribunales, salvo que conste que su comparecencia tendrá carácter voluntario (aun así surgirían dudas de si la personación es realmente voluntaria o por temor, al desconocerse las normas procesales y poder pensarse que debe acudir obligatoriamente)".

tinatario puesto que se habla del DNI, poder, o libro de actas, y esto es según se trate, aunque no se exprese, de una persona física, de una jurídica, o de una comunidad de propietarios, respectivamente.

5º) Además, en algunos actos de comunicación, mediante este telegrama se duplica la convocatoria del destinatario, ya que, aunque éste comparezca en la sede del servicio común, deberá volver a acudir al Juzgado otro día, para realizar la actuación que se le notifica²⁹⁹.

En conclusión, aunque mediante esta práctica se ahorren muchas diligencias que deberían realizarse en el domicilio de los interesados³⁰⁰, no por ello debe seguir haciéndose de esa forma tan perjudicial para los ciudadanos. Si se considera una fórmula adecuada, antes de practicar la notificación domiciliaria, intentar la comparecencia voluntaria de los interesados mediante un telegrama, esto debe hacerse, en nuestra opinión, desde el propio Juzgado que

²⁹⁹ Este telegrama no se envía cuando el acto de comunicación que se pretende realizar es una citación, porque sería citar al interesado para que acuda a la sede del servicio común 'por asunto de interés', consistiendo este interés en que vuelva a comparecer otro día en la sede del Juzgado correspondiente: sería absurdo y gravoso 'citar para citar'. Pero sí se emplea en otros actos de comunicación, como el emplazamiento, que requiere la personación del demandado, o en algunos requerimientos, que exigen que el destinatario tenga que volver otra vez a la sede de los Juzgados, no propiamente al servicio común, pero sí al Juzgado en cuestión, porque no puede realizar la actuación que se le solicita sobre la marcha.

³⁰⁰ El servicio común de notificaciones de los Juzgados de Madrid actualmente suele enviar el telegrama que hemos comentado, y realizar en la sede del servicio, en el 40% de las comunicaciones que se le encargan.

cita, y conteniendo esa citación todos los requisitos que la ley exige para las tales.

6.2. LA NOTIFICACIÓN EN EL DOMICILIO DEL INTERESADO.

Según vimos, el artículo 264 LEC establece que “*se harán las notificaciones en la Escribanía o en el local que en cada Tribunal estuviere destinado a este fin, si allí comparecieren los interesados*” (primer párrafo); pero “*no compareciendo oportunamente, se harán en el domicilio de la persona que deba ser notificada, a cuyo fin lo designará en el primer escrito que presente*” (segundo párrafo). Así, la notificación personal se intentará realizar, primero, en el Juzgado, y si esto no es posible, se acudirá al domicilio del interesado. En la medida en que las notificaciones que deben realizarse en forma personal son, sobre todo, aquéllas de las que se deriva la personación de la parte (art. 261 IV LEC), dichas notificaciones serán ordinariamente la primera comunicación judicial, que reciba el destinatario, de la existencia de un proceso contra él, luego parece difícil que se puedan hacer en la sede del Juzgado porque allí comparezca el notificado. Por tanto, la forma personal de realizar las notificaciones se lleva a cabo normalmente acudiendo al domicilio del que debe ser notificado.

La notificación *ad domum* se efectúa de modo ordinario por el Oficial, bien el del Juzgado que dictó la resolución que se notifica, bien por uno de los destinados en el servicio común de notificaciones. Éste es el que firma la diligencia de notificación, con la frase “*Yo, el Oficial, en sustitución del Secretario (...)*”. Aunque actúe por

derecho propio, porque dentro de sus facultades, como vimos, está la de realizar actos de comunicación, se utiliza esta fórmula para que pueda dar fe pública de los actos que diligencie, sin que sea necesaria la firma de testigos; es decir, para que conste de modo expreso la delegación a la que se refiere el art. 282 LOPJ³⁰¹.

Cuando el Oficial habilitado acude a un domicilio para realizar una notificación cualquiera, pueden ocurrir muchos supuestos distintos, que iremos exponiendo de forma ordenada³⁰².

A) Notificación en forma.

Cuando el Oficial notificador acude al domicilio del destinatario de un acto de comunicación procesal, la primera posibilidad que puede suceder es que el sujeto 'notificando' esté en su domicilio y acepte sin resistencias la comunicación. En este caso, se le notificará en forma: se le entregará la copia de la resolución que haya de comunicarse y se extenderá la diligencia correspondiente, según la clase de notificación de que se trate. La diligencia será firmada por

³⁰¹ En principio, el Oficial hará las notificaciones a las partes que deban hacerse en su domicilio, mientras que será el Agente judicial, como también dijimos, el que realice las "*las citaciones de los testigos y peritos y demás personas que no sean parte en el juicio*" (art. 273 LEC), cuando éstas se hagan domiciliariamente y no de forma postal; en este último caso, el Agente no dará fe del acto.

³⁰² Este epígrafe pretende ser descriptivo de lo que sucede en la práctica de la notificación domiciliaria. Así, podremos examinar, por un lado, si la práctica se adecua a la realidad legal y, por otro lado, si la ley responde a las necesidades del foro en esta materia. Como señalamos en la introducción, lo hemos redactado después de realizar un trabajo de campo en los Juzgados de Madrid.

el Oficial actuante y por el sujeto destinatario. Normalmente, si este último no ha puesto pegas a la notificación, no lo hará tampoco a la firma de la diligencia. Si no supiere firmar, tendrá derecho a que lo haga un testigo en su lugar. Pero, aún en los casos de que el destinatario se niegue a la firma, surtirá la diligencia todos sus efectos por la fe pública del funcionario actuante.

B) Negativa a recibir el acto de comunicación.

Un segundo supuesto, sobre el que en absoluto se pronuncia la Ley, ocurre cuando el destinatario de la notificación está en su domicilio, pero no quiere darse por notificado. En caso de que se niegue a recoger la notificación, el Oficial le advertirá de la obligación que tiene de hacerse cargo de ésta, y de que, en caso contrario, se hará constar en la diligencia su oposición a ser notificado. Si continúa negándose a recibir la comunicación, algunos Oficiales lo que hacen es pasarla por debajo de su puerta y lo hacen constar así en la diligencia: 'dejándola depositada en el interior del domicilio', y se tiene por notificado al destinatario de la comunicación. Es una fórmula un tanto violenta. Quizás sea más adecuado decirle que la notificación quedará a su disposición en el Juzgado, produciéndose los efectos de la comunicación³⁰³.

³⁰³ Esta es la solución por la que se abogaba en la "Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil" (Tomo I, Editorial Tecnos, Madrid, 1972, pág. 277), en cuyo art. 234 IV se disponía: "*Si el destinatario de la notificación rehusare admitirla, se le manifestará verbalmente que la copia de la resolución queda a su disposición en la Secretaría del tribunal que la haya ordenada y que dicha notifica-*

Lo que nunca hace —ni debe hacer— el Oficial notificador es dejar la comunicación en el buzón del destinatario. La comunicación domiciliaria es personal, esto es, debe entenderse con una persona: o bien con el propio notificando, o bien con una de las personas del artículo 268 LEC.

La anterior negativa puede ir acompañada de insultos, amenazas o agresiones, que en materia de actos de comunicación son infrecuentes (desde luego, menos frecuentes que en las diligencias de ejecución). En este caso se puede deducir testimonio y presentar la correspondiente denuncia en el Juzgado de Guardia. El testimonio se forma con la diligencia negativa de comunicación.

Otra posibilidad de negarse a recibir una notificación ocurre cuando la persona, a cuyo domicilio se acude, niega ser el sujeto que consta en la resolución que se comunica. En este caso, aunque lo niegue, si se tiene seguridad de que es él —por el conserje, o por el Procurador de la parte actora, o por otras circunstancias—, se le puede pedir que se identifique. Si no lo hace voluntariamente, se puede llamar a la Policía para que le conduzca hasta las dependencias policiales, lugar donde sí se le puede exigir que se identifique. Este supuesto es aún más infrecuente que el anterior³⁰⁴.

ción surtirá efecto desde este momento, haciéndose constar todo ello en la diligencia prevista en el párrafo anterior”.

³⁰⁴ Problema diferente —que sólo apuntamos— es que la persona que recibe la notificación se haga pasar por el sujeto destinatario de la misma, siendo otra dife-

Es sorprendente que la LEC no se plantee ningún supuesto de negativa a recibir una notificación. Se deja, por tanto, sin soluciones legales a los funcionarios notificadores, cuyas actuaciones en estos casos tendrán que ser improvisadas y siempre a riesgo de carecer de un mínimo de cobertura legal.

C) Notificación por cédula.

La persona a la que se dirige el acto de comunicación puede no encontrarse en su domicilio cuando el Oficial acude a notificar. En este caso, la LEC dispone que se haga la notificación por cédula: *“Cuando sea conocido el domicilio del que deba ser notificado, si a la primera diligencia en busca no fuere hallado en su habitación, cualquiera que sea la causa y el tiempo de la ausencia, se le hará notificación por cédula en el mismo acto y sin necesidad de mandato judicial”* (art. 266)³⁰⁵.

rente, ya que, normalmente al notificar no se pide, al receptor de la notificación, que se identifique.

³⁰⁵ Como dice GUASP DELGADO (*Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*. Tomo I, M. Aguilar, Madrid, 1943, pág. 740): “El cambio de la notificación personal a la notificación por cédula se produce por la sola concurrencia de estos supuestos sin necesidad de una declaración ni orden especial a tal efecto, lo que se dispone acertadamente por la ley para evitar dilaciones innecesarias: tal criterio permite que siga inmediatamente al intento de notificación personal fallido, la práctica de la notificación por cédula; así, la notificación por cédula se hará *‘en el mismo acto y sin necesidad de mandato judicial’* (art. 266 i. F.) donde el sustantivo *‘mandato’* equivale, sin ser del todo impropio aunque de más raro uso en la ley, al de *‘resolución’*”.

La notificación por cédula puede realizarse a cualquiera de las personas recogidas en el 268 I LEC: “*Dicha cédula será entregada al pariente más cercano, familiar o criado, mayor de catorce años que se hallare en la habitación del que hubiere de ser notificado, y si no se encontrare a nadie en ella, al vecino más próximo que fuere habido*”. Así, cuando no está el destinatario de la notificación, pero sí hay alguien en su domicilio, esta persona —que será normalmente un familiar o una persona empleada del hogar— se hará cargo de la notificación. Por otro lado, si no se encuentra a nadie “*en la habitación del que hubiere de ser notificado*”, la legislación dispone que se intente la notificación en la persona de un vecino.

El acto de comunicación realizado por medio de vecinos, como vimos, presenta muchos inconvenientes, no sólo porque se suelen oponer a hacerse cargo de una notificación ajena, sino también porque es grande el riesgo de que la cédula, en ese caso, no llegue a su destinatario o, al menos, no le llegue de una manera puntual y efectiva³⁰⁶. Si no se encuentran vecinos o éstos se niegan a recoger la notificación, el Oficial actuante intenta localizar al conserje de la

³⁰⁶ En su momento indicamos, al referirnos a los sujetos que interviene en la notificación, que consideramos grande la diferencia existente entre la recepción de la ‘cédula’ por una persona que se encuentra dentro del mismo domicilio del destinatario, y los casos en que esa cédula se entrega a un vecino, el cual ofrece menos garantías de que la hará llegar a su destinatario. Por tanto, en este último caso, nos parece más apropiado que sólo se deje el encargo de hacer llegar la notificación al interesado, a los vecinos que voluntariamente o, al menos, sin resistencias lo acepten.

fincas, si lo hay, ya que, como dijimos, se entiende incluido dentro del concepto '*vecino más próximo que fuere habido*'.

En ese caso, el Oficial habilitado para la notificación procurará que el conserje se haga cargo de recoger y entregar la cédula a su destinatario. El portero puede aceptar sin inconvenientes y firmar la diligencia sin poner pegas³⁰⁷; aunque, en ocasiones, se niega a recoger la cédula porque tiene el encargo, del sujeto destinatario de la misma, de 'no recoger nada que venga del Juzgado'. El funcionario actuante le explicará la obligación que tiene de aceptar la notificación y de colaborar con la Justicia; si se negara reiteradamente, puede, incluso, deducir testimonio y presentar una denuncia por falta de desobediencia a la autoridad.

D) Repetición del acto de comunicación.

Hay fincas en las que no existen vecinos cercanos a la casa donde se notifica, y también hay supuestos, como vemos, en los que los vecinos existentes no quieren aceptar la notificación ajena. En estas ocasiones, no queda más remedio que volver a intentar de nuevo el acto de comunicación³⁰⁸. A veces, los vecinos que se nie-

³⁰⁷ En la práctica, es frecuente que el portero sí coja la notificación, pero no firme la diligencia, ni aporte ningún dato sobre su identidad; para facilitar lo primero, el Oficial le suele excusar directamente de lo segundo.

³⁰⁸ No sólo se repite la notificación cuando no existe vecino, o cuando éste no acepta la notificación ajena; en ocasiones, se prefiere intentar de nuevo el acto, antes que entregar la cédula al vecino existente, por la poca garantía de éxito que ofrece esa comunicación. Esto iría contra el tenor de la ley, ya que el art. 266 LEC dice expresamente que '*si a la primera diligencia en busca no fuere hallado en su*

gan a recoger una cédula, sí facilitan, por el contrario, alguna información sobre el destinatario, que puede hacer posible repetir con éxito la notificación. Por ejemplo, pueden indicar si se ha ausentado varios días de su casa, o las horas en las que es más frecuente encontrarle en su domicilio.

De ser posible encontrar al destinatario de la notificación en otro momento, en la diligencia negativa de la comunicación, se dejará constancia de la hora en la que es preferible repetir el acto. Si la hora señalada está fuera de las hábiles, en los lugares donde exista servicio de guardia de la oficina de notificaciones, el Juzgado que lleve el asunto puede habilitar horas para que se acuda a repetir la diligencia en ese momento. El problema, en estos casos, se plantea

habitación, cualquiera que sea la causa y el tiempo de la ausencia, se le hará notificación por cédula'.

Sin embargo, hay que tener presente el origen de este inciso; como cuenta SÁNCHEZ SÁNCHEZ (op. cit., pág. 1121), “esta expresión se introdujo en la LEC, intentando mejorar la redacción que figuraba en el art. 3º de la Ley de Notificaciones de 1837 y en el 23 de la primera Ley de Enjuiciamiento. Hasta ese momento era frecuente que, si quien iba a ser notificado quería eludir o dilatar la práctica de la diligencia, se ocultaba o se ausentaba y su familia manifestaba al funcionario notificador que aquél estaba ausente y regresaría pronto; entonces se extendía la diligencia recogiendo la manifestación, no se entregaba la cédula y, posteriormente, al darse cuenta al Juez, éste ordenaba que se hiciese saber lo sucedido a la parte contraria, la que debía presentar un nuevo escrito alegando lo que creyera pertinente”.

Por eso, somos partidarios —con el autor citado— de una interpretación flexible del art. 266, que otorgue al Oficial que notifica un cierto margen de actuación: “ha de valorar las circunstancias de cada caso, pues el artículo exige que actúe, como proceda, ‘sin mandato judicial’”. Es decir, no debe interrumpir la diligencia para consultar al juzgador (lo que demoraría la actuación), sino que, en el ejercicio de sus funciones, decidirá si entrega o no la cédula, en atención a las circunstancias del momento”.

cuando no hay servicio común de notificaciones o turno nocturno que pueda acudir a horas inhábiles, para lo cual, la ley no ofrece ninguna solución³⁰⁹.

Por último, si de las consultas que el Oficial realiza, obtiene noticia de que la ausencia del destinatario no es temporal, sino definitiva, puede suceder, o bien que las personas consultadas sepan el nuevo domicilio de aquél, el cual se haría constar en la diligencia para intentar la notificación en ese lugar³¹⁰, o bien que se desconozca completamente el lugar donde el destinatario puede ser habido, lo

³⁰⁹ A veces, por la especialidad del destinatario o del lugar en el que vive, es difícil encontrarle en su domicilio cuando se acude a notificar. Piénsese en las notificaciones que deban hacerse a 'pubs' o locales de apertura nocturna, o en lugares de playa, donde la gente (vecinos incluidos) no está en sus casas habitualmente durante el día, o personas en zonas costeras, como pescadores, etc. Para estos casos y similares, no hay ninguna solución legal. Una solución, que llevan a cabo los oficiales notificadores de algunos lugares, es acudir a la policía local para que por la noche, o bien practiquen ellos la notificación, o bien acompañen al Oficial a realizarla. Es, desde luego, una solución un tanto extrema y con poco apoyo legal (tiene, como mucho, 'cierta inspiración' en el art. 178 LECr).

Pero, si la intención es poner todos los medios posibles para evitar la notificación por edictos, que sólo es un medio ficticio y formal de comunicación, puede llegar a admitirse con ciertas cautelas. No deja de ser una notificación cuya ejecución material se encarga a un funcionario no judicial, como ocurre en la notificación por correo; por tanto, podría obrarse de manera similar. El problema está en que no puede convertirse en un remedio habitual, en cuanto surjan dificultades al practicar una notificación, sino que debe reservarse para casos verdaderamente excepcionales, en los que, por las circunstancias extraordinarias que rodeen un acto de comunicación, se acuerde motivadamente por el Juez.

³¹⁰ En este caso, se puede dar traslado de esa diligencia negativa de comunicación al Juzgado, para que lo ponga en conocimiento de la parte contraria, con el fin de que ésta inste esa nueva notificación; o bien, a veces, se practica directamente la comunicación en el nuevo domicilio consignado.

que permitiría acudir a los edictos, ya que *por haber mudado de habitación se ignora su paradero* (art. 269 LEC).

6.3. CUESTIONES EN TORNO A LA NOTIFICACIÓN 'POR CÉDULA', TRATADAS EN LA JURISPRUDENCIA.

Las notificaciones realizadas a un receptor distinto del destinatario³¹¹, aunque están permitidas por el art. 266 LEC, provocan distintos problemas, lo cual ha generado cierta jurisprudencia sobre el asunto, que vemos conveniente tratar con independencia.

En primer lugar, la STC 39/1987 de 3 de abril ofrece una descripción, en nuestra opinión, muy acertada de los motivos que justifican el empleo de la notificación 'por cédula': "no es exigible, legal y constitucionalmente, que la cédula de citación sea entregada personalmente al destinatario, pues tal exigencia podría perturbar el normal desenvolvimiento de la justicia, sí lo es, en cambio, cualquiera que sea la forma en que la citación se realice, el que, en los casos en que la comunicación no pueda ser recibida por el propio destinatario, lo sea por una de las personas a quienes la Ley impone la obligación de hacerla llegar a aquél, ya que estos requisitos consti-

³¹¹ Recordamos que con el término notificación 'por cédula' se está haciendo referencia, sobre todo, a una notificación que se practica con una persona distinta del destinatario, es decir, a la realizada a uno de los receptores subsidiarios del art. 266; más que referirse —como parece o como antes sucedía— a la entrega de una realidad material distinta; lo que variará será, como vimos, la diligencia que acredite la entrega de la copia de la resolución que se notifica. Por eso, algunas de las cuestiones que en este epígrafe se comentan se aplican por igual en la notificación postal, si se realiza con persona distinta del propio interesado.

tuyen la garantía mínima para que el destinatario pueda ejercitar el derecho de defensa que la Constitución le reconoce”.

Además, como se dice en otro lugar de la misma sentencia, “aun cuando esta forma de verificar la citación no asegura en la misma medida su conocimiento por el interesado, no puede considerarse contraria a la Constitución en cuanto tiende a asegurar el desarrollo normal del proceso e impedir una eventual frustración del derecho a la tutela judicial de la contraparte, estableciendo, a través de los posibles receptores de la cédula de citación, un equilibrio entre los derechos que a ambas partes reconoce el artículo 24.1 de la Norma fundamental. Pero ese mismo equilibrio obliga a otorgar una especial relevancia, desde el punto de vista constitucional, al cumplimiento de los requisitos que la ley exige para practicar la citación a persona distinta de la interesada”.

Luego, según el último inciso, los requisitos que la ley exige que debe contener la cédula (más bien, la diligencia que acredita la entrega) tienen relevancia constitucional³¹². Estos requisitos son es-

³¹² Esa relevancia ha sido puesta de manifiesto en otras ocasiones. Por ejemplo, la anterior STC 22/1987 de 23 de febrero dijo que “los requisitos que exige la Ley para practicar la citación a persona distinta de la interesada ofrecen relevancia constitucional y son garantías de que el citado conocerá a tiempo la citación y podrá comparecer en el momento fijado y actuar en su defensa”. También, la STC 195/90 establece que “si bien el legislador permite en ocasiones que el acto de comunicación procesal se realice a persona diferente del interesado, establece una serie de requisitos para tal modalidad de llamamiento que el acto ha de cumplir, pues aquellas exigencias encuentran su razón de ser y finalidad última, en la garantía de que el destinatario del acto tendrá oportuna noticia del mismo. Y por ello, el cumplimiento de tales requisitos deberá examinarse en cada supuesto concreto de

pecialmente los que se indican en el art. 268 II LEC: *“nombre, estado y ocupación de la persona que reciba la cédula, su relación con la deba ser notificada, y la obligación que aquélla tiene... de entregar a ésta la cédula así que regrese a su domicilio, o de darle aviso si sabe su paradero”*. Dada su relevancia, parece claro que cuando no se observen estos requisitos en general, se puede producir indefensión en el destinatario, como ocurre en la STC 195/1990 de 29 de noviembre³¹³. Sin embargo, no está tan claro qué ocurre cuando el in-

conformidad con aquella *ratio* y fundamento que inspira su existencia”. Como último ejemplo, la más reciente STC186/1997 de 10 de noviembre declara que “deberá extremarse el cumplimiento de los requisitos que la ley impone para la práctica de esta modalidad de actos de comunicación procesal (art. 268 LEC), que ofrecen relevancia constitucional y son garantía de que llegarán a conocimiento del destinatario”.

³¹³ “Del examen de la diligencia resulta, pues, que se incurrió en varias omisiones esenciales a los efectos que nos ocupan. Así lo son la falta de identificación correcta del actuario, la no consignación concreta de la ausencia del destinatario, máxime cuando se trataba en este caso de una empresa que, según posteriormente revelaron las subsiguientes actuaciones, tenía su domicilio en tales señas, sin que no obstante se hiciese constar la hora en que se practicó la diligencia o cualquier otro dato que documentase que ésta se encontraba cerrada, o que ninguno de sus dependientes, trabajadores o representantes —a los que conforme el art. 268 de la LEC, debió acudir primero para practicar la diligencia— quisiera hacerse cargo de la comunicación. Tampoco se identifica suficientemente a la persona a la que se hace la entrega de las copias y con la que, en definitiva, se entendió el emplazamiento, pues la ley exige que además de sus datos personales, se trate del vecino más próximo y se hagan constar en la diligencia la relación que mantiene con el destinatario, circunstancia que, en este supuesto, se concretaba en la reseña de su domicilio a efectos de apreciar la proximidad al de la entidad demandada. Por último, se omite toda referencia a las obligaciones del receptor para con el interesado en orden a la entrega de las copias y las sanciones que conlleva el incumplimiento de tal obligación de entrega.

“Todo ello, determina que haya de entenderse conculcado el derecho que consagra el art. 24 de la Constitución por un acto de comunicación procesal que, como el presente y según se ha expuesto, no cumple los requisitos y exigencias

cumplimiento es sólo de alguno de ellos, porque salta a la vista que no todos tienen la misma importancia. Así, la sola omisión del estado civil de la persona que recibe la cédula no puede acarrear la invalidez de la notificación, como se pretendía en el supuesto de la STS 29.XI.84 (RJ 1984\5689)³¹⁴. Pero en la STS 4.VII.96 (RJ 1996\5557) se decreta la nulidad de una diligencia de comunicación, entendida en el domicilio del destinatario con su empleada del hogar, en la que faltaba la consignación de la obligación que tenía la receptora de entregar la cédula al interesado³¹⁵.

mínimas establecidas por el legislador para garantizar su real conocimiento por el interesado y asegurar por tanto al mismo tiempo la noticia del proceso pendiente y su derecho a intervenir en aquél" (STC 195/1990).

³¹⁴ "No puede en modo alguno estimarse la invalidez de la dicha notificación, por infringir lo dispuesto en el artículo 268 LEC, toda vez que en ella figura, tal y como exige el precepto procesal, tanto el nombre de la persona que recibe la cédula, como su ocupación —la de conserje del edificio— y, por tanto su relación con el citado presunto inquilino del mismo omitiéndose tan sólo el estado civil del conserje, que, obviamente, ni tenía influencia en la citación, ni su omisión puede ser reputada tan grave como para ocasionar la nulidad de un acto de comunicación" (STS 13.XI.84).

³¹⁵ "No obstante ello, y dado que el cumplimiento de las formalidades en orden a notificaciones, citaciones y emplazamientos son de evidente orden público, y que las exigencias del artículo 268 LEC han de ser cumplidas rigurosamente (STC 39/1996, de 11 de marzo), ha de estimarse la queja de la recurrente, aunque sea de una deficiencia técnica indudable, pues en autos figura que en las diligencias por las que se hace constar la notificación de la sentencia de primera instancia a la demandada-recurrente y su emplazamiento para comparecer ante la Audiencia, no figuran que las personas que recibieron la cédula tenían obligación de entregársela a aquélla, ni que se les hiciese saber esto por el que efectuaba el acto procesal en cuestión. Esta Sala no puede presumir gratuitamente que, a pesar de ello, la recurrente conoció el contenido de los actos procesales antedichos, y, como lógica consecuen-

No obstante, el requisito que el TC considera más necesario para la validez de la notificación a persona distinta del interesado es la identificación del receptor: “no puede considerarse válidamente realizada la citación cuando, como en el caso que nos ocupa, nos constan los datos necesarios para poder identificar al receptor de la misma” (STC 39/1987 de 3 de abril); “podría darse un vicio trascendente en el caso de que supusiera una insuficiente identificación de la persona receptora” (STC 155/1989 de 5 de octubre)³¹⁶. En el mismo sentido se pronuncia la doctrina, como MONTERO AROCA, que afirma: “uno de los requisitos más claros de la diligencia que debe unirse a los autos, acreditando la entrega de la cédula, es el de la identificación de la persona que la recibe. Esto es algo tan obvio y no parece que pueda calificarse de mera irregularidad formal el que quede sin identificar ‘la vecina que recibe la cédula’”³¹⁷.

cia, ha de estimar el primer motivo del recurso por indefensión de la recurrente, que no pudo hacer valer sus razonamientos en la Audiencia” (STS 4.VII.96).

³¹⁶ Esta exigencia de identificar necesariamente al receptor de la notificación distinto del destinatario, también es aplicable a los casos en que aquélla se realice por correo certificado, como se deduce de la STC 41/1989 de 16 de febrero: “no consta dato alguno sobre la persona que se hizo cargo de la notificación, figurando sólo una firma ilegible en el lugar del destinatario. No cumple, pues, la notificación así realizada los requisitos... para las notificaciones que no se realicen personalmente al interesado, es decir, faltan las circunstancias personales de quien recibió la notificación y su relación de parentesco o vecindad con el destinatario. Requisitos que no pueden eludirse por el hecho de realizarse la notificación por correo certificado con acuse de recibo”.

³¹⁷ MONTERO AROCA: “Los requerimientos notarial y judicial en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria”, en *La Ley*, nº 4440, de 17 de diciembre de 1997, Madrid, pág. 5.

El 268 III establece que “dicha diligencia será firmada por el actuario y por la persona que reciba la cédula, y si ésta no supiere o no quisiere firmar, se hará lo que se previene en el artículo 263”. No vamos a insistir en la innecesariedad de que firmen testigos cuando no lo haga el receptor, por la intervención en ese acto del Oficial habilitado para dar fe pública con plenitud de efectos; baste recordar lo que establece la STC 155/1989 de 5 de octubre: “en cuanto a la firma de los dos testigos que reciben la cédula y no quieren firmar con indicación de las circunstancias de los mismos, a lo que se refiere el último párrafo del artículo 268, en relación con el 263, es claro que hoy no es exigible ante la intervención del Secretario y la plenitud de la fe pública que ello comporta, conforme al artículo 281.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Por último, nos referiremos a una cuestión controvertida: si se puede notificar por cédula en todos los casos en que la ley habla de notificación personal. La controversia se ha centrado sobre todo en el caso del art. 769 LEC, que dice así: *“La sentencia que se pronuncie en el juicio seguido en rebeldía será notificada personalmente al litigante rebelde, cuando pueda ser habido, si así lo solicitare la parte contraria. En otro caso se hará la notificación en la forma prevista en los artículos 282 y 283”*.

Este tema se planteó en la STS 13.XI.93 (RJ 1993\8909), en la cual se entiende que es erróneo “juzgar la existencia de la notificación personal por sus resultados” y “la idea de que sería sólo notificación personal la que se entiende y practica con el propio litigante o persona notificada”, y se dice que “esta interpretación no es admi-

sible, de acuerdo con los antecedentes históricos y sentido del precepto aplicable”. Se declara en esa sentencia, sobre la posibilidad señalada en el art. 769: “reclama que la referida posibilidad se ejercite cuando el litigante rebelde *pueda ser habido*, esto es, cuando conste su domicilio, mas no exige que aquél sea efectivamente hallado en su persona al tiempo de practicar la notificación. En consecuencia, a la expresada notificación se aplican los arts. 266 y siguientes concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Basta que la notificación sea eficaz, en términos jurídicos, caso de que el interesado directo no se halle en su domicilio, con que ésta se haga mediante entrega de cédula a cualquiera de las personas próximas al interesado que señala el art. 268 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Sin embargo, alguna doctrina ha criticado esa interpretación del 769 LEC, estando más bien a favor de una interpretación literal de los incisos ‘*pueda ser habido*’ y ‘*notificar personalmente*’. Dice BACHMAIER WINTER: “El sentido literal del art. 769 LEC no deja lugar a dudas, pues contempla específicamente la solución para el caso de que la notificación personal no pueda practicarse, por ‘no ser habido’ el destinatario: prevé que se aplique el régimen general de notificaciones en rebeldía, es decir, que se notifique en estrados, y se proceda a su publicación. No existe aquí, por tanto, ninguna laguna legal. El hecho de silenciar toda expresa referencia a las ci-

taciones *ad domum* no debe significar otra cosa que su improcedencia a los efectos de la eliminación de la audiencia al rebelde”³¹⁸.

En el último inciso de la cita anterior está el fundamento de esa postura. La autora tiene en cuenta que “la notificación personal de la sentencia tiene como resultado excluir la audiencia en rebeldía”, y que “sólo mediante la notificación en la propia persona del demandado se tiene la garantía de su efectivo conocimiento, y por tanto, procede eliminar la posibilidad de la audiencia en rebeldía”³¹⁹.

Esta doctrina ha sido acogida en una sentencia posterior, la STS 12.VI.95 (RJ 1995\4737): “La notificación personal de la sentencia al demandado rebelde (cuando la pide el demandante), a que se refiere el artículo 769 de la Ley Procesal Civil, ha de entenderse... en el estricto sentido de que ha de serle hecha necesariamente en su propia persona... y si dicha notificación “in personam” no es posible (cualquiera que sea la causa que lo impida), la sentencia ha de serle notificada necesariamente en la forma que determinan los artículos 282 y 283 (edictos), por así venir impuesto, de forma imperativa y expresa por el artículo 769 y, de manera indirecta, por el artí-

³¹⁸ BACHMAIER WINTER: *La rebeldía en el proceso civil norteamericano y español*, Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1994, pág. 203.

³¹⁹ BACHMAIER WINTER: op. cit., pág. 204. En sentido parecido, LOBO GARCÍA, quien realiza un comentario a la STS 13.XI.93 citada y también se sitúa en una postura contraria a la misma (en “Notificación de Sentencia a litigante rebelde. Validez de la practicada por cédula”, *Revista General del Derecho*, nº 597, Valencia 1994, págs. 6543-6550).

culo 772 de la repetida Ley, pues solamente en ese doble y concurrente supuesto (no notificación en su propia persona y subsiguiente notificación por edictos) queda reservada a dicho demandado rebelde la posibilidad de utilizar contra la referida sentencia el llamado recurso de audiencia, si concurren los demás requisitos que lo condicionan (artículos 773 y siguientes de la misma Ley adjetiva)".

Realmente, en los casos del art. 779 LEC, por su relación con el art. 772, parece conveniente entender de modo restrictivo que la resolución sea '*notificada personalmente*', es decir, que sólo sea posible entregar la copia de esa resolución al propio destinatario y no a un receptor subsidiario. Pero, en general, pensamos que cuando una resolución debe ser "*notificada personalmente*" al destinatario, significa que se han de seguir los trámites de la 'forma personal': se acudirá al domicilio del que deba ser notificado, y si se le encuentra allí, se le notificará en su persona, y si no, se hará la notificación a una de las personas recogidas en el artículo 268 LEC. Si lo que se pretende es que la comunicación llegue a su destinatario, siempre serán mucho mayores las posibilidades de que esto suceda, entregando la cédula de notificación a un familiar del destinatario, que publicándola en un periódico oficial.

CAPÍTULO 7:
LAS NOTIFICACIONES
REALIZADAS POR EDICTOS.

7.1. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS.

Al hablar de las distintas formas de llevar a cabo las notificaciones, se han adelantado ya algunas características de la comunicación edictal: es una forma legal válida de practicar actos procesales de comunicación regulada en el artículo 269 LEC, supletoria de la forma personal y, por tanto, referida a comunicaciones de las que depende la personación de la parte a la que se dirige, y consistente en una ficción jurídica —de muy escasa eficacia material— que permite al actor continuar adelante con el proceso cuando no sea posible localizar al demandado en su domicilio. Recordemos su precepto regulador: *“Cuando no conste el domicilio de la persona que debe ser notificada, o por haber mudado de habitación se ignore su paradero, se consignará por diligencia, y el Juez mandará que se haga la notificación fijando la cédula en el sitio público de costumbre, e insertándola en el... ‘Boletín Oficial’ de la provincia”*.

Esta forma de practicar la comunicación procesal no consiste propiamente en una notificación, sino que estamos, más bien, ante una *publicación*. Es decir, no supone una comunicación activa dirigida a un sujeto determinado; se trata, por el contrario, de fijar pasivamente la resolución que se quiere comunicar en un medio de difusión de carácter general³²⁰. Por tanto, estamos ante un medio *formal* de comunicación, en el que no interesa tanto que la resolución llegue materialmente a conocimiento del destinatario, como que quede fijado de modo formal que se ha intentado dicho conocimiento. Mediante los edictos no se asegura la recepción oportuna de la resolución por el interesado, ni puede constar en las actuaciones un acto escrito que acredite tal recepción, como en el resto de formas notificadorias. En estos casos, se realiza una *fictio iuris* mediante la cual se tiene por notificado a un sujeto, como si efectivamente hubiera recibido el acto a él dirigido; aunque puede que no tenga ninguna noticia de ese acto.

Al ser un medio ficticio, “el emplazamiento edictal *no garantiza en adecuada y suficiente medida la defensa*, por la muy posible falta

³²⁰ En este sentido, afirma COMELLAS SALMERÓN (en “Ideas básicas para el estudio de los actos de comunicación en el proceso”, en *Revista de Derecho Procesal*, Madrid, 1968, págs. 946): “La notificación es el instituto que realiza la exigencia de provocar el conocimiento en una dirección preestablecida por el sujeto que insta el procedimiento de transmisión, guiándole hacia el destinatario, mientras que aquella otra manifestación de la publicidad, en la que está ausente ese aspecto dinámico, que solo provoca la inscripción de un acto en un registro público, es solo una mera publicación, en la que falta la dirección y consiguientemente, indeterminación del destinatario, y que por ello, la noticia se transmite a una colectividad indeterminada de individuos, y así la notificación se convierte en publicación”.

de conocimiento de los particulares de esas llamadas genéricas al proceso contradictorio en el “Boletín Oficial” de las provincias” (STC 108/1985 de 8 de octubre). Es muy probable que el destinatario particular no adquiriera conocimiento oportuno de la notificación, y es frecuente que deje, al demandado de esta forma, en la situación de rebeldía involuntaria. Por tanto, sólo debe utilizarse cuando se deba garantizar el *derecho de defensa del actor*, es decir, se permiten las notificaciones ficticias “pues, el proceso civil, como institución orientada a la satisfacción de pretensiones, no puede articularse en términos tales que el servicio al principio *audiatur et altera pars* se alcance a costa de sacrificar el derecho de quien ejercitó la acción por demorar indefinidamente la satisfacción de su pretensión” (STC 83/1983 de 21 de octubre)³²¹.

La consecuencia de su carácter poco garantista, no puede ser otra que emplear la notificación por edictos sólo cuando no sea posible hacerlo de otra manera. Como se indica en la STC 186/1997 de 10 de noviembre, “la citación y el emplazamiento edictal son válidos constitucionalmente, pero por ser ‘ficciones jurídicas con un significado más simbólico que real (...) cuya recepción por el destina-

³²¹ En sentido parecido, la STC 203/1990 de 13 de diciembre, expone: “El derecho de defensa reconocido en el art. 24.1 de la Constitución implica la posibilidad de un juicio contradictorio en el que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos y, por ello, el emplazamiento personal, al asegurar que el demandado pueda comparecer en juicio y defender sus posiciones frente a la parte demandante, se convierte en instrumento ineludible para garantizar tal derecho resultando necesario para justificar su sustitución que así lo exija el derecho de tutela del demandante”.

rio no puede ser demostrada' han de entenderse necesariamente como un '*último y supletorio remedio* (...) reservado para situaciones extremas, cuando la persona buscada no pueda ser habida' —STC 29/1997, y en el mismo sentido SSTC 97/1992 y 193/1993-³²².

No sólo el TC se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el carácter subsidiario de la comunicación edictal, sino que también el TS lo ha hecho, como en la STS 27.XII.94 (RJ 1994\10326), donde se dice: "Es constante y reiterada doctrina de esta Sala (...) que el emplazamiento y las notificaciones edictales son medios supletorios, a utilizar sólo como remedio último, cuando ni aun con el empleo de aquella mínima y exigible diligencia sea posible averiguar la identidad o el domicilio de la persona o personas a las que se ha de demandar [Sentencias de 30 mayo 1989 (RJ 1989\3903), 18 enero y 5 abril 1991 (RJ 1991\299 y RJ 1991\2639) y 26 mayo 1993 (RJ 1993\3984), entre otras]"³²³.

Sin embargo, ha habido una evolución jurisprudencial en el modo de interpretar ese carácter subsidiario. Como se cuenta en la

³²² Además de esas sentencias citadas, también se encuentran en el misma línea, las SSTC 234/1988 de 2 de diciembre, 141/1989 de 20 de julio, 196/1989 de 27 de noviembre y 216/1992 de 6 de diciembre.

³²³ En el mismo sentido, SSTS 18.V.81 (RJ 1981\2168), 31.X.89 (RJ 1989\7039), 18.I.91 (RJ 1991\299), 5.IV.91 (RJ 1991\2639), 16.XII.91 (RJ 1991\9714), 29.III.93 (RJ 1993 2402), 26.V.93 (RJ 1993\3984), 24.VII.93 (RJ 1993\6481) 2.IX.93 (RJ 1993\9108), 15.VI.94 (RJ 1994\6993), 26.VII.94 (RJ 1994\6786), 24.X.94 (RJ 1994\10571), 27.XII.94 (RJ 1994\10326) y 24.III.95 (RJ 1995\2396).

STS 12.I.93 (RJ 1993\475), antes, la simple manifestación del actor de que desconocía el domicilio del demandado era suficiente para provocar la notificación edictal³²⁴. Ahora, sin embargo, se exige el cumplimiento riguroso de *tres condiciones* antes de pasar a los edictos. Esta triple exigencia se ha consolidado como doctrina jurisprudencial, siendo la STC 157/1987 de 15 de octubre una de las primeras sentencias donde aparece esta doctrina: “La citación edictal, aun siendo válida constitucionalmente, requiere, por su cualidad de último remedio de comunicación, no sólo el *agotamiento previo de las otras modalidades* de más garantía y la *constancia formal de haberse intentado* practicarlas, sino también que el acuerdo o resolución judicial de tener a la parte como persona en ignorado paradero —presupuesto de la citación por edictos— se halle fundado en *criterios de razonabilidad que lleven a la convicción o certeza de la*

³²⁴ STS 13.I.93: “Es doctrina tanto del Tribunal Constitucional [vid. Sentencias de dicho Tribunal de 22-7-1988 (RTC 1988\155), 16/1989, de 30 enero (RTC 1989\16) y 242/1991, de 16 diciembre (RTC 1991\242)], como de esta Sala, que si bien en principio mantuvo una estricta interpretación del art. 269 LECiv, como acredita la S. 29-10-1900 a tenor de la cual cuando el actor afirma la circunstancia que recoge el art. 261 de la Ley Rituaria (se está refiriendo al vigente en dicha época), ha de emplazarse a la adversa por medio de edictos —cual aquí se ha hecho—; no es menos exacto, que como tan severa exégesis del citado precepto podía provocar y de hecho originaba abusos por parte de los demandantes, que acudían con demasiada frecuencia al fraudulento medio de manifestar el desconocimiento domiciliario del demandado, al objeto de impedir su presencia y defensa en la litis, la doctrina jurisprudencial, a fin de corregirlo sin provocar un total cambio de la misma se inclinó hacia la tesis que se ha dejado apuntada [SS. 26-1-1968 (RJ 1968\544), 13-2-1983, 2-2-1986, etc.]”.

inutilidad aquellos otros medios normales de citación” (la cursiva es nuestra)³²⁵.

Por tanto, para emplear los edictos como forma de notificación es preciso:

a) Haber intentado previamente realizar el acto de comunicación por medio de las otras formas notificadoras, especialmente, deben ponerse todos los medios posibles para intentar realizar la comunicación en forma personal. El actor localizará un domicilio donde se pueda encontrar al demandado y allí se acudirá a realizar la notificación, bien en su persona, bien en la de algunos de los sujetos que la ley permite (art. 268 LEC). Si se pasa a los edictos sin intentar la comunicación a través de uno de esos receptores subsidiarios, se entenderá que el emplazamiento (o citación) se ha realizado de manera incorrecta, ya que no se han agotado las formas ordinarias de comunicación. Como ejemplo, la STC 203/1990 de 13 de diciembre, declara: “De la propia diligencia del Juzgado resulta que se ha incumplido lo establecido en el art. 268 de la LEC, puesto que a los vecinos a los que genéricamente se refiere la diligencia o más en concreto a alguno de ellos o al portero de la finca procedía hacer entrega de la cédula de citación en lugar de acudir, a instancia de la demandante, al emplazamiento edictal sin haber agotado otras posibilidades de comunicación que aseguran en mayor grado la recepción por el destinatario de la cédula”.

³²⁵ Esta tesis se recoge en muchas SSTC, entre las que destacamos las siguientes: 171/1987, 155/1988, 234/1998, 16/1989, 141/1989, 196/1989, 203/1990,

b) Además, el intento de notificación en forma personal o en otra forma ordinaria debe hacerse constar en las actuaciones (*'se consignará por diligencia'*, dice el art. 269). Esto queda especialmente claro en la STC 186/1997 de 10 de noviembre, donde se dice que, antes de pasar a los edictos, se tenía que haber intentado la comunicación, no sólo en el local objeto del contrato, sino también en el domicilio del recurrente, y si no se conseguía ningún domicilio de éste dónde emplazarle, debería haberse consignado en la diligencia, para dejar constancia de que se han puesto todos los medios y de que realmente los edictos son el último remedio.

c) Por último, cuando el tribunal decide acudir a los edictos (*'el Juez mandará'*), por hallarse ante el supuesto de hecho del art. 269 LEC, debe hacerlo de manera motivada (pensamos que mediante auto); de modo que se justifique razonablemente (con *'criterios de razonabilidad'*, se dice en la jurisprudencia) que se está ante un caso tal (de los dos previstos en el 269), y que se han puesto los medios ordinarios y han sido inútiles, y por tanto, no queda otro remedio que utilizar esa vía. Esta doctrina jurisprudencial, en nuestra opinión, exige aplicar de manera restrictiva, motivada y excepcional el precepto de la LEC que permite notificar por edictos.

La doctrina del TC sobre la subsidiariedad de la comunicación edictal está en consonancia con aquella otra doctrina, también del mismo TC, sobre la efectividad en las notificaciones. En la medida,

9/1991, 242/1991, 216/1992, 70/1994, 103/1994, 108/1994, y 186/1997.

según ésta última, en que el mero cumplimiento formal de las exigencias legales en materia de notificación es insuficiente, ya que se precisa, además, asegurar la recepción de destinatario, en los casos en que se notifica por edictos, al ser de por sí un medio formal, no se garantiza en modo alguno la efectividad de la comunicación, luego debe emplearse esa forma notificatoria cuando ninguna otra sea ya posible.

La STC 121/1996 de 8 de julio expone una buena síntesis, con cita de otras sentencias, sobre la efectividad en las notificaciones y la subsidiariedad de los edictos, que por su interés reproducimos: “1.º) Desde sus inicios (STC 9/1981) tiene establecido este tribunal que el art. 24.1 CE contiene un mandato implícito al legislador y al intérprete para *promover el derecho de defensa*, lo que lleva a exigir *en lo posible un emplazamiento personal* de los demandados (STC 81/1996). 2.º) No siendo por sí misma inconstitucional, *la citación o emplazamiento por edictos sólo resultará admisible cuando no conste el domicilio de quien debe ser emplazado o se ignore su paradero*, y sólo podrá utilizarse como remedio último de comunicación del órgano judicial con las partes procesales (SSTC 312/1993, 51/1994, 227/1994, 303/1994, 108/1995 y 160/1995, entre otras). 3.º) Por ello, el uso de los edictos impone con carácter previo al órgano judicial una diligencia específica que implica el *agotamiento de todas aquellas modalidades de comunicación capaces de asegurar en mayor grado la recepción* por su destinatario de la notificación a realizar, y que por esto mismo aseguran también en mayor medida la posibilidad de ejercer el derecho de defensa (SSTC36/1987,

234/1988 y 81/1996, por todas). 4.º) Este deber de diligencia incluye, desde luego, el *cumplimiento de las formalidades* legalmente exigidas en cada caso (SSTC 227/1994 y 80/1996), pero no puede reducirse a una mera legalidad de la comunicación, pues la cuestión esencial estriba en *asegurar que el destinatario del acto efectivamente lo reciba*, debiendo ser agotadas todas las formas racionalmente posibles de comunicación personal antes de pasar a la edictal (SSTC 51/1994 y 160/1995 entre las más recientes). 5.º) Por último, el deber de diligencia del órgano judicial no debe entenderse en términos tan amplios como para excusar la propia *negligencia del destinatario* de la comunicación (SSTC 80/1996, 81/1996 y 82/1996) o un comportamiento del mismo contrario a la buena fe (SSTC 78/1993, 100/1994, 227/1994 y 160/1995, por todas)".

7.2. EL SUPUESTO DE HECHO LEGAL DE LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS Y SU INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA.

A nuestro modo de ver, las tres condiciones que según el TC se han de observar rigurosamente antes de emplear la notificación por edictos, conllevan, en resumen, que se interprete de manera restrictiva el supuesto de hecho que abre tal forma de comunicación. Como ya es sabido, ese supuesto de hecho es doble: “*Cuando no conste el domicilio de la persona que debe ser notificada, o por haber mudado de habitación se ignore su paradero*” (art. 269). El primer supuesto (cuando sea *desconocido el domicilio* del demandado) se refiere al caso de que no se pueda *localizar* un domicilio donde notificar a este último. En el segundo supuesto (cuando el demandado se encuentre en *ignorado paradero*), lo que ocurre es que, pese a tener localizado algún domicilio del demandado, no es posible *encontrarle* en ese lugar. Estudiemos por separado cada uno de estos dos casos del supuesto de hecho del art. 269 LEC³²⁶.

³²⁶ Aunque sea de paso, podemos decir que no sólo es necesario el cumplimiento estricto del supuesto de hecho del art. 269 para pasar a los edictos cuando la notificación personal haya fracasado, sino también en los casos de notificación postal infructuosa, como se recuerda en la STC 36/1987 de 25 de marzo: “La utilización de los servicios de correos no hace concluir el deber de colaboración de los órganos jurisdiccionales, ni permite que en todos los casos en que la notificación o emplazamiento sea infructuoso, se acuda a la práctica de la notificación por edictos, pues éste sólo es sistema utilizable cuando no conste en las actuaciones el domici-

7.2.1. 'Domicilio desconocido'.

En primer lugar, diremos, que si la ley permite los edictos, como forma de notificación, *'cuando no conste el domicilio de la persona que debe ser notificada'*, pensamos que no se refiere a que el actor no haya designado un domicilio dónde emplazar al demandado, ya que, a la luz de la doctrina del TC referida, no debe admitirse una demanda en la que el actor no haya hecho tal designación. Por ejemplo, en el caso de la STC 134/1995 de 25 de septiembre, se declaró que el emplazamiento se había realizado de manera incorrecta, provocando una situación de indefensión, ya que éste se *practicó directamente por medio de edictos sin intentar antes la comunicación en forma personal, ante la sola afirmación del actor de que el demandado carecía de domicilio conocido, sin haber comprobado la certeza de esa afirmación*. Así, pensamos que si el actor no consigna en la demanda un domicilio del demandado, el tribunal debe requerirle para que así lo haga.

lio de la persona que deba ser notificada o emplazada o se ignore su paradero por haber cambiado de domicilio". En el mismo sentido, las SSTC 140/1988 y 155/1988.

Es decir, otra forma de desoír la doctrina de la subsidiariedad de la comunicación por edictos ocurre, cuando se emplea este medio después de intentada infructuosamente la citación por correo, sin practicar "actuación alguna para constatar si tal domicilio era de la recurrente y sin interesar del actor que señalara otro domicilio" (SSTC 157/1987 de 15 de octubre y 171/1987 de 3 de noviembre). En este sentido, *vid.* CHOZAS ALONSO: "Sobre los actos de comunicación con las partes y el derecho a la tutela judicial efectiva", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 52, Editorial Cívitas, Madrid, 1992, págs. 279-288.

Creemos, por tanto, que debe imponerse al actor la carga de aportar en la demanda un domicilio donde se pueda localizar al demandado³²⁷. Esta carga la entendemos incluida dentro del artículo 524 LEC, aunque este precepto no la mencione expresamente al regular los requisitos de la demanda en el juicio ordinario (de mayor y de menor cuantía); como sí hace, por el contrario, el artículo 29 del decreto regulador de los juicios de cognición, y el artículo 720 LEC para el juicio verbal³²⁸. En este sentido, el actor deberá desplegar una mínima diligencia de localización de los demandados (SSTS

³²⁷ A su vez, el propio demandado tiene también la carga de hacer constar su propio domicilio en cuanto se persone en las actuaciones: *'en el primer escrito que presente'*, como se dice en el art. 264 LEC, *'o en la primera comparecencia que efectúe'*, como se establece en el art. 235 de la 'Corrección y actualización' de la LEC (op. cit., pág. 277). Por su parte, hay que señalar en relación con este punto, que el último párrafo del art. 4 LEC establece: *"Siempre que el interesado no se sirva de Procurador designará en primer escrito que dirija al Juzgado o en su primera comparecencia un domicilio en la localidad donde tenga su sede el órgano jurisdiccional, en el que se practicarán todas las diligencias que hayan de entenderse con aquél"*.

También en leyes especiales se recogen preceptos de ese estilo, como en el art. 39.6 LAU. Si se quiere un comentario sobre las diferencias entre el art. 4 LEC y el 39.6 LAU, *vid.* ILLESCAS RUS: "Aspectos procesales de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (I)", en el Boletín de Información del Ministerio de Justicia e Interior, nº 1736, Madrid, 1995, págs. 1253-1255.

³²⁸ El requisito segundo del artículo 29 (del Decreto de 21.XI.52) consiste en hacer constar en la demanda *"el nombre y apellidos, profesión y domicilio del demandante o demandantes y las mismas circunstancias que fueren conocidas del demandado o demandados. Si las partes comparecen representadas, se expresarán también iguales circunstancias del representante"*. Por su parte, el artículo 720 LEC también incluye, entre los requisitos que ha de tener la demanda, *"los nombres, domicilios y profesión u oficio del demandante y demandado o demandados"*. Como puede observarse, estos artículos son más precisos en orden a la identificación de la persona del demandado, que la genérica afirmación del artículo 524 LEC *"se fijará con claridad y precisión (...) la persona contra quien se proponga la demanda"*, en el procedimiento de mayor cuantía y —por remisión del 680 LEC— en el de menor cuantía.

27.VII.93, RJ 1993\6390 y 14.IX.93, RJ 1993\6639); sin que pueda imponérsele una labor detectivesca de búsqueda y hallazgo de las residencias y moradas de aquéllos (SSTS 30.I.93, RJ 1993\350 y 8.VII.94, RJ 1994\6301).

De hecho, uno de los supuestos del art. 1796, que permite la revisión de la sentencia firme por maquinación fraudulenta del actor, tiene lugar cuando éste afirma que desconoce el domicilio del demandado, sin hacer gestión alguna para averiguarlo, o como dice la STS 27.XII.94 (RJ 1994\10326), “suele ser la afirmación inexacta de serle desconocida la identidad y el domicilio del demandado, cuando el empleo de una mínima y elemental diligencia por parte del actor, haciendo adecuadas gestiones, le hubiera permitido conocer con exactitud tanto la identidad, como el domicilio, de la persona o personas a las que dice demandar [Sentencias de 18 mayo 1981 (RJ 1981\2168), 31 octubre 1989 (RJ 1989\7039), 17 diciembre 1990 (RJ 1990\10073), 18 enero 1991 (RJ 1991\299) y 26 mayo 1993 (RJ 1993\3984), entre otras]”.

Luego, no sólo supone fraude procesal del actor ocultar datos sobre el domicilio del demandado o indicar en la demanda uno, en el que sabe que no se le va a encontrar, supuestos donde la mala fe es más patente y que estudiaremos en otro epígrafe, sino también cuando el demandante no busca suficientemente un domicilio donde emplazar a quien dirige la demanda. En este sentido, es muy clara la STS 24.X.94 (RJ 1994\10571), que cita a su vez otros ejemplos jurisprudenciales, cuando dice que no sólo es maquinación fraudulenta “ocultar el verdadero domicilio del demandado, conocido por la

parte actora [Sentencias de 17 diciembre 1990 (RJ 1990\10073), 25 enero y 6 junio 1992 (RJ 1992\208 y RJ 1992\5006) y 12 julio 1993 (RJ 1993\6011)] (...); sino que también lo es “provocar el emplazamiento edictal sin hacer gestión alguna para averiguar su domicilio [Sentencia de 16 diciembre 1991 (RJ 1991\9714)], que era conocible fácilmente [Sentencia de 15 enero 1994 (RJ 1994\437)], o con un esfuerzo mínimo [Sentencia de 20 marzo 1990 (RJ 1990\1709)]”.

¿Qué domicilio del demandado debe consignar el actor en la demanda para satisfacer la carga que hemos señalado? Es cierto, como se dice en la STS 13.VII.96 (RJ 1996\5583), que “el artículo 40 del Código Civil fija el domicilio de las personas naturales en el lugar de su *residencia habitual* y, en su caso, a efectos procesales, el determinado en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 62 a 69), con carácter general ha de atenderse al lugar donde se reside con habitualidad, que equivale al *domicilio real*, ya que materializa la voluntad de permanencia en determinado lugar”. A su vez, la STS 5.II.91 (RJ 1991\990) recuerda que “el artículo 41 del Código Civil indica que el domicilio de las personas jurídicas radica en el *lugar donde se halla su representación legal*”. Sin embargo, como se indica en la STS 30.I.93 (RJ 1993\350), el concepto de domicilio es amplio y abarca no sólo el domicilio real, sino que también incluye, tanto otros domicilios legales, como en especial, el *domicilio electivo*, que es aquél que eligen las partes de un contrato a los efectos que sean

oportunos, entre los que se incluyen desde luego las notificaciones³²⁹.

Cuando el actor ha de aportar un domicilio dónde emplazar al demandado, pensamos que debe dar preferencia al domicilio real, salvo que exista entre ambos un domicilio electivo, que se impondrá al primero. Sin embargo, de la misma manera que no es necesario dar el nombre exacto del emplazado con tal de que se entienda a quién va dirigida la demanda³³⁰, así, lo importante será que ésta se notifique en algún '*domicilio efectivo*' del notificando; ya sea el real,

³²⁹ En la STS 30.I.93 se dice lo que sigue: "Pero el concepto del domicilio abarca una dimensión plural amplia, pues aparte del real, que corresponde a la residencia permanente e intencionada en un precisado lugar o como también ha sostenido esta Sala en forma objetivizada [SS. 3-12-1955 y 18-5-1956], al tenerse sólo en cuenta la efectiva vivencia y habitualidad, con raíces familiares y económicas. También prevén los ordenamientos los denominados domicilios legales, así como las vecindades administrativas —no coincidentes siempre con el efectivo domicilio (S. 8-3-1983)—, los de los comerciantes (art. 65 de la LECiv) y otros, como los de naturaleza exclusivamente procesal, foral, internacional, social, diplomática, de militares, domicilios oficiales, etc. Juntamente a éstos existe el denominado domicilio electivo, en virtud del cual los interesados en un determinado negocio prescinden de la domiciliación propia, para someterse a la que libremente fijan en la relación contractual que crean —domicilio por designación o afectivo—, produciendo así un domicilio ficticio y restringido, pero que desempeña función análoga a la del domicilio real en el ámbito jurídico y de relaciones para el que se aportó expresamente y que resulta vinculante por no prohibirlo expresamente el citado art. 40 del Código Civil".

³³⁰ La STS 27.I.93 dispone lo siguiente: "Si bien entre los requisitos esenciales de toda demanda es uno de los más importantes la determinación clara y precisa de las personas contra quien se dirige, esta prescripción no es de tal modo absoluta que obligue a considerar aquella deficiencia cuando por error se padezca una equivocación de nombre de alguna circunstancia, siempre que en el contenido el escrito se consignen manifestaciones, pormenores o detalles que demuestren de modo suficiente quién o quiénes sean las personas objeto de la reclamación formulada [ver S. 29-11-1913, cuya ratio late en las de 20-12-1934 y 30-6-1951]".

el electivo, o cualquier otro en el que sea posible encontrarle. Es decir, si el actor no dispone del domicilio real del demandado, ni existe entre ellos un domicilio electivo, el actor tendrá que desplegar una 'mínima diligencia', como hemos dicho, para localizar un domicilio suyo, y pensamos que dará igual cuál sea, con tal de que se trate de un 'domicilio efectivo'.

Dentro de esa 'mínima diligencia' del actor en la localización de un domicilio efectivo del demandado, la STS 17.IV.96 (RJ 1996\2966) incluye la consulta de la guía telefónica o la solicitud de una certificación del padrón municipal; mientras que lo primero no nos parece adecuado³³¹, lo segundo sí puede ser razonable: de hecho, en la STS 5.XI.96 (RJ 1996\8140) también se sugiere, como posible, el domicilio del padrón municipal. En la STS 13.XI.95 (RJ 1995\8428) se habla de que "el domicilio pudo ser conocido por el actor con una mínima diligencia, así como su fallecimiento, por medio del Registro Civil"; y en la STS 10.IV.97 (RJ 1997\2866) se dice

³³¹ Como se indica, además, en la STS 17.IV.96 (RJ 1996\6254): "no es cierta la alegación de la recurrente de que podía averiguarse fácilmente a través de la guía telefónica, pues (...) el domicilio real figura en la guía por calles que, como es notorio, permite averiguar el número de teléfono cuando se conoce el domicilio, pero no conocer el domicilio cuando se sabe el nombre".

Puede existir algún supuesto en que lo anterior sí sea posible, precisamente si se tiene el teléfono, como en el caso de la STS 14.VI.95 (RJ 1995\4855); en éste, se cita en el local objeto del arrendamiento que se quiere rescindir, el cual es un almacén y precisamente se pretende resolver el contrato por no uso; el TS aprecia la maquinación fraudulenta del actor, ya que provoca la citación por edictos, "pudiendo sin dificultad alguna determinar aquel domicilio del ahora recurrente a través de la guía telefónica"; pero hay que advertir que en este caso "no cabe duda de que el recurrido conocía el teléfono del ahora recurrente".

que la parte actora pudo fácilmente conocer el domicilio de la demandada al constar en el Registro de la Propiedad y en una escritura pública en la que intervino; luego, acudir a los registros públicos pertinentes, también se entiende exigible al actor, por el TS³³². Como último ejemplo de hasta dónde puede/debe llegar la diligencia del actor en este punto, diremos que la STS 23.IV.96 (RJ 1996\3018) indica que el actor pudo, con mínima diligencia, haber localizado un domicilio del demandado, ya que este era Abogado: se refiere, suponemos, a la fácil consulta de un boletín de esa corporación³³³.

Y no sólo, antes de emplear los edictos, habrá que intentar conseguir uno de esos domicilios: el del padrón, o uno registral, o el profesional-corporativo; sino que también, aunque no se citen en la

³³² Desde luego, en los supuestos en los que haya de emplazarse o citarse a una sociedad, no podrá pasarse válidamente a los edictos sin antes intentar la comunicación personal en el domicilio que aquélla tenga inscrito en el Registro Mercantil; así, en la STS 10.IX.96 (RJ 1996\6558) se dispone —como argumento para declarar la nulidad de la citación edictal— que “la actora podría conocer a través del Registro Mercantil la sede social de la Sociedad Anónima demandada y cumplir así la disciplina de los arts. 524 y ss LEC”.

³³³ STS 23.IV.96: “(...) al promover el proceso de separación matrimonial anteriormente referido... contra su esposo... manifestó que le era desconocido cualquier otro (domicilio), lo que provocó el emplazamiento edictal y la subsiguiente declaración de rebeldía del mismo, cuando aparece probado que ella conocía que, desde 1990, no era aquél su domicilio y le constaba que lo tenía en Madrid, lo que además, podría haber comprobado mediante el empleo de una mínima diligencia, al tener su referido esposo la profesión de Abogado en ejercicio”.

jurisprudencia, con la misma lógica se puede solicitar el domicilio fiscal o se puede aportar el domicilio laboral si se consigue³³⁴.

Puede que el actor, después de poner la diligencia que le es exigible y de buscar en los lugares que hemos comentado, no pueda localizar ningún domicilio del demandado. En este caso, deberá justificar cumplidamente tal imposibilidad, exponiendo y mostrando la diligencia que ha empleado en ello. Si así se hace, será el tribunal el que deba realizar averiguaciones sobre un posible domicilio donde

³³⁴ Incluso, como cuenta PACHECO CIFUENTES (en "El requerimiento judicial de pago al deudor hipotecario en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria", *Revista General del Derecho*, nº 584, Valencia, 1993, pág. 4366), en algunas ocasiones, "antes de recurrir a la práctica de requerimiento por medio de edictos... se ha llegado al extremo en varios juzgados de librar oficio dirigido a la policía a fin de que procedan a comunicar al juzgado un domicilio del deudor distinto al ya conocido en el que llevar a cabo el requerimiento personal de pago". El mismo autor explica, que "dicha práctica se inspira en el artículo 178 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispone que en los supuestos en los que la persona que haya de ser notificada, emplazada o citada no tuviese domicilio conocido, se ordenará a la policía judicial la búsqueda o localización del mismo, antes de acudir a la citación, notificación o emplazamiento por edictos".

Sin embargo, en el proceso civil, dónde rige el principio dispositivo y los intereses en juego son privados, es dudoso que sea conveniente llegar a esos extremos. No obstante, algún autor, como TAPIA PARREÑO (op. cit., pág. 456), ha matizado la anterior afirmación "en el sentido de que en aquellos procesos en que se resuelven cuestiones que afectan al orden público, o lo que es lo mismo, que no sólo satisfacen intereses particulares (por ej., procesos matrimoniales, juicios en los que se intervenga en la esfera de menores, etc.) y a salvo de aquéllos en que especialmente se impone un deber de averiguación, sino exigible constitucionalmente, sí es más que recomendable, al objeto de salvaguardar los derechos reflejados en el art. 24 de la CE, requerir de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o de otros Organismos, la colaboración necesaria, que deberán prestar por mandato del art. 118 de nuestra Carta Magna".

practicar el emplazamiento, siempre que sean razonables desde la perspectiva del principio dispositivo.

En ese sentido, TAPIA PARREÑO pone dos ejemplos de diligencia exigible al tribunal, extraídos de la doctrina constitucional³³⁵. “Dicha doctrina exige a los órganos judiciales que desenvuelvan una cierta diligencia para hacer llegar al demandado ese acto de comunicación fundamental, de manera que se examinen los autos o expedientes y se compruebe si alguno de los domicilios que aparecen en los documentos aportados con el escrito iniciador del litigio o que se consignan indirectamente en éste como de la persona a emplazar o citar (en este sentido, la STC 242/1991 analiza un supuesto en que se declara una nulidad de actuaciones en un juicio ejecutivo y se reconoce el derecho del solicitante de amparo a obtener la tutela judicial efectiva sin indefensión, por no haber sido citado el demandado en el domicilio cuyo embargo se interesaba en la demanda)³³⁶ son efectivamente del demandado”.

³³⁵ TAPIA PARREÑO: op. cit., pág. 454-455.

³³⁶ En esa sentencia comentada por el autor, se cita en el domicilio que aparecía en el título ejecutivo, sin hacerlo además en el del piso del que luego se solicita el embargo. Con la misma *ratio* se resuelve en la STS 18.XI.96 (RJ 1996\8421): se emplaza en el domicilio del piso que se adquiere (el cual es el designado en un documento privado como el adecuado para notificaciones y requerimientos), y al no encontrar allí al demandado, se pasa directamente a los edictos; pero no se intenta la comunicación personal en el domicilio del demandado que aparece en el escritura pública de compraventa del piso antedicho. Según el TS, el tribunal debía haber revisado los autos y sugerido el emplazamiento en el segundo lugar que se ha indicado.

Continúa el mismo autor: “Pero no sólo ha requerido el Tribunal Constitucional un examen exhaustivo de los autos en aras a verificar si aparece algún domicilio en el que ensayar la notificación personal, sino que también ha declarado constitucionalmente exigible y encuadrable dentro de ese deber de diligencia que deriva de la Constitución, con la consecuente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin causar indefensión, de no hacerse así, el despliegue de una sencilla actividad de averiguación del domicilio, interesando de otro órgano judicial el domicilio de una persona que deba ser oída en el proceso, y así en la antes citada STC de 26 de septiembre de 1993 —141/1993—, estableció que el Juzgado pudo y debió dirigirse al Tribunal Tutelar de Menores de Pamplona para conocer el domicilio de la madre del menor, ya que esta actividad no se salía de lo normal”³³⁷.

En conclusión, pensamos que la decisión judicial de acudir a los edictos, por ser el notificando de ‘*domicilio desconocido*’ (ex art.

³³⁷ En la línea de lo dicho por este autor y en las sentencias del TC comentadas, se encuentra también la STC 16/1989 de 30 de enero, que declara la invalidez del emplazamiento edictal, al que se acude directamente, por constar en las actuaciones que la destinataria de la citación vivía en Francia, y no intentar allí la comunicación a través de la correspondiente comisión rogatoria.

En la misma línea, GRANIZO GARCÍA-CUENCA (op. cit., pág. 227) opina lo siguiente: “En igual sentido debe emplazarse o citarse, cuando el emplazado o citado tenga su domicilio en un país extranjero y sea conocido su domicilio, sin que pueda ser acogida la afirmación de que la tramitación de peticiones de cooperación internacional, al ser lentas y costosas, pueden incidir en el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), porque obviamente, no pueden ser calificadas de ‘indebidas’ aquellas dilaciones provocadas por los trámites exigidos por las normas procesales que al ser de orden público, no son disponibles ni por las partes ni por el órgano judicial”.

269 LEC), se fundará en un 'criterio razonable', de acuerdo con la doctrina del TC, si después de las gestiones oportunas, en la línea de lo expuesto, ni el actor ni el tribunal consiguen averiguar un domicilio donde emplazar al demandado, ya que, en ese caso, realmente no ha sido posible la comunicación en forma personal.

7.2.2. 'Ignorado paradero'.

Este segundo caso del supuesto de hecho del art. 269 LEC parte de la base de que el actor ha designado un domicilio para el emplazamiento del demandado; pero, al ir a practicar el acto de comunicación en ese domicilio, ni se encuentra en él a su destinatario, ni se hace cargo del acto ninguna de las personas que el art. 268 LEC habilita para recoger la cédula de notificación. En esta situación, ¿cuándo se puede acudir a los edictos para realizar el emplazamiento, según la doctrina del TC de la subsidiariedad e este medio?

Al hablar de la notificación domiciliaria, ya opinamos que, en ese caso, el oficial que practica la notificación debería procurar informarse sobre si vive allí el destinatario de la comunicación o no, para saber si la ausencia es temporal o definitiva. Si el demandado sí reside en ese lugar, pensamos que no puede pasarse a los edictos sin antes intentar de nuevo realizar con éxito el acto de comunicación en el mismo domicilio³³⁸; quizás acudiendo a otra hora del día

³³⁸ En la STS 6.VII.96 (RJ 1996\5563) se insiste en este punto: "El artículo procesal 269 autoriza la citación edictal, pero sólo para los casos en que no conste el domicilio de la persona interesada o, por haber mudado de habitación, se ignore

en la que sea más fácil encontrar al destinatario (hora que también se interesará de los vecinos o del conserje, si es posible). Si se repite el acto de comunicación y, de nuevo, no se encuentra a su destinatario, queda expedita la vía edictal.

Si se obtiene noticia, por el contrario, de que el demandado ya no vive en el lugar dónde se acudió a notificar, y alguno de las personas a las que se consulta sabe su nuevo domicilio, deberá intentarse la comunicación en ese nuevo domicilio antes de pasar a los edictos. Sin embargo, si nadie da noticia del demandado, se le puede considerar en paradero desconocido.

En ese caso, aunque se cumpla el requisito legal de que se ignora el paradero del notificado, por haber mudado de habitación, antes de acudir directamente a la comunicación edictal, creemos que sería acorde con la doctrina del TC referida, que el tribunal valorara la 'efectividad' del domicilio aportado por el actor. Es decir, debe examinar si el hecho de que no llegue la comunicación a su destinatario es responsabilidad de éste último (que debería estar localizarse en ese domicilio), o es del actor, que ha designado un domicilio

su paradero. No es el caso de autos. Son posiciones distintas la de domicilio la de domicilio totalmente desconocido y la de ausencia temporal del mismo, al persistir la domiciliación, lo que obligaba al actor del pleito a insistir e interesar su efectivo emplazamiento y no tomar el camino más cómodo para sus intereses, como fue el de acudir de inmediato a la publicación de edictos pues con tal proceder observó conducta de fraude procesal, revelando decidido ánimo de impedir oposición y defensa, por la hoy demandante de revisión"; en esta sentencia se reitera al final que el actor "debió intentar un segundo emplazamiento", y cita como apoyo la STS 14.VI.95 (RJ 1995\4855).

poco ‘efectivo’ (por carecer de actualidad, por ejemplo). Si esa responsabilidad es atribuible al actor, se le debe requerir a que señale un nuevo domicilio, y si es del demandado, se puede dar paso ‘razonablemente’ al emplazamiento por edictos.

Aunque ese juicio sea difícil de emitir, pensamos que su realización es muy conveniente³³⁹. Quizás se pueden dar algunas pautas sobre a qué criterios puede atenerse el órgano judicial al hacerlo. Como pauta general, podemos decir que el tribunal debe tener presente la doctrina sobre la subsidiariedad de la notificación edictal; esto supone que, normalmente, se exigirá del actor que designe otro domicilio del demandado, al objeto de que se intente de nuevo la comunicación personal³⁴⁰; salvo que existan motivos que evidencien de modo claro la culpa de este último en el fracaso de la primera notificación personal.

Por el contrario, si el lugar donde se ha intentado infructuosamente la notificación personal es un domicilio electivo, en este caso,

³³⁹ Pensamos que la valoración propuesta, además de estar en consonancia con la doctrina del TC, ofrece un doble beneficio: de un lado, se evitan los edictos cuando el que debe ser notificado no sea responsable de que no le llegue la notificación domiciliaria —porque esta responsabilidad sea del demandante—, y de otro, se hace posible —para el actor— continuar adelante con el proceso cuando el demandado se “esconde” para no ser notificado. La salvaguarda del derecho a la tutela efectiva del demandado (en cuanto a la seguridad en la recepción de la comunicación procesal) tiene su límite en la protección, a su vez, de la tutela judicial del actor (para seguir adelante con el pleito).

³⁴⁰ En este caso, podrá ‘investigar’ en los distintos lugares a que nos hemos referido al hablar del primer supuesto de hecho.

pensamos que cede el criterio de la efectividad; ya que la responsabilidad de la falta de comunicación procesal se traslada al demandado, el cual tenía el deber de estar localizable en el domicilio que él mismo eligió al suscribir el contrato que da lugar al pleito, o bien, de comunicar a la parte contraria sus cambios de domicilio³⁴¹. No obstante, no estamos ante reglas fijas, sino prudenciales, y habrá que tener en cuenta siempre las circunstancias que rodean al caso; por ejemplo, si el contrato tiene cierta antigüedad, quizás sí sea exigible que el actor designe un nuevo domicilio³⁴².

Más clara todavía es la procedencia de la comunicación edictal, cuando el demandado es una sociedad y se acude a emplazar al domicilio que ésta tiene inscrito en el Registro Mercantil, y sin embargo, en ese domicilio se constata que la sociedad se ha mudado a un domicilio que no conocen ni el conserje ni los vecinos a los que se ha preguntado. Este último ejemplo muestra que la responsabilidad de la pérdida de actualidad del domicilio, en el que se intenta

³⁴¹ En este sentido, en la STS 4.XI.96 (RJ 1996\8154) se declara la validez del emplazamiento (y la ausencia de maquinación fraudulenta) de un supuesto (de resolución de un arrendamiento) en el que se intentó previamente la comunicación personal en el local arrendado, ya que éste lugar se hizo figurar en el contrato de (arrendamiento) como domicilio del arrendatario, ahora demandado.

³⁴² Un caso parecido al supuesto que comentamos es el de la STC 186/1997 de 10 de noviembre, en el que la citación se realiza en el local objeto del arrendamiento sobre el que se discute, y allí se averigua que en ese lugar no vive nadie desde hace dos años, y entonces, se pasa directamente a notificar por edictos. El TC declara que se tenía que haber intentado antes realizar, también, la comunicación en el domicilio del recurrente.

realizar la comunicación, es exclusivamente de su destinatario³⁴³. Otro ejemplo parecido, al tratarse también de un domicilio registral, es el de las notificaciones en los procedimientos del art. 131 LH³⁴⁴.

En conclusión y como resumen final, el emplazamiento por edictos debe ser considerado un modo muy excepcional de practicar

³⁴³ Esta idea se expresa con claridad en la STS 8.VII.94: "Las personas jurídicas constituidas en entidades mercantiles, tienen la obligación de hacer figurar en la escritura de constitución su domicilio social, circunstancia que encuentra su adecuada publicidad a virtud de la constancia en la inscripción correspondiente del Registro Mercantil; este domicilio será el único legal a tener en cuenta (artículos 66 de la LEC y 11.e) de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 julio 1951) y si la entidad decidiera cambiarlo, deber efectuar la rectificación correspondiente en el Registro Mercantil, siendo de su única responsabilidad las consecuencias que su desidia origine". En la misma línea, la STS 18.XI.96 (RJ 1996\8631) declara que no existe maquinación fraudulenta cuando se emplaza en el domicilio que figura en el Registro Mercantil (aunque se dude de la efectividad del emplazamiento), si la sociedad demandada incumplió su deber de hacer constar los cambios de domicilio.

³⁴⁴ Este último supuesto ha sido comentado por PACHECO CIFUENTES (op. cit., pág. 4365-4369), quien se posiciona en nuestro sentido. Este autor expone que se está conculcado la Ley Hipotecaria, ya que los tribunales suelen exigir del actor que señale un nuevo domicilio del deudor antes de acudir a los edictos, si el requerimiento realizado en el domicilio registral (el que señala la regla 4ª del art. 131 LH) ha sido infructuoso. El autor señala que estamos ante un domicilio electivo: "se da una ficción por la que el deudor se entiende suficientemente defendido con que las notificaciones y requerimientos se practiquen como si tuviera su domicilio en lugar designado, entendiéndose incluso que se tiene por presente a quien no lo está" (y cita, en este sentido, una RDGRN de 21.VI.39).

Por ello, "si la diligencia practicada ha sido negativa por las razones expuestas con anterioridad, ello se debe simple y llanamente a la negligencia o pasividad del deudor, extremo que provoca la quiebra del derecho a la tutela judicial consagrado en el art. 24.1 de la Constitución española, no pudiendo hacerse recaer sobre el acreedor las consecuencias de la desidia del deudor ya que éste tiene en todo momento la facultad de variar a su libre albedrío la determinación de ese domicilio en el que se desea que se practiquen todas las diligencias cuyo destinatario sea el mismo, en virtud de lo dispuesto en el art. 130 de la Ley Hipotecaria".

la comunicación en el proceso. Únicamente se debe emplear cuando no sea posible emplazar en forma personal, y se cumpla estrictamente el supuesto de hecho para el que se prevé: “cuando no conste el domicilio de la persona que debe ser notificada, o por haber mudado de habitación se ignore su paradero (art. 269 I LEC). En este sentido, no es suficiente la mera afirmación del actor de que desconoce el domicilio del demandado o de que ignora su paradero. Si el actor presenta la demanda sin hacer constar en ella un domicilio donde se pueda emplazar efectivamente al demandado, tendrá que justificar que no le es posible hacer tal designación, o se le requerirá a que emplee una mínima diligencia para averiguarlo; sin que esto suponga imponerle una labor de investigación del domicilio del demandado.

Si el actor señala un domicilio donde emplazar al demandado, sólo se dará paso a la comunicación edictal cuando se haya constatado —acudiendo a ese domicilio— que el notificando se ha *mudado de habitación* y se *ignora su paradero*, esto es, ya no reside en ese sitio y nadie de ese lugar sabe donde se le puede localizar. En este caso, se juzgará sobre la responsabilidad del demandado en el hecho de que se le haya notificado infructuosamente en ese domicilio. Si se le considera responsable, se procederá a la comunicación por edictos; en caso contrario, se requerirá al actor para que señale un nuevo domicilio.

CAPÍTULO 8:
LA COMUNICACIÓN
DE ACTOS PROCESALES
POR CORREO, TELEGRAMA
O POR MEDIOS TÉCNICOS.

8.1. LA NOTIFICACIÓN POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO.

8.1.1. Modo de llevar a cabo las notificaciones postales.

La forma postal de realizar los actos de comunicación en el proceso civil, como sabemos, viene recogida en el artículo 261 LEC. El primer párrafo de este precepto dice así: *“Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la sede del Juzgado o Tribunal, se harán por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos del contenido del sobre remitido, y uniéndose a aquéllos el acuse de recibo”*³⁴⁵. Estudiemos

³⁴⁵ Esta forma notificatoria, como señalamos, se introdujo en el proceso civil con la reforma de la LEC de 1984. Ya desde antes se venían haciendo así las notificaciones en el proceso laboral, donde está más extendida su práctica. El precepto del que recibe influencia el art. 261 LEC es el actual 58 LPL, que establece lo siguiente: *“Las citaciones, notificaciones, y emplazamientos podrán hacerse, cualquiera que sea el destinatario, incluso el Abogado del Estado, por correo certificado con*

con detenimiento los distintos incisos de este párrafo legal, que nos hablan del modo de llevar cabo las notificaciones postales.

-En primer lugar se mencionan los actos de comunicación que pueden practicarse por esta vía postal: *las notificaciones, citaciones y emplazamientos*, que tengan una característica: *que se practiquen fuera de la sede del Juzgado*. Como vimos al exponer las distintas formas por las que se pueden realizar las notificaciones, ese inciso legal quiere decir que se harán por correo las notificaciones en sentido estricto y las citaciones, que se dirijan a las partes ya personadas en el juicio y que carezcan de Procurador; ya que, por un lado, cuando la parte tenga Procurador que la represente, recibirá a través suyo todas las comunicaciones procesales que se le hagan (art. 6)³⁴⁶, y por otro lado, los actos de comunicación de los que dependa la personación de la parte, se harán de forma personal (art. 261 IV)³⁴⁷. Por eso, en relación con esto último, aunque se mencionen

acuse de recibo. Tales certificados gozarán de franquicia postal, excepto cuando se expidan en el periodo de ejecución, cuyo importe será incluido en la tasación de costas".

³⁴⁶ Como vimos, el artículo 6 LEC indicaba: *"Mientras continúe el Procurador en su cargo, oír y firmará los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias (...)"*.

³⁴⁷ A su vez, el párrafo cuarto del 261 LEC exponía: *"No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los actos de comunicación se realizarán en el modo establecido en los artículos siguientes, cuando su destinatario sea o deba ser parte en el juicio o en cualquiera de sus instancias y dependa de la comunicación su personación en las actuaciones (...)"*.

expresamente en el art. 261 I los *emplazamientos*, éstos no pueden llevarse a cabo de forma postal³⁴⁸.

Lo anterior no sucede del mismo modo en otros ámbitos jurisdiccionales; por ejemplo, en el proceso laboral no existe una excepción como la del párrafo cuarto del art. 261 LEC. En este sentido, ALONSO OLEA dice: "En la LPL no se da esta exclusión —tan importante como probablemente entorpecedora— y es ésta la que sigue en vigor para los procesos que por ella se gobiernan, sin que haya lugar, habida cuenta de la presencia en ella de norma expresa, de la aplicación supletoria de la LEC"³⁴⁹. Sin embargo, el TC ha considerado que sí es supletoria la norma procesal civil en el ámbito jurisdiccional social. Así, la STC 36/87 de 25 de marzo, establece lo siguiente: "No existe obstáculo para que las citaciones, notificaciones y emplazamientos puedan realizarse por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos del contenido del sobre remitido y uniéndose a los autos el acuse de recibo, como establece el art. 32 de la Ley de Procedimiento Laboral y como establece, asimismo, el art. 261 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tras la reforma de 1984. Es de observar, sin embargo, que el art. 261 de

³⁴⁸ En el mismo sentido, GIMENO SENDRA (op. cit., pág. 159): "no obstante la claridad de la redacción del precepto (se refiere al 261 LEC), hay que excluir de dicho ámbito a los '*emplazamientos*', puesto que el párrafo tercero del mismo precepto (es el cuarto, pero lo mismo da) exceptúa de dicho medio de comunicación a los actos cuyo '*destinatario sea o deba ser parte en el juicio*', dentro de los que hay que reputar incluidos los emplazamientos".

³⁴⁹ ALONSO OLEA, *Jurisprudencia Constitucional del Derecho del Trabajo y Seguridad Social*, tomo V, ref. 230, 1987, pág. 79.

la Ley de Enjuiciamiento Civil, norma supletoria de todo el Derecho procesal español, excluye las notificaciones por correo cuando su destinatario sea o deba ser parte en el juicio o en cualquiera de sus instancias y dependa de la comunicación su personación en las actuaciones”. Nosotros somos de la opinión del TC, pero quizás para su mayor claridad debería expresarse de manera expresa; consideramos que, cualquiera que sea el orden jurisdiccional, el acto del que dependa la personación de su destinatario en el juicio debe realizarse por alguien que pueda dar fe pública de la notificación.

Además de las citaciones y notificaciones de resoluciones a las partes procesales que no tengan Procurador, también se empleará la forma postal en los casos del art. 273 LEC: *“La citación de los testigos y peritos y demás personas que no sean parte en el juicio, cuando deba practicarse de oficio, se hará por correo certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos, del contenido del sobre remitido y uniéndose a ellos el acuse de recibo.*

En este supuesto las citaciones se entenderán practicadas en la fecha en que el destinatario alguna de las personas indicadas en el art. 268 de esta Ley hagan constar su recepción en el que acuse el recibo (...).”

-La denominada forma postal implica, pues, como primera cosa que las notificaciones ‘se harán por correo’. Luego la ejecución material del acto de comunicación la realiza un funcionario del Servicio de Correos. Por esto, se ha pretendido que los errores cometidos por este Servicio no fueran imputables al órgano judicial y tuvieran que recurrirse ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. Sin

embargo, el Tribunal Constitucional ha dejado claro este punto en la STC 14/87 de 11 de febrero, al decir: “La citación por correo es un acto procesal que no deja de venir integrado en el procedimiento judicial, aunque se encargue su ejecución a un servicio público ajeno a la Administración de Justicia y, si así no fuese, la violación originaria cometida en dicha ejecución se proyecta sobre el proceso, anudándose, según se dice en la Sentencia 1/1983, de 13 de enero, a la indefensión del demandante, que es asumida y confirmada por el órgano judicial con olvido de su obligación de corregirla y subsanarla en protección del derecho a la no indefensión reconocido en el art. 24.1 de la Constitución”. Parece claro que, aunque no se admita la naturaleza jurisdiccional de la falta que cometa el cartero, ésta tendrá relevancia procesal, al menos en cuanto que no ha sido corregida por el órgano judicial³⁵⁰.

Además de hacerse por correo, para otorgarle más garantías a la entrega postal, las notificaciones se harán por correo que será ‘*certificado*’. En este sentido, hay que señalar que “los actos de comunicación de los Juzgados y Tribunales, según la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de supresión de las Tasas Judiciales, en su disposición adicional 1ª, gozan de franquicia postal y telegráfica”³⁵¹.

³⁵⁰ En este sentido, recuérdese lo que dijimos sobre el papel que le corresponde al Secretario judicial como sujeto activo de las notificaciones; aunque no sea él quien practique materialmente la notificación, siempre la ordenará él y vigilará su legalidad y efectividad, es decir, será el responsable, no sólo de que la comunicación se realice formalmente bien, sino también de que sea eficaz.

³⁵¹ SÁNCHEZ SÁNCHEZ: op. cit., pág. 1115.

-Al enviar en un sobre certificado la resolución que se ha de notificar, *dará fe el Secretario en los autos del contenido del sobre remitido. Según la jurisprudencia, la infracción de este requisito conlleva la nulidad de las actuaciones, como en la STS 9.VII.85 (RJ 1985\3705), en la que se expresa lo siguiente: “No han sido cumplidas las prevenciones anteriormente relatadas en el procedimiento de instancia, toda vez que en los emplazamientos por acuse de recibo al demandante y recurrente obrantes en los folios 764 y 768 se ha omitido la preceptiva dación de fe por el Secretario del contenido del sobre remitido, que no puede ser sustituida por una imprecisa constancia de haberse realizado el emplazamiento y por unas cédulas no comprensivas de su remisión al emplazado, falta de autenticación que impide conocer lo que en aquél se incluía y que es fundamento de la demanda incidental de nulidad de actuaciones planteada, que por ello debe ser acogida decretándose la nulidad de los expresados emplazamientos y reponiéndose los autos al estado que mantenían en dicho trámite, a fin de que se siga la substanciación procesal debida, cuidando de no incurrir en Defectos de la naturaleza del denunciado”*³⁵².

-La comunicación postal conlleva, no sólo el envío (por correo certificado) de un sobre que contenga la resolución que deba comunicarse, sino que también es necesaria la recepción de ese sobre por la persona a quien se dirige; y esto último se acredita con el ‘*acuse de*

³⁵² Esta misma doctrina se contiene en SSTs 31.III.86 (RJ 1986\1518), 7.VII.86 (RJ 1986\3957) y 7.IV.95 (RJ 1995\2987).

recibo'. La STC 1/83 de 13 de enero, recuerda que esa recepción es esencial y se constata en las actuaciones por el acuse de recibo: "La expedición de la cédula por correo, y esto aunque sea por correo certificado, no completa la operación de la citación, pues ésta requiere la recepción, que se acredita mediante el acuse de recibo"; ya que "es esencial a estos actos la recepción de la cédula y en las actuaciones la constatación de que efectivamente y a salvo los casos de notificación edictal, se ha entregado a quien, según los distintos supuestos en cuyo detalle no es menester entrar, debe recibirla, siempre con el designio de que llegando a poder del interesado, pueda éste disponer su defensa".

La necesidad de un acuse de recibo que acredite la recepción de la notificación por el destinatario está en consonancia con lo que dijimos acerca del diligenciamiento de los actos de comunicación que no realice materialmente el Secretario o el Oficial habilitado para dar fe pública; en esos casos, se precisa un acto escrito del que se deduzca razonablemente que la notificación ha llegado a conocimiento del interesado, y ese acto escrito, cuando ofrezca suficientes garantías de eso último, se unirá a las actuaciones³⁵³. En este senti-

³⁵³ El acuse no sólo acredita en los autos la recepción, sino también la fecha de ésta, como queda claro en la STC 9/1992 de 16 de enero, comentada por QUINTANILLA NAVARRO y MARTÍNEZ MURILLO (en "Notificaciones y su demostración", *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 58, Editorial Cívitas, Madrid, 1993, págs. 289-293). En esa sentencia, se trata de un caso en el que, ante un acuse de recibo con fecha 2 de noviembre de 1987, el recurrente afirma que fue el día 13 de ese mes cuando recibió la notificación, y por esa diferencia de día se le pasó el plazo de interposición del recurso de casación. El TC afirma que sirve a todos los efectos lo consignado en el acuse de recibo.

do, según ZARZALEJOS NIETO, "la recepción por el destinatario o por persona legitimada y la incorporación a los autos del acuse de recibo firmado por uno u otra, son requisitos cuya infracción supone vulneración de normas esenciales del procedimiento, que determina la anulación de actuaciones, declarada de oficio, reponiéndolas al momento en que se cometió la infracción"³⁵⁴.

Pero, en relación con lo anterior, no sólo es necesario que haya materialmente un acuse de recibo firmado por alguien, sino que, además, se requiere que esté firmado, o bien por el destinatario de la notificación, o bien por una de las personas que puedan recibir el acto en su lugar; y ¿quién, además del destinatario, puede recibir la notificación postal? Cuando no se encuentre en su domicilio a aquél que deba ser notificado, pensamos que pueden recibir la comunicación los sujetos que se indican en el artículo 268 LEC como receptores subsidiarios de la notificación domiciliaria³⁵⁵. Esto no se dice expresamente en el 261 I para la notificación y citación de las partes,

³⁵⁴ ZARZALEJOS NIETO, J.: "Los actos de comunicación con las partes en la Ley de Procedimiento Laboral según las jurisprudencias constitucional y ordinaria"; en "Cívitas. Revista española de Derecho del Trabajo", enero-marzo 1988. Madrid, 1988. Pág. 119.

³⁵⁵ Recordamos que esas personas son: "*el pariente más cercano, familiar o criado, mayor de catorce años, que se hallare en la habitación del que hubiere de ser notificado, y si no se encontrare a nadie en ella, al vecino más próximo que fuere habido*".

pero sí en el 273 II para la citación de los que no son parte: testigos y peritos; y así se entiende por la jurisprudencia³⁵⁶.

No obstante, para asegurar la efectividad de la notificación postal y no quedarse en un mero cumplimiento formal de ésta, es preciso que se consignen adecuadamente en el acuse de recibo los datos que sirvan para identificar a la persona que lo ha recibido; como se indica en la STC 39/87 de 3 de abril, “no puede considerarse válidamente realizada la citación cuando, como en el caso que nos ocupa, no constan los datos necesarios para poder identificar al receptor de la misma”. “En efecto —continúa esa sentencia—, según resulta de las actuaciones, la cédula de citación fue entregada a un empleado de la Entidad, pero no aparece el sello de la Empresa,

³⁵⁶ Además, como resalta GIMENO SENDRA (op. cit., pág. 159), así se recoge en el Reglamento de los Servicios de Correos, de 14 de mayo de 1964. Este autor dice así: “Como es sabido, el mencionado texto, en sus arts. 269 y ss., realiza una discriminación en cuanto a los requisitos de la entrega de la correspondencia certificada, distinguiendo la de los certificados ordinarios, de la entrega de las notificaciones; en tanto que los primeros han de entregarse “a los respectivos destinatarios o a persona mayor de catorce años autorizada al efecto por escrito” (art. 269,1º), los segundos habrán de realizarse al destinatario y, en cualquier otro caso, “a un familiar, dependiente, criado o vecino suyo mayor de catorce años” (art. 271,2º), con lo que la redacción de este último precepto es muy similar a la exigida por el artículo 268 de la LEC para las notificaciones judiciales ordinarias. El único problema que puede plantear la exégesis de tales preceptos es que ciñen su ámbito de aplicación a las notificaciones administrativas, las del Ministerio de Hacienda y las del antiguo Instituto Nacional de Previsión, pero, no hace falta tener una imaginación muy desbordante para obtener la conclusión, desde una perspectiva sistemática de las referidas normas, de que el régimen procedimental para las notificaciones procesales ha de ser el trazado por el artículo 270 del Reglamento de Correos; en nuestra opinión, ni siquiera sería necesario reformar dicho Reglamento: bastaría con una mera Circular que dejara claro este extremo”.

como sucede en alguna de las notificaciones posteriores, ni dato alguno que permita identificar al receptor, ya que en el acuse de recibo no figura más que una firma ilegible. Dicho acuse de recibo resulta, pues, manifiestamente insuficiente para que el órgano judicial pueda estimar debidamente cumplido el acto de citación, imprescindible para que la parte demandada pueda proceder a la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Y, dado que en las actuaciones no aparece ningún dato que acredite que la interesada conocía la citación, ha de concluirse que, al considerar ésta válidamente realizada, se ha vulnerado el derecho de defensa de la hoy recurrente en amparo y, con ello, el art. 24.1 de la Constitución”³⁵⁷.

Sin embargo, es bastante frecuente que los acuses de recibo lleguen al Juzgado con la sola firma del receptor, muchas veces ilegible, sin que conste su nombre completo, ni su DNI, datos que también se exigen en el impreso del acuse. Como señala PEIRE AGUIRRE, “a veces aparece una firma ilegible o un sello comercial, pero la inmensa mayoría de los casos lo más que parece es un garabato completamente ilegible, y por tanto no ofrece ninguna garantía de que ese acto de comunicación haya llegado realmente a su destinatario”³⁵⁸. En nuestra opinión, habida cuenta la doctrina del TC sobre la efectividad de las notificaciones, si el acuse de recibo ofrece dudas sobre la ‘efectiva recepción’ por el destinatario, no debería

³⁵⁷ Las SSTC 41/1987, de 6 de abril, y 41/1989, de 16 de febrero, tratan supuestos análogos y resuelven casi con idénticos términos.

³⁵⁸ PEIRE AGUIRRE: “Actos de comunicación”, *Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón*, núms. 10-12, 1985, pág. 26.

darse por buena la notificación, sino que habría que repetir el acto. En el mismo sentido se manifiesta GIMENO SENDRA: “Si, al recibir el acuse de recibo, el Secretario tuviera dudas sobre la determinación e identificación de las referidas personas, habrá también de reiterar la notificación en forma ordinaria”³⁵⁹.

8.1.2. Problemas en torno a la notificación postal que resulta ineficaz.

Acabamos de ver cuál es el modo concreto de realizar las notificaciones por correo. Pero, ¿qué ocurre cuando la notificación no es eficaz? El párrafo segundo del art. 261 LEC trata de dar respuesta a esto: *“De no recibirse el acuse de recibo en el Juzgado o Tribunal dentro de los quince días siguientes a su remisión, o haber resultado negativa la comunicación, se practicará de nuevo en la forma ordinaria, salvo que la persona notificada, citada, requerida o emplazada se hubiera dado por enterada personalmente. Sin embargo, si el Juez o Tribunal lo estima conveniente, podrá acordar que se practiquen por el Secretario o, en sustitución del mismo, por el personal del Juzgado que éste designe”*.

De este párrafo legal, lo primero que observamos es que para saber si una notificación realizada por correo ha sido eficaz o no, habrá que esperar un mínimo de quince días desde la remisión del sobre certificado. Luego, como dice GIMENO SENDRA, “deben ex-

³⁵⁹ GIMENO SENDRA: op. cit., pág. 160.

cluirse del sistema de correo certificado aquellas notificaciones que dispongan la ejecución del acto en un tiempo inferior al plazo legal de quince días, previsto para la obtención del acuse de recibo; en tales supuestos la notificación debiera practicarse siempre en forma ordinaria por '*acordarlo así el juzgador*', de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del párrafo tercero (ya dijimos que es el cuarto) del art. 261³⁶⁰.

Pasados esos quince días, la ley dispone que se practique de nuevo la notificación por medios postales. Aunque establece dos excepciones a este punto: la primera, que la persona notificada o citada (no, en cambio, la emplazada o requerida, ya que esto no puede hacerse, insistimos, de esta forma) '*se hubiera dado por enterada personalmente*'. Esta expresión es distinta a la del art. 279, ya que esta última exige que el notificado se de por enterado *en el juicio*, que, como dijimos, supone que el mero conocimiento del acto no subsana por sí solo el defecto que hubiera habido en la comunicación, sino que es precisa la voluntad de convalidarlo por parte del destinatario. Sin embargo, en el art. 261 se habla de que el notificado se ha debido de dar por enterado *personalmente*, lo cual parece excluir la exigencia de que quiera sanar el acto para que éste adquiera validez; en cuanto llegue a su conocimiento (conocimiento personal) y eso quede reflejado en las actuaciones, la notificación

³⁶⁰ GIMENO SENDRA: op. cit., pág. 159.

desplegará sus efectos³⁶¹. La segunda excepción a la repetición del envío postal es que se prefiera emplear la forma personal en el nuevo intento de comunicación: *“si el Juez o Tribunal lo estima conveniente, podrá acordar que se practique por el Secretario o, en sustitución del mismo, por el personal del Juzgado que éste designe”*.

La notificación postal no sólo puede repetirse cuando no llegue el acuse de recibo al Juzgado, sino también en los casos en que haya *‘resultado negativa la comunicación’*, es decir, cuando sí llegue el acuse, pero en éste no conste la recepción del destinatario³⁶². Las posibilidades de *‘comunicación negativa’* son variadas, y quedan reflejadas en el impreso del acuse con diferentes fórmulas, que hace constar el funcionario de Correos. Estudiemos las consecuencias que se pueden derivar de cada una.

Una primera posibilidad es que se reciba, en la Secretaría del Juzgado que remitió la notificación postal, un acuse que indique *‘avi-*

³⁶¹ Dice GIMENO SENDRA (op. cit., pág. 160): “será suficiente con que en los autos quede constancia de que la persona ha conocido el contenido de la notificación para que ésta despliegue válidamente todos sus efectos”.

³⁶² Nada dice la Ley de qué se debe hacer si en el segundo intento de notificación por correo tampoco se da con el interesado, ni con nadie que se haga cargo de la notificación; pensamos que en estos supuestos hay que presumir que la responsabilidad de que la comunicación sea negativa es del destinatario, ya que, normalmente, es él quien designó ese domicilio como lugar apto para recibir las notificaciones, según le exige el art. 4 LEC. Recuérdese que la notificación por medios postales se emplea cuando ya se ha personado la parte destinataria (luego ha podido señalar un domicilio para la comunicación procesal) y no tiene Procurador que la represente (porque en este caso no sería apta la forma postal).

sado'. Esto quiere decir que, al ir a entregar el sobre certificado a su destinatario, el cartero no le encontró en su domicilio, ni a él ni a ninguno de los receptores subsidiarios, y le dejó una nota de aviso de que podía pasar a recoger la carta en una oficina postal cercana³⁶³. En este caso, el tribunal esperará para ver si el destinatario se da por notificado; de no hacerlo en un tiempo razonable, que puede ser de quince días también, deberá repetir el acto, bien por correo de nuevo, bien en forma personal. Esto último ocurrirá también cuando el acuse que se haya recibido diga 'ausente' o 'ausente en horas de reparto'; si en este supuesto el tribunal no ordena la repetición, por una de las dos formas dichas, puede declararse la nulidad de la notificación por incumplimiento de la ley; como ocurrió en caso de la STC 36/1987 de 25 de marzo, en el que "el órgano jurisdiccio-

³⁶³ La forma postal de notificar es un medio rápido, pero cuando la comunicación tiene un resultado positivo. Sin embargo, se puede ocasionar un retraso considerable en las actuaciones si, cuando el funcionario de Correos acude a realizar la notificación, no consigue entregar a nadie el sobre. Actualmente, si el Juzgado envía por correo certificado una notificación, el Servicio de Correos realizará la comunicación aproximadamente a los dos días de su envío. Al día siguiente de que el notificando reciba el sobre, Correos devolverá el acuse de recibo firmado, que recibirá el Juzgado, como mucho, en otro día más. Por tanto, en el caso de que se encuentre en su domicilio la persona a quien se vaya a notificar —o a alguna de las permitidas por la Ley— y se realice sin dificultades la comunicación, se tardará un máximo de cuatro o cinco días en practicar la notificación postal.

Por el contrario, si al ir a notificar, el cartero no consigue entregar a nadie el sobre, se puede producir una paralización importante en el proceso. En este caso, dejará al destinatario —en su buzón— una nota de aviso de que tiene un envío en la oficina postal más próxima. Esta oficina devolverá la carta al Juzgado sólo cuando pase un cierto tiempo —por ejemplo, un mes— desde que recibió el sobre, que no ha llegado a recoger su destinatario; y durante ese tiempo habrá incertidumbre sobre la recepción o no de la notificación. Además, cuando el Juzgado tenga noticia del resultado negativo del acto de comunicación, tendrá que repetirlo de nuevo.

nal equiparó la nota del Servicio de Correos en la que se decía *ausente en horas de reparto* a ignorancia del paradero o del domicilio, procediendo al emplazamiento por edictos, con notoria lesión del derecho del actual recurrente en amparo a una tutela judicial efectiva, lo que conduce a la estimación del amparo solicitado”.

Otro posible contenido del acuse devuelto por Correos al Juzgado sea el de ‘desconocido’ o ‘cambio de domicilio’, en referencia, claro está, al interesado. En estos casos, quizás también deba el órgano judicial ordenar la repetición del acto, ya que ha podido haber un error o una falta de diligencia del funcionario de Correos que realizó el reparto; como en el supuesto de la STC 14/1987, de 11 de febrero: “(...) el agente de correos, el cual, en vez de intentar la entrega de la cédula en el domicilio de su destinatario, bien a éste o a un familiar, dependiente, criado o vecino, mayor de catorce años, se limitó a constatar la inexistencia de buzón en el portal y vocear el nombre del destinatario, para, a continuación, hacer constar que éste era *desconocido* en dicho domicilio sin hacer comprobación alguna en el mismo (...); la incomparecencia del demandante fue totalmente ajena a su voluntad, ya que es falsa la afirmación de que aquél no era su domicilio, por lo que, conocido por el Magistrado del mismo, debió corregir la situación de indefensión que le produjo el que se le tuviera, indebidamente y por causa a él no imputable, co-

mo de domicilio desconocido y, con base a ello, se le declarase desistido de su pretensión”³⁶⁴.

Comenta ZARZALEJOS NIETO: “Hay, en esta sentencia, un doble reproche: al funcionario de Correos por no investigar, razonablemente, el domicilio del destinatario, y al Magistrado de Trabajo por no enmendar la defectuosa actuación de aquel funcionario —haciendo propios los resultados de la misma— omitiendo la repetición del envío”³⁶⁵.

Otra cosa distinta es que en el acuse de recibo conste que el destinatario ha ‘rehusado’ la notificación. En la medida en que estamos ante una ‘comunicación negativa’, según el art. 261 II, habría que repetir el acto de comunicación, también en estos supuestos. Sin embargo, pensamos que eso sería beneficiar a aquél que no quiere darse por notificado. Como dice SÁNCHEZ SÁNCHEZ, “parece más correcta la regulación (no aplicable aquí) de la nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, cuando en su art. 59.3, hace producir efectos a la notificación rechazada; quien rehusa o rechaza el sobre del órgano judicial, lo hace sólo pa-

³⁶⁴ Como dice ORTEGA SÁNCHEZ (en “Los actos de comunicación a través del Servicio de Correos”, *Revista de Derecho Procesal*, Madrid, 1980, pág. 276): “Si bien hay que resaltar la labor incansable de los servicios de correos, existen excepciones por las cuales, al menor error de nombre o dirección en el sobre, devuelven el certificado, anotando la palabra ‘desconocido’, cuando con una ligera y breve investigación el certificado podía ser entregado al destinatario”.

³⁶⁵ ZARZALEJOS NIETO: op. cit., pág. 123.

ra dificultar la tramitación, por lo menos, intuyendo el contenido, pues de otra manera su conducta sería diferente. Es decir, que no dando efectos a esa repudiación, se esta favoreciendo, en vez de sancionar, a quien obstaculiza la labor de la Justicia”³⁶⁶.

En general, cuando la notificación postal es infructuosa, las consecuencias serán distintas en función de quien haya faltado a su deber de diligencia. Como dice con acierto ZARZALEJOS NIETO, “es preciso señalar o trazar una línea divisoria entre el deber de diligencia del destinatario de la comunicación postal y el deber de diligencia del órgano judicial y del Servicio de Correos. En cuanto al primero, conviene incidir en la carga del demandante de fijar correctamente en la demanda su domicilio y el del demandado, y a ambas partes incumbe la obligación de facilitar la labor del Servicio Postal. Por su parte, el funcionario de Correos y el órgano judicial tienen el deber de comunicar a las partes cuanto interese a su defensa (mejor dicho, el funcionario postal debe ejecutar diligentemente el acto de comunicación del órgano judicial, que a su vez está obligado a promover real y eficazmente la defensa de las partes); al primero le es exigible un deber de *investigación*, dentro de lo razonable, sobre el paradero del destinatario, cuando su domicilio sea conocido, y al segundo, el deber de corregir la negligencia del funcionario repartidor”³⁶⁷.

³⁶⁶ SÁNCHEZ SÁNCHEZ: op. cit., pág. 1114.

³⁶⁷ ZARZALEJOS NIETO: Op. cit., págs. 123-124.

Así, si quien falta a su deber de diligencia es el destinatario del acto de comunicación, será él quien acaree las consecuencias desfavorables que se deriven de la notificación ineficaz. Como en el caso de la STC 156/1985 de 15 de noviembre; aquí, la parte destinataria se equivocó al designar el domicilio dónde se le podían enviar las comunicaciones procesales, vía postal, lo que provoca que se le declare desistida en un proceso laboral, al no comparecer cuando se le cita a juicio³⁶⁸. Otro ejemplo claro es el de la STC 48/1990 de 20 de marzo, donde el demandante no comunica al Juzgado su ausencia temporal del domicilio que designó en la demanda, ni deja a nadie a cargo de la correspondencia que pueda llegarle a ese domicilio, lo que origina que también se le tenga por desistido de la demanda³⁶⁹.

³⁶⁸ Se dice en la sentencia referida: "Si ésta en efecto, recibió con normalidad la cédula de notificación de la providencia de 30 de diciembre de 1983, a pesar del error cometido en el escrito de demanda en punto a la identificación de domicilio, ello fue debido a la diligencia tenida por el funcionario de Correos que corrigió no sólo el domicilio inexacto reseñado por la recurrente en su demanda sino además el código postal que le correspondía. Desde este mismo momento, la recurrente debió observar esos errores y tomar las medidas oportunas para su reparación".

³⁶⁹ El TC declara en esta sentencia: "la conducta negligente del demandante resulta también de no haber dado cuenta a la Magistratura, de su ausencia temporal del domicilio por él señalado en Madrid para recibir las notificaciones; o bien, de no haber dejado en dicho domicilio persona alguna que pudiera hacerse cargo de la correspondencia oficial que recibiera con motivo de la demanda que había dejado presentada en la Magistratura de Trabajo. Su posición de demandante no le permitía desentenderse del procedimiento por él iniciado, sino que le obligaba a prestar, en su propio interés, la mínima diligencia y colaboración para no entorpecer la tramitación del procedimiento. Y está claro que no fue ésta la conducta del recurrente. No puede, pues, invocar indefensión (...)"

Esta sentencia se comenta por ARROYO GONZÁLEZ ("Sobre la citación a juicio del demandante", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 46, Editorial

Por otro lado, la falta de diligencia en la notificación postal puede ser del órgano judicial, ya sea de una manera directa, por incumplir alguna exigencia legal, ya sea de forma indirecta, al no corregir la negligencia del cartero. Un ejemplo claro de esto último lo hemos visto en la STC 14/1987 de 11 de febrero; y respecto a lo primero, la STC 9/1991 de 17 de enero, trata de un doble incumplimiento legal, por parte del tribunal, ya que, de un lado, realizó la citación por edictos y por correo a la vez, y por otro, no repitió la citación, por correo o de forma personal, cuando llegó la nota que indicaba que el destinatario estaba 'ausente'³⁷⁰. En estos casos, se declarará la nulidad de la notificación y se repondrán las actuaciones al momento anterior a ésta.

Por último, cabe el supuesto, según el cual, la responsabilidad de que la notificación no llegue a su destinatario no es, ni de las propias partes procesales, ni del órgano judicial (o servicio de Correos), sino del receptor subsidiario que no entregó, o no lo hizo oportuna-

Civitas, Madrid, 1991, págs. 319-328), quien se sitúa a favor del pronunciamiento del TC.

³⁷⁰ Esta sentencia ha sido comentada por CHOZAS ALONSO: "Sobre los actos de comunicación con las partes y el derecho a la tutela judicial efectiva", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 52, Editorial Civitas, Madrid, 1992, págs. 279-288. Este autor comenta: "El Magistrado debió cumplir —tal como le impone la doctrina del TC— con los 'específicos deberes de colaboración y de esmero' que el derecho fundamental al proceso exige (posiblemente intentando una segunda citación por correo, o la citación personal por medio de Agente judicial). Por lo tanto, parece evidente que el Magistrado equiparó la nota de Correos, en la que se decía 'se ausentó', a ignorancia del paradero o domicilio, procediendo a la citación edictal produciendo una notoria lesión del derecho fundamental del demandado a una tutela judicial efectiva sin indefensión".

mente, la 'cédula' a su destinatario. En estos casos, al igual que en la notificación personal, si el interesado prueba su falta de culpa en el asunto, también podrá anularse el acto que fue materialmente ineficaz³⁷¹.

³⁷¹ En estas ocasiones, ZARZALEJOS NIETO (op. cit., pág. 119), aunque refiriéndose al proceso laboral, cree que "lo más conveniente es esperar al juicio oral para comprobar si el destinatario tuvo o no conocimiento de la celebración del mismo. Si no lo tuvo, por causa imputable al receptor firmante, y si además recayó sentencia desfavorable, habrá que admitir la posibilidad de que, tras la interposición del oportuno recurso, deberá acordarse la nulidad de la sentencia y de las actuaciones precedentes, por la situación de indefensión creada al destinatario, aun a riesgo de estar refrendando un acuerdo malicioso entre receptor y citado".

8.2. UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DEL TELEGRAMA, Y DE MEDIOS TÉCNICOS DE COMUNICACIÓN.

A) Citación por telegrama.

Junto al empleo del correo certificado con acuse de recibo, para la práctica de las notificaciones, se permite en el artículo 261 LEC la utilización del telegrama en el proceso civil: *“Cuando lo aconsejen circunstancias particulares o exigencias de mayor celeridad, se podrá disponer que la comunicación se practique por el servicio de telégrafos o por cualquier otro medio idóneo de comunicación, adoptándose las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado del cual quedará constancia en autos”*. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 271 LOPJ: *“Las notificaciones podrán practicarse por medio del correo, del telégrafo o de cualquier medio técnico que permita la constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma según determinen las leyes procesales”*³⁷².

¿Cuándo procede notificar mediante telegrama? Cuando el tribunal aprecie discrecionalmente el supuesto de hecho que se indica: que existan *circunstancias particulares o exigencias de mayor*

³⁷² Cuenta GIMENO SENDRA (op. cit., pág. 160-161) que el telégrafo “ya había sido introducido con éxito en el proceso contencioso-administrativo especial para la protección de los derechos fundamentales (art. 8º, 2º de la LPJDF) y de aquí que el legislador expresamente lo haya contemplado”.

celeridad que hagan oportuno este medio de comunicación. Pero en el precepto transcrito no se precisan qué clases de notificaciones son susceptibles de ser practicadas de esta forma. Pensamos que este modo de realizar la comunicación procesal aparece referido únicamente a las citaciones, tanto de los que son parte en el juicio, como de otros sujetos que hayan de intervenir en él. Es decir, si examinamos, desde un punto de vista sistemático, qué lugar ocupa el art. 261 III, observamos que está situado detrás de los dos párrafos que establecen la notificación por correo y delante del párrafo que se encarga de la notificación personal. Por tanto, el telegrama no se podrá emplear para emplazar, ni para requerir, sino que será una vía subsidiaria de los casos en que sea posible el empleo del correo certificado, esto es, en las notificaciones y citaciones a las partes personadas (y en la comunicación con los que no son parte en el juicio). Sin embargo, parece lógico que por telegrama únicamente se podrá citar, ya que no es un medio adecuado para la notificación de una resolución judicial, sino para la transmisión de un mensaje breve, como de ordinario es el contenido de una citación.

La citación por telegrama goza de cierta rapidez en su práctica, desde luego es un medio más rápido que el correo; pero presenta problemas en cuanto a la seguridad en la recepción por el interesado. “El aportar a los autos una copia de haberse hecho el telegrama, sólo prueba la emisión; para demostrar la recepción es preciso que conste la entrega, momento de la misma y persona a quien

se efectuó”³⁷³. Estas pueden ser las *circunstancias esenciales de la práctica* de la citación por telegrama, que deben constar en las actuaciones, según la LOPJ (art. 271). De manera parecida, la LEC exige expresamente que se adopten “*las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado del cual quedará constancia en autos*”; luego, como ocurre en cualquier forma notificatoria, y en consonancia con la doctrina del TC sobre la efectividad en las notificaciones, debe haber un acto escrito del que se deduzca razonablemente la recepción por el destinatario del telegrama, que se una a los autos para acreditar esa recepción.

Por tanto, se puede declarar la nulidad de la citación por telegrama si, al no lograr su finalidad, no existe constancia de que el destinatario lo haya recibido. Como en el ejemplo que se ofrece en la STC 236/1992 de 14 de diciembre, donde se dispone que “la incomparecencia de los recurrentes al acto de la vista no puede imputarse a su propia voluntad o negligencia sino al Juzgado (...) porque, con infracción de lo preceptuado en el art. 271 LOPJ, no constató —ante la inasistencia de los actores al acto de la vista— si las citaciones habían sido oportunamente recibidas procediendo, en su caso, a nuevo señalamiento y citación”. Ya se ve, que la citación por telegrama, o se realiza con acuse de recibo o similar, o si no comparece el destinatario, se le tendrá que volver a citar³⁷⁴.

³⁷³ SÁNCHEZ SÁNCHEZ: op. cit., pág. 1115.

³⁷⁴ Se tendrá que repetir la citación por telegrama, hasta que se logre la comparecencia del citado, o habrá que emplear otro medio que permita asegurar y

B) Uso del fax en la comunicación procesal.

En las leyes procesales, como hemos visto, se menciona la posibilidad de usar al notificar *cualquier medio técnico*, dice la LOPJ

acreditar la recepción de aquél. En cuanto al empleo del acuse de recibo en el telegrama, téngase en cuenta el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, de 28 de febrero de 1986 (B.I.C., nº 46, abril 1986). En él se dice: "Subsiste aún una última cuestión. Tal es, con carácter general, la del mecanismo que permita la constancia de la práctica de la notificación telegráfica. A ese respecto hay que empezar por señalar que ni el art. 271 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (única ley procesal que se ocupa de las notificaciones por telégrafo) exigen que dicha constancia tenga lugar mediante la suscripción del correspondiente acuse de recibo. Por el contrario, el precepto últimamente citado distingue claramente los requisitos de la notificación por correo y de la realizada mediante el telégrafo. Mientras que en la primera se exige específicamente el acuse de recibo y se regulan los efectos de su no recepción, para la notificación telegráfica se exige únicamente que se adopten las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado, del cual quedará en los autos. A ello se añade que, tal como resulta del Decreto 1156/85 de 26 de junio sobre servicios y tarifas postales y telegráficas y de la resolución de 30 de septiembre de 1985 de la Dirección General de Correos y Telégrafos, el acuse de recibo telegráfico ha sido suprimido con carácter general como servicio específico a partir del primero de agosto de 1985. No parece por consiguiente que pueda compartirse una opinión que exigiera para la validez procesal de las notificaciones telegráficas la formalización de un acuse de recibo con el mismo carácter y significado que en las realizadas por correo, o que pretendiera imponer al servicio de telégrafos la práctica gratuita de un servicio no previsto ya en las disposiciones que lo regulan. El aseguramiento de la recepción del acto comunicado y su constancia en autos puede lograrse, como indica la comunicación del Subdirector General de explotación de la Dirección General de correos y telecomunicaciones obrante en la documentación existente en el Consejo, acudiendo a la fórmula del aviso de servicio previsto en el art. 13 del citado Real Decreto de 26 de junio de 1985, mediante el cual puede conseguirse una remisión al órgano judicial por parte del servicio de telégrafos de una comunicación indicativa de haberse practicado la entrega del telegrama, con indicación de las circunstancias de dicha entrega y cuyo servicio, según indica la misma comunicación, sería prestado con franquicia". En la práctica, lo que sucede es que se envía un telegrama al remitente, por el que se le comunica el resultado de la notificación telegráfica, que sustituye al acuse de recibo.

(art. 271), o *cualquier medio idóneo de comunicación*, se habla en la LEC (art. 261); siempre y cuando se cumplan ciertas garantías, que pueden resumirse, en nuestra opinión, en que se asegure, y se acredite en los autos, tanto la remisión y contenido de la notificación, como la recepción del destinatario y su fecha.

Según estos requisitos, ¿es posible practicar notificaciones por medio de un fax? En opinión de ELÍAS BATURONE “cabe la posibilidad de utilizar el fax como medio de comunicación y notificación, siempre y cuando el Secretario del Juzgado o Tribunal acredite en los autos suficientemente su constancia, remisión y contenido del texto en cuestión, a semejanza de lo previsto por el conducto del correo certificado con acuse de recibo”³⁷⁵. “En este sentido, se acreditaría en los autos, mediante una diligencia de constancia expedida por el Sr. Secretario del Juzgado o Tribunal... la hora de remisión del fax, su número de registro, y se unirá en las actuaciones el recibo acreditativo de tal remisión con el “OK” de su receptor aceptando la comunicación; es decir, con unas garantías similares y de analógica aplicación a lo previsto... respecto a las comunicaciones por correo ordinario certificado con acuse de recibo”³⁷⁶.

El autor citado encuentra apoyo a esa afirmación en un Auto de la Sección 3ª (Penal) de la Audiencia Provincial de Málaga, de 3

³⁷⁵ ELÍAS BATURONE: “La validez jurídica de las comunicaciones por fax y su aceptación en la Administración de Justicia: incidencia actual y perspectiva de futuro”, en *Tapia*, Editorial Trivium, año XV, nº 97, 1997, pág. 15.

³⁷⁶ ELÍAS BATURONE: op. cit., pág. 17.

de mayo de 1994, donde se expresa: “La notificación realizada por fax completada por la diligencia de constancia de 2-2-1994 a cargo del Secretario, haciendo constar la remisión de la copia del auto, el número de fax y la recepción por parte del destinatario, reúne todos los requisitos exigidos por el artículo 166 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando el hecho mismo de su emisión y su fidedigna recepción no se discute por la entidad notificada, es decir, se admite la eficacia del medio técnico utilizado por el órgano notificador”.

Nos parece interesante la observación que se realiza, en orden a la eficacia de la notificación realizada por fax, respecto a la necesidad de que ni la emisión, ni la recepción, sean discutidas por la entidad notificada. Porque, ¿qué ocurriría si, por el contrario, se discute la efectiva recepción por la persona a quien el fax iba dirigido? ELÍAS BATURONE considera que, en el caso de que sí se discutiera tal extremo, por la plenitud de la fe pública no sería necesaria la aceptación de tal medio por el destinatario³⁷⁷. Creemos en cambio que esta afirmación habría que matizarla, ya que el Secretario no puede dar de lo que no se realiza a su presencia; y en este sentido, es evidente que existen diferencias notables en cuanto a la documentación que puede hacer de la emisión, y la que realiza de la recepción: el Secretario puede tener una garantía total de que se ha emitido el fax, pero no de que éste ha llegado a quien corresponde, aunque el recibo acreditativo que proporcionan los telefax sea un principio de prueba de la efectiva recepción; pero dudamos que

³⁷⁷ ELÍAS BATURONE: *op. cit.*, pág. 19.

ofrezca todavía las mismas garantías que el acuse de recibo postal³⁷⁸.

Un dato que puede ayudar, en caso de que se dude sobre la validez de una notificación por fax, aunque su destinatario discuta su efectiva recepción, puede ser el hecho de que haya sido él quien haya elegido ese medio de comunicación y, por tanto, haya proporcionado los datos al Juzgado para que se le puedan notificar las resoluciones por esa vía. En este sentido es de destacar el párrafo cuarto del art. 7 de la Ley de Procedimiento Laboral, según la redacción del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido, el cual establece lo siguiente: *“Se podrá disponer que la comunicación se practique por el servicio de telégrafo o por cualquier otro medio de comunicación o de transmisión de textos si los interesados facilitaran los datos indicativos para utilizarlos. Se adoptarán las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado, del cual quedará constancia en autos”*. Como puede observarse, este artículo reproduce fielmente el 261 III LEC, con el único añadido del punto que comentamos: la posibilidad

³⁷⁸ Ya que estos medios, en la práctica, todavía en frecuentes ocasiones fallan por motivos técnicos. Aunque hay que reconocer que el propio acuse de recibo —como se ha puesto de manifiesto— no ofrece una seguridad total de que el sobre remitido por correo haya sido recibido por el destinatario que corresponde: en ocasiones, el acuse no se firma —o no se hace con firma legible—, o no se consignan completamente los datos que se exigen en el impreso de tal acuse; además, aunque aparezca en la firma el nombre del destinatario correcto, puede que no sea él quien recibe la notificación, ya que el funcionario de Correos no exige —ni puede hacerlo— la identificación del sujeto que materialmente recoge la comunicación.

de elección del fax, por parte del destinatario, aportando los datos que sean necesarios a tal fin³⁷⁹.

Así, si, por un lado, el destinatario ha elegido el fax como medio de comunicación procesal y ha facilitado su número al órgano judicial, y por otro lado, este órgano acredita la emisión del fax y su contenido bajo una diligencia de constancia, y une a los autos el resguardo *ad hoc*, en estos casos, quizás se pueda dar validez a la notificación realizada por fax, en los supuestos en que sea posible la comunicación postal, es decir, excluyendo los actos de comunicación del art. 261 IV (y todas las notificaciones en general cuando exista Procurador). Aunque, hasta que la 'credibilidad' de los recibos acreditativos que proporcionan los telefax sea total, puede ser oportuno que, cuando una parte sea notificada por fax, envíe inmediatamente otro al Juzgado, a modo de 'recibí', para que sea este acto escrito el que se incorpore a las actuaciones³⁸⁰.

³⁷⁹ Como señala ELÍAS BATURONE (op. cit., pág. 17), "aunque en este precepto no se utilice el término fax, resulta evidente que en la descripción normativa de *cualquier otro medio de comunicación o de transmisión de textos* se encuentra ubicado el mismo, ya que para su empleo se requiere que los interesados faciliten los datos correspondientes a sus respectivos números de emisor-receptor, utilizando la línea telefónica para la transmisión del texto que se pretende comunicar, y tanto para uno u otro sujeto de la comunicación, en los correspondientes aparatos mecánicos de soporte se deja constancia, no sólo de la hora, sino también de la certeza de la operación realizada".

³⁸⁰ Ya que no sólo se plantea este medio de comunicación respecto de las notificaciones del tribunal a las partes de un proceso, sino que también se quiere hacer uso del fax para la presentación de escritos al Juzgado. Sobre este particular, aunque sea de pasada, podemos decir que el ATS (Sala de lo Social) de 20.XII.95

C) *¿Es posible notificar válidamente por teléfono?*

Otra posible cuestión es si, al amparo de los preceptos señalados (261 LEC y 271 LOPJ), cabe emplear el teléfono en la comunicación procesal. El uso del teléfono en medios judiciales ofrece grandes dificultades para ser considerado un medio idóneo³⁸¹.

En primer lugar, porque, a diferencia de otros medios de comunicación comentados, en éste no es posible la ‘acción’ que supone propiamente la notificación: la entrega material de la copia de la resolución que se comunica a su destinatario o receptor. Según el art. 262 LEC, las notificaciones se harán *“leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se hagan, y dándole en el acto copia literal de ella firmada por el actuario, aunque no la pida, expresando el negocio a que se refiera”*. En la comunicación telefónica sólo puede realizarse el primer punto, la lectura de la resolución, que

considera este modo de presentar escritos como defectuoso, pero aceptable, si se ratifica posteriormente. Así, se puede emplear para manifestar la intención de recurrir, evitando la preclusión; pero se deberá ratificar el recurso, firmándolo en el plazo que otorgue a tal fin el tribunal: “Ha de reconocérsele —se afirma en el Auto citado—, por lo menos, la misma eficacia que el escrito que, sin firma de Letrado, se presenta con tal propósito y, en consecuencia, de acuerdo con el principio general establecido en el artículo 243 de la ley Orgánica del Poder Judicial y con lo establecido en el artículo 206.3 de la Ley de Procedimiento laboral, la Sala debió, antes de tener por no preparado el recurso, conceder a la parte el plazo a que dicho precepto se refiere para subsanar el defecto advertido”.

³⁸¹ Cuenta PEIRE AGUIRRE (op. cit., pág. 27), al comentar el art. 261 III, que “ya el Congreso de los Diputados limó en parte el texto un tanto excesivo presentado por el Gobierno, porque incluso en estos medios idóneos incluían el teléfono; sin embargo, este sistema no ofreció demasiadas garantías al legislador y lo eliminaron de su redacción”.

es precisamente lo que se suele omitir en las notificaciones por otros medios. Sin embargo, no es posible lo más característico de la acción de notificar, que es la entrega de la resolución. Esto ya supone la limitación de que por este medio sólo podrían realizarse, a lo sumo, citaciones.

Pero el problema más importante, a efectos procesales, de la comunicación telefónica consiste en que es imposible de partida cumplir con el art. 261 III LEC: que se asegure *“la recepción del acto comunicado, del cual quedará constancia en autos”*. Es decir, no es posible unir a los autos un acto escrito que acredite la recepción del destinatario. En las notificaciones que se realizan en el domicilio del notificado, en muchas ocasiones no es posible recabar la firma de la persona que la recibe (ya sea familiar, criado, portero, vecino, etc.) y el Oficial actuante, en sustitución del Secretario, da fe pública plena del acto sin necesidad de que firmen testigos. En la notificación telefónica, únicamente se puede dejar constancia, en la diligencia acreditativa del acto, de que se ha notificado “a quien manifiesta ser X”, ya que el Oficial, en este caso, no puede dar fe, porque no tiene certeza, de que realmente sea X, quien afirma serlo³⁸². Como se dice en la STC 105/1993 de 22 de marzo: “La fe pública judicial, en este expeditivo medio de comunicación, no abarca más allá del he-

³⁸² Aunque en la notificación domiciliaria tampoco se pida, a quien recibe el acto de comunicación, que se identifique (ni el Oficial actuante lo podría exigir); es obvio que existe una diferencia importante —en orden a lo que puede acreditar— entre lo que el Oficial percibe cuando acude a un domicilio a practicar una notificación, y lo que únicamente escucha cuando la comunicación se realiza por teléfono.

cho de telefonar y de la citación realizada a una persona cuya identidad no aparece contrastada ni determinada y, de aquí, que en los autos no exista constancia de la recepción por el recurrente de la citación”³⁸³.

Como dice GIMENO SENDRA, “cuestión distinta surgiría, si el órgano jurisdiccional utilizara la comunicación telefónica fructífera-mente, es decir, compareciera el interesado, respondiendo a la llamada, y se hiciera constar mediante diligencia en los autos la recepción del acto; en este supuesto, la personación del interesado convalidaría la notificación defectuosa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 279, 2º de la LEC”³⁸⁴.

Por último, nos queda considerar las posibilidades de practicar actos procesales de comunicación mediante el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, tema que, al ser de futuro, dejamos para el epígrafe siguiente.

³⁸³ Por este motivo, no nos parece acertada la solución que proponía ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO (en “Las comunicaciones por correo, telégrafo, teléfono y radio, en el Derecho Procesal Comparado”, *Estudios de Teoría General e Historia del Proceso (1945-1972)*, tomo II, UNAM, México, 1974, pág. 45): “La solución jurídica tiene que partir de que el notificador judicial levante un acta de la notificación telefónica o, por lo menos, deje asiento suficiente al pie de la resolución notificada (comprensivo de la hora en que aquélla tuvo lugar, del número al que se llamó, de la persona que recibió la llamada y de la respuesta que diera). Entonces, esa acta o asiento haría fe, salvo prueba en contrario. El mecanismo de las presunciones *iuris tantum* respaldaría así las notificaciones telefónicas, y cabría reforzarlo exigiendo que sea necesariamente el Secretario judicial quien haga tales comunicaciones...”.

³⁸⁴ GIMENO SENDRA: op. cit., pág. 161.

CAPÍTULO 9:
LA NOTIFICACIÓN
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS,
INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS.

Una vez estudiadas las distintas formas de realizar los actos de comunicación procesal, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, quizás sea conveniente abordar la siguiente cuestión: ¿es posible, entre nosotros, practicar las notificaciones judiciales a través de los medios que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación? Pensamos que para tratar este tema, podemos dividir la cuestión en tres apartados: 1. *¿Puede* el tribunal, desde un punto de vista normativo, realizar actos de comunicación con las partes de un proceso —o con sus representantes— por medios electrónicos, informáticos y telemáticos? 2. *¿Se realizan* por estos medios las notificaciones, en la práctica, en alguna demarcación judicial de nuestro territorio? 3. *¿Es conveniente o deben* llevarse a cabo de esa manera?

9.1. MARCO NORMATIVO DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.

La primera pregunta que vamos a abordar es si es posible, desde un punto de vista normativo, practicar las notificaciones judiciales a través de medios electrónicos. ¿Hay alguna norma jurídica que habilite para realizar las comunicaciones procesales de esa forma? Hasta la fecha, el marco jurídico para el empleo de nuevas tecnologías de la información en el ámbito de la Administración de Justicia viene establecido en el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la reforma operada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre³⁸⁵. Este precepto viene a trasladar al proceso ju-

³⁸⁵ Este precepto tiene el siguiente tenor literal: "1. Los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establece la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, y demás leyes que resulten de aplicación.

2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

3. Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la Ley.

4. Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán relacionarse con la administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado primero cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento de que se trate.

5. Reglamentariamente se determinarán por el Consejo General del Poder Judicial los requisitos y demás condiciones que afecten al establecimiento y gestión

dicial la regulación que se había establecido dos años antes para el procedimiento administrativo en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJ-PAC). El artículo 230 LOPJ es una copia —en bastantes de sus párrafos, literal— del artículo 45 LRJ-PAC³⁸⁶.

de los ficheros automatizados que se encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales de forma que se asegure el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre de Regulación del tratamiento informática de datos de carácter personal.

Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, quien garantizará su compatibilidad.

Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine el Consejo General del Poder Judicial”.

³⁸⁶ Reprodúzcamos también este artículo, para que se pueda observar el paralelismo existente entre ambos preceptos: “1. Las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la Constitución y las Leyes.

2. Cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las Administraciones Públicas, los ciudadanos podrán relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos con respeto de las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento.

3. Los procedimientos que se tramiten y terminen en soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano que la ejerce.

4. Los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus potestades, habrán de ser previamente aprobados por el órgano competente, quien deberá difundir públicamente sus características.

Sin embargo, a diferencia del art. 230 LOPJ, el art. 45 LRJ-PAC ha sido desarrollado por el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado (en adelante RTEIT). En algunos puntos, tomaremos como referencia este Real Decreto, al estudiar las posibilidades de notificar a través de medios técnicos, ya que, como acabamos de decir, el RTEIT desarrolla una norma de gran paralelismo a la que principalmente nos interesa, y además, porque son parecidas las garantías que hay que respetar en uno y otro caso³⁸⁷.

La LOPJ parece referirse a la comunicación procesal por vía electrónica en el núm. 4 del mencionado art. 230, que dice así: *“Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado primero cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento de que se trate”*.

5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones Públicas, o los que éstas emitan como copias de originales almacenados por estos medios, gozarán de la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por ésta u otras Leyes”.

La primera pregunta que surge es si la expresión “*relacionarse con la Administración de Justicia*” incluye o no la comunicación procesal del órgano jurisdiccional con las partes de un proceso, o si tan sólo se refiere a la posibilidad de que los Abogados o Procuradores envíen sus escritos al Juzgado por vía informática o electrónica. Para algunos autores no hay ninguna duda de que cabe la comunicación electrónica en ambos sentidos: de la parte al órgano judicial y del órgano judicial a la parte, lo que incluiría, por tanto, las notificaciones³⁸⁸. Sin embargo, para otros, como DE LA OLIVA SANTOS, esto no está tan claro: “Esta norma de 1994 parece significar que las partes (también la demandada o parte pasiva, pero no otros sujetos intervinientes en el proceso) pueden servirse de los susodichos medios, no para ‘*relacionarse con la Administración de Justicia*’ —concepto que se refiere al conjunto de los órganos jurisdiccionales, del que no se demanda tutela judicial alguna—, sino para entrar en comunicación con ‘los Juzgados y Tribunales’ en el seno de los procesos, que son el cauce insoslayable para impetrar tutela judicial”. En

³⁸⁷ Aunque el ámbito de aplicación del Real Decreto citado sea exclusivamente la Administración General del Estado (o las entidades de Derecho Público dependientes de ésta), y ni siquiera se extienda a otras administraciones públicas.

³⁸⁸ En este sentido, ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ, comentando el nuevo artículo 230 LOPJ, expresa: “Puede decirse que hoy en día ya no hay obstáculo legal alguno que impida a los Procuradores enviar sus escritos a los Juzgados por vía electrónica e, igualmente, la Ley también autoriza a los Jueces para que envíen sus notificaciones a los Procuradores por medios telemáticos”, (“Los Sistemas de gestión jurídica automatizada: aplicaciones informáticas en el ámbito de la Administración de Justicia”, Actas del II Congreso Internacional de Informática y Derecho, en la *Revista Informática y Derecho*, núm. 12-15, Editorial Centro Regional de Extremadura de la UNED, Mérida, 1996, pág. 572).

opinión de este autor, “el legislador, prudente en este punto concreto, no llega a prever que la comunicación inversa, es decir, la de los tribunales a las partes procesales, pueda llevarse a cabo por los referidos medios modernos”³⁸⁹.

Si acudimos al procedimiento administrativo, para ver qué ocurre al respecto, observamos que el art. 45.2 LRJ-PAC también emplea la expresión “*relacionarse con las Administraciones Públicas*”³⁹⁰. La norma reglamentaria que desarrolla este precepto es el art. 7 RTEIT³⁹¹. En su primer párrafo, se habla de “*transmisión o recepción de comunicaciones*”. Luego se prevé expresamente la comunicación en los dos sentidos posibles: se permite realizar por esa

³⁸⁹ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 173.

³⁹⁰ Recordamos que el art. 45.2 LRJ-PAC completo establece: “*Cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las Administraciones Públicas, los ciudadanos podrán relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos con respeto de las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento*”.

³⁹¹ Reproducimos el art. 7.1 RTEIT: “*La transmisión o recepción de comunicaciones entre órganos o entidades del ámbito de la Administración General del Estado o entre éstos y cualquier persona física o jurídica podrá realizarse a través de soportes, medios y aplicaciones informáticos, electrónicos y telemáticos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:*

a) *La garantía de su disponibilidad y acceso en las condiciones que en cada caso se establezcan.*

b) *La existencia de compatibilidad entre los utilizados por el emisor y el destinatario que permita técnicamente las comunicaciones entre ambos, incluyendo la utilización de códigos y formatos o diseños de registro establecidos por la Administración General del Estado.*

c) *La existencia de medidas de seguridad tendentes a evitar la interceptación y alteración de las comunicaciones, así como los accesos no autorizados*”.

vía, tanto la presentación de escritos a un órgano administrativo (*recepción*), como la notificación a los interesados (*transmisión*). Esta doble comunicación queda sometida, al igual que sucede en el artículo 230.4 LOPJ, al cumplimiento de unas condiciones.

El art. 230.4 LOPJ condiciona el empleo de medios técnicos en la comunicación procesal, de manera doble. Por un lado, exige la compatibilidad de los medios, programas y aplicaciones informáticas que se utilicen; y por otro lado, ha de respetarse el cumplimiento de las garantías y exigencias legales del procedimiento en cuestión.

Respecto a lo primero, es muy parca la regulación que de la 'compatibilidad' se hace en el art. 230. En el núm. 4 se requiere la compatibilidad de los '*medios técnicos*', mientras que en el penúltimo párrafo del mismo precepto se habla de la compatibilidad de '*programas y aplicaciones informáticos*'³⁹². Para garantizar esta última, se dispone que tales sean aprobados por el Consejo General del Poder Judicial³⁹³.

³⁹² En el RTEIT se distingue qué se entiende por cada uno de esos términos. El art. 3 define como 'medio', aquel "*mecanismo, instalación, equipo o sistema de tratamiento de la información que permite, utilizando técnicas electrónicas, informáticas o telemáticas, producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones*". Sin embargo, una 'aplicación' será, según el mismo artículo, un "*programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el recurso a un sistema del tratamiento de la información*".

³⁹³ El art. 230.5 II dice sobre esto: "*Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, quien garantizará su compati-*

El artículo correlativo de la LRJ-PAC (art. 45.4) exige, además de la *aprobación* por el órgano administrativo competente (que será el que tenga atribuida la competencia para resolver el procedimiento: art. 9.1 RTEIT), la *difusión pública* de las características de los referidos programas y aplicaciones, cosa de la que no se hace ninguna mención en la LOPJ. En relación con esa difusión pública, dice DE ASÍS ROIG: "Es esa necesidad de garantizar la efectividad del acceso la que permite dimensionar el deber de publicación, que deberá circunscribirse a aquellos datos que permitan el acceso al procedimiento informatizado con todas las garantías —incluidas las generales por la ley—, a la vez que cabe deducir una obligación de la Administración de divulgar con carácter general los medios técnicos que posee y con los que los particulares pueden ejercer su derecho de comunicación con la Administración a través de tales medios. Pero, a su vez, este principio permite establecer un principio adicional y criterio de selección de las aplicaciones mismas y es el de la accesibilidad por el público a tales bienes, debiéndose considerar un crite-

dad". DE LA OLIVA SANTOS comenta críticamente este párrafo legal (op. cit., págs. 129-130): "Ocurre, como cuestión previa, que la compatibilidad entre programas informáticos no puede ser *garantizada* por el Consejo General del poder Judicial, salvo el absurdo de que este órgano constitucional elaborase programas de tratamientos de textos —absolutamente imprescindibles para el quehacer jurisdiccional y procesal— y sólo aprobase esos programas para uso de los Juzgados y Tribunales. Si no es así, el CGPJ podrá comprobar la compatibilidad de los programas producidos por las empresas correspondientes, pero no es cosa suya la garantía de la compatibilidad, respecto de la cual sucede, por otro lado, que media notable distancia entre el dicho y el hecho. Pero hay más: esa *debida* aprobación, por parte del CGPJ, de los programas y aplicaciones utilizados en la Administración de Justicia, ¿es requisito de validez y eficacia de lo que Juzgados y Tribunales puedan hacer, emitir o recibir por medios informáticos o con soporte informático?".

rio de aprobación el grado de disponibilidad de la aplicación por la población, de forma que efectivamente pueda accederse con las suficientes garantías a tales medios”³⁹⁴.

Además, en desarrollo del art. 45.4 LRJ-PAC, el RTEIT establece unos criterios para la aprobación de dichas aplicaciones (art. 9.3)³⁹⁵ y un contenido mínimo de la publicación de esa aprobación (art. 9.4)³⁹⁶. Junto a esto, en el art. 10.1 RTEIT se dispone: “A los

³⁹⁴ DE ASÍS ROIG: “Documento electrónico en la Administración Pública”, en *Ambito Jurídico de las Tecnologías de la Información*, Editado por el Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996, pág. 162. Este autor, por tanto, afirma que la publicación de las características de las aplicaciones informáticas que se utilicen en la comunicación entre la Administración Pública y los administrados sirve para garantizar, no sólo la *compatibilidad* entre los empleados por una y por otros —exigida en el art. 7.1.b) RTEIT—, sino también la *disponibilidad y acceso* a tales medios —prevista, a su vez, en la letra a), del mismo 7.1—.

³⁹⁵ Para que pueda llevarse acabo esta aprobación, se precisarán previamente una serie de informes técnicos que deberán referirse a los siguientes puntos (art. 9.3 RTEIT):

“a) *Legalidad de la aplicación: adecuación del funcionamiento de la aplicación a los requisitos y trámites del procedimiento.*

b) *Seguridad de la aplicación: preservación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos tratados por la aplicación.*

c) *Normalización de los medios de acceso: especificaciones técnicas sobre los medios, códigos y formatos de acceso.*

d) *Conservación de los soportes utilizados: proporción entre la durabilidad de los soportes y el tiempo en que deben mantenerse los datos en ellos”.*

³⁹⁶ Artículo 9.4 RTEIT: “Las órdenes ministeriales y Resoluciones de aprobación se publicarán en el “Boletín Oficial del Estado” y tendrán el siguiente contenido mínimo:

a) *Denominación y descripción de los objetivos de la aplicación.*

b) *Determinación de las resoluciones para cuya adopción va a ser utilizada la aplicación, señalando las normas que las regulan.*

efectos de lo dispuesto en el artículo 7 de este Real Decreto, cada Departamento ministerial de la Administración General del Estado hará pública la relación de las aplicaciones, medios y soportes a través de los cuales se podrán efectuar las comunicaciones y notificaciones entre los correspondientes órganos y entidades dependientes y los particulares, especificando en su caso los formatos y códigos normalizados para su utilización (...)”³⁹⁷. (Como se puede observar, el REIT afina mucho más que el art. 230 LOPJ, a la hora de garantizar la *compatibilidad* en la posible comunicación por medios técnicos).

El art. 230.4 LOPJ, junto a la *compatibilidad* de los medios técnicos que utilicen los justiciables con los que dispongan los Juzgados y Tribunales, exige también que “se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento de que se trate”. ¿Cuáles

c) Identificación del órgano competente para la adopción de las resoluciones, indicando la norma que atribuye la competencia, y de los potenciales usuarios de la aplicación.

d) En su caso, régimen y medios de acceso a la aplicación.

En la difusión de las características de las aplicaciones se atenderá a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual”.

³⁹⁷ Este precepto continúa así: “(...) Del mismo modo procederán las entidades de derecho público vinculadas a la Administración General del Estado.

2. Los Departamentos y entidades mantendrán permanentemente actualizada y a disposición de los ciudadanos la relación de aplicaciones, medios y soportes a que se refiere el apartado anterior.

3. Con una periodicidad mínima anual, el Consejo Superior de Informática elaborará y hará público un directorio que comprenda a la totalidad de órganos y entidades del ámbito de la Administración General del Estado a cuyos efectos las Comisiones Ministeriales de Informática remitirán a la Secretaría del Consejo la información correspondiente en el primer trimestre de cada año”.

son los requisitos y las garantías que se exigen en la práctica de las notificaciones? Como hemos visto, con base en el art. 262 LEC, la acción de notificar conlleva que se haga llegar al destinatario de la comunicación una *copia literal* (o cédula) de la resolución que se le notifica *firmada por el actuario*, y además, debe extenderse una *diligencia* que acredite la recepción por quien corresponda, mediante su firma. Si al notificar se emplea algún medio técnico, la LOPJ exige que dicho medio *“permita la constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma según determinen las leyes procesales”* (art. 271). Y la ley procesal civil dispone que se adopten *“las medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado del cual quedará constancia en autos”* (art. 261 III).

En nuestra opinión, de los preceptos mencionados se deduce, en resumen, que los requisitos y garantías esenciales, que siempre han de observarse al notificar, son: que se asegure y se acredite en los autos, tanto la remisión (y contenido) de la notificación, como su recepción (y fecha) por el notificado. Por tanto, también habrán de respetarse estas exigencias —como mínimo—, si se utilizan medios y aplicaciones informáticas en los actos de comunicación.

Una buena concreción de los requisitos que habrían de observarse, si las notificaciones judiciales se hicieran por medios electrónicos, es la que se dispone para la notificación administrativa en el art. 7.2 RTEIT: *“Las comunicaciones y notificaciones efectuadas en los soportes o a través de los medios y aplicaciones referidos en el apartado anterior serán válidas siempre que:*

a) *Exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones.*

b) *Se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de la comunicación.*

c) *En los supuestos de comunicaciones y notificaciones dirigidas a particulares, que éstos hayan señalado el soporte, medio o aplicación como preferente para sus comunicaciones con la Administración General del Estado en cualquier momento de la iniciación o tramitación del procedimiento o del desarrollo de la actuación administrativa”.*

9.2. EXPERIENCIAS CONCRETAS DE COMUNICACIONES JUDICIALES A TRAVÉS DE MEDIOS TELEMÁTICOS.

Después de analizar lo dispuesto en nuestra legislación sobre la posible práctica de actos de comunicación procesal por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, pasamos a estudiar si de hecho se *realizan* notificaciones por estos medios técnicos, en alguna demarcación judicial de nuestro país³⁹⁸.

En cuanto a la implantación de tales medios en nuestro territorio, es bastante significativo el plan de informatización de la Administración de Justicia que se está llevando a cabo en el País Vasco³⁹⁹. Este plan consiste en el establecimiento de una red judicial de telecomunicaciones, que une todos los Juzgados de los distintos

³⁹⁸ Hay que tener en cuenta, como dice DE ASÍS ROIG respecto del procedimiento administrativo, que “la finalidad fundamental de la regulación contenida en el art. 45 LRJ-PAC no es, propiamente, un plan de informatización, sino la fijación de las condiciones jurídicas de implantación de estas nuevas tecnologías y los efectos que producen los actos y comunicaciones derivados de su utilización” (op. cit., pág. 156). Pensamos que esto mismo cabe decir del art. 230 LOPJ, respecto de los procesos judiciales, aunque se haya hecho con mayor o menor acierto.

³⁹⁹ En virtud del Real Decreto 1684/1987, de 6 de noviembre, se dispuso (con efectos de 1 de enero de 1988) el traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Justicia en su ámbito territorial. Estas competencias se han visto recientemente ampliadas por el Acuerdo entre el Estado y la misma Comunidad Autónoma, de 16 de febrero de 1996 (que entró en vigor el 1 de abril), en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia.

partidos judiciales de esa Comunidad autónoma, entre sí, y con las Audiencias provinciales⁴⁰⁰.

⁴⁰⁰ Se trata de un sistema informático integrado y modular, cuyas principales características expondremos, por su interés, a continuación:

1º La tramitación informática del procedimiento comienza desde el *registro y reparto* de los asuntos a los distintos órganos. Al comenzar un procedimiento, cuando se registra su entrada, se le asigna un *Número de Identificación General (NIG)*, que sirve para identificar el expediente judicial a lo largo de toda su tramitación.

2º Este sistema informático contiene una colección de resoluciones judiciales en *modelos normalizados*, que incluyen, tanto modelos de resoluciones (diligencias de ordenación, autos, providencias y sus respectivas propuestas), como todos los actos procesales de comunicación y auxilio judicial derivados de las mismas.

3º. El sistema opera con lo que se denominan *aplicaciones de tramitación* de documentos, "que constituyen un dispositivo capaz de asignar un número único de control a cada asunto durante toda su vida procesal, desde el Registro de entrada hasta la ejecutoria y archivo, a lo largo de todas las oficinas, servicios e instancias que vaya atravesando; capaz de conservar los datos esenciales que se le van introduciendo en cada acto del procedimiento y de incorporarlos automáticamente en los actos sucesivos y de ligar los actos y los documentos a ellos asociados con las fases del procedimiento" (GUERRA GIMENO: "Informatización de los procedimientos. Una muestra: los procedimientos civiles". Actas del V Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática en La Habana, pág. 32).

4º. Con acceso al sistema de gestión de modelos de documentos y esquemas de tramitación, se halla el *Puesto de Trabajo del Juez*. Así se denomina al conjunto de herramientas informáticas que están a disposición de jueces y magistrados para la llevanza de los procesos. Este puesto de trabajo está basado en un Ordenador Personal (PC particular), que opera en un entorno gráfico (Windows), y está conectado a la red judicial de comunicaciones. Desde ahí, el Juez se puede comunicar electrónicamente con el Secretario judicial y los Oficiales que estén a su cargo en la tramitación de los procedimientos. Sirve, pues, como puesto de trabajo personal para la elaboración de resoluciones judiciales. Además, a tal fin, tiene acceso integrado a un sistema de información documental, que contiene bases de datos de jurisprudencia y legislación.

Sin embargo, pese a los avances indudables en el terreno de la informatización de los procedimientos judiciales (que acabamos de apuntar someramente en la anterior nota al pie), no puede decirse, sin embargo, que los actos de comunicación procesal se practiquen de modo electrónico en el sistema informático judicial del País Vasco. Las resoluciones judiciales que dictan los tribunales de ese territorio se notifican a las partes en las distintas formas previstas en la ley (y que hemos estudiado en epígrafes anteriores). Por ejemplo, pueden llevarse a cabo —cuando corresponda— por el Servicio Común de Notificaciones. En este caso, el Juzgado en cuestión remitirá a este servicio, a través de la red judicial —vía informática—, la resolución que se deba notificar⁴⁰¹. Pero, junto con el ‘envío informático’ se recibirá también en el servicio común la resolución en pa-

(Estos datos han sido facilitados por el Servicio de Informática Judicial, dependiente de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco, a cargo de D. Iñaki Sánchez Guiu, que tuvimos ocasión de visitar para realizar una investigación de campo. Agradecemos desde aquí las atenciones prestadas y la información que se nos facilitó).

⁴⁰¹ Sobre las notificaciones a través del denominado SCAC (Servicio común de actos de comunicación) en el sistema informático del País Vasco, comenta GUERRA GIMENO (op. cit., pág. 49): “El que este servicio y su actividad constituyan además otro módulo especializado de tratamiento informático dentro de nuestro sistema supone que la información necesaria desde cada Juzgado al servicio se traslada —se “itinerar”— a través del propio sistema informático, que distribuye el trabajo también de modo automatizado y permite, sin trabajo adicional alguno, el control de la actividad al obtener —con la periodicidad que se quiera— la actividad de los funcionarios del servicio, de cada órgano judicial, de los tipos de acto de comunicación procesal a ejecutar y de los “tiempos de respuesta”; (...) siendo necesario poner de manifiesto que los tiempos medios —en cinco años de funcionamiento del servicio— han sido (...) de menos de dos días para los de comunicación (notificaciones y emplazamientos principalmente)”.

pel⁴⁰²; es decir, se han informatizado algunos de los trámites de las notificaciones que se practican por ese servicio, lo cual conlleva no pocas ventajas⁴⁰³, pero no puede decirse que esta forma concreta de practicar los actos de comunicación se realice electrónicamente.

Además, si la notificación se efectúa a través del Procurador de la parte procesal, aunque técnicamente sea posible remitirla por

⁴⁰² Lo cual no quiere decir que no sea laudable el esfuerzo de modernización de la Administración de Justicia, que se está llevando a cabo en esa Comunidad Autónoma, mediante la informatización de los procedimientos, que lleva consigo — como se ha demostrado en la práctica— una agilización importante en la tramitación procesal. Simplemente se quiere dejar apuntado el dato de que todavía no se ha otorgado en nuestros tribunales (ni siquiera en los más adelantados en este campo) la plena validez a la resolución que se emite y se contiene en soportes informáticos, en la medida en que ese soporte —de momento— nunca es el único.

En este sentido, DE ZULUETA CEBRIÁN, en una ponencia donde se manifiesta a favor de informatizar los procesos judiciales, sin embargo, a este respecto, deja claro lo que sigue: “La informatización del proceso no deberá, o mejor dicho, no podrá eliminar la existencia de un expediente físico, por decirlo así, de papel, puesto que al mismo accederán productos del ordenador y documentación y escritos procedentes de las representaciones de los litigantes. Todo cuanto se produzca en el Juzgado será impreso e incorporado, debidamente signado por el Juez y Secretario, al expediente o, más concretamente a los autos” (en “El Procurador en el proceso informatizado”, Actas del III Congreso Iberoamericano de Informática y Derecho, en la *Revista Informática y Derecho*, núm. 5, Editorial Centro Regional de Extremadura de la UNED, Mérida, 1994, pág. 1332).

⁴⁰³ Las mejoras que supone el sistema informático son las siguientes: el envío electrónico de la resolución se recibe instantáneamente en el servicio común, antes de que llegue la resolución en papel; y en cuanto esa entrada se registra en el ordenador del servicio, se reparte al funcionario que le corresponda según la zona en la que se practique; además, automáticamente se emite la diligencia (formalizada), la cual se unirá a la resolución en papel cuando llegue; diligencia que debe ser firmada por el Oficial que realice la notificación y por el receptor de la misma; por último, el propio ordenador facilita al Oficial notificador un listado, ordenado por calles, de las diligencias de comunicación que tiene que realizar cada día.

medios informáticos, desde el ordenador del tribunal que dicta la resolución, al Salón de Procuradores que hay en la sede de los Juzgados, esto en la práctica no se realiza todavía de esta manera en el sistema informático de la comunidad vasca⁴⁰⁴.

Sí, en cambio, hay un proyecto de 'aplicación informática', entre el Tribunal Supremo y el Colegio de Procuradores de Madrid, para efectuar por medios telemáticos las notificaciones a los Procuradores que actúen en dicho Tribunal. Según GARCERÁN CORTIJO, esta aplicación "sigue básicamente las directrices del EDI (Intercambio Electrónico de Datos), es decir, tenemos un standard previamente acordado, y utilizamos un Centro de Compensación, en este caso el Colegio de Procuradores, un tercero, tan necesario para la utilización de la firma electrónica". Sigue el mismo autor: "Entremos en el proceso de la notificación telemática: (...) a través de un sistema codificado el documento de trámite se imprime en la Sala. Una vez firmado por el Secretario, mediante su clave crea un fichero *Reserva*, para el envío por lotes de las comunicaciones (...). Se establece la comunicación entre los ordenadores. El Colegio procede a la impresión del documento y a la distribución de las notificaciones a los Procuradores, pudiendo facilitar además un listado de todas las notificaciones recibidas por cada colegiado interfechas. Se crea un fichero de todas las notificaciones y nuestro ordenador vuelve a co-

⁴⁰⁴ "Al día de hoy no está informatizado este servicio, cuya gestión corresponde al Colegio de Procuradores, pero precisamente el sistema informático integrado y la capacidad de establecer comunicaciones externas hacen que sea uno de los proyectos inmediatos" (GUERRA GIMENO: op. cit., pág. 50).

municar con el del Tribunal Supremo para actualizar el trámite a efectos de dejar constancia de la notificación, en la ficha del recurso del Tribunal”⁴⁰⁵.

⁴⁰⁵ GARCERÁN CORTIJO: “La telemática y los Procuradores”, en *Encuentros sobre Informática y Derecho 1995-1996*, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1996, pág. 57. Como puede observarse, en este proyecto, la necesidad de acreditar la efectividad de la notificación, mediante la firma del funcionario actuante y la del receptor, se resuelve por medio de la firma electrónica. Sobre este punto, el autor citado explica lo siguiente: “Quisiera detenerme brevemente en la firma electrónica, y referirme como más seguro el criptosistema de clave asimétrica que se basa en cada uno de los operadores tiene dos claves, una privada que sólo él conoce y una pública, que conocen o pueden conocer todos los intervinientes en el tráfico.

“Cuando un operador “X” —Tribunal— quiera emitir un mensaje aplica él mismo su clave privada y el mensaje así cifrado se emite a “Y” —Procurador— que al recibir el mensaje aplica la clave pública del Tribunal para obtener el mensaje descifrado. Por ello se denomina al criptosistema asimétrico, ya que para cifrar y descifrar los mensajes se utilizan dos claves.

“Esta firma digital es equivalente en el mundo electrónico a la manuscrita en el modo convencional.

“Los criptosistemas de clave asimétrica pueden estructurar firmas electrónicas o digitales que ofrezcan un nivel de fiabilidad superior al de la firma tradicional o manual. Es más fácil falsificar una firma manual que romper una firma electrónica, obteniendo la clave privada a través de la pública, y ello aunque no pueda dejar de señalarse que el progreso técnico de la informática hace que el riesgo de rompimiento deba tenerse presente.

“Nosotros de momento en nuestro programa de notificaciones, el emisor y receptor (Tribunal y Procurador) comparten una misma clave que es secreta, pero tendemos a la clave pública.

“Surge ahora la necesidad de la prueba del envío, el Centro de Compensación antes aludido —la necesidad de un tercero que manifiestan distintos investigadores— que evite la posibilidad de un círculo interminable de acuses de recibo, servidor del tráfico EDI. Para ello dicho tercero deberá generar un elevado grado de confianza, pudiendo incluso llegar a estructurarse como un notario electrónico.

“Y este papel no es otro que el de los Colegios de Procuradores, papel que por otra parte ya vienen ejerciendo con el sello de la fecha de notificación, obligación que está regulada por la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 276)”.

En el proyecto que comentamos, por tanto, se emplean las técnicas del EDI para dar cumplimiento a lo exigido en el artículo 276 LOPJ: *“Las notificaciones podrán practicarse por (...) cualquier medio técnico que permita la constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma según determinen las leyes procesales”*. Así, la constancia de la emisión, de la recepción y su fecha, y de la integridad del contenido de la notificación se garantizarán mediante las citadas técnicas. Habrá que ver si ese sistema garantiza de modo suficiente lo que la Ley y la seguridad jurídica exigen⁴⁰⁶.

⁴⁰⁶ Los responsables del proyecto de “notificación telemática” que hemos comentado no tienen dudas de que las garantías de seguridad exigidas quedan sobradamente cubiertas mediante los sistemas EDI; no sólo por parte del Colegio de Procuradores, como hemos visto (GARCERÁN CORTIJO, Gerente de dicha corporación), sino también por parte del Tribunal Supremo. Así, ÁLVAREZ — CIENFUEGOS SUAREZ (Magistrado-Jefe del Gabinete Técnico del TS), se manifiesta a favor de este sistema (op. cit., pág. 565): “El EDI judicial unido a la utilización de sistemas multimedia como el que se ha experimentado en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, han de permitir la comunicación interna entre todos los órganos judiciales, y la utilización de nuevas formas de documentación de los actos procesales. El EDI judicial debe también facilitar la comunicación e intercambio documental entre los Tribunales y los Colegios de Abogados y Procuradores, interlocutores legitimados para recibir y presentar escritos ante la Administración de Justicia, en los términos establecidos por el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

9.3. CONCLUSIONES EN TORNO AL EMPLEO DE LA INFORMÁTICA EN LOS ACTOS PROCESALES DE COMUNICACIÓN.

Así, hemos visto el marco normativo existente en relación con la posibilidad de practicar notificaciones procesales por medios técnicos, y también algunas realizaciones concretas que se han puesto en práctica o están en proyecto. Quizás sea el momento oportuno de ofrecer algunas conclusiones sobre si se *deben* —y, en su caso, de qué modo— llevar a cabo los actos procesales de comunicación mediante medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

La respuesta a esa cuestión nos conduce necesariamente a examinar si, en los actos de comunicación que se realicen de modo telemático, se pueden asegurar y acreditar en los autos aquellos extremos cuya seguridad y constancia se consideran esenciales para considerar que una notificación se ha efectuado con respeto de las garantías exigidas por el derecho de defensa del destinatario de la comunicación. Esos extremos, que deben quedar acreditados, son: la remisión e integridad del contenido de la notificación, y la recepción por su destinatario y fecha de la misma. La salvaguarda y acreditación de esos puntos se pretende hacer a través de las técnicas EDI (Intercambio Electrónico de Datos) y de la firma electrónica⁴⁰⁷.

⁴⁰⁷ La remisión y el contenido de lo remitido se pueden acreditar bajo la fe del Secretario, al igual que sucede en la notificación postal (art. 261 I LEC); otra cosa es la recepción por el destinatario: como sabemos, en la actualidad, hace falta un acto

La validez jurídica de esas técnicas depende, en buena medida, de la seguridad que ofrezcan, desde un punto de vista técnico, en orden a asegurar de modo suficiente las exigencias legales que indicamos.

En ese sentido, nos parece que sería prudente esperar a que los sistemas EDI se extiendan y se consoliden más en otros ámbitos de lo que genéricamente se llama el 'tráfico jurídico'; ya que, aunque actualmente se estén difundiendo en algunos sectores comerciales de ámbito comunitario europeo⁴⁰⁸, todavía surgen muchas dudas, no ya sobre su validez jurídica, sino en cuestiones previas (que pueden, precisamente, hacer posible esa validez jurídica), como son (y así se denominan en los textos de *'informática jurídica'*): la *'normalización'* de los mensajes, la *'interoperatividad'* de las redes telemáticas y la *'seguridad informática'*; es decir, "la seguridad e integridad de los mensajes cursados por medios electrónicos ofrecen, no puede

escrito del que se deduzca razonablemente que la notificación ha llegado a quien iba dirigida; esto último es lo que se pretende hacer constar mediante la firma electrónica y las técnicas EDI.

⁴⁰⁸ ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ (op. cit., pág. 555) pone de relieve el impulso que están llevando a cabo las instituciones comunitarias en la comunicación electrónica de datos comerciales, en distintos sectores: "se permite la transferencia de ordenador en ordenador de mensajes 'estructurados'. El EDI ofrece una mayor seguridad, rapidez y eficacia en el intercambio de mensajes, mediante la oportuna codificación de los documentos. Así se ha acreditado en el sistema bancario (Sistema Swift); en la industria automovilística (proyecto Odette); electrónica (proyecto Edifice); química (proyecto Cefic); del seguro (proyecto Rinet) y transportes (proyecto Cost 306), entre otras". El autor citado resalta que también se está extendiendo la celebración de contratos tipo entre pequeñas y medianas empresas, en las que "los usuarios del EDI, a través de acuerdos y convenios particulares, llegan a aceptar el valor probatorio de los mensajes enviados por sistemas electrónicos" (pág. 570).

ocultarse, dificultades operativas en lo que respecta a la recepción y confidencialidad del mensaje”⁴⁰⁹.

De todas formas, el juicio sobre la capacidad técnica de los sistemas EDI para asegurar o no las garantías que han de respetarse en las notificaciones, pensamos que no nos corresponde a nosotros emitirlo; nuestro cometido puede ser, más bien, establecer cuáles son esas garantías que en todo caso deben observarse. Sobre esto, creemos que sería preciso el desarrollo legal y reglamentario del artículo 230.4 LOPJ, al menos del mismo modo a cómo desarrollan el 45.2 LRJ-PAC, los artículos 7 y ss. del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado (RTEIT). Al respecto, podemos establecer los siguientes puntos:

1º) Lo más importante es que, cualquiera que sea el medio técnico que se emplee al notificar, es necesario que “*exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones*”, y que “*se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de la comunicación*”, como se exige en el art. 7.2 RTEIT.

2º) Para proceder a la utilización de tales medios, se debe garantizar la *compatibilidad real* de los medios técnicos que emplee el

⁴⁰⁹ ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ: op. cit., pág. 567 y 569.

tribunal con aquéllos de que disponga el destinatario de la comunicación. Es decir, que se emplee, como señala DE LA OLIVA SANTOS, “un programa de tratamiento de textos que sea el mismo o verdaderamente compatible, de forma que, por ejemplo, no se pierdan las “eñes” y/o las letras acentuadas”⁴¹⁰. Para garantizar esa compatibilidad, no sólo se ha de requerir que “*los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser aprobados por el Consejo General del Poder Judicial*” (art. 230 LOPJ), sino también que se *publiquen*, tanto la *relación*, como las *características* de las aplicaciones, medios y soportes que se pretendan utilizar en la comunicación procesal (en la misma medida en que se hace en los arts. 9 y 10 RTEIT).

3º) Además, nos parece necesario exigir, no sólo la compatibilidad de los medios técnicos, aplicaciones y programas informáticos, como se hace en el art. 230 LOPJ, sino también, como sucede en el art. 7. RTEIT, que se garantice la *disponibilidad y el acceso* a tales medios, aplicaciones y programas, por parte de los justiciables. DE ASÍS ROIG afirma con acierto, con relación al procedimiento administrativo, pero plenamente trasladable al proceso judicial, que “la utilización generalizada o privilegiada a través de estas tecnologías pueden implicar la marginación de sectores que no pueden tener acceso —ya sea económico, o de simple falta de pericia— a procedimientos o prestaciones públicas. Evitar eso significa, por el momento, la necesidad de mantener las formas tradicionales de actua-

⁴¹⁰ DE LA OLIVA SANTOS: op. cit., pág. 173.

ción administrativa que, en principio garantizan un acceso universal a las funciones de la Administración o, alternativamente, adoptar las medidas adecuadas para universalizar el acceso al procedimiento o prestaciones por estos medios”⁴¹¹.

4º) Por último, cabe decir que un modo eficaz de garantizar ese acceso real de los justiciables a las tecnologías empleadas por los tribunales, así como su verdadera disponibilidad, consiste en que sea el propio destinatario, que conocerá los medios y aplicaciones que emplea el tribunal, por haberse publicado, el que elija esta forma de comunicación con el órgano judicial; así se establece en el art. 7.2 RTEIT, como requisito para la validez de estas comunicaciones en el procedimiento administrativo: *“En los supuestos de comunicaciones y notificaciones dirigidas a particulares, que éstos hayan señalado el soporte, medio o aplicación como preferente para sus comunicaciones con la Administración General del Estado en cualquier momento de la iniciación o tramitación del procedimiento o del desarrollo de la actuación administrativa”*.

⁴¹¹ DE ASÍS ROIG: op. cit., págs. 171-172.

CONCLUSIONES

I.

Las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos se encuentran entre los actos procesales que proceden del órgano jurisdiccional, dentro de la categoría de los actos de comunicación, e individualizados, entre éstos últimos, por dirigirse a los particulares que han de intervenir en el proceso. Estos actos de comunicación no sólo tienen en común el sujeto destinatario (las partes procesales y los sujetos de la prueba), sino que también consisten en una misma actividad (dar noticia de una resolución judicial), y se llevan a cabo de un modo parecido (ya que tienen un núcleo común de regulación); por lo cual, la notificación puede ser considerada como un género de actos de comunicación, que comprende, como especies, las citaciones, los emplazamientos y los requerimientos.

II.

La notificación en cuanto género se caracteriza por: realizarse siempre de oficio; consistir en una acción compleja; y diferenciarse del acto escrito que acredita su materialización. Así, las resoluciones judiciales se notifican a las partes procesales sin necesidad de que éstas soliciten su comunicación. La notificación es, por esencia, una acción, compuesta por un conjunto de actos, de los cuales el más característico es la entrega —y lectura— de la copia de una resolución —o cédula— a su destinatario —o receptor subsidiario—. Esa entrega se acredita siempre mediante un acto escrito o una diligencia, que firman aquél que la realiza y quién la recibe, y que se une a los autos, a tales efectos. No obstante, aunque en ocasiones se confundan, la notificación es algo en sí mismo distinto, en cuanto actividad, del escrito por el que se deja constancia de la misma.

III.

El género notificación admite como especies las citaciones, emplazamientos y requerimientos, cuando la resolución judicial que se comunica contiene una intimación para su destinatario. Si en esa resolución se señala una fecha y un lugar determinados en los que deba comparecer el notificado, tendremos una citación. Cuando, por el contrario, se indique un plazo para su personación, será un emplazamiento. Y si se compele al destinatario del acto a que haga —o deje de hacer— una conducta distinta de las anteriores, estaremos ante un requerimiento. Las citaciones no se diferencian únicamente de los emplazamientos en el elemento temporal de su convocatoria

(que se trate, respectivamente, de un término o de un plazo), sino que, además, por el emplazamiento se persigue siempre la personación del demandado en las actuaciones, mientras que por la citación ordinariamente sólo se busca su comparecencia; aunque hay citaciones de las que depende la personación, por ser la primera comunicación judicial que recibe el interesado de la existencia de un proceso. Por su parte, el requerimiento se distingue de las citaciones y de los emplazamientos en que se admite la consignación de la respuesta que pudiere dar el requerido.

IV.

Los emplazamientos y las citaciones de las que dependa la personación del demandado se realizarán de forma personal. También se empleará esta forma para notificar todos los requerimientos. El resto de citaciones y de notificaciones en general se practicará por remisión postal (por correo certificado o por telegrama). Si la *parte procesal está representada por Procurador*, será éste quien reciba las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos que se hagan a su representado. Sólo se acudirá a la publicación edictal como remedio subsidiario y último, cuando haya fracasado la comunicación a través de medios ordinarios.

V.

La competencia para la práctica de las notificaciones se otorga al Secretario judicial. Es él, como sujeto activo de las mismas, quien en todo caso: ordena su realización, normalmente mediante diligen-

cia; vigila su legalidad, es decir, que se efectúen por una de las formas legalmente previstas; y asegura su efectividad, esto es, que se reciba por el destinatario o por uno de los sujetos habilitados por la ley. Además, intervienen en la realización material de las notificaciones otros funcionarios judiciales (como los Oficiales o los Agentes), o no judiciales (como los funcionarios del Servicio de Correos) e, incluso, personal no integrado en la Administración de Justicia, aunque muy relacionado con ella (como los empleados de los servicios de notificaciones del Colegio de Procuradores).

VI.

El Secretario judicial es el único funcionario competente para dar fe pública con plenitud de efectos. Es decir, las diligencias de comunicación que extienda gozan de una presunción de veracidad, que sólo se desvirtúa mediante una declaración judicial de falsedad documental. Así, los actos de comunicación que documente no precisan de la firma adicional de testigos aun en los casos en que no firme el destinatario de la notificación. El Secretario puede habilitar al Oficial para que efectúe actos de comunicación; a éste se extiende la facultad de dar fe pública de las actuaciones que diligencie. En la práctica, es el Oficial habilitado quien lleva a cabo las notificaciones que hayan de hacerse en el domicilio del destinatario.

VII.

La notificación por el Secretario u Oficial habilitado, es decir, por un funcionario que pueda dar fe del acto, queda reservada en la

ley para los actos de comunicación de quien no tenga Procurador y que conlleven la personación del destinatario o sean requerimientos. En el resto de notificaciones, su ejecución material se efectúa por los funcionarios o servicios anteriormente mencionados, en la medida en que ofrezcan suficientes garantías y estén previstos legalmente. En estas ocasiones, la notificación no se documenta por diligencia que goce de fe pública, sino mediante un acto escrito, firmado por el destinatario, que acredite su efectiva recepción; sí dará fe el Secretario, cuando la notificación se realice por remisión postal, del contenido de lo remitido.

VIII.

El sujeto pasivo de la notificación es la persona física o jurídica a quien se dirige. El destinatario de las notificaciones es, ordinariamente, la parte procesal o su representante en el juicio. Aunque, excepcionalmente, puede notificarse la pendencia del proceso a aquellos terceros que sufran un perjuicio en sus derechos o relaciones jurídicas que se aprecie con claridad en los autos, por resultar afectados por la extensión de la cosa juzgada o por ser objeto de fraude procesal entre el actor y el demandado. También se citará a los sujetos de la prueba cuando corresponda.

IX.

En ocasiones, no es el destinatario quien recibe la notificación, sino uno de los receptores subsidiarios que la ley prevé. En este sentido, la ley permite que reciba la notificación una persona que se

encuentre dentro del domicilio del destinatario (familiar, empleado, etc.). Pero, en defecto de lo anterior, se establece la posibilidad de que se practique la notificación a un vecino (o al conserje de la finca) del interesado. Existen diferencias importantes en cuanto a la garantía de la efectividad de la comunicación en este último caso, ya que un vecino no ofrece suficiente seguridad de que hará llegar la notificación a su destinatario. Deberían limitarse estos supuestos a los casos en que el vecino acepte voluntariamente el encargo de dar traslado de la notificación a quien corresponda.

X.

Las notificaciones despliegan sus efectos desde que se acredita en las actuaciones su regularidad formal; es decir, su validez depende de que se lleven a cabo por una de las formas legalmente previstas y de que conste en autos su recepción por cualquiera de los sujetos que la ley permite. En este sentido, se dice que las notificaciones se rigen, en cuanto a su validez, por el principio de recepción. Como contrapartida, las notificaciones son nulas cuando se incumple algún requisito que la ley exige para su práctica. Los defectos en los actos de comunicación vician con nulidad radical todo lo actuado desde los mismos. Así, la declaración de nulidad produce efectos desde el acto absolutamente nulo y provoca, por tanto, que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior al vicio, ya que éstas habrán perdido su eficacia.

XI.

Como consecuencia de lo anterior, para que se declare nula una notificación se requiere, no sólo que se haya infringido algún precepto legal, sino también que dicho incumplimiento provoque indefensión en el destinatario; ya que, para dejar sin efecto algunas actuaciones ya tramitadas, es necesario que se haya producido un perjuicio efectivo al interesado, es decir, que se le haya privado de algún medio de defensa al que tenía derecho y que esa privación sea irreparable sin declarar ineficaz lo ya actuado.

XII.

Las notificaciones viciadas de nulidad pueden subsanarse si el destinatario de las mismas, pese al defecto, se da por enterado en el juicio. Así, en los casos en que no se menoscabe su derecho de defensa, el interesado convalidará la notificación defectuosa cuando manifieste —expresa o tácitamente— su voluntad de no tener por existente el vicio de nulidad. De otro lado, la pasividad o negligencia del destinatario de una notificación incorrecta hacen desaparecer su posible indefensión. Por tanto, quien tiene noticia de la existencia de un acto de comunicación, aunque sea defectuoso, debe actuar y ponerlo en conocimiento del tribunal, ya que la falta también quedará subsanada si no se pide su reparación en la primera oportunidad procesal que se tenga.

XIII.

Cuando se observan todas las formalidades legales que se exigen en la práctica de las notificaciones y, pese a esto, el acto no llega a conocimiento de su destinatario por motivos ajenos a su voluntad, ha de ser posible solicitar la nulidad de la notificación por infracción del principio de audiencia si se ha producido la indefensión del interesado. De tal manera que el principio de conocimiento viene a corregir el excesivo formalismo del principio de recepción. Así, aunque exista la presunción de validez de las notificaciones formalmente correctas, debe admitirse la alegación en contra y la prueba del efectivo desconocimiento de la misma, cuando haya sido inculpable y haya generado indefensión.

XIV.

La nulidad de una notificación puede denunciarse por las partes, durante la pendencia del proceso, a través de los recursos y demás medios legalmente previstos. También puede ser apreciada de oficio antes de que la sentencia sea definitiva y siempre que la falta no sea subsanable. Cuando el vicio en la notificación se advierte por el destinatario después de la firmeza de la sentencia, el medio ordinario de impugnación en la vía jurisdiccional es el incidente de nulidad de actuaciones de la LOPJ. Si el emplazamiento fue correcto, pero se declaró en rebeldía al destinatario por su ausencia involuntaria, se puede solicitar extraordinariamente la audiencia en rebeldía. También con carácter excepcional, en los casos en que el actor haya provocado fraudulentamente el emplazamiento

edictal, produciendo la indefensión del demandado, éste puede pedir la revisión de la sentencia firme por maquinaciones fraudulentas. Por último, como remedio último y subsidiario, está el recurso de amparo constitucional por violación de derechos fundamentales.

XV.

Con relación a las distintas formas de realizar la comunicación en el proceso, se practicarán por medio de Procurador todos los actos de comunicación, cualquiera que sea su clase, que se hagan a quien tenga representación procesal; también aquéllos de los que se exige su realización en forma personal. La notificación así practicada surte todos sus efectos, aunque el Procurador incumpla su deber de dar traslado de la misma a su poderdante; los resultados de ese incumplimiento pertenecen al ámbito exclusivo de las relaciones contractuales representante-representado.

XVI.

Las notificaciones al Procurador se practican en la sede del tribunal o en el local común que se organice a tal fin en las poblaciones donde existan varios juzgados y el volumen de la actividad judicial lo justifique. La organización de este servicio es competencia del Colegio de Procuradores de cada ciudad. El tribunal remite a ese local la resolución que se ha de notificar por duplicado, para que se entregue un ejemplar al Procurador destinatario y otro se devuelva firmado por él. En los casos de incomparecencia del Procurador,

surte plenos efectos la recepción de la notificación por dicho servicio.

XVII.

Cuando la parte carece de Procurador que la represente, la ley permite que el Abogado reciba las citaciones y emplazamientos que se hagan a su defendido. Nada se dispone, por el contrario, de las notificaciones en general y de los requerimientos, los cuales, por tanto, deben entenderse directamente con el propio interesado. Pero si en su lugar se realizan al Abogado de la parte, es difícil observar en estos casos una situación de indefensión que conlleve la nulidad de la notificación, salvo la difícil prueba de que el defensor no puso en conocimiento de la parte el contenido de lo notificado.

XVIII.

En los casos en que proceda la notificación en forma personal, es decir, cuando del acto dependa la personación del destinatario y en los requerimientos, la comunicación se realiza, o bien en la sede del tribunal si allí comparece el interesado —lo cual es muy infrecuente—, o bien en su domicilio. Quien acude a notificar al domicilio es el Oficial del tribunal que acuerda el acto o el del servicio común de notificaciones, en los lugares donde esté instaurado. En este último caso, el Secretario que ordena la notificación solicita ser sustituido para su práctica por el del servicio común. Éste, a su vez, habilita de modo permanente a los Oficiales a su cargo para que efectúen diligencias de comunicación y den fe pública de esos actos.

XIX.

Si al acudir al domicilio de aquél que debe ser notificado, el Oficial habilitado encuentra en ese lugar al interesado, le entrega la copia de la resolución que se notifica y extiende una diligencia que documente dicha entrega, que firmarán el Oficial actuante y el sujeto destinatario. La ley no prevé la posibilidad de que éste último se niegue a aceptar la notificación; en estos supuestos, el Oficial tratará de convencerle de la obligación que tiene de recibir el acto de comunicación; en caso de que insista en su negativa, una solución puede consistir en advertirle que la notificación quedará a su disposición en el Juzgado, produciéndose los efectos de la comunicación.

XX.

Cuando no se halla al destinatario de una notificación en su domicilio, ésta puede hacerse a través de un tercero que esté previsto legalmente. Si en el domicilio al que se acude se encuentra a un familiar o empleado del interesado, se entiende con éstos la diligencia de comunicación. Sin embargo, de no haber nadie en ese domicilio, el Oficial intenta informarse si en otras horas el destinatario puede ser habido en ese lugar, con el objeto de repetir con éxito el acto de comunicación. Por último, el funcionario actuante puede procurar que se haga cargo de la notificación un vecino o el conserje de la finca; pero esto sólo parece aconsejable cuando el receptor ofrece cierta garantía de cumplir su cometido. En todos los casos en que el acto de comunicación se efectúe por medio de un tercero, se

exige la correcta identificación del receptor, como garantía de la efectiva recepción por su destinatario.

XXI.

Si no es posible hacer la notificación de forma personal, se realiza mediante la publicación de un edicto en un periódico oficial. La notificación edictal es una forma legal válida de llevar a cabo actos de comunicación. Pero no garantiza de manera suficiente el derecho de defensa del destinatario, ya que no asegura la recepción del acto, al tratarse de un medio formal consistente en una ficción jurídica de muy excasa eficacia material. Por tanto, sólo tiene sentido como garantía del derecho de defensa del actor, al permitirle continuar adelante con el proceso cuando no es posible localizar al demandado en su domicilio.

XXII.

La jurisprudencia ha declarado en numerosas ocasiones que la notificación por edictos es un remedio último y excepcional, y que su empleo debe sujetarse a la concurrencia de ciertas condiciones, como son: el agotamiento previo de otras formas notificadorias de más garantía; la constancia formal en las actuaciones del intento de notificación por otros medios ordinarios; la justificación razonable de que se acude esta vía porque no queda otro remedio.

XXIII.

Como consecuencia de esa doctrina, únicamente se debe acudir a la publicación de los edictos cuando no sea posible emplazar de forma personal, y se cumpla estrictamente el supuesto de hecho para el que la ley prevé ese medio: cuando no conste el domicilio de la persona que debe ser notificada, o por haber mudado de habitación se ignore su paradero. En este sentido, no es suficiente la mera afirmación del actor de que desconoce el domicilio del demandado o de que ignora su paradero. Si el actor presenta la demanda sin hacer constar en ella un domicilio donde se pueda emplazar efectivamente al demandado, tendrá que justificar que no le es posible hacer tal designación, o se le requerirá a que emplee una mínima diligencia para averiguarlo. Así, se puede acudir a medios donde se obtenga, de manera sencilla y razonable, un domicilio del demandado, como el padrón municipal, o algún registro público, o el boletín de la corporación profesional a la que pertenezca, etc.

XXIV.

Por otro lado, si el actor señala un domicilio donde emplazar al demandado, sólo se dará paso a la comunicación edictal cuando se haya constatado —acudiendo a ese domicilio— que el notificando se ha mudado de habitación y se ignora su paradero, esto es, que ya no reside en ese sitio y que nadie de ese lugar sabe dónde se le puede localizar. En este caso, se debe juzgar sobre la responsabilidad del demandado en el hecho de que se le haya notificado infructuosamente en ese domicilio. Si se le considera responsable, se

procederá a la comunicación por edictos; en caso contrario, se requerirá al actor para que señale un nuevo domicilio.

XXV.

Las notificaciones que hayan de hacerse a quien no tenga Procurador que le represente y las citaciones de las que no dependa la personación de una parte procesal pueden llevarse a cabo por correo certificado con acuse de recibo. En estos casos, la ley exige que el Secretario documente la remisión, dando fe en las actuaciones del contenido del sobre remitido, y que acredite la recepción y su fecha, uniendo a los autos el acuse de recibo firmado por el receptor. Además, se le exigen otros deberes de diligencia, que si se incumplen pueden también conllevar la nulidad de la notificación.

XXVI.

Si no recibe la notificación postal el propio interesado, el Secretario se asegurará de que lo hace una de las personas que legalmente se permiten y de que está suficientemente identificada, para tener así garantía de que aquélla entregará la carta a su destinatario. Además, cuando el órgano judicial tenga dudas sobre si el destinatario ha recibido o no el sobre remitido (porque no ha llegado al Juzgado el acuse de recibo, o porque no llega firmado, o porque no se hace constar en él la identidad del receptor), tendrá que mandar que se repita la remisión, o bien, pasar a realizar la notificación de forma personal. Así, el tribunal, en el caso de que fracase la comunicación postal, pondrá los medios para sólo acudir a los edictos

cuando realmente se hayan agotado las formas ordinarias de notificación; en este sentido, ha de velar para corregir la posible falta de diligencia del cartero.

XXVII.

Se pueden realizar por telegrama las citaciones que requieran una urgente práctica. Este medio ofrece ventajas en cuanto a su celeridad, pero no garantiza, por sí solo, la efectiva recepción del citado. Así, debe haber un acto escrito, como en las demás formas notificadorias, del que se deduzca razonablemente la oportuna recepción del destinatario; porque, de no comparecer el interesado, habrá de repetirse la citación, a riesgo si no, de que se declare la nulidad de la misma. Por tanto, en la práctica, suele enviarse otro telegrama al remitente, por el que se le comunica el resultado de la notificación, que sustituye al acuse de recibo.

XXVIII.

En la actualidad quizás se pueda dar validez a la notificación realizada por fax, en los supuestos en que sea posible la notificación postal, si, por un lado, el destinatario ha elegido el fax como medio de comunicación procesal y ha facilitado su número al órgano judicial, y por otro lado, este órgano acredita la emisión del fax y su contenido bajo una diligencia de constancia, y une a los autos el resguardo *ad hoc*. Aunque, hasta que la 'credibilidad' de los recibos acreditativos que proporcionan los telefax sea total, puede ser oportuno que, cuando una parte sea notificada por fax, envíe inmediata-

mente otro al Juzgado, a modo de 'recibí', para que sea este acto escrito el que se incorpore a las actuaciones.

XXIX.

La citación realizada por teléfono sólo puede ser válida si su resultado es positivo, al no ser posible dejar constancia en las actuaciones de la recepción de la comunicación por el destinatario; ni siquiera aunque la llamada sea hecha por un funcionario que pueda dar fe del acto, ya que no tiene certeza de quien es su receptor.

XXX.

En relación con la posibilidad de practicar notificaciones procesales por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, hay que examinar si en tales casos se pueden asegurar y acreditar en los autos aquellos extremos cuya seguridad y constancia se consideran esenciales para considerar que un acto de comunicación se ha efectuado con respeto de las garantías exigidas por el derecho de defensa del destinatario de la comunicación. Esos extremos, que en todo caso deben quedar acreditados, son: la remisión e integridad del contenido de la notificación, y la recepción por su destinatario y la fecha de la misma.

XXXI.

La salvaguarda y acreditación de esos puntos quizás pueda hacerse a través de las técnicas EDI (Intercambio Electrónico de

Datos) y de la firma electrónica, pero el juicio sobre la seguridad técnica de esos sistemas no le corresponde al Derecho. En cualquier caso, habrán de resolverse previamente problemas no estrictamente jurídicos, como los de carácter económico (relativos al equipamiento y dotación de medios en los Juzgados), la formación de los usuarios (tanto de los funcionarios judiciales, como de los justiciables en general) y la normalización de tales técnicas (antes de introducirse en la Administración de Justicia, tendrán que extenderse y consolidarse más en otros ámbitos del 'tráfico jurídico').

XXXII.

Por último, otras condiciones que habrán de garantizarse en la notificación por medios técnicos, que sí tienen contenido jurídico, son: de un lado, las relativas a la compatibilidad real de los medios, programas y aplicaciones que emplee el tribunal, para lo cual no sólo será necesaria la aprobación del CGPJ que exige la ley, sino quizás también la publicación de su relación y de sus características; y por otro lado, las referentes a la disponibilidad y el acceso efectivo de los justiciables a tales medios técnicos, que tendrá una buena medida en el hecho de que sea el propio destinatario de la notificación el que elija esos medios.

BIBLIOGRAFÍA

ALCALÁ-ZAMORA: "Las comunicaciones por correo, telégrafo, teléfono y radio, en el Derecho Procesal Comparado", en *Estudios de Teoría General e Historia del Proceso (1945-1972)*, Tomo II, UNAM, México, 1974, págs. 29-51.

ALCALÁ-ZAMORA: "Los actos procesales en la doctrina de Goldschmidt", en *Estudios de Teoría General e Historia del Proceso (1945-1972)*, Tomo II, UNAM, México, 1974, págs. 53-81.

ALONSO OLEA, *Jurisprudencia Constitucional del Derecho del Trabajo y Seguridad Social*, tomo V, ref. 230, Editorial Civitas, Madrid, 1987.

ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ: "La protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia", en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, nº 273, Pamplona, 1996.

ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ: "Los sistemas de gestión jurídica automatizada: aplicaciones informáticas en el ámbito de la Administración de Justicia", en *Revista Informática y Derecho*, nº 12-15, Mérida, 1996.

AMOROS RICA: "Derecho y procedimiento tributario: notificaciones por correo", en *Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública*, nº 148, Editorial de Derecho Financiero, vol. II, Madrid, 1980, págs. 1017-1034.

AMOROS RICA: "Derecho y procedimiento tributario: notificaciones por edictos", en *Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública*, nº 148, Editorial de Derecho Financiero, vol. II, Madrid, 1980, págs. 1035-1048.

ARROYO GONZÁLEZ: "Sobre la citación a juicio del demandante", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 46, Editorial Civitas, Madrid, 1991, págs. 319-328.

BACHMAIER WINTER: "Efectividad de la citación del demandado, rebeldía y audiencia al rebelde en el proceso laboral", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 46, Editorial Civitas, Madrid, 1991, págs. 329-339.

BACHMAIER WINTER: "Emplazamiento edictal, sentencia *inaudita parte* y audiencia en rebeldía", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 81, Editorial Civitas, Madrid, 1997, págs. 121-128.

BACHMAIER WINTER: "Inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa: el discutible requisito de acudir previamente a la audiencia al rebelde en los casos de sentencias dictadas *inaudita parte*", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 88, Editorial Civitas, Madrid, 1998, págs. 313-320.

BACHMAIER WINTER: *La rebeldía en el proceso civil norteamericano y español*, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1994.

BECERRA GUILBER: "La notificación por edictos y el domicilio de las sociedades", en *Crónica Tributaria*, nº 40, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1982, págs. 291-296.

BORRAJO INIESTA: "Sombras de la reforma sobre nulidad de actuaciones: una réplica", en *Tribunales de Justicia*, nº 3, Editorial La Ley, Madrid, 1998, pág. 263-268.

CEDEÑO HERNÁN: "Recurso de amparo *versus* demanda de revisión", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 62, Editorial Civitas, Madrid, 1993, págs. 953-961.

CEDEÑO HERNÁN: *La tutela de los terceros frente al fraude procesal*, Comares, Granada, 1997.

CHOZAS ALONSO: "Sobre los actos de comunicación con las partes y el derecho a la tutela judicial efectiva", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 52, Editorial Civitas, Madrid, 1992, págs. 279-288.

CHOZAS ALONSO (y OTROS): "Ley Orgánica del Poder Judicial", en Ediciones de la Universidad Europea de Madrid-CEES, Madrid, 1995, págs. 132-214.

CIMA GARCÍA: "Examen de las reformas más importantes en el orden procesal civil introducidas por la Ley 10/1992 de 30 de abril", en *Revista Jurídica de Asturias*, nº 16, Oviedo, 1993, págs. 33-60.

COMELLAS SALMERÓN: "Ideas básicas para el estudio de los actos de comunicación en el proceso", en *Revista de Derecho Procesal*, Madrid, 1968, págs.941-952.

DE ASÍS ROIG: "Documento electrónico en la Administración Pública", en "Ambito Jurídico de las Tecnologías de la Información", *Cuadernos de Derecho Judicial*, Edita CGPJ, Madrid, 1996.

DE LA OLIVA SANTOS: *Derecho Procesal Civil*. Tomo II, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1995.

DELGADO PIQUERAS: "Asimilación del silencio negativo a las notificaciones defectuosas a efectos de los plazos procedimentales: (STC 204/1987, de 21 de diciembre)", en *Revista española de Derecho Administrativo*, nº 62, Editorial Civitas, Madrid, 1989, págs. 297-305.

DÍEZ RIAZA: *La Procuraduría*, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1997.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ: "La reforma del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: luces y sombras", en *Tribunales de Justicia*, nº 2, Editorial La Ley, Madrid, 1998, pág.129-143.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ: "Un pequeño gran problema: indefensión y sentencia firme", en *Tribunales de Justicia*, nº 5, Editorial La Ley, Madrid, 1997, pág. 513-520.

ELÍAS BATURONE: "La validez jurídica de las comunicaciones por fax y su aceptación en la Administración de Justicia: incidencia actual y perspectiva de futuro", en *Tapia* (de Editorial Trivium), nº 97, Madrid, 1997.

ESCUDERO MORATALLA y FRIGOLA VALLINA: "El Derecho Orgánico procesal analizado bajo el prisma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras disposiciones complementarias", en *Revista General de Derecho*, nº 634-635, Valencia, 1997, págs. 8671-8708.

FABREGAT VERA: "Breve comentario al artículo 272.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", en *La Ley*, nº 4, Madrid, 1993, págs. 1104-1107.

FERNÁNDEZ COSTALES y DÍAZ GONZÁLEZ: "La constitucionalidad del artículo 131 regla 5 de la Ley Hipotecaria. La obligatoriedad de fijación de domicilio en la escritura de constitución de la hipoteca para incoar procedimiento judicial sumario de ejecución y su interpretación a la luz del nuevo Real Decreto de 13 de noviembre de 1992, que modifica el Reglamento Hipotecario", en *La Ley*, nº 3, Madrid, 1993, págs 235-242.

FLORES DOMÍNGUEZ: "El problema de las notificaciones defectuosas. Reflexiones sobre la valoración de expropiaciones por motivos de carreteras.", en *La Ley*, nº 1, Madrid, 1993, págs. 145-179.

FRAGA MANDIAN: "El artículo 1435 párrafo último de la Ley de Enjuiciamiento Civil", en *La Ley*, nº 3, Madrid, 1994, págs. 983-987.

FRUTOS VIRSEDA: "Los servicios comunes de notificaciones y embargos (nulidad de actos procesales practicados por funcionarios destinados en los mismos)", en *La Ley*, nº 1, Madrid, 1992, págs. 1072-1078.

GARBERI LLOBREGAT: "La nueva (y polémica) doctrina del Tribunal Constitucional sobre el 'recurso de audiencia al rebelde': a propósito de la STC 15/1996, de 30 de enero", en *Actualidad Jurídica Aranzadi*, nº 240, Madrid, 1996, págs. 1-5.

GARCERÁN CORTIJO: "La Telemática y los Procuradores", en *Encuentros sobre Informática y Derecho 1995-1996*, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1996.

GARCÍA GALLARDO y HERNÁNDEZ OBELART: "Notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en la Unión Europea", en *La Ley*, nº 3, Madrid, 1997, págs. 1763-1765.

GARCÍA TORRES: "El domicilio como modulador del régimen de notificaciones tributarias", en *Crónica Tributaria*, nº 12, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1975, págs. 221-227.

GELSI BIDART: "El conocimiento de los actos procesales por las partes y el principio de que las partes están a derecho", en *Revista de Derecho Procesal*, Madrid, 1968, págs. 453-465.

GIMENO SENDRA: *Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ley 34/1984 de 6 de agosto*, Tecnos, Madrid, 1985, págs. 153-163.

GÓMEZ ORBANEJA (con HERCE QUEMADA): *Derecho Procesal*, vol. I, *Derecho Procesal Civil*, Madrid, 1951.

GRANIZO GARCÍA-CUENCA: “Los principios constitucionales de contradicción, audiencia y defensa en el proceso civil. En especial los actos de comunicación de las partes y del órgano judicial”, en *Cuadernos de Derecho Judicial*, nº XXII, Edita CGPJ, Madrid, 1993, págs. 157-238.

GUASP DELGADO (adaptado por ARAGONESES ALONSO): *Derecho Procesal Civil*, Editorial Civitas, Madrid, 1998, págs. 244-250.

GUASP DELGADO: *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tomo I*, M. Aguilar, Madrid, 1943.

GUERRA SAN MARTÍN: “Fases y estados informatizados del proceso y comunicabilidad entre las aplicaciones de gestión para la oficina judicial”, en *Revista Informática y Derecho*, nº 12-15, Mérida, 1996.

HERNÁNDEZ GALILEA: *La nueva regulación de la nulidad procesal. El sistema de ineficacia de la LOPJ*, Editorial Forum, Oviedo, 1995.

ILLESCAS RUS: “Aspectos procesales de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (I)”, en *Boletín de Informa-*

ción del Ministerio de Justicia, nº 1736, Madrid, 1995, págs. 1220-1263.

LOBO GARCÍA: "Notificación de sentencia a la litigante rebelde. Validez de la practicada por cédula", en *Revista General del Derecho*, nº 597, Valencia, 1994, págs. 6543-6550.

LÓPEZ CUMBRE y NOGUEIRA GUASTAVINO: "La omisión de advertencia de recurso en las sentencias dictadas en suplicación de los Tribunales Superiores de Justicia", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 59, Editorial Civitas, Madrid, 1993, págs. 375-396.

LÓPEZ MERINO: *La notificación en el ordenamiento jurídico*, Comares, Granada, 1989.

LÓPEZ-FONT MÁRQUEZ: "La derogación del fuero territorial del estado y sus organismos autónomos y del régimen especial de notificaciones", en *Revista española de Derecho Administrativo*, nº 75, Editorial Civitas, Madrid, 1992, págs. 433-438.

MANRESA Y NAVARRO: *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*. Tomo I, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1952, págs. 775-807.

MARTÍN DE LA LEONA ESPINOSA: *La nulidad de actuaciones en el proceso civil*, Colex, Madrid, 1996.

MARTÍN OSTOS: *El secretariado judicial a examen*, Tecnos, Madrid, 1994.

MAURINO: *Notificaciones procesales*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1990.

MOLINA NAVARRETE: "Subsidiariedad del recurso de amparo y audiencia al rebelde en el proceso laboral: ¿exceso de jurisdicción o interpretación odiosa de la legalidad? A propósito de la STC 15/1996, de 30 de enero", en *Actualidad Laboral*, nº 1, Editorial La Ley, Madrid, 1997, págs. 177-189.

MONTERO AROCA (y OTROS): *Derecho Jurisdiccional*. Tomo II. Proceso civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.

MONTERO AROCA: "Los requerimientos notarial y judicial en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria", en *La Ley*, nº 4440, de 17 de diciembre de 1997, Madrid, pág. 1-6.

MONTERO AROCA: *La intervención adhesiva simple*, Editorial Hispano Europea, Barcelona, 1972.

MORENILLA ALLARD: "El 'incidente de nulidad de actuaciones' según el nuevo artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: consideraciones críticas", en *La Ley*, nº 4498 (12.III.98), Madrid, 1998, págs. 1-6.

MORENO MARTÍN: "La informática en la actividad del Estado", en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, nº 12, Madrid, 1986.

NAGORE YARNOZ: "Nota sobre citaciones judiciales a notarios para testificar en pleitos", en *Boletín de información de la Academia Granadina del Notariado* nº 11, Granada, 1986, págs. 2119-2123.

NAVARRO DEL CACHO: "Las notificaciones administrativas efectuadas por los ayuntamientos", en *Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón*, nº 97, Zaragoza, 1985, págs. 47-62.

ORTEGA SÁNCHEZ: "Los actos de comunicación judicial a través del Servicio de Correos", en *Revista de Derecho Procesal*, Madrid, 1980, págs. 271-278.

ORTELLS RAMOS (y OTROS): *Derecho Jurisdiccional*. Tomo I. Parte General, Editorial Tirant lo blanch, Valencia, 1997.

ORTELLS RAMOS: *Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ley 34/1984 de 6 de agosto* (coordinados por CORTÉS DOMÍNGUEZ), Editorial Tecnos, Madrid, 1985, págs. 164-200.

PACHECO CIFUENTES: "El requerimiento judicial de pago al deudor hipotecario en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria", en *Revista General de Derecho*, nº 584, Valencia, 1993, págs. 4363-4369.

PEIRE AGUIRRE: "Actos de comunicación", en *Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón*, nº 10-12, Zaragoza, 1985, págs. 25-34.

PERETO GARCÍA: “Las notificaciones edictales en la jurisprudencia”, en *Impuestos*, nº 4, Editorial La Ley, Madrid, 1993, págs. 29-41.

PRADO ARDITTO: “La notificación de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial”, en *Justicia* 86, Barcelona, 1986, págs. 81-98.

PROFESORES DE DERECHO PROCESAL: “Corrección y actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Tomo I, Editorial Tecnos, Madrid, 1972.

QUINTANILLA NAVARRO y MARTÍNEZ MURILLO: “Notificaciones y su demostración”, en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 58, Editorial Civitas, Madrid, 1993, págs. 289-293.

RAMOS MÉNDEZ: *Sistema procesal español*, Bosch, Barcelona, 1997, pág. 369-389.

RIO GARCÍA DE SOLAS: “Adjudicación en virtud de procedimiento judicial sumario: notificación a los acreedores garantizados con hipoteca unilateral no aceptada; cumplimiento del artículo 55 LAU”, en *Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil*, nº 17, Madrid, 1988.

ROBLEDO VILLAR: “Sobre la nulidad de actuaciones en el apremio de bienes inmuebles por práctica defectuosa de actos de comunicación (I y II)”, en *La Ley*, nº 1, Madrid, 1997, págs. 2035-2047.

RODRÍGUEZ ADRADOS: "La notificación del artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil realizada por corredor de comercio", en *La Ley*, nº 4, Madrid, 1993, págs. 1034-1040.

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ DE PRADA: "Publicación *versus* notificación personal de las resoluciones judiciales: a vueltas con los titulares de intereses legítimos o de derechos derivados del acto recurrido: comentarios de la sentencia del Tribunal Constitucional 46/1987, de 21 de abril", en *Revista española de Derecho Administrativo*, nº 56, Editorial Civitas, Madrid, 1987, págs. 581-584.

SÁNCHEZ SÁNCHEZ: *Ley de Enjuiciamiento Civil. Doctrina y Jurisprudencia* (coordinada por ALBÁCAR LÓPEZ), Editorial Trivium, Madrid, 1993, págs. 1109-1137.

SEMPERE NAVARRO: "Legitimidad y condicionantes constitucionales del emplazamiento edictal", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 74, Editorial Civitas, Madrid, 1995, págs. 975-988.

SOSPEDRA NAVAS: "La actividad del órgano judicial ante la interpretación de los principios constitucionales del proceso civil", en *Revista Jurídica de Cataluña*, nº 3, Barcelona, 1995, págs. 729-746.

SUÑÉ LLINAS: "Management y Derecho", en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*, nº 87, Madrid, 1997.

TAPIA PARREÑO: "La doctrina del Tribunal Constitucional sobre los actos de comunicación en el proceso civil", en *Cuadernos de Derecho Judicial*, nº 22, Edita CGPJ, Madrid, 1992, págs. 451-466.

VALLTERRA: "Falta de citación y emplazamiento. Ineficacia de embargo", en *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, nº 1, Madrid, 1991, págs. 98-102.

VEGA MORENO: *Agentes judiciales. Práctica jurídica comentada y textos legales*, Tecnos, Madrid, 1998.

VIEITES PÉREZ: "La fe pública y la nulidad de las actuaciones a través de algunas resoluciones judiciales y su repercusión en la figura y función del secretario judicial", en *Actualidad y Derecho*, nº 7, Actualidad Editorial, Madrid, 1995, págs. 1-15.

ZARZALEJOS NIETO: "Los actos de comunicación con las partes en la Ley de Procedimiento Laboral según las jurisprudencias constitucional y ordinaria", en *Revista española de Derecho del Trabajo*, nº 33, Editorial Civitas, Madrid, 1988, págs. 117-124.

ZULUETA CEBRIÁN: "El Procurador en el proceso informatizado", en *Revista Informática y Derecho*, nº 5, Mérida, 1994.